

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Edgar Barnichta Geara

Legislación Dominicana Abreviada

Tomo II

Letras C y D

Santo Domingo, RD
Noviembre 2025

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Indice

Cadáver

Cadáver - Abandono de Cadáver

Cadáver - Profanación de Cadáver

Cadáver - Propiedad de un Cadáver

Caducidad

Calidad Jurídica

Calles y Aceras - Romper

Cámara de Cuentas

Cámara de Diputados y Senado

Cambio Climático

Cambio de Divisas

Canales de Riego de Agua

Capacidad Contributiva

Capacidad Jurídica

Cárcel para Menores

Carreras Deportivas

Carreras Ilegales de Vehículos

Casas de Acogidas

Casas de Empeño

Censura

Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

Centro Comercial

Certificación

Certificado Médico

Chantaje

Ciberataque

Cierre de Negocios

Cirugía Plástica

Ciudadanía

Clínicas – Deber de Ayudar

Coautor
Cobro Coactivo de la Deuda
Cobro Compulsivo del Estado
Código
Código de Derecho
Código Tributario
Coerción Penal
Colación
Comedores Económicos del Estado
Comercio
Comercio Ilícito
Comisario de Aportes
Comisario de Cuentas
Complicidad
Comprobante Fiscal
Comunicación
Concubinato
Conducir Ebrio o Drogado
Confidencialidad
Confiscación de Bienes
Congreso Nacional
Conocimiento o Información
Consejo Estatal del Azúcar - CEA
Consejo Nacional de la Magistratura
Consentimiento
Conspiración
Constitución de la República Dominicana
Consultas a Impuestos Internos (DGII)
Consumidor
Contabilidad
Contaminación Sónica o Ruidos Excesivos
Contrabando
Contraescrito
Contraloría General de la República

Contrato
Contratación de Extranjeros
Contrato Cuota Litis
Contrato de Adhesión
Contrato Laboral
Contravención
Contravención Penal
Contribuyente de la Obligación Tributaria
Control de Precios
Convenio Internacional
Correo o Servicio Postal
Cortesía
Cosa Juzgada
Costas Judiciales
Couriers o Envíos Expresos
Crédito Fiscal
Crimen
Crimen Organizado
Crimen Penal
Criptomonedas
Crueldad
Culto - Libertad de Culto
Cultura
Dación en Pago
Daños y Perjuicios
Deberes de las Personas
Deberes de los Contribuyentes
Debido Proceso
Declaraciones de Bienes y Enriquecimiento Ilícito
Decomiso de Bienes
Decreto Presidencial
Defensa
Defensa de la Patria
Defensa Física

Defensor del Pueblo y Derecho a la Justicia
Delito
Delito Financiero
Delito Penal
Demanda Judicial
Denuncia Penal
Denuncia Obligatoria
Deportación de Extranjero
Deporte
Depósito de Combustibles
Derecho
Derecho Adquirido
Derecho a Agua
Derecho a Alimentación
Derecho al Divorcio
Derecho a Electricidad
Derecho Civil
Derecho de Autor
Derechos de los Contribuyentes
Derechos del Empleado Doméstico
Derechos Fundamentales
Derechos Fundamentales - Aplicación e Interpretación
Derechos Políticos
Derechos Sociales
Derechos y Deberes del Paciente
Desacato
Desahucio y Despido Laboral
Desarrollo Personal
Descanso
Descuento por Pronto Pago
Deserción o Abandono Militar
Desfalco
Desheredar un Hijo
Desistimiento

Deslinde Inmobiliario
Desobediencia a la Autoridad
Desobediencia Civil
Desperdicios de los Animales
Destitución de Funcionario Público
Detención Ilegal de Personas
Determinación Tributaria
Deuda Pública Externa
Deuda Pública Interna
Días de Fiesta Nacional
Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim)
Dignidad Humana
Dirección General de Tránsito Terrestre (DIGESETT)
Direcciones Generales del Gobierno
Discapacidad
Disciplina
Discrecionalidad
Discriminación
Distintos Derechos
Distribución de Mercancías
Distrito Nacional
Disturbio
Divisas
División entre Vecinos
División Político Administrativa del Estado
Divulgación del Secreto Profesional
Doble Contabilidad
Donación
Donación de Organos
Dormir y Ocio
Drones
Duda Razonable
Duelo Laboral
Dumping

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Cadáver

I.- Preparación de los Cadáveres

La preparación de los cadáveres se rige por una ley general de salud y reglamentos específicos que varían según el país y la región, estableciendo la obligación de respeto, dignidad y manejo higiénico-sanitario. Estas normativas dictan procedimientos para la conservación, traslado e inhumación/cremación, así como las condiciones bajo las cuales se permite la donación de órganos y tejidos con fines terapéuticos. En algunos lugares, pueden existir normas adicionales para casos de riesgo sanitario o en situaciones de desastre.

Marco legal y autoridades

- Ley General de Salud:

Es la ley marco en muchos países, como México y República Dominicana, que sienta las bases para la regulación del manejo de cadáveres y la disposición de órganos.

- Ministerio de Salud:

Es la autoridad competente en muchos países para emitir regulaciones técnicas, establecer normas sanitarias para cementerios y supervisar los servicios funerarios.

- Regulaciones específicas:

Se emiten regulaciones más detalladas sobre la prestación de servicios, la cremación, inhumación, exhumación y el manejo de restos humanos.

Principios fundamentales

- Dignidad y respeto:

La preparación y el manejo de los cadáveres deben realizarse siempre con respeto a la dignidad y los derechos humanos del fallecido.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Seguridad sanitaria:

Se establecen medidas sanitarias rigurosas para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas.

Procedimientos y regulaciones

- Embalsamamiento:

No es obligatorio en todos los casos, pero puede serlo si la inhumación o incineración no se realiza dentro de las 72 horas o si el cuerpo se expone públicamente por un período prolongado.

- Cremación y entierro:

Las leyes suelen especificar los requisitos para la cremación y el entierro, incluyendo la prohibición de la cremación de cadáveres no identificados.

- Donación de órganos:

Las normas técnicas establecen los procedimientos para la disposición de órganos y tejidos con fines terapéuticos, así como el funcionamiento de los bancos de órganos.

- Transporte de cadáveres:

Se requiere autorización para el transporte y manejo de cadáveres, que debe realizarse siguiendo las pautas sanitarias establecidas.

II.- Base Legal de la Cremación

La cremación en la República Dominicana está regulada principalmente por la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios y su reglamento, así como por la Ley General de Salud y el Reglamento de Inscripciones. Estas leyes establecen las condiciones técnicas y sanitarias para empresas funerarias y crematorios, así como los requisitos para las cremaciones.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Aspectos clave de la regulación:

- **Autorización:**

La cremación solo puede realizarse en crematorios autorizados por el Ministerio de Salud.

- **Requisitos para la cremación:**

Un cadáver o restos humanos solo puede ser cremado si cumple con ciertas condiciones, incluyendo una autopsia si no ha sido inhumado previamente.

- **Inspección y control:**

Los departamentos de Vigilancia Epidemiológica e Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Salud son responsables de normar, regular, controlar y evaluar el funcionamiento de los crematorios.

- **Exenciones de impuestos:**

Los equipos e insumos utilizados en la cremación están exentos de impuestos, aranceles y tasas para facilitar el acceso a este servicio, especialmente para personas de bajos ingresos.

- **Destrucción de ataúdes:**

Los ataúdes utilizados para transportar cadáveres que serán cremados deben ser destruidos, y este procedimiento debe registrarse.

- **Reglamento de Cremación:**

El Reglamento de Cremación de Cadáveres y Restos Humanos detalla los procedimientos específicos y las normas técnicas para las cremaciones.

- **Registro de cremaciones:**

El Ministerio de Salud no mantiene un registro general de cremaciones, pero la información sobre las cremaciones se incluye en el registro del Estado Civil dominicano, incluyendo la fecha de defunción y cremación, entre otros datos.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Exhumación y traslado:

La exhumación de cadáveres o restos humanos para cremación, traslado u otros fines requiere autorización de la Autoridad de Salud, a solicitud de los deudos o por orden judicial.

- Cadáveres no identificados o no reclamados:

Estos cadáveres pueden ser destinados a fines de investigación científica, o entregados a destinatarios si manifestaron su voluntad de donar sus restos.

En resumen, la cremación en República Dominicana está regulada para asegurar condiciones sanitarias adecuadas, proteger la salud pública y facilitar el acceso a este servicio de manera justa.

III.- Exhumación de Cadáveres

En la República Dominicana, la exhumación de cadáveres se rige principalmente por la Ley General de Salud No. 42-01, el Reglamento Sanitario Dominicano, el Código Penal (por profanación) y los reglamentos de los cementerios locales y municipales, que establecen un período mínimo de espera y requisitos específicos para su solicitud, como un certificado de defunción y autorización de la Jefatura de Sanidad, con la presencia de autoridades en el momento de la exhumación.

Bases Legales

- Ley No. 42-01 (Ley General de Salud):

Es el marco legal principal que regula los aspectos de salud pública, incluyendo la disposición de cadáveres.

- Reglamento Sanitario Dominicano:

Contiene disposiciones más detalladas sobre sanidad mortuoria.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Código Penal Dominicano:

Protege la dignidad de los cadáveres y establece sanciones por exhumaciones ilegales o profanación.

- Ordenanzas Municipales:

Cada municipio tiene normativas internas, como la Ordenanza No. 004-2021 del Ayuntamiento de Villa Bisonó, que pueden establecer tarifas y procedimientos específicos para el uso de los cementerios municipales.

Requisitos Comunes para la Exhumación

- Período de Espera:

La ley dominicana permite la exhumación de restos enterrados después de un período determinado. La información varía, pero una fuente menciona cinco años como el mínimo para restos en tierra.

- Solicitud a la Autoridad Sanitaria:

Se debe solicitar la autorización a la Jefatura Provincial de Sanidad.

- Certificado de Defunción:

Es necesario presentar una copia del certificado de defunción del cadáver a exhumar.

- Autorización del Cementerio y las Autoridades Municipales:

Se requiere la aprobación del cementerio y la presencia de supervisores y la policía municipal durante el proceso.

Proceso General (Ejemplo del Ayuntamiento del Distrito Nacional)

1. Presentar la Solicitud: El solicitante, un familiar directo, presenta la solicitud al ayuntamiento con copia de su cédula, el acta de defunción y la documentación del terreno.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

2. Verificación y Pago de Impuestos: Se verifican los datos y se pagan los impuestos correspondientes.
3. Autorización Oficial: Se expide un formulario de autorización de exhumación.
4. Autorización Sanitaria: Se acude al centro de salud pública para obtener el formulario de salud.
5. Exhumación: Con todos los documentos en regla, la exhumación se realiza en presencia de un supervisor y la policía municipal.

IV.- Profanación de Cadáveres o Tumbas

La profanación de cadáveres es el acto de faltar al respeto o tratar de forma indigna un cuerpo humano fallecido o sus cenizas, lo cual está prohibido por ley en la mayoría de los países y se considera un grave sacrilegio culturalmente. Este delito puede incluir acciones como la exhumación ilegal, mutilación, ocultación, vandalismo en el lugar de entierro o un trato ofensivo o deshonesto al cuerpo.

Tipos de actos que constituyen profanación:

- Vilipendio: Un trato deshonesto, indigno o de grave menosprecio hacia el cadáver o sus cenizas, ya sea con palabras o con hechos.
- Exhumación o sustracción: Sacar el cuerpo de su lugar de descanso sin autorización legal
- Mutilación o destrucción: Cortar o cercenar una parte del cadáver, o causar su deterioro.
- Ocultación: Esconder o encubrir el cuerpo, impidiendo que llegue a su destino final o a los familiares.
- Vandalismo: Dañar o profanar el lugar donde el cadáver está enterrado o ha sido colocado.
- Trato ofensivo: Un trato inadecuado que no se hace con el debido respeto, como en el caso de necrofilia.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Bien jurídico tutelado:

- La ley protege el sentimiento de respeto hacia los difuntos, la memoria de la persona y la memoria de la familia.

Excepciones:

- Existen situaciones autorizadas legalmente donde se puede retirar un cadáver, como para una investigación forense o para un cambio de lugar de sepultura.

En el Código Penal Dominicano, la profanación de cadáveres, sepulturas o tumbas es un delito contemplado en el Artículo 360, el cual establece una pena de prisión correccional de uno a doce meses y una multa por el hecho. La ley no solo sanciona la profanación en sí, sino que también contempla penas más graves si se cometen otros delitos relacionados, como lo es el abandono de cadáveres, el cual puede llevar a una pena de prisión de uno a doce meses y una multa de diez a cien pesos.

Artículo 360 del Código Penal Dominicano

Este artículo define la profanación de cadáveres como el acto de profanar cadáveres, sepulturas o tumbas.

Sanción

La sanción para este delito es la siguiente:

- Prisión correccional: de un mes a un año.
- Multa: de diez a cien pesos.

Consideraciones adicionales

- La pena será más grave si durante el acto de profanación se cometen otros delitos.
- El abandono y exposición de cadáveres en la vía pública, como el caso reportado de la profanación de bebés en la puerta de un cementerio, se considera un delito de profanación de cadáveres y puede ser castigado con esta pena.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

El Código Penal Dominicano sanciona la profanación de cadáveres con una pena de prisión correccional de uno a seis años y multas, de acuerdo con el Artículo 360 del Código Penal Dominicano. Esta acción incluye el maltrato, abuso o falta de respeto a un cadáver, tumba o sepultura, y la ley también establece que quienes manipulen o causen daño a un cadáver de forma no respetuosa o sin la debida autorización incurren en esta infracción.

¿Qué se considera profanación de un cadáver en la República Dominicana?

- Profanar un cadáver es un delito que implica causar daño, abuso o falta de respeto a un cuerpo humano, una tumba o una sepultura.
- La ley también incluye la manipulación de cenizas con un acto que las afecte considerablemente.

¿Cuál es la pena para la profanación de cadáveres?

- La pena es de prisión correccional de un mes a un año, y una multa de diez a cien pesos.
- Si la manipulación del cadáver o tumba se realiza con autorización y siguiendo las normas profesionales, no habrá delito.

¿Cómo se puede evitar la profanación de cadáveres?

- Es importante conocer las leyes sobre entierros, autopsias, y respeto a los restos humanos para evitar cometer estos delitos.
- La legislación sobre protección de cadáveres busca castigar a quienes dañan, abusan o faltan el respeto a los restos de una persona, preservando la memoria e imagen de los fallecidos.

V.- Fosas Comunes de Cadáveres

En República Dominicana no existe una ley específica para las fosas comunes, sino que las leyes sobre cementerios y la disposición de cadáveres, como la Ley General de Salud No. 42-01 y el Código Civil, abordan estos temas de forma indirecta. La

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

disposición de cuerpos no reclamados o la creación de fosas comunes se rige por la necesidad de garantizar la salud pública y el respeto a la dignidad de los fallecidos, bajo la supervisión del Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General de la República.

Marco legal existente:

- Ley General de Salud No. 42-01:

Esta ley establece las bases para la salud pública y la protección de la población, incluyendo aspectos relacionados con la gestión de los fallecidos y la prevención de riesgos sanitarios.

- Código Civil Dominicano:

Regula la declaración de fallecimientos, la notificación a las autoridades y el tratamiento de los cadáveres, especialmente en casos de fallecimientos sin asistencia médica o de naturaleza violenta.

- Normativa del Ministerio de Salud Pública:

El Ministerio tiene la facultad de emitir normas y procedimientos para el control sanitario en cementerios, incluyendo la gestión de cuerpos no reclamados o en circunstancias excepcionales.

Procedimientos y entidades involucradas:

- Ministerio de Salud Pública:

Es el ente regulador principal en materia de salud y puede establecer directrices para la disposición final de los cadáveres, buscando la protección de la salud comunitaria.

- Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF):

Garantiza el respeto a la dignidad de los cadáveres que no son reclamados.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Procuraduría General de la República:**

Supervisa los procesos relacionados con la identificación y disposición de cadáveres, especialmente en casos no reclamados.

¿Qué se hace en caso de no reclamados?

En ausencia de una ley específica para fosas comunes, los cadáveres no reclamados se manejan según las normativas sanitarias y legales vigentes, que priorizan la dignidad del cuerpo y la salud pública. Se pueden habilitar espacios de almacenamiento temporal y se busca una disposición final adecuada, ya sea mediante cremación o inhumación, siguiendo protocolos establecidos.

Cadáver - Abandono de Cadáver

En República Dominicana, el abandono o la profanación de cadáveres está regulado por el Artículo 360 del Código Penal Dominicano, que establece una pena de prisión de uno a seis meses y multa de cincuenta a quinientos pesos para quien profanare cadáveres, sepulturas o tumbas. Este delito también se aplica a la ocultación, desfiguración o disposición indebida de restos humanos.

Marco legal aplicable

- **Código Penal Dominicano:** El artículo 360 es el que tipifica y sanciona el delito de profanación de cadáveres, estableciendo la pena correspondiente.

Qué constituye el delito

- **Profanación de cadáveres:**

Implica la falta de respeto a los restos de una persona fallecida, como dejar un cadáver en un lugar público sin el debido protocolo.

- **Ocultamiento o desfiguración:**

También se considera un delito ocultar, desintegrar o exhumar un cadáver sin la debida autorización.

Consecuencias del delito

- Penas de prisión y multa:

El infractor puede ser condenado a prisión correccional de uno a seis meses y una multa.

- Implicaciones morales:

Además de las sanciones legales, el abandono de cadáveres representa una grave falta de respeto a la dignidad humana y un daño a la memoria de los difuntos.

Recomendaciones

- En caso de encontrar un cadáver, se debe notificar a las autoridades policiales y al Ministerio Público para seguir el procedimiento legal establecido.
- Es crucial seguir los protocolos y leyes que rigen las inhumaciones y el manejo de los cuerpos para evitar el sometimiento de este tipo de delitos.

Cadáver - Profanación de Cadáver

El delito de ultrajar o profanar un cadáver se refiere a actos de irrespeto, profanación o manipulación indebida de un cadáver o sus restos. Las leyes penales de distintos países tipifican este delito, que incluye acciones como violar sepulcros, destruir, ocultar, exhibir o mutilar restos humanos sin autorización legal. Las penas varían según la jurisdicción y la gravedad del acto, e incluyen multas o penas de prisión.

Definición

- Acciones que configuran el delito: Implica cualquier acto que muestre falta de respeto hacia un cadáver, como profanación, mutilación, destrucción, ocultación o exhibición indebida.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Ejemplos: Desenterrar un cuerpo, dañar urnas funerarias o lápidas con ánimo de ultraje, o trasladar un cadáver sin autorización.

Aspectos legales

- Jurisdicciones: El delito y las penas específicas varían entre países. Por ejemplo:
 - En la República Dominicana, se sanciona con prisión y multa, según el artículo 360 del Código Penal.

1) Inhumación.

Art. 358.- El que, sin autorización previa de autoridad competente, haga inhumar el cadáver de un individuo que hubiere fallecido, será castigado con prisión correccional de seis días a dos meses y multa de cincuenta pesos; sin perjuicio de los procedimientos que puedan seguirse, por los delitos que en este caso se imputen a los autores de la inhumación. En la misma pena incurrirá el que infringere las leyes y reglamentos relativos a las inhumaciones festinadas.

2) Ocultación

Art. 359.- El que ocultare o encubriere el cadáver de una persona asesinada o muerta a consecuencia de golpes o heridas, será castigado con prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos; sin perjuicio de penas más graves si resultare cómplice del delito.

3) Profanación

Art. 360.- El que profanare cadáveres, sepulturas o tumbas, será castigado con prisión correccional de un mes a un año, y multa de diez a cien pesos; sin perjuicio de penas más graves, si se hiciere reo de los demás delitos que puedan cometerse en estos casos.

- Intención: La intencionalidad es un factor clave. Para que se configure el delito en algunos contextos, se debe demostrar que el acto se realizó con el propósito de ultrajar o faltar al respeto a la memoria del difunto.

Consideraciones adicionales

- Distinción de otros delitos: Es importante distinguir la profanación de cadáveres de otros delitos como el mal manejo de cuerpos sin vida por negligencia profesional, que se rige por normas diferentes.
- Casos médicos o legales: Las exploraciones físicas realizadas por médicos forenses con fines de certificación de defunción o investigación de causas de muerte son acciones legítimas que quedan fuera del ámbito penal de la profanación.

Cadáver - Propiedad de un Cadáver

En la República Dominicana, la figura de un "dueño" de un cadáver no existe legalmente; sin embargo, la ley establece quiénes son los que tienen derecho a tomar decisiones sobre el cuerpo después de la muerte, en el siguiente orden de prelación: el cónyuge supérstite, los descendientes (hijos), los ascendientes (padres) o los hermanos del fallecido. Si la persona en vida tomó una decisión expresa sobre la disposición de su cuerpo, esa voluntad debe ser respetada.

Decisiones sobre el cuerpo

- Testamento: Si el fallecido dejó un testamento, este debe ser respetado en cuanto a la disposición del cuerpo, la necropsia, la cremación o la sepultura.
- Sin testamento: Si el fallecido no dejó una declaración en vida, el derecho a decidir recae en los familiares más cercanos en el orden mencionado:
 - El cónyuge supérstite.
 - Los descendientes.
 - Los ascendientes.
 - Los hermanos.
- Desacuerdo entre herederos: Si existe desacuerdo entre herederos del mismo grado, la decisión se resuelve en el tribunal competente.

Consideraciones adicionales

- **Derechos sobre la imagen:** La ley también protege la imagen, el honor y la intimidad de la persona fallecida por un período de 20 años. Después de este tiempo, la reproducción de su imagen puede ser libre, siempre y cuando no sea ofensiva.
- **Función del Estado:** El Estado tiene el deber de proteger los derechos fundamentales inherentes a la persona, incluyendo el derecho a la vida.

Caducidad

La caducidad en derecho es la extinción de un derecho o acción debido a que no se ha ejercido dentro de un plazo preestablecido por la ley o un acuerdo. A diferencia de la prescripción, la caducidad es un fenómeno "objetivo" que no requiere alegación por la parte contraria y suele ser de orden público, por lo que es irrenunciable y puede ser declarada de oficio por el juez.

Características clave de la caducidad

- **Extinción directa y automática:** El derecho se extingue al cumplirse el plazo sin necesidad de que sea invocado por una de las partes.
- **Plazo perentorio:** El tiempo fijado por la ley es inexorable y no puede ser prorrogado, ni siquiera por acuerdo de las partes.
- **Irrenunciable:** Como se trata de un plazo de orden público, no se puede renunciar a él, ni siquiera de forma anticipada.
- **El juez puede declararla de oficio:** El juez puede reconocer la caducidad y declararla por sí mismo si verifica que se ha cumplido el plazo establecido.
- **Incapacidad para ejercer la acción:** Una vez que el plazo ha expirado, no se puede iniciar o continuar la acción legal correspondiente.

Ejemplo de caducidad

- Un contrato de arrendamiento establece que el inquilino debe pagar la renta en un plazo de 30 días. Si el inquilino no realiza el pago dentro de ese periodo, el derecho de arrendador a desalojarlo por ese motivo caduca y se extingue, permitiéndole iniciar un nuevo proceso de desalojo.

Calidad Jurídica

La calidad jurídica se define como la aptitud de las normas y servicios del sistema legal para satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, de manera objetiva, eficiente y equitativa. Implica un conjunto de propiedades y características que permiten juzgar el valor del derecho, garantizando que las leyes y los servicios judiciales cumplan con criterios de simplificación, control y accesibilidad para los usuarios.

Aspectos clave de la calidad jurídica:

- Orientación al usuario:

El servicio de justicia debe estar enfocado en satisfacer los requerimientos y expectativas de los ciudadanos, ya sean usuarios, empresas o el público en general.

- Objetividad y eficiencia:

Se busca que la administración de justicia sea imparcial, que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y que las respuestas se brinden con la mayor efectividad posible.

- Simplificación y control normativo:

Implica la simplificación de los procedimientos legales y la producción y evaluación de las normas para asegurar su claridad y aplicabilidad.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Facilitación de la aplicación:

Se buscan mecanismos como la ventanilla única para simplificar los trámites y reducir la burocracia, haciendo que la norma sea más fácil de cumplir y aplicar.

- Conformidad con los requisitos:

Un elemento fundamental es que tanto los productos (normas) como los servicios (administración de justicia) se ajusten a los estándares y especificaciones definidos.

En resumen, la calidad jurídica es un concepto dinámico que abarca la efectividad de las leyes, la eficiencia en la administración de justicia y la satisfacción de los derechos y necesidades de los ciudadanos.

Calles y Aceras - Romper

Sí, la ley prohíbe romper calles y aceras sin permisos previos en la República Dominicana, principalmente regulado por la Ley 675 de 1944, Decreto 61-07, y las ordenanzas municipales, que exigen la obtención de permisos de las autoridades correspondientes, como el Ayuntamiento y el Ministerio de Obras Públicas, antes de realizar cualquier trabajo que afecte la vía pública.

Fundamento legal y normativo

- Ley 675 de 1944:

Esta ley sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones establece en su artículo 26 que se debe solicitar un permiso a la autoridad municipal antes de remover o romper una calle, acera, contén o cuneta.

- Decreto 61-07:

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene este decreto que regula las excavaciones, exigiendo la obtención de permisos de los ayuntamientos correspondientes y la autorización de la Secretaría de Estado de Obras Públicas para realizar trabajos que impliquen romper el pavimento.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Ordenanzas Municipales:**

Los ayuntamientos tienen la facultad de emitir ordenanzas para regular el uso de las vías públicas, como la Ordenanza 1/2021 del Distrito Nacional, que prohíbe modificar las aceras sin la debida autorización, garantizando un recorrido peatonal seguro.

Requisitos para romper la vía pública

1. Solicitar permiso:

Se debe obtener un permiso previo de la autoridad municipal (Ayuntamiento o Consejo Administrativo del Distrito).

2. Autorización de Obras Públicas:

En algunos casos, se requiere también la autorización de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.

3. Cumplir con normativas:

Los trabajos deben cumplir con las especificaciones técnicas y administrativas necesarias para asegurar la seguridad del tránsito y el ornato público.

Consecuencias de no cumplir

- Sanciones:

El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones y multas, según lo estipulado en la Ley 176-07.

- Deterioro del espacio público:

Romper las vías públicas sin permiso deteriora la ciudad y afecta el libre tránsito de los peatones, con el objetivo de garantizar un recorrido seguro.

Cámara de Cuentas

A) Constitución

Artículo 248.- Control externo. La Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Tiene personalidad jurídica, carácter técnico y goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria. Estará compuesta de cinco miembros, elegidos por el Senado de la República de las ternas que le presente la Cámara de Diputados, por un período de cuatro años y permanecerán en sus funciones hasta que sean designados sus sustitutos.

Artículo 249.- Requisitos. Para ser miembro de la Cámara de Cuentas se requiere ser dominicano o dominicana en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser de reconocida solvencia ética y moral, haber cumplido la edad de treinta años, acreditar título universitario y estar habilitado para el ejercicio profesional, preferiblemente en las áreas de contabilidad, finanzas, economía, derecho o afines, y las demás condiciones que determine la ley.

Artículo 250.- Atribuciones. Sus atribuciones serán, además de las que le confiere la ley:

- 1) Examinar las cuentas generales y particulares de la República;
- 2) Presentar al Congreso Nacional los informes sobre la fiscalización del patrimonio del Estado;
- 3) Auditar y analizar la ejecución del Presupuesto General del Estado que cada año apruebe el Congreso Nacional, tomando como base el estado de recaudación e inversión de las rentas presentado por el Poder Ejecutivo, de conformidad con la Constitución y las leyes, y someter el informe correspondiente a éste a más tardar el 30 de abril del año siguiente, para su conocimiento y decisión;
- 4) Emitir normas con carácter obligatorio para la coordinación interinstitucional de los órganos y organismos responsables del control y auditoría de los recursos públicos;
- 5) Realizar investigaciones especiales a requerimiento de una o ambas cámaras legislativas.

B) Ver Ley 10-24 de la Cámara de Cuentas

C) Ver Reglamento 06-04

Cámara de Diputados y Senado

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TÍTULO III DEL PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO I DE SU CONFORMACIÓN

Artículo 76.- Composición del Congreso. El Poder Legislativo se ejerce en nombre del pueblo por el Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

Artículo 77.- Elección de las y los legisladores. La elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo en los términos que establezca la ley.

1) Cuando por cualquier motivo ocurran vacantes de senadores o diputados, la cámara correspondiente escogerá su sustituto de la terna que le presente el organismo superior del partido que lo postuló;

2) La terna será sometida a la cámara donde se haya producido la vacante dentro de los treinta días siguientes a su ocurrencia, si estuviere reunido el Congreso y, en caso de no estarlo, dentro de los primeros treinta días de su reunión. Transcurrido el plazo señalado sin que el organismo competente del partido someta la terna, la cámara correspondiente hará la elección;

3) Los cargos de senador y diputado son incompatibles con otra función o empleo público, salvo la labor docente. La ley regula el régimen de otras incompatibilidades;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

4) Las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo, actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas.

SECCIÓN I
DEL SENADO

Artículo 78.- Composición del Senado. El Senado se compone de miembros elegidos a razón de uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional, cuyo ejercicio durará cuatro años.

Artículo 79.- Requisitos para ser senador o senadora. Para ser senadora o senador se requiere ser dominicana o dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido veinticinco años de edad, ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos cinco años consecutivos. En consecuencia:

1) Las senadoras y senadores electos por una demarcación residirán en la misma durante el período por el que sean electos;

2) Las personas naturalizadas sólo podrán ser elegidas al Senado diez años después de haber adquirido la nacionalidad dominicana, siempre que hayan residido en la jurisdicción que las elija durante los cinco años que precedan a su elección.

Artículo 80.- Atribuciones.- Son atribuciones exclusivas del Senado:

1) Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral 1. La declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de diez años. La persona destituida quedará sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el voto de las dos terceras partes de la matrícula;

2) Aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior que le someta el Presidente de la República;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

3) Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes;

4) Elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes, con el voto de las dos terceras partes de los presentes;

5) Elegir al Defensor del Pueblo, sus suplentes y sus adjuntos, a partir de las ternas que le presente la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los presentes;

6) Autorizar, previa solicitud del Presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, así como determinar el tiempo y las condiciones de su estadía;

7) Aprobar o desaprobar el envío al extranjero de tropas en misiones de paz, autorizadas por organismos internacionales, fijando las condiciones y duración de dicha misión.

SECCIÓN II
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 81.- Representación y composición. La Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera:

1) Ciento cincuenta y ocho diputadas o diputados elegidos por circunscripción territorial, en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la población electoral registrada por la Junta Central Electoral, sin que en ningún caso sean menos de dos representantes por cada provincia;

2) Cinco diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos. La ley determinará su distribución;

3) Siete diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. La ley determinará su forma de elección y distribución.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 82.- Requisitos para ser diputada o diputado. Para ser diputada o diputado se requieren las mismas condiciones que para ser senador.

Artículo 83.- Atribuciones. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

1) Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La acusación sólo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula. Cuando se trate del Presidente y el Vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación;

2) Someter al Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes;

3) Someter al Senado las ternas del Defensor del Pueblo, sus suplentes, que no podrán ser más de dos, y los adjuntos, que no podrán ser más de cinco, con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes.

CAPÍTULO II
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS

Artículo 84.- Quórum de sesiones. En cada cámara es necesaria la presencia de más de la mitad de sus miembros para la validez de las deliberaciones. Las decisiones se adoptan por la mayoría absoluta de votos, salvo los asuntos declarados previamente de urgencia, los cuales, en su segunda discusión, se decidirán por las dos terceras partes de los presentes.

Artículo 85.- Inmunidad por opinión. Los integrantes de ambas cámaras gozan de inmunidad por las opiniones que expresen en las sesiones.

Artículo 86.- Protección de la función legislativa. Ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Si un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido o privado en cualquier otra forma de su libertad, la cámara a que pertenece, esté en sesión o no, e incluso uno de sus integrantes, podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura. A este efecto, el Presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados, o un senador o diputado, según el caso, hará un requerimiento al Procurador General de la República y, si fuese necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado todo el apoyo de la fuerza pública.

Artículo 87.- Alcance y límites de la inmunidad. La inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo anterior no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la cámara a que pertenece y no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho. Cuando la cámara recibiere una solicitud de autoridad judicial competente, con el fin de que le fuese retirada la protección a uno de sus miembros, procederá de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y decidirá al efecto en un plazo máximo de dos meses desde la remisión del requerimiento.

Artículo 88.- Pérdida de investidura. Las y los legisladores deben asistir a las sesiones de las legislaturas y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la forma y términos que definan la presente Constitución y los reglamentos internos de la cámara legislativa correspondiente. Quienes incumplan lo anterior perderán su investidura, previo juicio político de acuerdo con las normas instituidas por esta Constitución y los reglamentos y no podrán optar por una posición en el Congreso Nacional dentro de los diez años siguientes a su destitución.

Artículo 89.- Duración de las legislaturas. Las cámaras se reunirán de forma ordinaria el 27 de febrero y el 16 de agosto de cada año. Cada legislatura durará ciento cincuenta días. El Poder Ejecutivo podrá convocarlas de forma extraordinaria.

Artículo 90.- Bufetes directivos de las cámaras. El 16 de agosto de cada año el Senado y la Cámara de Diputados elegirán sus respectivos bufetes directivos, integrados por un presidente, un vicepresidente y dos secretarios.

1) El Presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados tendrán, durante las sesiones, poderes disciplinarios y representarán a su respectiva cámara en todos los actos legales;

2) Cada cámara designará sus funcionarios, empleados administrativos y auxiliares de conformidad con la Ley de Carrera Administrativa del Congreso Nacional;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

3) Cada cámara reglamentará lo concerniente a su servicio interior y al despacho de los asuntos que le son peculiares, y podrá, en el uso de sus facultades disciplinarias, establecer las sanciones que procedan.

Artículo 91.- Rendición de cuentas de los presidentes. Los presidentes de ambas cámaras deberán convocar a sus respectivos plenos la primera semana del mes de agosto de cada año, para rendirles un informe sobre las actividades legislativas, administrativas y financieras realizadas durante el período precedente.

Artículo 92.- Rendición de cuentas de los legisladores. Los legisladores deberán rendir cada año un informe de su gestión ante los electores que representan.

CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO NACIONAL

Artículo 93.- Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo, le corresponden en consecuencia:

- 1) Atribuciones generales en materia legislativa:
 - a) Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión;
 - b) Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes;
 - c) Disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y al patrimonio histórico, cultural y artístico;
 - d) Crear, modificar o suprimir regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, por el procedimiento regulado en esta Constitución y previo estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación;
 - e) Autorizar al Presidente de la República a declarar los estados de excepción a que se refiere esta Constitución;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

f) En caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de defensa nacional, suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con excepción de los derechos establecidos en el artículo 263. Si no estuviera reunido el Congreso, el Presidente de la República podrá dictar la misma disposición, lo que conllevará una convocatoria inmediata del mismo para ser informado de los acontecimientos y de las disposiciones tomadas;

g) Establecer las normas relativas a la migración y el régimen de extranjería;

h) Aumentar o reducir el número de las cortes de apelación y crear o suprimir tribunales y disponer todo lo relativo a su organización y competencia, previa consulta a la Suprema Corte de Justicia;

i) Votar anualmente la Ley de Presupuesto General del Estado, así como aprobar o rechazar los gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo;

j) Legislar cuanto concierne a la deuda pública y aprobar o desaprobar los créditos y préstamos firmados por el Poder Ejecutivo, de conformidad con esta Constitución y las leyes;

k) Aprobar o desaprobar los contratos que le someta el Presidente de la República, de conformidad con lo que dispone el artículo 128, numeral 2), literal d), así como las enmiendas o modificaciones posteriores que alteren las condiciones originalmente establecidas en dichos contratos al momento de su sanción legislativa;

l) Aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo;

m) Declarar por ley la necesidad de la Reforma Constitucional;

n) Conceder honores a ciudadanas y ciudadanos distinguidos que hayan prestado reconocidos servicios a la patria o a la humanidad;

ñ) Conceder autorización al Presidente de la República para salir al extranjero cuando sea por más de quince días;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

o) Decidir el traslado de la sede de las cámaras legislativas por causa de fuerza mayor o por otras circunstancias debidamente motivadas;

p) Conceder amnistía por causas políticas;

q) Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del Estado y que no sea contraria a la Constitución;

r) Pronunciarse a través de resoluciones acerca de los problemas o las situaciones de orden nacional o internacional que sean de interés para la República.

2) Atribuciones en materia de fiscalización y control:

a) Aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura ordinaria de cada año, tomando como base el informe de la Cámara de Cuentas;

b) Velar por la conservación y fructificación de los bienes nacionales en beneficio de la sociedad y aprobar o rechazar la enajenación de los bienes de dominio privado de la Nación, excepto lo que dispone el artículo 128, numeral 2, literal d);

c) Citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado ante las comisiones permanentes del Congreso, para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración;

d) Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes;

e) Nombrar comisiones permanentes y especiales, a instancia de sus miembros, para que investiguen cualquier asunto que resulte de interés público, y rindan el informe correspondiente;

f) Supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance.

Artículo 94.- Invitaciones a las cámaras. Las cámaras legislativas, así como las comisiones permanentes y especiales que éstas constituyan, podrán invitar a ministros, viceministros, directores y demás funcionarios y funcionarias de la

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Administración Pública, así como a cualquier persona física o jurídica, para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderadas.

Párrafo.- La renuencia de las personas citadas a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas, será sancionada por los tribunales penales de la República con la pena que señalen las disposiciones legales vigentes para los casos de desacato a las autoridades públicas, a requerimiento de la cámara correspondiente.

Artículo 95.- Interpelaciones. Interpelar a los ministros y viceministros, al Gobernador del Banco Central y a los directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como a los de entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren la mayoría de los miembros presentes, a requerimiento de al menos tres legisladores, así como recabar información de otros funcionarios públicos competentes en la materia y dependientes de los anteriores.

Párrafo.- Si el funcionario o funcionaria citado no compareciese sin causa justificada o se considerarán insatisfactorias sus declaraciones, las cámaras, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, podrán emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al Presidente de la República o al superior jerárquico correspondiente por incumplimiento de responsabilidad.

CAPÍTULO IV
DE LA FORMACIÓN Y EFECTO DE LAS LEYES

Artículo 96.- Iniciativa de ley. Tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes:

- 1) Los senadores o senadoras y los diputados o diputadas;
- 2) El Presidente de la República;
- 3) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales;
- 4) La Junta Central Electoral en asuntos electorales.

Párrafo.- Las y los legisladores que ejerzan el derecho a iniciativa en la formación de las leyes, pueden sostener su moción en la otra cámara. De igual

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

manera, los demás que tienen este derecho pueden hacerlo en ambas cámaras personalmente o mediante un representante.

Artículo 97.- Iniciativa legislativa popular. Se establece la iniciativa legislativa popular mediante la cual un número de ciudadanos y ciudadanas no menor del dos por ciento (2%) de los inscritos en el registro de electores, podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional. Una ley especial establecerá el procedimiento y las restricciones para el ejercicio de esta iniciativa.

Artículo 98.- Discusiones legislativas. Todo proyecto de ley admitido en una de las cámaras se someterá a dos discusiones distintas, con un intervalo de un día por lo menos entre una y otra discusión. En caso de que fuere declarado previamente de urgencia deberá ser discutido en dos sesiones consecutivas.

Artículo 99.- Trámite entre las cámaras. Aprobado un proyecto de ley en una de las cámaras, pasará a la otra para su oportuna discusión, observando las mismas formalidades constitucionales. Si esta cámara le hace modificaciones, devolverá dicho proyecto modificado a la cámara en que se inició, para ser conocidas de nuevo en única discusión y, en caso de ser aceptadas dichas modificaciones, esta última cámara enviará la ley al Poder Ejecutivo. Si aquéllas son rechazadas, será devuelto el proyecto a la otra cámara y si ésta las aprueba, enviará la ley al Poder Ejecutivo. Si las modificaciones son rechazadas, se considerará desechado el proyecto.

Artículo 100.- Efectos de las convocatorias extraordinarias. Las convocatorias extraordinarias realizadas por el Poder Ejecutivo a las cámaras legislativas no surtirán efectos para los fines de la perención de los proyectos de ley en trámite.

Artículo 101.- Promulgación y publicación. Toda ley aprobada en ambas cámaras será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Si éste no la observare, la promulgará dentro de los diez días de recibida, si el asunto no fue declarado de urgencia, en cuyo caso la promulgará dentro de los cinco días de recibida, y la hará publicar dentro de los diez días a partir de la fecha de la promulgación. Vencido el plazo constitucional para la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional, se reputarán promulgadas y el Presidente de la cámara que las haya remitido al Poder Ejecutivo las publicará.

Artículo 102.- Observación a la ley. Si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuere remitida, la devolverá a la cámara de donde procede en el término de diez días, a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de cinco días a partir de ser recibida. El Poder Ejecutivo

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

remitirá sus observaciones indicando los artículos sobre los cuales recaen y motivando las razones de la observación. La cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión, las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101.

Artículo 103.- Plazo para conocer las observaciones del Poder Ejecutivo. Toda ley observada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional tiene un plazo de dos legislaturas ordinarias para decidirla, de lo contrario se considerará aceptada la observación.

Artículo 104.- Vigencia de un proyecto de ley. Los proyectos de ley que queden pendientes en una de las dos cámaras al cerrarse la legislatura ordinaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 100, seguirán los trámites constitucionales en la legislatura siguiente, hasta ser convertidos en ley o rechazados. Cuando no ocurra así, se considerará el proyecto como no iniciado.

Artículo 105.- Inclusión en el orden del día. Todo proyecto de ley recibido en una cámara, después de ser aprobado en la otra, será incluido en el orden del día de la primera sesión que se celebre.

Artículo 106.- Extensión de las legislaturas. Cuando se envíe una ley al Presidente de la República para su promulgación y el tiempo que falte para el término de la legislatura sea inferior al que se establece en el artículo 102 para observarla, seguirá abierta la legislatura para conocer de las observaciones, o se continuará el trámite en la legislatura siguiente sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103.

Artículo 107.- Proyecto de ley rechazado. Los proyectos de ley rechazados en una cámara no pueden presentarse en ninguna de las dos cámaras hasta la legislatura siguiente.

Artículo 108.- Encabezados de las leyes. Las leyes y resoluciones bicamerales se encabezarán así: El Congreso Nacional. En nombre de la República.

Artículo 109.- Entrada en vigencia de las leyes. Las leyes, después de promulgadas, se publicarán en la forma que la ley determine y se les dará la más amplia difusión posible. Serán obligatorias una vez transcurridos los plazos para que se reputen conocidas en todo el territorio nacional.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 110.- Irretroactividad de la ley. La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.

Artículo 111.- Leyes de orden público. Las leyes relativas al orden público, policía y la seguridad, obligan a todos los habitantes del territorio y no pueden ser derogadas por convenciones particulares.

Artículo 112.- Leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales; la estructura y organización de los poderes públicos; la función pública; el régimen electoral; el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública; la organización territorial; los procedimientos constitucionales; la seguridad y defensa; las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza. Para su aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras.

Artículo 113.- Leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son aquellas que por su naturaleza requieren para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los presentes de cada cámara.

CAPÍTULO V
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS AL CONGRESO

Artículo 114.- Rendición de cuentas del Presidente de la República. Es responsabilidad del Presidente de la República rendir cuentas anualmente, ante el Congreso Nacional, de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, según lo establece el artículo 128, numeral 2, literal f) de esta Constitución, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso.

Artículo 115.- Regulación de procedimientos de control y fiscalización. La ley regulará los procedimientos requeridos por las cámaras legislativas para el examen de los informes de la Cámara de Cuentas, el examen de los actos del Poder Ejecutivo, las

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

invitaciones, las interpelaciones, el juicio político y los demás mecanismos de control establecidos por esta Constitución.

Artículo 116.- Rendición de informe Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo rendirá al Congreso Nacional el informe anual de su gestión, a más tardar treinta días antes del cierre de la primera legislatura ordinaria.

CAPÍTULO VI
DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y DE LA REUNIÓN CONJUNTA
DE AMBAS CÁMARAS

Artículo 117.- Conformación de la Asamblea Nacional. El Senado y la Cámara de Diputados celebrarán sus sesiones de forma separada, excepto cuando se reúnan en Asamblea Nacional.

Artículo 118.- Quórum de la Asamblea Nacional. Las cámaras se reunirán en Asamblea Nacional en los casos indicados en esta Constitución, debiendo estar presentes más de la mitad de los miembros de cada cámara. Sus decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, excepto cuando se convoque para reformar la Constitución.

Artículo 119.- Bufete Directivo de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional o la Reunión Conjunta de ambas cámaras se rigen por su reglamento de organización y funcionamiento. En ambos casos asumirá la presidencia, el Presidente del Senado; la vicepresidencia, el Presidente de la Cámara de Diputados y la secretaría, los secretarios de cada cámara.

En caso de falta temporal o definitiva de la Presidenta o Presidente del Senado y mientras no haya sido elegido su sustituto por dicha Cámara Legislativa, presidirá la Asamblea Nacional o la Reunión Conjunta, la Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados.

En caso de falta temporal o definitiva de la Presidenta o Presidente de ambas cámaras, presidirá la Asamblea Nacional o la Reunión Conjunta, la Vicepresidenta o Vicepresidente del Senado y, en su defecto, la Vicepresidenta o Vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Artículo 120.- Atribuciones de la Asamblea Nacional. Corresponde a la Asamblea Nacional:

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

1) Conocer y decidir sobre las reformas constitucionales, actuando en este caso, como Asamblea Nacional Revisora;

2) Examinar las actas de elección de la Presidenta o Presidente y de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República;

3) Proclamar a la o al Presidente y Vicepresidente de la República, recibirles su juramento y aceptar o rechazar sus renunciaciones;

4) Ejercer las facultades que le confiere la presente Constitución y el reglamento orgánico.

Artículo 121.- Reunión Conjunta de las cámaras. Las cámaras se reunirán conjuntamente para los casos siguientes:

1) Recibir el mensaje y la rendición de cuentas de la o el Presidente de la República y las memorias de los ministerios;

2) Celebrar actos conmemorativos o de naturaleza protocolar.

Cambio Climático

Decreto No.601-08 que crea e integra el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Desarrollo Limpio.

ARTICULO 1.- Se crea el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, el cual estará integrado por:

El Presidente de la República, quien lo presidirá;

El Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien fungirá como Secretario del Consejo;

El Secretario de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (Hoy Hacienda);

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

El Secretario de Estado de Agricultura;

El Secretario de Estado de Relaciones Exteriores;

El Secretario de Estado de Hacienda;

El Secretario de Estado de Industria y Comercio;

El Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social;

El Gobernador del Banco Central de la República Dominicana;

La Comisión Nacional de Energía;

El Superintendente de Electricidad y

El Vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales.

PARRAFO I: El Poder Ejecutivo designara mediante decreto al Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, con rango de Secretario de Estado.

PARRAFO II: En los casos que corresponda en función de la agenda del día, el Consejo podrá invitar a participar de sus sesiones de trabajo, en calidad de invitados, a las personas físicas y morales que entienda pertinente, entre ellas a las siguientes:

- a) El presidente de la Asociación de Bancos de la República Dominicana;
- b) El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana;
- c) El presidente de los Generadores Privados del sector Energético Nacional;
- d) El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP);
- e) El Director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

PARRAFO III: El Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, también fungirá como el Presidente del Comité Gubernamental de Ozono (COGO).

ARTICULO 2.- Se crean las Oficinas Nacionales de Cambio Climático, en lo adelante ONCC, y la de Mecanismo de Desarrollo Limpio, en lo adelante ONMDL,

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

como unidades administrativas, bajo la dependencia de la Vicepresidencia Ejecutiva del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio.

ARTICULO 3.- Continúa.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a 10s veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil ocho (ZOOS); años 165 de la Independencia y 146 de la Restauración.

Cambio de Divisas

El "Reglamento Cambiario" se refiere al conjunto de normas y políticas que regulan las operaciones con divisas en un país, como el de la República Dominicana, y que son establecidas por la autoridad monetaria para garantizar la estabilidad del mercado cambiario, preservar la estabilidad de precios y la balanza de pagos. Su objetivo es establecer procedimientos para el correcto funcionamiento del mercado de divisas, tanto en el ámbito nacional como en las transacciones internacionales.

Componentes clave de un Reglamento Cambiario

- Definición y Alcance:

Establece las reglas para operaciones en divisas y de cambios internacionales, es decir, todas las transacciones que implican el pago o transferencia de divisas.

- Marco Legal:

Se fundamenta en leyes nacionales y el marco legal del país, como la Ley Monetaria y Financiera en la República Dominicana.

- Objetivo:

Contribuir a la estabilidad de precios, de la balanza de pagos y al buen funcionamiento del mercado de divisas.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Sujeción:**

Todas las operaciones cambiarias y sus participantes estarán sujetos a la legislación y regulación del país.

- **Función del Banco Central:**

El reglamento define el rol del Banco Central en la determinación del tipo de cambio.

Ejemplos de aplicación

En la República Dominicana, el Reglamento Cambiario establece las normas para el mercado de divisas de acuerdo con la Ley Monetaria y Financiera de 2002. Esto asegura que todas las operaciones se realicen bajo un marco regulatorio claro y para el beneficio de la economía del país.

La Ley que regula los bancos de cambio en República Dominicana es la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, junto con el Reglamento Cambiario emitido por el Banco Central, el cual establece las normativas específicas para las operaciones en divisas del mercado cambiario nacional. La Ley 183-02 sienta el marco legal general del sistema monetario y financiero del país, mientras que el Reglamento Cambiario detalla las políticas y procedimientos que deben seguir los participantes del mercado cambiario, incluyendo los agentes de cambio.

Marco Legal Principal

- **Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera:** Esta ley crea el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero dominicano, supervisado por la Superintendencia de Bancos y el Banco Central.

Regulación Específica

- **Reglamento Cambiario:**

Este reglamento, de conformidad con la Ley 183-02, establece las normas para las operaciones en divisas y regula a todos los participantes en el mercado cambiario.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Funciones de los Bancos de Cambio:**

Dentro de este marco, los agentes de cambio pueden comprar y vender divisas, mantener cuentas en divisas con bancos nacionales y extranjeros.

Instituciones Supervisoras

- **Banco Central de la República Dominicana:**

Es responsable de emitir el Reglamento Cambiario y regular la política monetaria y crediticia de la nación.

- **Superintendencia de Bancos (SB):**

Supervisa a las entidades de intermediación financiera para asegurar el cumplimiento de la ley y sus reglamentos.

- Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera

Ver Ley No.183-02 Monetaria y Financiera.

Canales de Riego de Agua

La principal ley que regula los canales y otros aspectos del agua en la República Dominicana es la Ley No.5852 sobre dominio de aguas terrestres y distribución de las aguas públicas, de 1962, que establece el agua como dominio público y el sistema de concesiones para su uso. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), creado por la Ley N° 6 de 1965, es la autoridad máxima encargada de controlar y regular el uso de las aguas superficiales y subterráneas del país.

Canción Nacional

La Ley No.700 del 30 de mayo de 1934 declaró el Himno Nacional dominicano como composición oficial, estableciendo que la música de José Reyes y la letra de Emilio Prud'Homme son únicas e invariables. Posteriormente, la Constitución de la República Dominicana en su artículo 33 y la Ley 210-19 sobre Símbolos

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Patrios ratificaron y ampliaron estas disposiciones, definiendo como ultraje la alteración de su letra o música y estableciendo sanciones penales para estas faltas.

Antecedentes y marco legal:

- Ley No. 700 de 1934:

Esta ley fue la que, de manera oficial, consagró como himno nacional la composición de José Reyes y Emilio Prud'Homme.

- Constitución Dominicana:

El artículo 33 de la Carta Magna establece que el Himno Nacional es único e invariable, además de ser el símbolo sonoro de la patria.

- Ley 210-19:

Esta ley actual regula el uso de los símbolos patrios y, en su artículo 39, detalla qué se considera un ultraje al Himno Nacional.

Consideraciones de la ley:

- Inalterabilidad:

La letra y la música del Himno Nacional son únicas e invariables y no pueden ser modificadas.

- Sanciones por ultraje:

Alterar la letra o el tiempo musical del Himno constituye un ultraje y se castiga con penas de prisión de uno a tres meses y multas de cinco a veinte salarios mínimos.

- Actos prohibidos:

Bailar mientras se interpreta el himno o convertirlo en una pieza musicalailable también se consideran ultrajes.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Respeto en público:**

Al interpretar el Himno Nacional, las personas deben detener la marcha, ponerse de pie y descubrirse la cabeza, salvo excepciones.

- **Difusión obligatoria:**

Las estaciones de radio y televisión tienen la obligación de difundir el Himno Nacional en fechas patrias específicas.

La Ley 210-19 de Símbolos Patrios es la normativa dominicana que regula el uso y el respeto de la Bandera Nacional, el Escudo Nacional y el Himno Nacional, buscando unificar criterios y establecer sanciones por su mal uso o irreverencia. La ley detalla especificaciones sobre las dimensiones de la bandera, los días de izamiento obligatorio, el horario para su colocación, las prohibiciones para evitar ultrajes, y las penas de prisión y multa por actos de irreverencia o ultraje a estos símbolos esenciales para la identidad dominicana.

Aspectos Clave de la Ley:

- **Objeto:**

Su propósito es reglamentar el uso de la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional, para que se les tribute el honor y respeto debidos.

- **Símbolos Regulares:**

La ley se refiere a los tres símbolos patrios: Bandera, Escudo e Himno.

- **Uso de la Bandera:**

Establece reglas sobre sus dimensiones, colores y cómo debe ser izada o colocada, así como la manera digna de desecharla cuando esté en mal estado.

- **El Himno Nacional:**

Prohíbe alterar su letra o música, que es de uso oficial para actos públicos.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Días Patrios:**

Define fechas como el 27 de febrero (Día de la Independencia y Bandera) para el izamiento obligatorio de la bandera.

- **Sanciones:**

Establece penas de prisión y multa para quien cometa actos de irreverencia o ultraje contra los símbolos patrios.

Actos Prohibidos (Ejemplos):

- Utilizar la bandera en propaganda electoral, política o comercial.
- Colocar letreros o imágenes sobre la bandera.
- Limpiar el piso, pared o cualquier objeto con la bandera.
- Alterar la letra o música del Himno Nacional.

Finalidad:

La ley busca fortalecer el respeto y el valor de los símbolos patrios, que son un reflejo de la independencia, soberanía e identidad del pueblo dominicano.

Capacidad Contributiva

Es deber de todo ciudadano el contribuir en la medida de sus posibilidades al financiamiento de los gastos en que incurre el Estado, ya que éste necesita de esos recursos para satisfacer las necesidades públicas, lo cual es su razón de ser primordial y principal motivo de existencia.

Sabido es que la capacidad contributiva se mide por tres magnitudes: la renta o réditos, el consumo y el patrimonio. El impuesto a la renta de las personas humanas ha adoptado el parámetro renta, como base para determinar la medida de la contribución para afrontar los gastos del estado que debe hacer el ciudadano.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

El principio de capacidad contributiva tiene gran importancia en la construcción del derecho tributario. Es el instrumento del cual depende el legislador para adecuar las cargas tributarias a criterios de equidad y justicia.

La capacidad contributiva se entiende como la aptitud para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias y sostener a los gastos del estado. Ello implica que no se puede grabar allí donde no existe tal aptitud. Lo cual sucede, por ejemplo, cuando el contribuyente no posee bienes para sus gastos vitales o cuando se grava un hecho imponible que no revela la mencionada aptitud.

Es un principio de derecho tributario, adoptado por un sinnúmero de países,. Como todo principio, tiene efectos sobre la potestad de crear normas, en tanto impone límites sobre como percutir sobre el patrimonio de los contribuyentes.

Otro efecto de este principio es que a igualdad de capacidad contributiva, debe realizarse similar tratamiento impositivo por parte del fisco, haciendo referencia a la “igualdad en igualdad de condiciones o situaciones”, se refiere a condiciones o situaciones de capacidad contributiva; el parámetro para medir la igualdad de situaciones frente al impuesto es la capacidad contributiva.

En República Dominicana pagar impuestos constituye un deber fundamental consagrado en la Constitución, pero siempre condicionado a la capacidad contributiva, según el numeral 6) del artículo 75.

Artículo 75.- Deberes fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes:

6) Tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente;

Capacidad Jurídica

En derecho, la capacidad se define como la aptitud legal para ser titular de derechos y obligaciones, y para realizar actos jurídicos que modifiquen o extingan relaciones jurídicas. Existen dos tipos principales: la capacidad jurídica o de goce, que es la aptitud para ser titular de derechos (como heredar), y la capacidad de ejercicio o de obrar, que es la facultad para realizar actos jurídicos por sí mismo (como firmar un contrato).

Tipos de capacidad

- Capacidad jurídica (o de goce):
 - Es la aptitud para tener derechos y deberes, incluso sin poder ejercerlos.
 - Se adquiere con el nacimiento y es inherente a toda persona por el simple hecho de serlo.
 - Un ejemplo es un bebé recién nacido que puede ser titular de una herencia o una cuenta bancaria.

Capacidad de ejercicio (o de obrar):

- Es la aptitud para realizar actos jurídicos válidos y por sí mismo, sin necesidad de representación o autorización de otro.
- Se relaciona con la capacidad de obligarse y de actuar de manera independiente en el ámbito legal.
- Normalmente se adquiere con la mayoría de edad.

Diferencia clave

La distinción es crucial: una persona puede tener capacidad jurídica (ser sujeto de derechos) pero no capacidad de ejercicio (necesitar de un representante legal para actuar), como sucede con los menores de edad o personas declaradas incapacitadas.

Cárcel para Menores

A) Delitos Cometidos por Menores de Edad

En la República Dominicana, la ley que rige los delitos cometidos por menores de edad es el Código para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Ley 136-03), el cual establece la escala de edades para la responsabilidad penal y define las medidas a aplicar, diferenciando entre niños y adolescentes. Los actos cometidos se juzgan bajo un régimen de justicia penal juvenil que busca el bienestar y la rehabilitación, con medidas como la libertad asistida o la internación, en lugar de las sanciones del código penal general.

Marco Legal Principal

- Ley 136-03 (Código para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes): Esta es la ley fundamental que garantiza los derechos de los menores y regula su situación en el ámbito legal y de protección, incluyendo los actos ilícitos que puedan cometer.

Sistema de Justicia Juvenil

- Diferenciación de edades:

La ley establece diferentes grupos de edad para la aplicación de medidas, como de 13 a 15 años y de 16 años hasta la mayoría de edad.

- Objetivo de rehabilitación:

Se enfoca en la reintegración social del menor a través de medidas como la amonestación, libertad asistida, asistencia a centros de día, y en casos más graves, internamientos de diferente régimen.

Ejemplos de Medidas

- Amonestación:

Una advertencia oral del juez para que el menor no repita el acto ilícito.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Libertad Asistida:

El menor queda en libertad bajo seguimiento y cumplimiento de programas educativos.

- Medidas de internamiento:

Pueden ser en régimen abierto, semiabierto o cerrado, dependiendo de la gravedad del delito y el proceso de rehabilitación.

Consideraciones Adicionales

- Prohibición de tratamiento como adultos:

Los menores no son tratados como adultos en el sistema judicial, se les busca un tratamiento especializado que prioriza su bienestar y protección.

- Derechos del menor:

Se debe garantizar el derecho a la comunicación con sus padres, tutores y abogados, así como la protección de sus derechos fundamentales durante el proceso.

B) Cárcel para Menores

En la República Dominicana, no existe una "ley de cárcel para menores" como tal, sino un marco de justicia juvenil especializado que aplica la Ley 136-03 (Código para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes) y sus modificaciones para adolescentes en conflicto con la ley, con un enfoque en medidas socioeducativas y privación de libertad como último recurso en centros especializados. La ley establece una edad mínima de responsabilidad penal (a partir de los 12 años, según algunas fuentes) y clasifica a los adolescentes en rangos de edad para la imposición de sanciones, que pueden variar desde la libertad supervisada hasta la reclusión en centros especializados con duraciones máximas específicas.

Marco Legal Principal

- Ley 136-03 (Código para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes): Esta ley rige el sistema de protección de la niñez y adolescencia,

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

y establece las normas para la aplicación de sanciones a adolescentes infractores, con un enfoque en sus derechos fundamentales y en la resocialización.

Edad de Responsabilidad Penal

- Responsabilidad Penal: La edad mínima para ser considerado penalmente responsable es un tema discutido, pero el país tiene un sistema de justicia penal juvenil que aplica a los menores.

Proceso y Sanciones

1. Fase de Investigación y Proceso:

Los adolescentes en conflicto con la ley son tratados por el sistema de justicia juvenil, que busca un equilibrio entre la sanción y la protección de sus derechos.

2. Enfoque Diferenciado:

Para la imposición de medidas cautelares y sanciones, la justicia penal juvenil diferencia entre:

- 13 a 15 años: Adolescentes que cumplen este rango.
- 16 años hasta la mayoría de edad: Adolescentes mayores.

3. Medidas Socioeducativas:

El sistema busca aplicar medidas socioeducativas y de orientación como la primera opción, antes de recurrir a la privación de libertad.

4. Privación de Libertad:

Si se incumple injustificadamente las medidas alternativas, se puede imponer la privación de libertad en un centro especializado.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

5. Duración de la Privación de Libertad:

La ley fija períodos máximos para la privación de libertad según el rango de edad, por ejemplo:

- 13 a 14 años: De uno a cinco años.
- 14 a 15 años: De uno a ocho años.
- 16 a 17 años: De uno a diez años.

Derechos y Protección

- Dignidad y Derechos Fundamentales:

Los adolescentes tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto, y a no ser sometidos a violencia o tratos crueles, violatorios de sus derechos fundamentales.

- Monitoreo y Denuncia:

Existen mecanismos para monitorear las condiciones de los adolescentes y para denunciar abusos o maltratos, a través del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y la Línea Vida (809-200-1202).

Carreras Deportivas

La regulación de las carreras deportivas depende del país, y cada nación tiene su propia legislación. Para obtener información específica sobre la regulación de carreras deportivas en un país, se debe consultar la ley del deporte de esa nación. República Dominicana: La Ley 356-05 General de Deportes.

¿Qué aspectos regulan estas leyes?

- Derecho a la práctica deportiva: Se reconoce el deporte como actividad esencial y un derecho para todos.
- Organización de entidades deportivas: Se establecen las normas para las federaciones, asociaciones y otros entes deportivos.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Competencia y control: Se regula la participación en competencias, el alto rendimiento y la disciplina deportiva.
- Lucha contra el dopaje: Se incluyen normativas para combatir el dopaje en el deporte.
- Igualdad y valores: Se promueven valores como la igualdad, la inclusión, la ética y el juego limpio.

Carreras Ilegales de Vehículos

En República Dominicana, el nuevo Código Penal castiga severamente las carreras ilegales de motocicletas y otros vehículos, estableciendo penas de 10 a 20 años de prisión y multas de 20 a 30 salarios mínimos del sector público si se producen muertes en estas actividades. Las sanciones varían según el daño: de 5 a 10 años de cárcel por mutilaciones o incapacidades permanentes, y de 2 a 3 años de prisión menor por solo causar heridas o golpes, además de multas correspondientes.

Casas de Acogidas

La ley que regula las casas de acogida o refugios en República Dominicana es la Ley No. 88-03. Esta ley instituye, en todo el territorio nacional, estos albergues temporales para mujeres, niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica. Además, para su aplicación y supervisión, existe el Decreto No. 1518-04 que aprueba el reglamento de la mencionada ley.

Aspectos clave de la Ley No. 88-03 y su reglamento:

- Objetivo:

Proporcionar un albergue seguro y asistencia social, psicológica y jurídica a las víctimas de violencia doméstica.

- Población beneficiaria:

Mujeres solas o acompañadas de sus hijos, y niños, niñas y adolescentes que sufren de violencia intrafamiliar o doméstica.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Coordinación:**

La coordinación y supervisión de las casas de acogida recae en un Consejo de Dirección, presidido por el Ministerio de la Mujer (anteriormente Secretaría de Estado de la Mujer) e integrado por representantes del Ministerio de Salud Pública, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI) y organizaciones no gubernamentales (ONG).

- **Rol del Ministerio de la Mujer:**

El Ministerio de la Mujer es la entidad pública encargada de presidir este Consejo y de asegurar el buen funcionamiento de las casas de acogida.

Puedes encontrar los textos completos de la ley y su reglamento en el sitio web del Ministerio de la Mujer de la República Dominicana.

Casas de Empeño

En República Dominicana, la ley que ha regulado tradicionalmente las casas de empeño es la Ley No.387 sobre compra-venta o empeño, promulgada el 23 de noviembre de 1932. Sin embargo, esta ley está considerada obsoleta y existen propuestas para crear un nuevo marco regulatorio. Las casas de empeño operan bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda y deben cumplir con requisitos como la obtención de la autorización de nombre y la aprobación del Ministerio para operar.

Ley principal:

- Ley No. 387 sobre compra-venta o empeño (1932): Esta es la legislación histórica que rige la actividad de las casas de empeño en el país.

Aspectos relevantes de la ley:

- Autorización del Ministerio de Hacienda:

Para operar una casa de empeño, se requiere la obtención de la aprobación del nombre y la autorización de operación por parte del Ministerio de Hacienda.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Regulación de transacciones:

La ley establece las condiciones bajo las cuales se pueden realizar las operaciones de empeño y compra-venta, incluyendo el tipo de bienes que pueden ser empeñados y los procedimientos a seguir.

- Supervisión del Estado:

El Ministerio de Hacienda es el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las regulaciones por parte de estas casas comerciales.

Situación actual y propuestas:

- Obsolescencia:

Se reconoce que la Ley No. 387 de 1932 está desactualizada para la realidad actual del negocio de las casas de empeño y carece de una regulación y supervisión adecuadas por parte del Estado.

- Proyectos de ley:

Se han presentado proyectos legislativos para crear un nuevo marco regulatorio que aborde las limitaciones de la ley existente y establezca una regulación más moderna y efectiva para las casas de empeño.

Censura

Concepto.

Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

La censura es la supresión de la expresión, la comunicación pública u otra información. Esto puede hacerse sobre la base de que dicho material se considera objetable, dañino, sensible o "inconveniente". La censura puede ser realizada por gobiernos e instituciones privadas.

Es decir, es la supresión de todo tipo de información, comunicación o libertad de expresión; es la intervención por algún gobierno, organización o institución en prevenir el esparcimiento de todo tipo de información de manera pública, esta pudiendo ser causada por razones de que el material en cuestión es sensible.

El derecho constitucional a la libertad de expresión y a la libertad intelectual con se aplica a los gobiernos. Se prohíbe a las agencias y funcionarios gubernamentales regular o restringir la libertad de expresión en función de su contenido o punto de vista. Por lo tanto, una censura es una expresión de fuerte desaprobación o dura crítica.

Base legal

1) Constitución.

2) Ley 6132

En República Dominicana censurar la libertad de expresión o pensamiento violaría la Ley 6132 sobre libre expresión.

Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

La ley que regula la operación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en la República Dominicana es la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos. Esta ley establece el COE como el organismo encargado de coordinar y ejecutar acciones ante desastres, ratificando su papel como órgano operativo de la Comisión Nacional de Emergencias y garantizando la preparación y respuesta conjunta de las instituciones ante eventos adversos.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Aspectos clave de la Ley 147-02:

- Establece el COE como órgano de coordinación:

Ratifica y define al COE como la entidad que coordina la preparación y respuesta a desastres en el país.

- Define el papel del COE:

Es el órgano operativo de la Comisión Nacional de Emergencias y el encargado de la operación conjunta entre diferentes niveles de gobierno e instituciones.

- Principios de gestión de riesgos:

La ley establece principios de protección y prevención para salvaguardar la vida, la integridad física, las estructuras productivas, los bienes y el medio ambiente frente a desastres.

- Comités Regionales y Provinciales:

Crea Comités Regionales, Provinciales y Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, que estarán bajo la coordinación de las autoridades locales y la Defensa Civil.

En resumen, la Ley 147-02 es el marco legal que otorga al COE su estructura, funciones y responsabilidades en la gestión de emergencias y desastres en la República Dominicana.

Centro Comercial

La autorización para instalar centros comerciales en República Dominicana se rige principalmente por la Ley 675 de 1944 sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones y sus reglamentaciones, así como por la Ley 176-07 de los Distritos Nacionales y los Municipios, las cuales establecen los requisitos para la planificación urbana y la obtención de permisos municipales. Estas leyes exigen la solicitud de una autorización escrita a las autoridades municipales o al Consejo Administrativo del

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Distrito de Santo Domingo, detallando aspectos del proyecto como la ubicación, las vías públicas y las dimensiones de las calles y solares. Adicionalmente, la instalación debe cumplir con los requisitos de zonificación y requisitos de construcción estipulados por las autoridades locales y las normativas de zonificación del país.

Marco legal y requisitos:

1. Autorización municipal:

Es indispensable obtener una autorización por escrito del Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo o del Ayuntamiento correspondiente en la zona donde se proyecta construir.

2. Solicitud detallada:

El propietario del terreno o su representante legal debe presentar una solicitud que incluya datos como la ubicación del proyecto, designación de vías públicas, anchura de calles y solares, y otros detalles que permitan una descripción clara del proyecto.

3. Normativas de zonificación y urbanismo:

Se deben cumplir los reglamentos de la Ley 675 de 1944 y la Ley 176-07, que regulan el desarrollo urbano, la planificación de ciudades y las características específicas para la construcción de edificaciones de diferentes tamaños.

4. Planificación urbana:

La Dirección de Planeamiento Urbano es la encargada de establecer las zonas urbanas y supervisar el proceso de planificación urbana, asegurando que los proyectos se ajusten a las directrices de ordenamiento territorial.

5. Vías y aceras:

La ubicación del centro comercial debe considerar las vías primarias, secundarias y terciarias de la ciudad, y es necesario cumplir con los requisitos de ampliación de aceras para facilitar la movilidad peatonal y vehicular.

En resumen:

Para instalar un centro comercial en República Dominicana, es necesario seguir los procedimientos establecidos en la Ley 675 de 1944 y las normativas municipales vigentes, asegurándose de obtener las aprobaciones correspondientes por parte de las autoridades locales y de cumplir con todas las disposiciones relativas a la urbanización, planificación y construcción.

Certificación

Concepto

Una certificación es un documento oficial que valida una condición, hecho o conformidad, como la nacionalidad, los antecedentes judiciales o el cumplimiento de normas de calidad. En la República Dominicana, las leyes que las regulan varían según el tipo de certificación. Por ejemplo, la Ley N° 393 del 1964 regula los certificados de examen médico, la Ley 126-02 rige las firmas y certificaciones digitales, y el decreto N° 122-07 establece el registro de antecedentes delictivos.

Tipos de certificación y leyes aplicables

- Certificados de exámenes médicos:

La Ley No. 393 del 4 de septiembre de 1964 faculta a los médicos con exequatur para emitir certificados sobre los exámenes que realicen.

- Certificados digitales:

La Ley N° 126-02, sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, define y regula las entidades de certificación que emiten certificados para las firmas digitales.

- Certificados de buena conducta:

Se regulan por el decreto Núm. 122-07, que establece el Reglamento para el Registro de Datos sobre Personas con Antecedentes Delictivos.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Certificaciones de cumplimiento y normas:

El Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) se encarga de la certificación de productos y sistemas que cumplen con las Normas Dominicanas (NORDOM), según lo establece el artículo 8, literal a) del reglamento interno del INDOCAL.

- Certificados de leyes, resoluciones y decretos:

Se emiten bajo la Ley 10-13, que establece un marco legal para la certificación de documentos públicos en la República Dominicana. Este servicio valida la autenticidad de los actos jurídicos emitidos por las autoridades competentes.

- Ley No. 393 del 04/09/1964 que regula la expedición de certificado de examen médico.

Certificado Médico

En República Dominicana, la Ley No. 393-64 es la ley principal que regula la expedición de certificados médicos, facultando a los médicos con exequátur para emitir estos documentos sobre los exámenes realizados en el ejercicio de su profesión. Esta ley establece el marco para que los médicos certifiquen la salud de sus pacientes, aunque hay excepciones para ciertos certificados de tipo médico-legal o para licencias de aeronavegación y de conducir.

Aspectos clave de la Ley No. 393-64

- Facultad de los Médicos:

La ley otorga a los médicos con exequátur (licencia para ejercer) la autoridad para emitir certificados médicos sobre sus pacientes.

- Alcance:

Los certificados se refieren a exámenes médicos realizados en el ejercicio de la profesión.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Excepciones:

La ley excluye ciertos tipos de certificados de su aplicación directa, como los certificados médico-legales, los que atestiguan la aptitud física para licencias de aviación, y aquellos requeridos para obtener la primera licencia de conducir.

- Base Legal:

La ley es fundamental para la regulación de la práctica profesional de la medicina y para garantizar la validez de los certificados emitidos por profesionales autorizados.
Importancia del Certificado Médico

- Derecho del Paciente:

El paciente tiene derecho a recibir un certificado que refleje su estado de salud actual. La negativa de un médico a emitir un certificado, siempre que sea solicitado por el paciente, puede considerarse una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales.

- Obligación Profesional:

La emisión de un certificado médico es una obligación legal y profesional para el médico, en el contexto de la relación médico-paciente.

- Recertificación Médica:

Este certificado también se relaciona con la obligatoriedad de los médicos de recertificarse cada cinco años para garantizar la calidad de los servicios médicos, un proceso impulsado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y el Colegio Médico Dominicano (CMD).

En resumen, la Ley 393-64 es el marco normativo en la República Dominicana que autoriza a los médicos a extender certificados médicos para probar el estado de salud de los pacientes, con las exclusiones mencionadas, lo que subraya el derecho y la obligación de ambas partes.

Es la Ley 393-64 que en la República Dominicana regula la expedición de certificados de examen médico, facultando a médicos con exequatur para emitir estas

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

certificaciones sobre los exámenes que realicen, con excepciones para certificaciones médico-legales o relacionadas con licencias de conducir y tripulación de aeronaves.

Detalles de la Ley 393-64:

- **Objeto:**

Su finalidad es establecer las normas para la emisión de certificados médicos por parte de los facultativos.

- **Ámbito de aplicación:**

Se aplica a la expedición de certificados de exámenes médicos realizados por médicos en el ejercicio de su profesión.

- **Autorización:**

La ley otorga la potestad a los médicos que posean exequatur (licencia para ejercer la medicina) para extender estos certificados.

- **Excepciones:**

La ley establece claramente algunas exenciones, es decir, que no aplica la facultad general a ciertos tipos de certificaciones.

- Las certificaciones médico-legales.
- Los certificados destinados a probar la aptitud física para obtener o renovar licencias de tripulación de aeronaves.
- Los certificados necesarios para obtener la primera licencia de conducir.

Esta ley es un marco legal fundamental en la República Dominicana que define las reglas sobre la validez y la autoridad de los certificados médicos emitidos por los profesionales de la salud.

Chantaje

En la República Dominicana, el chantaje se castiga según el Código Penal Dominicano, específicamente en el Artículo 216, que sanciona a quien obtiene fondos, valores o documentos amenazando con revelar información lesiva al honor de una persona. Las penas varían, pero generalmente se imponen de uno a dos años de prisión menor y multas, las cuales aumentan si el chantaje está acompañado de lesiones a la víctima.

Definición y Sanción del Chantaje

- Definición:

El chantaje es el acto de obtener recursos (fondos, valores, documentos) mediante la amenaza de divulgar hechos que puedan dañar el honor o la reputación de una persona.

- Pena base:

La pena por chantaje, según el Artículo 216 del Código Penal, es de uno a dos años de prisión menor y una multa.

Circunstancias Agravantes

- Lesiones a la víctima:

Si el chantaje va seguido de lesiones que causen una incapacidad total de trabajo de hasta 90 días, la pena aumenta a dos o tres años de prisión menor y multas.

- Lesiones graves:

Si las lesiones causan una incapacidad de trabajo de más de 90 días, la sanción es más severa, con penas de cuatro a diez años de prisión mayor y multas.

Consideraciones Legales

- El chantaje es un delito perseguido por la ley dominicana, y aquellos que lo cometan pueden enfrentar sanciones penales y la obligación de reparar el

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

daño a la víctima, conforme a las leyes de protección a la privacidad y dignidad.

Ciberacoso

En República Dominicana, el ciberacoso es abordado principalmente por la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que incluye el artículo 21 que penaliza el acoso a través de medios electrónicos. Esta ley establece sanciones de prisión y multa para quienes cometan estos actos. Además, existe un proyecto de ley en proceso para reformar la Ley 53-07, que busca tipificar el ciberacoso como un delito más específico y aumentar las penas.

Ley principal:

- Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología: Esta ley sanciona el uso de tecnologías para acosar, amenazar o invadir la privacidad de otras personas.
 - Artículo 21: Específicamente, penaliza la difamación cometida por medios electrónicos con penas de tres meses a un año de prisión y multas.

Iniciativas de reforma:

- Proyecto de reforma a la Ley 53-07: Se ha propuesto una reforma para definir el ciberacoso como una conducta delictiva persistente a través de medios digitales, con penas más elevadas.

En resumen:

La Ley 53-07 es la ley principal que regula los delitos informáticos en República Dominicana y que se aplica al ciberacoso. Sin embargo, se está trabajando en una reforma legislativa para mejorar la protección contra este tipo de delitos y aumentar las sanciones.

Ciberataque

Un ciberataque es un intento malicioso de una persona u organización para dañar o interrumpir sistemas informáticos, redes o dispositivos digitales, o para obtener acceso no autorizado a datos. Estos ataques buscan cometer delitos como el robo de información confidencial, el fraude financiero, el espionaje, el sabotaje de sistemas o la interrupción de servicios. Existen diversas técnicas y herramientas utilizadas en los ciberataques, como malware, phishing, ataques de denegación de servicio (DDoS), y ransomware, según Microsoft.

Tipos comunes de ciberataques

- **Malware:**

Software malicioso (como virus o troyanos) que se infiltra en un sistema para dañarlo, robar información o interrumpir su funcionamiento.

- **Phishing (Suplantación de identidad):**

Consiste en el envío de correos electrónicos o mensajes fraudulentos que aparentan ser de fuentes legítimas para engañar a los usuarios y obtener sus datos confidenciales.

- **Ataques de Denegación de Servicio (DDoS):**

Un ataque que sobrecarga un servidor o red con tráfico no deseado, haciendo que deje de funcionar y no esté disponible para los usuarios legítimos.

- **Ransomware:**

Un tipo de malware que cifra los datos de la víctima y exige el pago de un rescate para recuperar el acceso o descifrar los archivos.

- **SQL Injection (Inyección SQL):**

Un ataque que aprovecha vulnerabilidades en aplicaciones web para manipular o robar bases de datos.

Motivaciones detrás de los ciberataques

- Motivos criminales: Robo de datos financieros, estafas o extorsión.
- Motivos políticos: Ciberespionaje, ciberterrorismo o hacktivismo (ciberataques para difundir una causa política).
- Motivos personales: Empleados descontentos o venganza.
- Espionaje corporativo: Robo de propiedad intelectual para obtener ventaja competitiva.

Cómo protegerse de los ciberataques

- Ser precavido con correos electrónicos y enlaces sospechosos: No hacer clic en enlaces ni descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos.
- Usar software de seguridad de confianza: Implementar soluciones de ciberseguridad sólidas.
- Utilizar autenticación multifactor: Añadir una capa extra de seguridad para acceder a tus cuentas.

En la República Dominicana, los ciberataques están regulados principalmente por la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que establece el marco legal para prevenir y sancionar los delitos cometidos a través de sistemas informáticos, electrónicos y de telecomunicaciones. Esta ley define y penaliza actos como la interceptación de datos, la alteración de sistemas, el sabotaje y los delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos.

Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología

- Objetivo:

Proteger los sistemas que utilizan tecnologías de información y comunicación, así como el contenido de estos.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Aplicación:**

La ley penal se aplica a infracciones cometidas en territorio dominicano, aunque también se puede aplicar a delitos cometidos en el extranjero si alguno de los actos previstos en la ley se realiza fuera del país.

- **Delitos cubiertos:**

- Interceptación e intervención de datos: Espiar, desviar o grabar datos sin autorización de un juez competente.
- Daño o alteración de datos: Borrar, afectar, introducir, copiar, mutilar o eliminar datos con fines fraudulentos.
- Sabotaje: Alterar, dañar o destruir un sistema informático o sus componentes para causar mal funcionamiento.
- Delitos contra la nación y el terrorismo: Actos cometidos a través de sistemas informáticos que atentan contra los intereses y la seguridad nacional.

Otros aspectos relevantes:

- **Marco Constitucional:**

La Constitución de la República establece el derecho a la intimidad y al honor, así como el derecho a acceder a la información personal, lo que respalda las disposiciones de la Ley 53-07.

- **Estrategia Nacional de Ciberseguridad:**

El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y su Dirección Ejecutiva monitorean e implementan la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030, que busca fortalecer la ciberseguridad y la ciberdefensa en el país.

- **Actores clave:**

El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y su unidad CSIRT-RD trabajan en la prevención de incidentes cibernéticos y la protección de la infraestructura tecnológica.

Cierre de Negocios

En la República Dominicana, la ley principal que regula el cierre de negocios, especialmente en casos de insolvencia, es la Ley No. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes. Esta ley establece los procedimientos para la continuidad de los negocios a través de la reestructuración o, como última opción, la liquidación, protegiendo así a los acreedores y promoviendo la viabilidad de las empresas en dificultades financieras.

Detalles de la Ley 141-15:

- **Objetivo:**

Busca proteger a los acreedores y a los deudores, ofreciendo mecanismos para que las empresas con problemas financieros puedan reestructurarse y continuar operando, en lugar de ser liquidadas directamente.

- **Novedad:**

Esta ley representa un cambio significativo, ya que la normativa anterior, con casi un siglo de antigüedad, se centraba principalmente en la liquidación de activos.

- **Enfoque:**

Se fundamenta en la tendencia global de buscar un equilibrio entre deudores y acreedores, dando prioridad a la oportunidad de continuidad de los negocios en riesgo.

Otras normativas y consideraciones:

- **Leyes sobre Sociedades Comerciales:**

La Ley No. 479-08 sobre Sociedades Comerciales también es relevante para las empresas, regulando aspectos como su constitución y funcionamiento.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Regulaciones de Horarios y Sanciones:

Si bien la Ley 141-15 se enfoca en la quiebra, la operación diaria de los negocios está sujeta a otras normativas. Por ejemplo, existen decretos que establecen horarios de cierre para establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, cuya violación puede llevar al cierre temporal o definitivo del negocio.

- Sanciones:

En caso de violar normativas o regulaciones específicas, como las relacionadas con horarios o requisitos de registro, los negocios pueden enfrentar sanciones que van desde multas hasta el cierre temporal o definitivo del establecimiento.

- Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresa

Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08.

Código Tributario

Por su parte el Código tributario establece el Cierre de Locales o establecimientos por el no cumplimiento de los deberes formales por parte del contribuyente y por violación a las leyes impositivas.

Cirugía Plástica

En República Dominicana, la práctica de la cirugía plástica está regulada por el Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano, así como por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SODOCIPRE). La SODOCIPRE establece requisitos para sus miembros, incluyendo la formación académica, la experiencia profesional y la integridad moral. Además, el Ministerio de Salud Pública ha emitido resoluciones para regular tanto a los cirujanos plásticos como a las clínicas y centros que ofrecen este tipo de servicios.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Regulación y requisitos:

- Ministerio de Salud Pública:

Regula el ejercicio de la cirugía plástica, incluyendo los requisitos para los cirujanos y los centros que ofrecen estos servicios.

- Colegio Médico Dominicano:

Una de las instituciones que vela por el cumplimiento de los estándares éticos y profesionales en la práctica médica, incluyendo la cirugía plástica.

- SODOCIPRE:

Agrupación a los cirujanos plásticos acreditados en la República Dominicana, quienes deben cumplir con requisitos como:

- Ser médico con título reconocido nacional o extranjero.
- Tener entrenamiento en cirugía general y cirugía plástica y reconstructiva avalado por una institución reconocida.
- Contar con recomendaciones de miembros de SODOCIPRE.
- Tener integridad moral, ética y profesional.
- Ser miembro del Colegio Médico Dominicano.

En resumen, la regulación de la cirugía plástica en República Dominicana involucra tanto a instituciones gubernamentales como a organizaciones profesionales, asegurando que los procedimientos se realicen con estándares de calidad y ética.

Ciudadanía

La ciudadanía en la República Dominicana se rige por la Constitución de 2010, la Ley General de Migración (285-04), y leyes como la Ley No.169-14 sobre Naturalización, que modificó y complementó normativas anteriores. Se adquiere por nacimiento (ius

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

solí y ius sanguinis) o por naturalización. Sin embargo, la aplicación de estas leyes ha sido compleja, especialmente para los hijos de padres extranjeros en situación irregular, con la sentencia TC/0168/13 limitando el ius soli y creando un régimen especial de naturalización.

Adquisición de la Nacionalidad

- Por Nacimiento (Ius Soli y Ius Sanguinis):
 - Se adquiere de pleno derecho por ius sanguinis: los hijos de padres dominicanos son dominicanos, sin importar dónde nazcan.
 - Se puede adquirir por ius soli: los nacidos en territorio dominicano generalmente adquieren la nacionalidad, pero la sentencia TC/0168/13 limita este principio para hijos de extranjeros en situación irregular.

Por Naturalización:

- Los extranjeros pueden adquirir la nacionalidad dominicana mediante un proceso de naturalización, que implica el cumplimiento de requisitos de residencia y otros criterios establecidos por la ley. La Ley 1683-48 sobre Naturalización y la Ley 169-14 regulan estos procesos.

Derechos y Pérdidas de la Ciudadanía

Constitución de la república.

Artículo 21.- Adquisición de la ciudadanía. Todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad y quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido esa edad, gozan de ciudadanía.

Artículo 22.- Derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanas y ciudadanos:

- 1) Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución;
- 2) Decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo;
- 3) Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

4) Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto;

5) Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo.

Artículo 23.- Pérdida de los derechos de ciudadanía. Los derechos de ciudadanía se pierden por condenación irrevocable en los casos de traición, espionaje, conspiración; así como por tomar las armas y por prestar ayuda o participar en atentados o daños deliberados contra los intereses de la República.

Artículo 24.- Suspensión de los derechos de ciudadanía. Los derechos de ciudadanía se suspenden en los casos de:

- 1) Condenación irrevocable a pena criminal, hasta el término de la misma;
- 2) Interdicción judicial legalmente pronunciada, mientras ésta dure;
- 3) Aceptación en territorio dominicano de cargos o funciones públicas de un gobierno o Estado extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo;
- 4) Violación a las condiciones en que la naturalización fue otorgada.

- **Derechos de Ciudadanía:**

Los ciudadanos dominicanos mayores de 18 años tienen derechos como elegir y ser elegidos para cargos públicos, participar en referendos y ejercer la iniciativa popular.

- **Pérdida de Derechos:**

Se pierden los derechos de ciudadanía en casos de traición, espionaje, conspiración, o por tomar las armas contra los intereses de la República.

Marco Legal Clave

- **Constitución de 2010:**

Establece los principios fundamentales del ius sanguinis y las condiciones bajo las cuales se puede adquirir la nacionalidad.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Ley No. 169-14:

Crea un régimen especial para la naturalización y registro de personas nacidas en territorio dominicano en situación de apatridia, como consecuencia de la sentencia TC/0168/13.

- Ley General de Migración (285-04):

Regula la entrada, permanencia y salida de extranjeros en el país, y sus disposiciones influyen en el estatus migratorio de los padres y, por ende, en la nacionalidad de sus hijos nacidos en territorio dominicano.

Clínicas – Deber de Ayudar

Sí, existen leyes y códigos de ética médica a nivel internacional y nacional que obligan a los médicos y clínicas a prestar ayuda en emergencias. El médico debe ofrecer atención considerando su seguridad y competencia, y otros factores, ya que la atención de emergencia es un derecho fundamental de la persona y un deber profesional. Negarse a prestar auxilio en una emergencia es ilegal y acarrea responsabilidad ética, civil y penal.

Marco Legal y Ético

- Derecho Universal a la Salud:

El derecho a la salud es fundamental y obliga a los establecimientos de salud, públicos o privados, a prestar atención de emergencia en caso de urgencia vital.

- Código de Ética Médica:

El Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial (AMM) establece que los médicos deben proporcionar ayuda en emergencias médicas, actuando según su propia seguridad y competencia.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Marco Nacional:

En República Dominicana, la Constitución y las leyes reconocen el derecho a la salud y la obligación de prestar atención de emergencia, incluso si no hay capacidad de pago.

¿Qué implica esta obligación?

- No negar la atención:

Los centros de salud no pueden rechazar a personas en situación de urgencia por motivos económicos o de cualquier otra naturaleza.

- Tratamiento y estabilización:

Se debe iniciar la atención médica para estabilizar la condición del paciente hasta que pueda recibir un tratamiento definitivo o sea trasladado a otra institución adecuada.

- Responsabilidad:

El médico o el establecimiento que niega ayuda en una emergencia puede enfrentar demandas y ser condenado por responsabilidades éticas, civiles y penales.

La "Ley General de Salud" puede referirse a leyes de distintos países que reglamentan el derecho a la salud, estableciendo la organización, regulación y acceso a servicios de salud. La Ley 42-01 de República Dominicana establece el marco legal para la protección de la salud en ese país.

Ley General de Salud de República Dominicana (Ley No. 42-01)

- Establece el marco legal para la protección, promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de toda persona en el territorio nacional.
- Regula las acciones relacionadas con el control de plagas, desastres, y el control de riesgos ambientales y laborales para la salud.
- Crea el Consejo Nacional de Salud y establece las funciones de las instituciones rectoras del sector salud.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

En este sentido, en la República Dominicana, la Ley General de Salud obliga a todas las clínicas, públicas y privadas, a prestar atención médica de emergencia a cualquier paciente, independientemente de su capacidad de pago o afiliación a un seguro médico. La Constitución y esta ley protegen el derecho a la salud, impidiendo que se niegue la atención vital por motivos económicos.

Aspectos clave de esta obligación:

- **Derecho fundamental:**

El acceso a la salud, especialmente en situaciones de emergencia, es un derecho fundamental y constitucional para toda persona.

- **Inclusión de clínicas privadas:**

La ley abarca a todos los establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud, incluyendo tanto hospitales públicos como clínicas y centros privados.

- **Prohibición de cobros para atención de emergencia:**

Las clínicas no pueden exigir un depósito o cualquier condición financiera para iniciar la atención médica de emergencia.

- **Consecuencias por incumplimiento:**

Negar la atención de emergencia puede resultar en demandas por abandono de paciente y daños y perjuicios. En casos graves, puede llevar a sanciones de prisión.

Esta ley busca garantizar la igualdad en el acceso a la salud, evitando que las condiciones sociales o económicas de una persona sean un obstáculo para recibir atención vital en momentos de urgencia.

Coautor

En República Dominicana, la figura del "coautor" es castigada por el Nuevo Código Penal Dominicano (Ley 74-25), que sanciona a quien ejecuta una infracción de manera conjunta y consciente, aportando una contribución esencial al delito. Los

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

coautores son considerados responsables criminalmente, al igual que los autores y cómplices, y recibirán una pena proporcional a su participación activa en la comisión del hecho punible.

¿Qué establece la Ley 74-25 sobre la coautoría?

- Definición de coautor:

Es quien, junto con otras personas, comete una infracción de forma conjunta y consciente, actuando con una decisión común y realizando una contribución esencial para lograr el resultado típico.

- Responsabilidad penal:

El coautor es penalmente responsable de la infracción, al igual que el autor.

- Pena:

La ley no especifica una pena distinta para los coautores, por lo que su sanción será aquella aplicable a la infracción cometida, en la que han participado activamente.

Cobro Coactivo de la Deuda

El cobro coactivo es un procedimiento legal para recuperar deudas pendientes, ya sean privadas o de una entidad pública.

En República Dominicana funciona mediante la aplicación de medidas forzosas como el embargo de bienes o cuentas bancarias, una vez agotado el cobro persuasivo.

En qué consiste el cobro coactivo

- 1) Agotamiento del cobro persuasivo:

Primero se busca que el deudor pague voluntariamente o se llegue a un acuerdo.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

2) Título ejecutivo:

Se requiere un documento legal que acredite la deuda, como un título ejecutorio o sentencia ejecutoria, una multa, un contrato o un pagaré.

3) Notificación de mandamiento de pago:

Se le notifica al deudor el cobro de la obligación y el plazo para pagarla.

4) Medidas cautelares:

Si el deudor no paga en el plazo establecido se puede solicitar aplicar medidas como el embargo de bienes (inmuebles o muebles), cuentas bancarias o salarios.

5) Ejecución de la deuda:

Se busca hacer efectivo el cobro de la deuda a través de la ejecución de las medidas cautelares, como la subasta o venta de los bienes embargados.

Marco Legal en República Dominicana

1) Código Tributario:

Para las deudas tributarias, la ley 11-92 (Código Tributario) es la normativa principal que rige los procedimientos de cobro coercitivo por parte de la DGII.

Artículo 91. De la Acción Ejecutoria.

El Ejecutor Administrativo ordenará requerir al deudor para que, en el plazo de 5 días a partir del día siguiente de la notificación, pague el monto del crédito en ejecución u oponga excepciones en dicho término, bajo apercibimiento de iniciar en su contra el embargo de sus bienes.

Artículo 93. De la Orden de Embargo. Vencido el plazo del requerimiento, sin que el deudor haya obtemperado al pago ni haya opuesto excepciones, el Ejecutor Administrativo, mediante providencia que constará en el expediente respectivo, ordenará trabar embargo sobre los bienes del deudor.

Artículo 96. La acción ejecutoria procede cuando se trate de créditos tributarios líquidos y exigibles, que consten en título que tenga fuerza ejecutoria.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 97. Constituye título ejecutorio el Certificado de Deuda emitido por la Administración Tributaria, bajo la firma de funcionario competente.

Párrafo. También constituyen títulos ejecutorios, los reconocidos como tales por la Ley Procesal Común o leyes tributarias especiales.

Artículo 99. Del Procedimiento de Ejecución. La acción ejecutoria se iniciará en contra del deudor o deudores por el Departamento del cobro compulsivo coactivo o de aquel que ejerza esas funciones, a través del consultor jurídico respectivo. Sin embargo, el Director General tendrá facultad para atribuir estas funciones a cualquier otro funcionario de la Administración Tributaria sino hubiere en la Administración estos Departamentos.

Artículo 119. De la Subasta de los Bienes Embargados. Cuando deba continuarse el procedimiento de apremio, el Ejecutor Administrativo ordenará el retiro de las especies embargadas y su entrega a la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, para la subasta de las mismas, tratándose de bienes muebles corporales. La Resolución señalará, además, la fecha en que se llevará a efecto la subasta de los bienes embargados, la que se realizará en un término no menor de treinta (30) días a partir del embargo, dicha resolución será notificada al ejecutado y a los intervinientes, conjuntamente con una copia del acta de embargo, cinco días antes, por lo menos, a la fecha de la subasta.

Artículo 133. De la Liquidación del Crédito y Pago de la Deuda. El Ejecutor Administrativo practicará la liquidación del crédito con recargos, intereses, costas y gastos y procederá al pago del mismo, aplicando para este efecto el producto líquido obtenido en la Subasta.

Artículo 134. El excedente que resultare después de haberse efectuado el pago del crédito, se entregará al ejecutado, si no mediare oposición. En caso contrario, el remanente se depositará en el Banco de Reservas de la República Dominicana, a la orden del Tesoro Nacional, hasta tanto intervenga decisión definitiva.

2) Código Civil.

3) Código de Procedimiento Civil.

4) Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

Cobro Compulsivo del Estado

En República Dominicana, la ley que regula los cobros del Estado se encuentra principalmente en la Ley sobre Contrataciones Públicas, que establece los principios y normas generales para las adquisiciones y contrataciones del Estado. Además, la Ley 86-11 permite hacer efectivos los créditos adeudados por el Estado.

La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas:

- Esta ley rige las contrataciones de bienes, obras, servicios y concesiones del Estado.
- Establece los principios, normas, órganos y procesos para la adquisición de bienes y servicios, contratación de obras públicas y otorgamiento de concesiones.
- Aplica a todas las entidades del sector público, incluyendo el Gobierno Central, instituciones descentralizadas, ayuntamientos y empresas públicas.
- Regula las modalidades de contratación y los procedimientos a seguir.

Ley 86-11:

- Permite hacer efectivos los créditos adeudados por el Estado.
- Facilita el cobro de deudas del Estado, incluso aquellas que parecen incobrables.
- Establece mecanismos legales para el cobro de deudas estatales.

Otros aspectos relevantes:

- La Ley No. 6-06 de Crédito Público regula las operaciones de crédito público y establece restricciones para otorgar garantías sobre bienes estatales.
- La Tesorería Nacional tiene funciones y actividades reguladas por la Ley 56705 y su reglamento.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- La Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera establece el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero.
- La Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial establece principios para la regulación salarial de directivos, administradores, funcionarios o empleados de empresas estatales.
- La Ley 41-08 de Función Pública regula aspectos relacionados con el empleo público, incluyendo el pago de vacaciones.
- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) es el órgano rector del sistema de contrataciones públicas en República Dominicana.

Es importante consultar las leyes y reglamentos específicos para obtener información detallada sobre los procedimientos y requisitos para cada tipo de cobro o contratación.

Ley No.4453. sobre Cobro Compulsivo de impuestos, derechos, servicios y arrendamientos.

Artículo 1.- Las obligaciones resultantes por concepto de impuestos, derechos, arbitrios, arrendamientos, ventas, mensuras o por cualquier otro concepto, cuyos acreedores sean el Estado, el Distrito Nacional, los Municipios o los Distritos Municipales, podrán ejecutarse vencido el término en que deberá efectuarse el pago, por cualquier Alguacil requerido al efecto en virtud de ordenanza que dictará el Juez de Primera Instancia a diligencia del Administrador General de Bienes Nacionales del Colector de 'Rentas Internas, del Colector de Aduanas, del Tesorero del 'Consejo Administrativo del Distrito Nacional o del Tesorero Municipal, según sean fiscales o municipales los impuestos, derechos, arbitrios, arrendamientos, ventas o deudas cuyo cobro se persiga.

(Ley No. 26, que agrega un párrafo al Artículo 1 de la Ley No. 4453, de fecha 9 de marzo de 1956. (G. O. No. 9201, del 14 de Octubre de 1970)

Párrafo. Cuando se trate de obligaciones resultantes del Impuesto Sobre la Renta determinadas conforme a la Ley 5911 del 22 de mayo de 1962, modificada, cuya terminación para efectuar el pago haya vencido, podrán ejecutarse a diligencia del Director General de Impuesto sobre la Renta.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 2.- La ordenanza indicada en el artículo anterior constituirá un título ejecutorio, en virtud del cual podrá ser realizado cualquiera de los embargos establecidos por la ley.

Artículo 3.- Todo embargo debe ser precedido de un mandamiento de pago notificado al deudor con un plazo de un día franco por lo menos, debiendo ser encabezado dicho mandamiento con una copia de la ordenanza ejecutoria que hubiere sido dictada.

Párrafo.- Para los efectos de la presente ley serán nulos los traspasos de bienes realizados por el deudor, en el periodo comprendido entre el mandamiento de pago y el embargo.

Artículo 4.- Cuando el embargo, que deba ejecutarse sea de naturaleza inmobiliaria, la venta del inmueble embargado será realizada en un término no menor de sesenta (60) días, a partir del proceso verbal de embargo el cual se denunciará al deudor en los tres días de su fecha, con indicación del día fijado para la venta.

Artículo 5.- La venta pública del inmueble embargado se llevará a cabo en el Juzgado de Paz de la Jurisdicción donde este estuviere ubicado, previa publicación por el persigiente, de dos (2) avisos por lo menos, en un periódico del Distrito Judicial en donde radica el inmueble en uno de circulación nacional Copias de dichos avisos serán fijadas en las puertas respectivas de] Juzgado de Paz y del Ayuntamiento correspondiente.

Artículo 6.- Los referidos avisos deberán contener las siguientes menciones: nombre del deudor embargado, día, hora y lugar en que tendrá efecto la venta monto de los impuestos, derechos, arbitrios, arrendamientos o de la deuda que se persiguen más los intereses o los recargos acumulados y los gastos y una descripción que identifique los bienes que serán vendidos.

La publicación de. estos avisos debe ser hecha cinco (5) días antes, por lo menos de la fecha de la adjudicación.

Artículo 7.- La venta se efectuará por el Alguacil ante el Juez de Paz y con asistencia del Administrador General de Bienes Nacionales, del Colector de Rentas Internas, o del Tesorero Municipal o del funcionario o empleado que éstos designen para representarlos; y si es en el Distrito Nacional, con la asistencia de un funcionario o empleado designado por el Presidente de dicho organismo. Estos funcionarios o empleados firmarán el acta de adjudicación junto con el adjudicatario, el Juez de Paz y el Secretario.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

En caso de que el adjudicatario sea el Estado, el Distrito Nacional, un Municipio o un Distrito Municipal, bastará la firma del Alguacil y de los funcionarios o empleados indicados.

Artículo 8.- Un Alguacil enunciará las pujas y el Juez de Paz declarará adjudicatario al mejor postor y último subastador. La primera puja será por la suma adeudada, los intereses o recargo y los gastos, caso de que no concurrieren licitadores se declarará adjudicatario al Estado, al Distrito Nacional, al Municipio o al Distrito Municipal, según el caso.

Art., 9.- El original del acta de adjudicación quedará archivado en el Juzgado de Paz y el Secretario del mismo expedirá. al adjudicatario una copia certificada de dicha acta, la cual copia deberá ser sometida previamente a la formalidad de la transcripción en la conservaduría de Hipotecas o de la inscripción en el Registro de Títulos correspondiente, según el caso.

Los derechos y honorarios de dicha transcripción o inscripción estarán a cargo del. adjudicatario.

Artículo 10. Los subastadores deberán depositar en el Juzgado de Paz un diez por ciento (10%) de la suma por la cual se realiza el embargo, la que se les devolverá si no son adjudicatarios.

Si el adjudicatario no cumple con las condiciones de la 'subasta dentro de los cinco (5) días siguientes al de la venta, el Administrador General de Bienes Nacionales, el Colector de Rentas Internas, el Colector de Aduanas, el Tesorero del Distrito Nacional o el Tesorero Municipal, según el caso, perseguirá una nueva subasta, la cual se efectuará al decimoquinto día después del aviso de la misma. El falso subastador será condenado de uno a seis meses de prisión correccional y el 10% depositado ingresará al Fisco.

Artículo 11.- En caso de que el adjudicatario de cualquier subasta fuere el Estado, el Secretario del Tribunal donde la venta se hubiere realizado, está en la obligación de enviarla a la Administración General de Bienes Nacionales, en los diez (10) días siguientes a dicha venta, una copia certificada del acta o sentencia de adjudicación, y el Colector de' Rentas Internas o de Aduanas, o el Tesorero del Consejo Administrativo del Distrito Nacional o el Tesorero Municipal persiguiendo, deberán informar a dicha oficina, el resultado de la subasta.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 12. Cuando la propiedad no hubiere sido adjudicada el Estado, el Distrito Nacional, al Municipio, el Distrito Municipal o a los establecimientos públicos indicados en el artículo 22 de esta ley, como persiguiendo sino al mejor postor y último subastador, y el producido de la venta fuere mayor que la deuda, incluyendo todos los recargos costas y gastos ocasionados, la diferencia será entregada al dueño de los bienes embargados.

Párrafo 1.- En caso de que hubiere dificultad en la distribución del valor correspondiente a la referida diferencia por haber pertenecido la propiedad vendida a varias personas, o por cualquiera otra causa, dicho valor será depositado por el Alguacil, a diligencias del Juez de Paz, en la Colecturía de Rentas Internas a nombre de la persona contra quien se ha hecho la ejecución, a menos que los interesados, se pusieran de acuerdo para designar otro depositario.

Párrafo II.- Cuando los referidos valores sean depositados en la Colectaría de Rentas Internas sólo podrán ser entregados o por acuerdo unánime y escrito entre los interesados o por decisión judicial.

Artículo 13.- El primitivo dueño de la propiedad o sus causahabientes podrán readquirirla en el plazo de un año a contar de la fecha de la adjudicación pagando previamente al adjudicatario el monto de la deuda, costos recargos gastos de procedimiento y la transcripción o inscripción así como intereses legales desde la fecha de la adjudicación hasta el momento de la readquisición.

Las rentas devengadas por la propiedad subastada, en, el período comprendido entre la adjudicación y la readquisición quedarán en beneficio del adjudicatario.

Artículo 14. - Los acreedores con privilegios o hipotecas que gravan cualquier inmueble que haya sido embargado de acuerdo con las disposiciones de esta ley podrán satisfacer en su nombre el monto total de las sumas adeudadas más los intereses o los recargos, costas y gastos que se hubieren ocasionado con el propósito de liberar dicho inmueble de todo procedimiento de ejecución.

El valor total que dichos acreedores pagaran por tal concepto constituirá un crédito privilegiado sobre todo otro crédito, sin necesidad de, inscripción excepto sobre los indicados en el artículo 1 de esta ley.

Artículo 15.- Cuando el embargo que deba ejecutarse sea de, naturaleza mobiliaria, la venta de los objetos embargados será realizada en un término no menor de treinta (30)

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

días, a partir del proceso verbal de embargo, el cual será denunciado al deudor en los tres días de su fecha con indicación del día fijado para la venta.

Artículo 16.- La venta de los objetos embargados se verificará en el mercado público más próximo previa publicación de, dos (2) avisos por lo menos, en un periódico local o de circulación nacional. Copias de dichos avisos serán fijadas en las puertas respectivas del Juzgado de Paz, del Consejo Administrativo del Distrito Nacional o del Ayuntamiento, según el caso, del mercado donde deba realizarse la venta y del local donde se encontraren los objetos embargados.

Artículo 17.- Dichos avisos deberán contener las siguientes menciones: nombre del deudor embargado, día, hora y lugar en que tendrá efecto la venta, monto de los impuestos, derechos, servicios, arbitrios, arrendamientos o de la deuda que se persigue más los intereses, o los recargos acumulados y los gastos y una descripción que identifique los bienes que serán vendidos.

Las disposiciones contenidas en los artículos 619, 622, 623, 624 y 625 del Código de Procedimiento Civil serán aplicables a los embargos mobiliarios ejecutados de conformidad con la presente ley.

Artículo 18.- Las sumas debidas por concepto de impuestos, derechos, arbitrios, arrendamientos, ventas o por cualquier otra causa, cuyos acreedores sean el Estado, el Distrito Nacional, los Municipios o los Distritos Municipales, producirán, siempre que hubiere sido necesario utilizar el procedimiento de cobro establecido en la presente ley, un interés mensual de medio por ciento (1/2%), que correrá desde el día de su vencimiento con excepción de las deudas que estuvieren gravadas con recargos especiales, casos de los cuales sólo se cobrarán estos últimos.

Artículo 19. - Cuando una persona que fuere deudora de impuestos, derechos, arbitrios, arrendamientos, o cualquier otra deuda fiscal o municipal, no tuviere domicilio conocido en la República, ni un representante en ella, cualquier notificación o cualquier aviso que deba serle hecho, será fijado en la puerta del Juzgado de Paz de la jurisdicción donde deba procederse a la venta de los bienes embargados, y el acta de fijación instrumentado por el Alguacil será visado por el Presidente del Ayuntamiento, o por el Presidente del Consejo Administrativo si fuere en el Distrito Nacional. Esta fijación constituirá notificación a persona, y en este caso, el plazo para la venta de los bienes será aumentado en treinta (30) días.

Artículo 20. - Las instituciones u organismos públicos, con personalidad jurídica creada por la ley, nacionales o municipales, seguirán el procedimiento establecido por

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

la presente ley para el cobro de sus acreencias cuanto éstas resultan de la fal4a de pago de impuestos, derechos,, servicios, arrendamientos o 4e cualquiera otra causa. En tales casos, deberá proceder a la iniciación del procedimiento, una autorización' del Poder Ejecutivo, cuando se trate de instituciones u organismos públicos nacionales, y del Consejo Administrativo del Distrito Nacional o del Ayuntamiento, correspondiente, cuando se. trate de un establecimiento público municipal. El cobro será perseguido, en estos casos, por el representante legal del establecimiento público de que se trate. En todo lo demás, regirán en los procedimientos las disposiciones de esta ley.

Artículo 21.- (Derogado por el Código Tributario).

Artículo 22. - Todas las cuestiones no previstas se regirán por las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, siempre que fueren compatibles con los procedimientos establecidos en la presente ley. -

Artículo 23. - La presente ley deroga y sustituye la No.498 de fecha 31 de enero de 1944 Gaceta Oficial No 6032 la No.3449 de fecha 20 de diciembre 'de 1952, Gaceta Oficial N0' 7509; y cualquiera otra disposición legal que le sea contraria.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho días del mes de mayo del año mil novecientos cincuenta y seis; años 113 de la Independencia, 93 de la Restauración y 26 de la Era de Trujillo.

Código

Desde el punto de vista jurídico, un código es un conjunto sistemático y ordenado de normas legales que regulan una rama específica del derecho, como el Código Civil o el Código Penal. Su objetivo es unificar, sistematizar y organizar el contenido disperso de leyes y preceptos en un solo texto para facilitar su comprensión, aplicación e interpretación.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Características principales

- Organización y sistematización:

Agrupa de forma lógica y coherente las leyes de un área determinada, presentando un marco legal unificado.

- Unidad temática:

Se enfoca en una materia específica, como el derecho civil (relaciones entre personas) o el derecho penal (delitos y sanciones).

- Claridad y accesibilidad:

Facilita el acceso a las normas para abogados, jueces y ciudadanos al presentarlas de manera organizada y sistemática.

- Marco para la resolución de conflictos:

Sirve como guía fundamental para aplicar la ley y resolver conflictos, asegurando la coherencia en la interpretación y aplicación de las normas.

Ejemplos

- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil
- Código Penal.
- Código Procesal Penal.
- Código Laboral
- Código Tributario
- Código de Comercio

Código de Derecho

En derecho, un código es una compilación organizada y sistemática de leyes que regulan una materia o rama específica del derecho, como el Código Civil o el Código Penal. Su objetivo es agrupar de manera coherente y clara todas las normas vigentes

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

sobre un tema para facilitar su acceso, estudio y comprensión por parte de los ciudadanos y profesionales del derecho.

Características clave de un código:

Organización Sistemática:

Las leyes se presentan de forma estructurada, siguiendo un orden lógico que facilita la consulta y el entendimiento.

- Unidad de Materia:

Todas las normas contenidas en un código se refieren a una única área del derecho.

- Claridad y Exhaustividad:

Los códigos buscan expresar los principios y normas jurídicas de manera concisa y completa.

- Fuente del Derecho:

En muchos sistemas jurídicos, un código es una ley en sí misma que unifica y sistematiza un conjunto de normas ya existentes o que crean nuevas reglas.

- Facilita el Acceso:

Al reunir dispersas las normas, el código simplifica la labor de los ciudadanos y juristas para encontrar y aplicar la ley.

Ejemplos comunes:

- Código Civil: Regula las relaciones entre particulares, abarcando temas como personas, bienes, contratos y herencias.
- Código Penal: Establece los delitos y sus respectivas sanciones.
- Código de Comercio: Contiene las normas que rigen las actividades mercantiles.

Origen histórico:

La idea de codificar el derecho surgió como un movimiento en la Ilustración, buscando una mayor seguridad jurídica y un derecho más claro y accesible en contraste con las prácticas del derecho común de la época.

Código Tributario

El Código Tributario, aprobado mediante Ley No. 11-92, establece el proceso legal y administrativo del sistema tributario que se aplica en el país relacionado con los impuestos internos nacionales.

No se aplica a Aduanas o comercio exterior, donde se aplica la Ley 168-21, General de Aduanas, ni a los impuestos y arbitrios municipales, donde se aplica la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

Ambito de Aplicación

Aunque el Código Tributario solo consigna de manera expresa algunos tributos, como son:

- 1) Normas generales;
- 2) Impuesto sobre la Renta
- 3) ITBIS;
- 4) Impuesto a los Activos; y
- 5) Impuesto Selectivo al Consumo.

Lo cierto y legal es que el mismo se aplica a todas las leyes impositivas que contienen impuestos internos nacionales, según expresa su artículo 1, al expresar lo siguiente:

Artículo 1. El presente Título I establece las disposiciones generales aplicables a todos los tributos internos nacionales y a las relaciones jurídicas emergentes de ellos. Los Títulos II, III, y IV corresponden al Impuesto sobre la Renta, al Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios y al Impuesto Selectivo de Consumo, respectivamente. Cada Título subsiguiente corresponderá, a cada uno de los impuestos que serán incorporados a este código en la medida que avance el proceso de la Reforma Tributaria.

Aspectos Legales más Relevantes

1) Establece las figuras de contribuyente y de responsable de la obligación Tributaria o deuda tributaria y en este último las figuras del Agente de Retención y del Agente de Percepción, consignando normas sobre la responsabilidad tributaria solidaria.

2) Los modos de extinción de la obligación tributaria u obligación de pago del impuesto.

3) Facultades de la Administración Tributaria, como son:

- a) Facultad normativa.
- b) Facultad de inspección y fiscalización.
- c) Facultad de determinación.
- d) Facultad sancionatoria.

4) Los Deberes de la Administración Tributaria.

- a) Deber de reserva.
- b) Deber de publicidad.

5) La Determinación de la Obligación Tributaria

6) Los deberes Formales de los Contribuyentes, Responsables y Terceros.

7) Los deberes Formales de los Funcionarios

8) Las actuaciones del Fisco y cómo debe regirse.

9) El Recurso de Reconsideración dentro del Fisco.

10) Los recursos judiciales.

11) Las infracciones y sanciones tributarias;

12) El cobro compulsivo de la deuda tributaria

Coerción Penal

En la República Dominicana, un juez puede imponer diversas medidas de coerción, que incluyen la garantía económica (fianza), el impedimento de salida del país o localidad, el sometimiento a vigilancia o presentación periódica, la colocación de localizadores electrónicos, el arresto domiciliario y la prisión preventiva. Estas medidas buscan asegurar la presencia del imputado en el proceso y garantizar la eficacia de la futura pena o reparación civil, buscando siempre la proporcionalidad y excepcionalidad en su aplicación.

Tipos de medidas de coerción:

- Medidas de carácter real: Tienden a garantizar la reparación del daño y el pago de las costas.
- Medidas de carácter personal: Afectan la libertad ambulatoria del imputado.

Ejemplos específicos de medidas de coerción:

- Garantía económica: El imputado o un tercero debe depositar dinero o valores, entregar bienes o constituir hipotecas sobre bienes libres de gravamen.
- Impedimento de salida: Se prohíbe al imputado salir del país o de una localidad determinada.
- Sometimiento a vigilancia / Presentación periódica: El imputado debe presentarse periódicamente ante el juez o la autoridad designada y someterse al cuidado de una persona o institución.
- Colocación de localizadores electrónicos: Consiste en el uso de un dispositivo electrónico para monitorear la ubicación del imputado.
- Arresto domiciliario: El imputado debe permanecer en su domicilio bajo ciertas condiciones.
- Prisión preventiva: Es la medida más restrictiva y se aplica de forma excepcional cuando otras medidas no son suficientes para los fines del proceso.

Principios que rigen la imposición de medidas de coerción:

- Excepcionalidad:

Se aplican solo cuando son absolutamente indispensables y no hay otra vía para lograr los fines del proceso.

- Proporcionalidad:

La medida debe ser proporcional a la gravedad del hecho investigado y a la finalidad del procedimiento.

- Provisionalidad:

Son temporales y subsisten mientras no cambien las circunstancias que dieron origen a su imposición.

En nuestra normativa penal las medidas de coerción están prescritas en los **artículos 223, 224 y 226 del Código Procesal Penal**, ofreciendo un total de nueve medidas cautelares.

Artículo 223.- Citación. En los casos en que es necesaria la presencia del imputado para realizar un acto, el ministerio público o el juez, según corresponde, lo cita a comparecer, con indicación precisa del hecho atribuido y del objeto del acto.

Artículo 224.- Arresto. La policía debe proceder al arresto de una persona cuando una orden judicial así lo ordene. La policía no necesita orden judicial cuando el imputado:

1) Es sorprendido en el momento de cometer el hecho punible o inmediatamente después, o mientras es perseguido, o cuando tiene objetos o presenta rastros que hacen presumir razonablemente que acaba de participar en una infracción;

2) Se ha evadido de un establecimiento penal o centro de detención;

3) Tiene en su poder objetos, armas, instrumentos, evidencias o papeles que hacen presumir razonablemente que es autor o cómplice de una infracción y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

En el caso del numeral 1 de este artículo, si la búsqueda o persecución ha sido interrumpida, se requiere orden judicial. En ningún caso se puede practicar el arresto cuando se trate de infracciones de acción privada o de aquellas en las que no está prevista pena privativa de libertad. Si se trata de una infracción que requiere la instancia privada, es informado inmediatamente quien pueda presentarla y, si éste no presenta la denuncia en el término de veinticuatro horas, el arrestado es puesto en libertad.

La autoridad policial que practique el arresto de una persona debe ponerla, sin demora innecesaria, a la orden del ministerio público, para que éste, si lo estima pertinente, disponga directamente su puesta en libertad o solicite al juez una medida de coerción. La solicitud del ministerio público debe formularse luego de realizar las diligencias indispensables y, en todo caso, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del arresto.

En el caso del numeral 1 de este artículo, cualquier persona puede practicar el arresto, con la obligación de entregar inmediatamente a la persona a la autoridad más cercana. En todos los casos el ministerio público debe examinar las condiciones en que se realiza el arresto. Si el arresto no resulta conforme con las disposiciones de la ley, dispone la libertad inmediata de la persona y en su caso vela por la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan.

Art. 225.- Orden de arresto. El juez, a solicitud del ministerio público, puede ordenar el arresto de una persona cuando:

1) Es necesaria su presencia y existen elementos suficientes para sostener, razonablemente, que es autor o cómplice de una infracción, que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar;

2) Después de ser citada a comparecer no lo hace y es necesaria su presencia durante la investigación o conocimiento de una infracción. El arresto no puede prolongarse más allá del agotamiento de la diligencia o actuación que lo motiva. Si el ministerio público estima que la persona debe quedar sujeta a otra medida de coerción, así lo solicita al juez en un plazo máximo de veinticuatro horas, quien resuelve en una audiencia. En caso contrario, dispone su libertad inmediata.

Art. 226.- Medidas. A. solicitud del ministerio público o del querellante, y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se explica en este código, el juez puede imponer al imputado, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas de coerción:

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 1) La presentación de una garantía económica suficiente;
- 2) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;
- 3) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informa regularmente al juez;
- 4) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe;
- 5) La colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado;
- 6) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el juez disponga;
- 7) La prisión preventiva. En las infracciones de acción privada no se puede ordenar la prisión preventiva ni el arresto domiciliario ni la colocación de localizadores electrónicos. En cualquier caso, el juez puede prescindir de toda medida de coerción, cuando la promesa del imputado de someterse al procedimiento sea suficiente para descartar el peligro de fuga.

El Código Procesal Penal de la República Dominicana no corresponde al Decreto 47-11, sino que es la Ley 76-02, promulgada en el año 2002. El término "Decreto 47-11" parece ser una confusión, ya que la ley que rige el proceso penal dominicano es la referida Ley 76-02, que establece la normativa para el sistema de justicia penal del país.

Aspectos Clave de la Ley 76-02:

- Principios Fundamentales:

La ley se rige por principios como la contradicción, la igualdad, la oralidad, la publicidad y la inmediación, buscando un proceso penal más justo y transparente.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Principio de Legalidad:

Establece que no se puede someter a una persona a proceso penal ni imponerle una pena sin que exista una ley previa que así lo establezca para el hecho imputado.

- Acción Penal:

El Ministerio Público es el encargado de ejercer la acción penal, la cual puede ser pública, pública a instancia privada o privada, según el tipo de delito.

- Libertad del Imputado:

La libertad del imputado es la regla durante el proceso, y la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y fundamentada.

- Derechos del Imputado:

Se garantiza el derecho del imputado a ser oído y a contar con la asistencia e intervención de su defensor.

- Actuación Policial y del Ministerio Público:

Las autoridades policiales deben poner a los arrestados a disposición del Ministerio Público en un plazo máximo de veinticuatro horas para que éste decida si procede a su libertad o solicita una medida de coerción.

Colación

La colación consiste en la obligación que tienen los herederos forzosos de aportar el valor de los bienes que recibieron en vida del causante a la masa hereditaria para que se distribuyan equitativamente entre todos los herederos. Esta obligación busca igualar las cuotas hereditarias, ya que se presume que estas donaciones son un adelanto de la herencia. En la República Dominicana, esta figura está regulada principalmente por el Código Civil Dominicano, específicamente en el artículo 858 del Código Civil Dominicano y los artículos 1315 y 1318.

¿En qué consiste la colación?

- Aportación de bienes:

Es la acción de traer a la masa hereditaria el valor de los bienes que un heredero forzoso recibió en vida del difunto, ya sea mediante donación u otro título lucrativo.

- Objetivo de igualdad:

La finalidad es igualar las partes de los herederos forzosos, repartiendo la herencia de manera equitativa.

- Operación contable:

Se trata de una operación contable que no devuelve físicamente los bienes, sino que calcula su valor para incluirlo en la suma total de la herencia a repartir.

- Excepciones:

El heredero no está obligado a colacionar si el testador así lo ha dispuesto expresamente, siempre y cuando esto no afecte la legítima de otros herederos.

¿Qué ley la regula en la República Dominicana?

- La colación en la República Dominicana está regulada por el Código Civil Dominicano, específicamente en los artículos 858 y siguientes.

Código Civil

Artículo 857.- Sólo es debido la colación de coheredero a coheredero; nunca a los legatarios ni a los acreedores de la sucesión. Art. 858.- Se hace la colación, o restituyendo las cosas en naturaleza, o recibiendo de menos el equivalente de su precio.

Artículo 859.- Puede exigirse la presentación de la misma cosa, respecto de los bienes inmuebles, siempre que la finca que se dio no haya sido vendida por el donatario y no haya en la sucesión inmuebles de la misma especie, valor y bondad, con los cuales puedan formarse lotes próximamente iguales para los demás coherederos.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 860.- No tiene lugar la colación, sino dejando de recibir el equivalente del precio, cuando el donatario ha enajenado el inmueble antes de abrirse la sucesión: se debe aquélla del valor del inmueble en la época en que se abrió ésta.

Artículo 861.- En todos los casos deben abonarse al donatario los gastos que hayan mejorado la cosa, teniendo en cuenta el aumento de valor que tenga al hacerse la partición.

Artículo 862.- Le serán igualmente abonados los gastos necesarios hechos para la conservación de la cosa, aunque no la haya mejorado.

Artículo 863.- El donatario, por su parte, es responsable de todas las disminuciones o deterioros que por su culpa o negligencia haya experimentado el inmueble.

Artículo 864.- En el caso en que el inmueble haya sido enajenado por el donatario, las mejoras o disminuciones hechas por el adquirente, deben imputarse con arreglo a los tres artículos precedentes.

Artículo 865.- Si la colación se hace con los mismos bienes, éstos se unirán a la masa de la sucesión, libres de todas las cargas que el donatario les haya creado; pero los acreedores hipotecarios pueden intervenir en la partición, para oponerse a que la colación se haga en fraude de sus derechos.

Artículo 866.- Cuando la donación de un inmueble hecha a una persona hábil para heredar, con dispensa de colación, exceda la porción disponible, debe colacionarse el exceso en la misma cosa, si la separación de éste puede hacerse cómodamente.

En el caso contrario, si el exceso es de más de la mitad del inmueble, el donatario debe aportar aquél en totalidad, sin perjuicio de su derecho de deducir de la masa el valor de la porción disponible; si esta porción disponible excede la mitad del valor del inmueble, podrá el donatario retenerlo íntegro, con la obligación de tomarlo de menos en el resto de la herencia, y resarcir a sus coherederos en metálico o en otra forma.

Artículo 867.- El coheredero que restituya el mismo inmueble trayéndolo a colación, puede retener su posesión hasta que se le reintegren en efectivo las cantidades que se le deban por gastos o mejoras.

Artículo 868.- La colación de los bienes muebles, no se hace sino en su equivalente; se practica seguir el valor que tenían al tiempo de la donación, con arreglo al estado

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

de valuación que debe unirse al instrumento de ella, y a falta de este estado, por tasación de peritos en su justo valor, y sin aumento alguno.

Artículo 869.- La colación de dinero donado se hace tomando menos del que se encuentre en la sucesión. En caso de que no baste, puede el donatario dispensarse de la colación del numerario, abonando muebles hasta igual valor, y a falta de ellos, inmuebles de la sucesión.

- Estos artículos establecen que la colación puede realizarse de dos maneras: en especie o por equivalencia.

Comedores Económicos del Estado

La Ley que creó y regula a los Comedores Económicos del Estado Dominicano es la Ley No. 16, del 24 de junio de 1942, que autorizó la distribución de alimentos a precios asequibles y la posterior instalación de estos establecimientos para asistir a la población. Su funcionamiento también se ha detallado y regulado mediante diversos decretos y resoluciones posteriores, como el Decreto 2052-44 que fijó el precio por ración y los Decretos 1082-04 y 1554-05 que la incorporaron al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y al Programa de Protección Social, respectivamente.

Ley de creación y evolución:

- Ley No.16 de 1942:

Fue la ley pionera que dio origen a los Comedores Económicos, buscando distribuir alimentos y mantener precios accesibles en respuesta a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

- Decreto No.2052 de 1944:

Reguló el funcionamiento inicial de la institución, fijando el precio de las raciones alimenticias.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Decreto 1082-04 y 1554-05:

Integraron los Comedores Económicos al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y al Programa de Protección Social, reforzando su rol en la asistencia social. Otros aspectos relevantes:

- Misión:

Los Comedores Económicos se dedican a distribuir alimentos cocidos y crudos a precios asequibles o donados, asistiendo a la población en riesgo de desnutrición y a los sectores más vulnerables del país.

- Marco normativo:

La institución depende de la Presidencia de la República y su gestión se basa en las leyes y decretos que rigen su funcionamiento, así como en manuales de organización y funciones aprobados por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

Comercio

La ley fundamental que regula el comercio en República Dominicana es el Código de Comercio, complementado y modificado por leyes específicas que abordan aspectos como las sociedades comerciales (Ley 479-08), las cámaras de comercio (Ley 36-23), la defensa de la competencia (Ley 42-08), la protección al consumidor (Ley 358-05), y la regulación de actividades ilícitas (Ley 17-19), entre otras normativas.

Marco Legal General

- Código de Comercio: Esta es la norma primordial que establece las bases del derecho comercial en el país, detallando aspectos como la organización de sociedades, contratos comerciales y títulos valores.

Leyes Específicas

- Ley 479-08 (Ley General de Sociedades Comerciales):

Rige la organización, funcionamiento y disolución de las sociedades mercantiles.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Ley 36-23 (Cámaras de Comercio):

Es la ley más reciente que rige las cámaras de comercio, fortaleciendo el arbitraje y la colaboración entre empresas.

- Ley 42-08 (Defensa de la Competencia):

Busca promover la competencia justa y prevenir monopolios y prácticas abusivas que afecten al mercado y a los consumidores.

- Ley 358-05 (Protección al Consumidor):

Establece los derechos y obligaciones para proteger a los consumidores y usuarios, garantizando la calidad y seguridad de los productos y servicios.

- Ley 17-19 (Comercio Ilícito):

Sanciona el contrabando y la falsificación de productos, protegiendo la economía y la salud pública.

- Ley 37-17:

Reorganizó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y es la base legal de esa institución.

Comercio Ilícito

La Ley 17-19 de la República Dominicana es la ley sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, promulgada el 20 de febrero de 2019, que establece un marco legal para combatir estas prácticas dañinas para la economía, la salud y la seguridad pública. Penaliza la falsificación y el contrabando de productos, imponiendo sanciones como multas, decomiso y destrucción de mercancías, así como el cierre de establecimientos y la prisión para los infractores.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Propósito de la Ley 17-19

- Combatir la falsificación y el contrabando:

Busca proteger a los consumidores de productos falsificados y peligrosos, como medicamentos y bebidas alcohólicas, y detener el contrabando de mercancías.

- Proteger la salud pública:

Se enfoca en prevenir la entrada y venta de productos regulados no aptos para el consumo.

- Salvaguardar la economía:

La ley busca proteger la capacidad recaudatoria del Estado y fomentar la competitividad de las empresas legítimas.

Sanciones y Medidas

La ley establece un abanico de sanciones para los infractores, que pueden incluir:

- Multas: pecuniarias.
- Clausura temporal o permanente: de locales comerciales, depósitos o fábricas.
- Suspensión o cancelación: de licencias y permisos.
- Decomiso y destrucción: de mercancías, vehículos y equipos utilizados en el comercio ilícito.
- Prisión: para los infractores, cuya duración varía según la gravedad del caso.

Importancia de la Ley

- Protección a la propiedad intelectual:

La Dirección General de Aduanas implementa medidas para erradicar el comercio de mercancías falsificadas y proteger los derechos de propiedad intelectual.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Impacto en otras actividades ilícitas:

El comercio ilícito está conectado con otros delitos como el lavado de activos, la corrupción y la estafa, que también son combatidos.

Reglamento de Aplicación

- El Decreto No. 405-22 del Poder Ejecutivo, publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), establece el reglamento de aplicación de la Ley 17-19.

Comisario de Aportes

Un comisario de aporte es un profesional designado para evaluar el valor de los aportes en especie (bienes o activos no monetarios) realizados por los socios al constituir una sociedad comercial, con el fin de asegurar la veracidad y conformidad de estos. La ley que regula esta figura en la República Dominicana es la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (No. 479-08).

¿Qué es un comisario de aporte?

- Es un experto independiente, comúnmente un contador público autorizado, que valora los aportes que no son en dinero (como propiedades, maquinarias, etc.).
- Su principal función es emitir un informe de opinión sobre la estimación del valor de dichos aportes.
- Este informe es crucial para la constitución de la sociedad y para determinar la responsabilidad de los socios, ya que asegura que el valor asignado a los aportes en especie sea el correcto.

¿Qué ley lo regula en RD?

- La figura del comisario de aporte está regulada por la Ley No. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Esta ley establece las condiciones para la obligatoriedad de dicho informe y las responsabilidades que se derivan de él.

¿Por qué es importante?

- Garantiza la transparencia: Asegura que el valor que se les da a los aportes en especie refleje su valor real.
- Establece la responsabilidad: En caso de que el valor atribuido sea falso o si no se designa un comisario de aporte, los socios pueden ser declarados solidariamente responsables frente a la sociedad y terceros por los perjuicios ocasionados, por un período de dos años.

Comisario de Cuentas

Un comisario de cuentas es un fiscalizador independiente, generalmente un contador público autorizado, que supervisa la gestión de una sociedad comercial para verificar la veracidad de sus estados financieros y reportar a los accionistas. En la República Dominicana, el rol del comisario de cuentas está regulado principalmente por la Ley 479-08, de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, que exige su designación en ciertos tipos de sociedades, como las anónimas.

Funciones del comisario de cuentas

- Supervisar la gestión: Vigila las operaciones y finanzas de la sociedad para asegurar que se cumplan las leyes y normativas.
- Auditar información financiera: Examina los estados financieros presentados por los administradores para garantizar su exactitud y coherencia.
- Reportar a los accionistas: Presenta un informe anual a la asamblea general sobre los resultados y la gestión de la empresa, así como un informe mensual con el estado de posición financiera.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Vigilar el cumplimiento: Se asegura de que los administradores cumplan sus funciones y previene irregularidades o actividades ilegales.
- Participar en asambleas: Asiste a las asambleas de accionistas y a las sesiones del consejo de administración con voz pero sin voto.

Leyes que lo rigen en la RD

- Ley 479-08 (y sus modificaciones como la Ley 31-11): Es el marco principal. Establece la figura del comisario, sus funciones, requisitos (como ser contador público autorizado con experiencia de al menos 3 años en auditoría) y su nombramiento.
- Ley 249-17 del Mercado de Valores: Aplica específicamente a las sociedades cuyas acciones se cotizan en bolsa, detallando sus obligaciones en cuanto a transparencia y gobierno corporativo.

Complicidad

En República Dominicana, la complicidad es castigada principalmente por el Código Penal Dominicano, específicamente en los artículos 59, 60, 61 y siguientes, los cuales establecen que quien contribuye accesoriamente a un delito es penalmente responsable. Se considera cómplice a quien, entre otras acciones, provoca un delito mediante dádivas o amenazas, o facilita su ejecución.

Artículos clave del Código Penal

- Artículos 59, 60 y siguientes:

Regulan la complicidad, definiendo al cómplice como aquel que contribuye de forma accesoria a un delito.

- Artículos 5 y 6:

Establecen que el cómplice es penalmente responsable de la infracción, y se le puede imponer una pena igual o inferior a la del autor principal, dependiendo de la gravedad del delito y la contribución del cómplice.

Ejemplos de actos que se consideran complicidad

- Provocar o inducir a cometer un delito: Por ejemplo, dar instrucciones, promesas, amenazas u órdenes.
- Facilitar la ejecución del delito: Suministrar un lugar de reunión o escondite, o proporcionar armas e instrumentos.
- Procurar la impunidad: Ayudar a los autores principales del delito a evadir la justicia.

Penalización

- La pena impuesta al cómplice puede ser la misma que la del autor material o una pena inferior.

Contexto de aplicación

- Esta normativa se aplica tanto a delitos graves como menos graves.
- La complicidad puede darse mediante actos u omisiones, tanto anteriores como simultáneos a la comisión del delito.

Comprobante Fiscal

Un comprobante fiscal en la RD es un documento (físico o electrónico) que certifica la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios, y es regulado principalmente por el Decreto 254-06 y la Ley 32-23 de Facturación Electrónica. La Ley 32-23, promulgada en 2023, establece el marco para la adopción obligatoria de la factura electrónica (e-CF) y sus plazos de implementación según el tipo de contribuyente.

¿Qué es un comprobante fiscal?

- Es un documento que valida transacciones comerciales, ya sea de transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- A nivel histórico, ha sido un requisito fundamental para los contribuyentes bajo la regulación del Decreto 254-06.
- En la actualidad, evoluciona hacia el comprobante fiscal electrónico (e-CF), un documento digital firmado electrónicamente.

¿Qué ley lo regula?

- Decreto 254-06:

Establece las reglas para la impresión, emisión y entrega de los comprobantes fiscales, y fue el marco regulatorio inicial.

- Ley 32-23 de Facturación Electrónica:

Esta ley moderna, promulgada el 16 de mayo de 2023, establece el nuevo régimen de obligatoriedad de la factura electrónica (e-CF) para los contribuyentes.

- Normas Generales de la DGII:

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emite normas específicas, como la Norma General 01-20 para la regulación de los e-CF.

Comunicación

El derecho a la comunicación es un derecho humano que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información, ideas y opiniones, permitiendo a las personas interactuar y enriquecerse mutuamente a través de diversas herramientas y canales. Este derecho también abarca el acceso a la información veraz e imparcial, así como a la educación y la cultura, y está protegido por el derecho internacional, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Aspectos Clave del Derecho a la Comunicación:

- Libertad de Expresión:

Incluye la libertad de pensamiento, de expresión y de difundir ideas e información por cualquier medio, sin censura previa.

- Acceso a la Información:

El derecho a buscar, recibir y difundir información es un elemento fundamental, con la posibilidad de acceder a fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público.

- Libertad de Prensa y Periodismo:

Protege el secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, así como el acceso a fuentes noticiosas.

- Derecho a la Réplica y Rectificación:

Permite a las personas defender su honra y reputación ante información que consideren lesiva.

- Acceso Equitativo a Medios Estatales:

Busca garantizar que diversos sectores sociales y políticos tengan un acceso plural a los medios de comunicación propiedad del Estado.

Marco Legal y Organizacional:

- Organización de los Estados Americanos (OEA):

A través de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), promueve el derecho a la libertad de expresión en el marco de la Convención Americana.

- Naciones Unidas (ONU):

Ha reconocido derechos como los de los pueblos indígenas para establecer sus propios medios y ser representados en la información pública.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Constitución Dominicana:

El artículo 49 de la Constitución de 2010 consagra varios derechos de la comunicación, incluyendo la libertad de expresión, el derecho a la información y la réplica.

- Organismos de Protección:

Instituciones como la Defensoría del Público en Argentina trabajan en la promoción y defensa del derecho a la comunicación como un bien social.

Importancia y Desafíos:

- Participación Ciudadana:

El derecho a la comunicación es esencial para el debate público y la participación de la ciudadanía en la vida democrática.

- Construcción de Realidades:

Se reconoce que los medios de comunicación, al reflejar sus perspectivas particulares, contribuyen a la construcción de la realidad.

Concubinato

En República Dominicana, el concubinato es reconocido y genera derechos y deberes, pero para que tenga efectos jurídicos y patrimoniales, el matrimonio de hecho (unión libre) debe estar formalizado y registrado de manera escrita ante la ley, ya que según el Código Civil, la unión de hecho sin formalizar solo genera estos efectos a partir del segundo año de iniciada. La Constitución Dominicana también establece la protección de esta unión, y el Código Civil se aplica a estas uniones si no hay formalización escrita.

Marco legal del concubinato en República Dominicana

- Constitución Dominicana:

Reconoce la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimentos matrimoniales, que forman un hogar de hecho y genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales.

Siendo una realidad que la mayoría del pueblo dominicano vive en concubinato y siendo un deber de la Constitución proteger esta unión familiar, esta se preocupó por consagrar que la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con ley;

Artículo 55.- Derechos de la familia. La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

- 1) Toda persona tiene derecho a constituir una familia, en cuya formación y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes y se deben comprensión mutua y respeto recíproco;
- 2) El Estado garantizará la protección de la familia. El bien de familia es inalienable e inembargable, de conformidad con la ley;
- 3) El Estado promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. La ley establecerá los requisitos para contraerlo, las formalidades para su celebración, sus efectos personales y patrimoniales, las causas de separación o de disolución, el régimen de bienes y los derechos y deberes entre los cónyuges;
- 4) Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales;
- 5) La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con ley;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 6) La maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo;
- 7) Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos;
- 8) Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley;
- 9) Todos los hijos son iguales ante la ley, tienen iguales derechos y deberes y disfrutarán de las mismas oportunidades de desarrollo social, espiritual y físico. Se prohíbe toda mención sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en todo documento de identidad;
- 10) El Estado promueve la paternidad y maternidad responsables. El padre y la madre, aun después de la separación y el divorcio, tienen el deber compartido e irrenunciable de alimentar, criar, formar, educar, mantener, dar seguridad y asistir a sus hijos e hijas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de estas obligaciones;
- 11) El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales;
- 12) El Estado garantizará, mediante ley, políticas seguras y efectivas para la adopción;
- 13) Se reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la Nación. El Estado garantiza y promueve el ejercicio efectivo de sus derechos, a través de políticas y programas que aseguren de modo permanente su participación en todos los ámbitos de la vida nacional y, en particular, su capacitación y su acceso al primer empleo.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Código Civil:

Establece que las disposiciones sobre el régimen patrimonial entre cónyuges son aplicables a las uniones maritales de hecho. Sin embargo, para que estas disposiciones surtan efectos jurídicos y patrimoniales, la unión debe ser formalizada y escrita.

- Ley 136-03 (Código de la Niñez y la Adolescencia):

Esta ley aplica a las uniones de hecho en cuanto a adopciones, alimentos, filiación, guarda y régimen de visitas.

Efectos jurídicos y patrimoniales

- Protección legal: La ley protege tanto a los convivientes como a su descendencia.
- Derechos y deberes: Los concubinos tienen derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales.
- Formalización: Para que el concubinato surta plenos efectos jurídicos y patrimoniales, la unión debe formalizarse y estar por escrito.

¿Qué pasa si no se formaliza la unión?

- Los efectos jurídicos y patrimoniales del Código Civil se producen a partir del segundo año de iniciada la unión, a menos que haya prueba en contrario.

Importancia de la formalización

- La formalización escrita es crucial para asegurar los derechos patrimoniales y jurídicos de las parejas en concubinato.
- En caso de separación, un concubinato formalizado permite reclamar derechos patrimoniales.

Concubinato: Derechos y Deberes

En la República Dominicana, el concubinato, también conocido como unión libre, se refiere a la relación estable y singular entre un hombre y una mujer que viven juntos como pareja sin estar casados. Esta unión, según el artículo 55.5 de la Constitución,

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

genera derechos y deberes tanto personales como patrimoniales para los convivientes, de acuerdo con la ley.

Aspectos Clave del Concubinato en República Dominicana:

- **Igualdad de derechos:**

Los hijos nacidos de una unión de hecho tienen los mismos derechos que aquellos nacidos dentro del matrimonio.

- **Derechos y deberes:**

La unión de hecho genera derechos y obligaciones recíprocas entre los concubinos, incluyendo derechos alimentarios y sucesorios.

- **Protección legal:**

La ley protege a los concubinos y sus bienes, así como a la descendencia que pueda surgir de la relación.

- **División de bienes:**

Si la pareja se separa o uno de los miembros fallece, puede existir una división de bienes, aunque no hay una regulación específica sobre cómo se realiza.

- **Importancia de la prueba:**

Es fundamental poder demostrar la existencia del concubinato, especialmente al momento de la partición de bienes, ya sea por separación o fallecimiento.

- **Reconocimiento legal:**

Aunque el concubinato no se registra como el matrimonio, se reconoce como una modalidad familiar válida, y las leyes adjetivas lo protegen.

- **Código de Trabajo:**

El Código de Trabajo reconoce la unión de hecho a efectos de licencias laborales por matrimonio, fallecimiento o alumbramiento de la compañera.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Casos ante tribunales:**

En caso de controversias sobre la división de bienes, se puede recurrir a los tribunales, y el procedimiento es similar al de una partición matrimonial.

- **Prescripción:**

Existe un debate sobre el plazo de prescripción para la acción de partición de bienes en el concubinato, siendo el plazo de 20 años el que se aplica, en lugar del plazo de 2 años para las comunidades matrimoniales.

En resumen, el concubinato en República Dominicana es una realidad social reconocida y protegida por la ley, generando derechos y deberes para las parejas y sus hijos, aunque requiere de pruebas y argumentos sólidos para su reconocimiento en caso de conflictos patrimoniales, según abogados especializados en el tema.

Conducir Ebrio o Drogado

En República Dominicana, conducir ebrio o bajo los efectos de drogas es ilegal y sancionado por la Ley 63-17 de Movilidad, Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Esta ley prohíbe la conducción de vehículos motorizados bajo la influencia del alcohol o sustancias controladas y establece sanciones que incluyen multas y prisión. Detalles de la Ley 63-17.

- **Prohibición:**

La ley prohíbe explícitamente conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas.

- **Sanciones:**

Las sanciones contempladas por la ley varían y pueden incluir:

- Multas económicas
- Prisión
- Pérdida de la licencia de conducir

Detección:

Los agentes pueden realizar pruebas de alcoholemia y drogas a los conductores.

Importancia de conocer la ley

- Seguridad Vial:

La ley tiene como objetivo principal proteger a los ciudadanos y reducir los accidentes de tránsito causados por la imprudencia de conductores ebrios o drogados.

- Repercusiones Legales:

Una condena por conducir ebrio o drogado puede tener consecuencias graves en la vida del infractor, tanto a nivel legal como personal.

Por lo tanto, la ley sanciona conducir bajo la influencia de sustancias tóxicas o drogas a través de la Ley 63-17 de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana. El artículo 257 establece sanciones como multas (de cinco a diez salarios mínimos) y la reducción de puntos en la licencia de conducir para quienes conduzcan bajo los efectos de drogas o sustancias controladas.

Detalles de la ley y sanciones

- Referencia legal:

La Ley 63-17, en sus artículos 256 y 257, aborda la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, respectivamente.

- Aplicación:

El Artículo 257 prohíbe explícitamente conducir bajo los efectos de drogas o sustancias controladas.

- Sanciones:

La ley impone sanciones como:

- Una multa de entre cinco (5) y diez (10) salarios mínimos.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- La reducción de puntos en la licencia de conducir.

Otros puntos importantes:

- Detección:

Las autoridades pueden realizar pruebas para determinar si un conductor está bajo la influencia de sustancias.

- Negativa a la prueba:

Negarse a realizar una prueba de control de drogas también puede tener consecuencias legales, ya que el conductor se expone a ser sancionado.

- Preocupación social:

La conducción bajo sustancias tóxicas es un problema de seguridad vial que la ley busca prevenir para proteger la seguridad de los ciudadanos.

Confidencialidad

En República Dominicana, la confidencialidad se rige principalmente por la Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos Personales, que establece un marco legal para la protección de la información personal y los derechos fundamentales como la intimidad. Además, existen leyes y códigos sectoriales que regulan la confidencialidad en ámbitos específicos, como la Ley General de Salud (No. 42-01) para la información médica y el Código Penal y los códigos de ética para profesionales (abogados, psicólogos, etc.).

Marco General: Ley No. 172-13

- Esta ley, promulgada en 2013, es la principal norma que regula la protección de datos personales en la República Dominicana.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Su objetivo es proteger los datos de las personas en archivos, registros, bancos de datos y otros medios de tratamiento de información.
- Garantiza derechos fundamentales como el honor, la intimidad y la autodeterminación informativa.

Ámbitos Específicos de Regulación

- Salud:

La Ley General de Salud (No. 42-01) y el artículo 28 detallan la confidencialidad del expediente médico y la información de salud, con excepciones muy puntuales como la autorización del paciente o una orden judicial.

- Profesionales:
 - Abogados: Su obligación de confidencialidad está regulada por el Código de Ética del Profesional del Derecho.
 - Psicólogos: Tienen un deber de confidencialidad establecido en el Código de Ética y Disciplina del Colegio Dominicano de Psicología.
 - Personal de Salud: La Ley 135-11 sobre VIH-SIDA prohíbe la divulgación de resultados de pruebas, la condición de salud y otros detalles de intimidad de las personas afectadas.

Secreto Profesional:

La revelación de secretos profesionales por parte de estos profesionales puede conllevar sanciones como multas o prisión, según lo dispuesto en los artículos 377 y 378 del Código Penal.

Protección de Secreto Empresarial

- Si bien no hay una ley específica, el concepto de secreto empresarial se protege a través de acuerdos de confidencialidad y la implementación de políticas internas de control de información.

En resumen, para la protección de datos en general, la Ley 172-13 es la norma principal, complementada por normativas específicas según el sector o profesión para garantizar la confidencialidad en la República Dominicana.

Confiscación de Bienes

La confiscación de bienes es el proceso legal mediante el cual el Estado retira la posesión y propiedad de ciertos bienes, activos o propiedades de un individuo o entidad, generalmente debido a la violación de leyes o regulaciones establecidas. Este acto implica que los bienes pasan a manos estatales sin compensación alguna. En ocasiones, la confiscación se establece como remedio ante situaciones de crisis, aunque puede ser impugnada judicialmente por los afectados.

La Ley núm. 5924, promulgada el 26 de mayo de 1962, establece la confiscación general de bienes de aquellas personas que hayan cometido abusos o usurpaciones del poder público para enriquecerse. Esta ley detalla los procedimientos y las penalidades asociadas a tales actos, incluyendo la confiscación de bienes ilícitamente adquiridos. Para más información, puedes consultar el texto completo de la Ley.

Congreso Nacional

El Congreso Nacional es el órgano legislativo bicameral de la República Dominicana, compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados, y es regulado principalmente por la Constitución de la República Dominicana (en especial su Título III, artículos 76-121) y la Ley No. 46-97, de autonomía presupuestaria y administrativa. Sus funciones clave son legislar, representar al pueblo y fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo.

Qué es el Congreso Nacional

- Órgano legislativo: Es el poder del Estado encargado de crear, reformar y derogar las leyes.
- Bicameral: Está integrado por dos cámaras: el Senado y la Cámara de Diputados.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Representativo: Ejerce la representación de la ciudadanía en el proceso de formación de leyes.

Ley que lo regula

- Constitución de la República Dominicana:

Es la base legal principal, dedicando el Título III (artículos 76 al 121) a regular su composición y atribuciones.

- Ley No. 46-97:

Esta ley, sobre la autonomía presupuestaria y administrativa del Congreso Nacional y el Poder Judicial, es otra normativa fundamental que lo rige.

TÍTULO III
DEL PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO I
DE SU CONFORMACIÓN

Artículo 76.- Composición del Congreso. El Poder Legislativo se ejerce en nombre del pueblo por el Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

Artículo 77.- Elección de las y los legisladores. La elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo en los términos que establezca la ley.

- 1) Cuando por cualquier motivo ocurran vacantes de senadores o diputados, la cámara correspondiente escogerá su sustituto de la terna que le presente el organismo superior del partido que lo postuló;
- 2) La terna será sometida a la cámara donde se haya producido la vacante dentro de los treinta días siguientes a su ocurrencia, si estuviere reunido el Congreso y, en caso de no estarlo, dentro de los primeros treinta días de su reunión. Transcurrido el plazo señalado sin que el organismo competente del partido someta la terna, la cámara correspondiente hará la elección;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 3) Los cargos de senador y diputado son incompatibles con otra función o empleo público, salvo la labor docente. La ley regula el régimen de otras incompatibilidades;
- 4) Las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo, actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas.

SECCIÓN I
DEL SENADO

Artículo 78.- Composición del Senado. El Senado se compone de miembros elegidos a razón de uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional, cuyo ejercicio durará cuatro años.

Artículo 79.- Requisitos para ser senador o senadora. Para ser senadora o senador se requiere ser dominicana o dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido veinticinco años de edad, ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos cinco años consecutivos. En consecuencia:

- 1) Las senadoras y senadores electos por una demarcación residirán en la misma durante el período por el que sean electos;
- 2) Las personas naturalizadas sólo podrán ser elegidas al Senado diez años después de haber adquirido la nacionalidad dominicana, siempre que hayan residido en la jurisdicción que las elija durante los cinco años que precedan a su elección.

Artículo 80.- Atribuciones.- Son atribuciones exclusivas del Senado:

- 1) Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral 1. La declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de diez años. La persona destituida quedará sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el voto de las dos terceras partes de la matrícula;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 2) Aprobar o desaprobado los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior que le someta el Presidente de la República;
- 3) Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes;
- 4) Elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes, con el voto de las dos terceras partes de los presentes;
- 5) Elegir al Defensor del Pueblo, sus suplentes y sus adjuntos, a partir de las ternas que le presente la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los presentes;
- 6) Autorizar, previa solicitud del Presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, así como determinar el tiempo y las condiciones de su estadía;
- 7) Aprobar o desaprobado el envío al extranjero de tropas en misiones de paz, autorizadas por organismos internacionales, fijando las condiciones y duración de dicha misión.

SECCIÓN II
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 81.- Representación y composición. La Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera:

- 1) Ciento cincuenta y ocho diputadas o diputados elegidos por circunscripción territorial, en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la población electoral registrada por la Junta Central Electoral, sin que en ningún caso sean menos de dos representantes por cada provincia;
- 2) Cinco diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos. La ley determinará su distribución;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 3) Siete diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. La ley determinará su forma de elección y distribución.

Artículo 82.- Requisitos para ser diputada o diputado. Para ser diputada o diputado se requieren las mismas condiciones que para ser senador.

Artículo 83.- Atribuciones. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

- 1) Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La acusación sólo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula. Cuando se trate del Presidente y el Vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación;
- 2) Someter al Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes;
- 3) Someter al Senado las ternas del Defensor del Pueblo, sus suplentes, que no podrán ser más de dos, y los adjuntos, que no podrán ser más de cinco, con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes.

CAPÍTULO II
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS

Artículo 84.- Quórum de sesiones. En cada cámara es necesaria la presencia de más de la mitad de sus miembros para la validez de las deliberaciones. Las decisiones se adoptan por la mayoría absoluta de votos, salvo los asuntos declarados previamente de urgencia, los cuales, en su segunda discusión, se decidirán por las dos terceras partes de los presentes.

Artículo 85.- Inmunidad por opinión. Los integrantes de ambas cámaras gozan de inmunidad por las opiniones que expresen en las sesiones.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 86.- Protección de la función legislativa. Ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.

Si un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido o privado en cualquier otra forma de su libertad, la cámara a que pertenece, esté en sesión o no, e incluso uno de sus integrantes, podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura. A este efecto, el Presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados, o un senador o diputado, según el caso, hará un requerimiento al Procurador General de la República y, si fuese necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado todo el apoyo de la fuerza pública.

Artículo 87.- Alcance y límites de la inmunidad. La inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo anterior no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la cámara a que pertenece y no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho. Cuando la cámara recibiere una solicitud de autoridad judicial competente, con el fin de que le fuere retirada la protección a uno de sus miembros, procederá de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y decidirá al efecto en un plazo máximo de dos meses desde la remisión del requerimiento.

Artículo 88.- Pérdida de investidura. Las y los legisladores deben asistir a las sesiones de las legislaturas y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la forma y términos que definan la presente Constitución y los reglamentos internos de la cámara legislativa correspondiente. Quienes incumplan lo anterior perderán su investidura, previo juicio político de acuerdo con las normas instituidas por esta Constitución y los reglamentos y no podrán optar por una posición en el Congreso Nacional dentro de los diez años siguientes a su destitución.

Artículo 89.- Duración de las legislaturas. Las cámaras se reunirán de forma ordinaria el 27 de febrero y el 16 de agosto de cada año. Cada legislatura durará ciento cincuenta días. El Poder Ejecutivo podrá convocarlas de forma extraordinaria.

Artículo 90.- Bufetes directivos de las cámaras. El 16 de agosto de cada año el Senado y la Cámara de Diputados elegirán sus respectivos bufetes directivos, integrados por un presidente, un vicepresidente y dos secretarios.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 1) El Presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados tendrán, durante las sesiones, poderes disciplinarios y representarán a su respectiva cámara en todos los actos legales;
- 2) Cada cámara designará sus funcionarios, empleados administrativos y auxiliares de conformidad con la Ley de Carrera Administrativa del Congreso Nacional;
- 3) Cada cámara reglamentará lo concerniente a su servicio interior y al despacho de los asuntos que le son peculiares, y podrá, en el uso de sus facultades disciplinarias, establecer las sanciones que procedan.

Artículo 91.- Rendición de cuentas de los presidentes. Los presidentes de ambas cámaras deberán convocar a sus respectivos plenos la primera semana del mes de agosto de cada año, para rendirles un informe sobre las actividades legislativas, administrativas y financieras realizadas durante el período precedente.

Artículo 92.- Rendición de cuentas de los legisladores. Los legisladores deberán rendir cada año un informe de su gestión ante los electores que representan.

CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO NACIONAL

Artículo 93.- Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo, le corresponden en consecuencia:

- 1) Atribuciones generales en materia legislativa:
 - a) Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión;
 - b) Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes;
 - c) Disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y al patrimonio histórico, cultural y artístico;
 - d) Crear, modificar o suprimir regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, por el procedimiento regulado en esta Constitución

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

y previo estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación;

- e) Autorizar al Presidente de la República a declarar los estados de excepción a que se refiere esta Constitución;
- f) En caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de defensa nacional, suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con excepción de los derechos establecidos en el artículo 263. Si no estuviera reunido el Congreso, el Presidente de la República podrá dictar la misma disposición, lo que conllevará una convocatoria inmediata del mismo para ser informado de los acontecimientos y de las disposiciones tomadas;
- g) Establecer las normas relativas a la migración y el régimen de extranjería;
- h) Aumentar o reducir el número de las cortes de apelación y crear o suprimir tribunales y disponer todo lo relativo a su organización y competencia, previa consulta a la Suprema Corte de Justicia;
- i) Votar anualmente la Ley de Presupuesto General del Estado, así como aprobar o rechazar los gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo;
- j) Legislar cuanto concierne a la deuda pública y aprobar o desaprobado los créditos y préstamos firmados por el Poder Ejecutivo, de conformidad con esta Constitución y las leyes;
- k) Aprobar o desaprobado los contratos que le someta el Presidente de la República, de conformidad con lo que dispone el artículo 128, numeral 2), literal d), así como las enmiendas o modificaciones posteriores que alteren las condiciones originalmente establecidas en dichos contratos al momento de su sanción legislativa;
- l) Aprobar o desaprobado los tratados y convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo;
- m) Declarar por ley la necesidad de la Reforma Constitucional;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- n) Conceder honores a ciudadanas y ciudadanos distinguidos que hayan prestado reconocidos servicios a la patria o a la humanidad;
- ñ) Conceder autorización al Presidente de la República para salir al extranjero cuando sea por más de quince días;
 - o) Decidir el traslado de la sede de las cámaras legislativas por causa de fuerza mayor o por otras circunstancias debidamente motivadas;
 - p) Conceder amnistía por causas políticas;
 - q) Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del Estado y que no sea contraria a la Constitución;
 - r) Pronunciarse a través de resoluciones acerca de los problemas o las situaciones de orden nacional o internacional que sean de interés para la República.
- 2) Atribuciones en materia de fiscalización y control:
 - s) Aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura ordinaria de cada año, tomando como base el informe de la Cámara de Cuentas;
 - t) Velar por la conservación y fructificación de los bienes nacionales en beneficio de la sociedad y aprobar o rechazar la enajenación de los bienes de dominio privado de la Nación, excepto lo que dispone el artículo 128, numeral 2, literal d);
 - u) Citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado ante las comisiones permanentes del Congreso, para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración;
 - v) Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes;
 - w) Nombrar comisiones permanentes y especiales, a instancia de sus miembros, para que investiguen cualquier asunto que resulte de interés público, y rindan el informe correspondiente;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- x) Supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance.

Artículo 94.- Invitaciones a las cámaras. Las cámaras legislativas, así como las comisiones permanentes y especiales que éstas constituyan, podrán invitar a ministros, viceministros, directores y demás funcionarios y funcionarias de la Administración Pública, así como a cualquier persona física o jurídica, para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderadas.

Párrafo.- La renuencia de las personas citadas a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas, será sancionada por los tribunales penales de la República con la pena que señalen las disposiciones legales vigentes para los casos de desacato a las autoridades públicas, a requerimiento de la cámara correspondiente.

Artículo 95.- Interpelaciones. Interpelar a los ministros y viceministros, al Gobernador del Banco Central y a los directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como a los de entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren la mayoría de los miembros presentes, a requerimiento de al menos tres legisladores, así como recabar información de otros funcionarios públicos competentes en la materia y dependientes de los anteriores.

Párrafo.- Si el funcionario o funcionaria citado no compareciese sin causa justificada o se considerarán insatisfactorias sus declaraciones, las cámaras, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, podrán emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al Presidente de la República o al superior jerárquico correspondiente por incumplimiento de responsabilidad.

Conocimiento o Información

En República Dominicana, el derecho al conocimiento está regulado principalmente por la Constitución Política, que establece la libertad de expresión e información, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, que garantiza el derecho a solicitar y recibir información de los órganos del Estado. Asimismo, hay en

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

el Senado un Proyecto de ley marcado como la Ley Orgánica sobre Derechos de Participación Ciudadana y Control Ciudadano No.101-08, que regula las consultas públicas.

Marco Constitucional:

- Artículo 49 de la Constitución: Reconoce el derecho de toda persona a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, y a la información, prohibiendo la censura previa.

Leyes Específicas:

- Ley No. 200-04 (Ley General de Libre Acceso a la Información Pública):

Establece el derecho de las personas a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de los órganos del Estado y de las entidades con participación estatal. Esta ley también sanciona con penas de prisión a los funcionarios que arbitrariamente obstaculicen o impidan el acceso a la información.

- Proyecto de Ley No. 101-08 (Ley Orgánica sobre Derechos de Participación Ciudadana y Control Ciudadano):

Regula los mecanismos de participación ciudadana, incluyendo las consultas populares, que buscan garantizar la participación informada y efectiva de la sociedad en la toma de decisiones públicas.

Otros marcos legales:

- Ley 66-97 de Educación:

Busca garantizar la calidad y pertinencia de la educación superior, ciencia y tecnología.

- Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología:

Promueve la difusión del conocimiento científico y tecnológico y garantiza la transparencia del sistema educativo.

- Ley general de libre acceso a la información pública

Consejo Estatal del Azúcar - CEA

La Ley que creó el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en la República Dominicana es la Ley No. 7 de 1966. Esta ley creó la institución autónoma y descentralizada del Estado para la administración de los ingenios azucareros del país, que anteriormente pertenecieron a la familia Trujillo.

Detalles importantes:

- Fecha de creación:

La Ley No. 7 se promulgó el 19 de agosto de 1966.

- Propósito:

Su objetivo era crear un ente estatal para administrar los ingenios azucareros que pasaron a ser propiedad del Estado tras la disolución de la Corporación Azucarera Dominicana.

- Naturaleza:

El CEA se estableció como una institución autónoma y descentralizada del Estado dominicano.

- Contexto:

Esta ley surgió en el año 1966, sucediendo a la Corporación Azucarera Dominicana y tomando posesión de los ingenios azucareros que pertenecían a la familia Trujillo, según informa el Ministerio de Administración Pública.

Consejo Nacional de la Magistratura

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es el órgano que selecciona y designa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, así como evalúa el desempeño de los jueces de la Suprema

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Corte. Su regulación principal se encuentra en la Ley Orgánica número 138-11 y sus modificaciones posteriores, incluyendo la Ley 1-25.

¿En qué consiste?

- Designación de jueces:

Su función principal es seleccionar y nombrar a los jueces de los más altos tribunales del país (Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral).

- Evaluación de desempeño:

Evalúa el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia cada cierto tiempo, con la posibilidad de tomar decisiones de ratificación o separación. C

- Procedimiento de selección:

Sigue un proceso que incluye la postulación, preselección de candidatos, vistas públicas, evaluación y deliberación para tomar la decisión final.

- Independencia:

Es un órgano constitucional que busca garantizar la independencia del poder judicial y la calidad de sus integrantes.

Marco Legal

A) Constitución

Artículo 178.- Integración. El Consejo Nacional de la Magistratura estará integrado por:

- 1) El Presidente de la República, quien lo presidirá y, en su ausencia, por el Vicepresidente de la República;
- 2) El Presidente del Senado de la República;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 3) Un senador o senadora escogido por el Senado de la República que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del Presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría;
- 4) El Presidente de la Cámara de Diputados;
- 5) Un diputado o diputada escogido por la Cámara de Diputados, que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del Presidente de la Cámara de Diputados y que ostente la representación de la segunda mayoría;
- 6) El Presidente de la Suprema Corte de Justicia;
- 7) Un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia escogido por su Pleno, quien fungirá de secretario;
- 8) El Presidente del Tribunal Constitucional.

Artículo 179.- Funciones. El Consejo Nacional de la Magistratura tendrá las siguientes funciones:

- 1) Designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia;
- 2) Designar los jueces del Tribunal Constitucional;
- 3) Designar los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes;
- 4) Designar el Procurador General de la República y la mitad de los procuradores adjuntos, a propuesta del Presidente de la República.
- 5) Evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 180.- Criterios para la escogencia. El Consejo Nacional de la Magistratura al conformar la Suprema Corte de Justicia deberá seleccionar las tres cuartas partes de sus miembros de jueces que pertenezcan al sistema de carrera judicial, y la cuarta parte restante los escogerá de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público.

Párrafo I.- El Consejo Nacional de la Magistratura, al designar las y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, dispondrá cuál de ellos ocupará la presidencia y designará un primer y segundo sustitutos para reemplazar al Presidente en caso de

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

falta o impedimento. El Presidente y sus sustitutos ejercerán esas funciones por un período de siete años, al término del cual, y previa evaluación de su desempeño realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura, podrán ser elegidos por un nuevo período.

Párrafo II.- En caso de vacante de un juez investido con una de las calidades arriba expresadas, el Consejo Nacional de la Magistratura designará a un nuevo juez con igual calidad o atribuirá ésta a otro de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 181.- Evaluación de desempeño. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a la evaluación de su desempeño al término de siete años a partir de su elección, por el Consejo Nacional de la Magistratura. En los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiera la pertinencia de separar un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia.

Artículo 182.- Escogencia jueces Tribunal Constitucional. El Consejo Nacional de la Magistratura al conformar el Tribunal Constitucional dispondrá cuál de ellos ocupará la presidencia y designará un primer y segundo sustitutos para reemplazar al Presidente, en caso de falta o impedimento.

Artículo 183.- Escogencia jueces Tribunal Superior Electoral. El Consejo Nacional de la Magistratura al designar los jueces y sus suplentes del Tribunal Superior Electoral dispondrá cuál de ellos ocupará la presidencia.

B) Ley Orgánica número 138-11 del 21 de junio de 2011.

- Esta ley ha sido modificada por otras, como la Ley 1-25, para actualizar sus funciones y procesos, como la designación del Procurador General de la República.
- El Consejo también debe seguir lo establecido en su reglamento de aplicación para llevar a cabo sus funciones, según indica el Consejo Nacional de la Magistratura.

C) Ver Ley No.138-11 - Poder Judicial

Consentimiento

En el ámbito jurídico, el consentimiento es la manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca de una persona, que mediante una declaración o una acción afirmativa, otorga permiso o aprueba un acto o tratamiento particular. Para que sea válido, debe ser otorgado sin coacción, permitiendo a la persona retirar el permiso en cualquier momento siempre que lo comunique de forma clara.

En pocas palabras, el consentimiento es una manifestación libre de la voluntad.

Características del consentimiento jurídico:

- Libre: La voluntad de dar el consentimiento debe ser espontánea, sin presiones o coacciones.
- Específico: El consentimiento debe referirse a una acción concreta y bien definida.
- Informado: La persona que consiente debe tener pleno conocimiento de lo que acepta, incluyendo los riesgos, beneficios y alternativas.
- Inequívoco: La aceptación debe ser clara, sin lugar a dudas.
- Voluntario: El acto de dar el consentimiento debe ser una decisión personal y deliberada.

Contextos de aplicación:

- Contratos:

En el derecho contractual, es esencial para la validez de un acuerdo, requiriendo una oferta y aceptación mutuas.

- Materia penal:

Puede eximir de responsabilidad penal si el consentimiento es otorgado por el titular del bien jurídico afectado, siempre que cumpla los requisitos de capacidad y libertad.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Protección de datos:

Es fundamental para la recolección y tratamiento de datos personales, donde debe ser una expresión de voluntad clara y para un fin específico.

- Relaciones sexuales:

Es un acto afirmativo y consciente de participar en una actividad sexual, y puede ser revocado en cualquier momento.

Revocabilidad:

Una característica crucial es que el consentimiento puede ser retirado en cualquier momento, siempre y cuando esa revocación se comunique de forma clara y sin ambigüedad.

Conspiración

Una conspiración es un acuerdo secreto y conjunto entre dos o más personas para llevar a cabo un acto, generalmente un delito o algo ilegal, con la intención de engañar o perjudicar a otros. A menudo, estas acciones implican un intento de obtener poder, derrocar una autoridad o atentar contra personas o estructuras legales. El concepto de conspiración también se ha popularizado a través de las teorías de la conspiración, que son explicaciones alternativas a los hechos oficiales, presentadas como manipulaciones malintencionadas por fuerzas ocultas.

En el ámbito legal

- Un acuerdo:

La esencia de una conspiración es el acuerdo entre dos o más personas para cometer un delito o un acto ilegal.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Un acto manifiesto (o preparatorio):

Para que la conspiración sea punible, debe haber un "acto manifiesto" o "acto preparatorio", que es un paso que va más allá del simple acuerdo, aunque no sea en sí mismo un acto criminal.

- Un delito incipiente:

La conspiración es un delito "incipiente", lo que significa que se puede castigar incluso si el plan original nunca se lleva a cabo o si los conspiradores son detenidos antes de alcanzar su objetivo.

En la cultura popular

- Explicaciones secretas:

Las teorías de conspiración ofrecen explicaciones sobre sucesos históricos o actuales, atribuyéndolos a tramas secretas orquestadas por grupos poderosos con intenciones negativas.

- Elementos comunes:

Estas teorías a menudo presentan un complot, grupos de conspiradores, "pruebas" inventadas, la creencia de que nada ocurre por casualidad y la división del mundo entre buenos y malos.

- Desinformación:

Las teorías de conspiración se asocian frecuentemente con la desinformación y pueden tener consecuencias negativas, como la oposición a medidas de salud pública, la desconfianza en la ciencia y la radicalización.

En la República Dominicana, la conspiración se penaliza según la gravedad del delito que se intenta cometer y se castiga con prisión, cuya duración varía. El Código Penal Dominicano y otras leyes sancionan los planes y las acciones deliberadas para cometer ilícitos, incluso si el crimen principal no se ha consumado. Por ejemplo, la conspiración para cometer actos de espionaje contra el Estado puede conllevar 30 años de reclusión mayor.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

La penalización de la conspiración en República Dominicana depende del delito específico que se planea:

- Conspiración para la traición o espionaje:

Quienes conspiran contra los intereses de la República o cometen espionaje pueden perder sus derechos de ciudadanía y enfrentar penas severas. Específicamente, la pena por espionaje es de 30 años de reclusión mayor.

- Conspiración para alzar ejércitos o suministrar armas:

La ley castiga con 20 años de reclusión mayor a quienes, sin autorización legal, organizan ejércitos, alistan soldados o les suministran armas.

- Conspiración general:

La conspiración para cometer un delito es un delito en sí mismo y es perseguido penalmente incluso si el delito planeado no se consuma.

¿Qué es considerado conspiración?

La conspiración es la asociación y la colaboración deliberada de dos o más personas para planificar o preparar la comisión de un delito. Es el acuerdo o la trama formada para lograr un fin ilícito.

Constitución de la República Dominicana

En República Dominicana (RD), la Constitución es la ley suprema del país y la norma fundamental que establece la estructura de su gobierno, sus derechos y deberes. Fue promulgada por primera vez en 1844 y, desde entonces, ha sido reformada múltiples veces para adaptarse a las necesidades del país, siendo la versión vigente la proclamada en 2024.

¿Qué contiene la Constitución?

- Fundamentos del Estado:

Establece que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, basado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la soberanía popular y la separación de poderes.

- Derechos y Deberes:

Define y garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos y las responsabilidades de la sociedad y el Estado.

- Organización del Estado:

Detalla la estructura del gobierno, creando y definiendo los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y estableciendo sus funciones y límites.

- Principios de Justicia:

Se enfoca en la protección efectiva de los derechos de la persona, buscando que todos puedan perfeccionarse de manera igualitaria dentro de un marco de libertad y justicia social.

- Derechos y Libertades:

Consagra los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión, la igualdad, el acceso a la educación y al trabajo.

- Estado de Derecho:

Asegura que todos, incluidos los gobernantes, estén sujetos a la ley y se garantice la justicia y el Estado de Derecho.

- Voluntad Nacional:

Es la expresión de la voluntad del pueblo, que a través de un poder constituyente, establece las reglas de su organización política y social.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Base de la Democracia:

Es el cimiento del Estado de derecho y la democracia dominicana, guiando el funcionamiento de las instituciones.

- Garantía de Derechos:

Asegura que el Estado y sus instituciones respeten los derechos fundamentales y la dignidad humana de todos los ciudadanos.

- Ley Fundamental:

Es la norma jurídica de mayor jerarquía, superior a cualquier otra ley o norma.

- Organización del Estado:

Define la estructura de los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) y establece sus límites y funciones.

Marco Legal:

Sirve como la norma superior de la cual derivan todas las demás leyes y regulaciones del país. Por eso la Constitución de la República es la ley suprema de un país que establece la organización de su Estado, los derechos y libertades de sus ciudadanos, y define los poderes de gobierno, como el ejecutivo, legislativo y judicial, asegurando el Estado de Derecho. Es un documento fundamental que actúa como la base del ordenamiento jurídico y guía la convivencia democrática de la nación, reflejando la voluntad general de la sociedad.

Importancia de la Constitución:

- Garantiza la Democracia:

Permite el funcionamiento democrático al establecer la separación de poderes y los controles entre ellos.

- Fundamento del Ordenamiento Jurídico:

Sirve como base para todas las demás leyes, dando coherencia y validez al sistema legal del país.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Base de la Convivencia:

Promueve la cohesión social y el bienestar de los ciudadanos al establecer un marco de valores y principios compartidos.

Sobre el Estado.

Artículo 1.- Organización del Estado. El pueblo dominicano constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana.

Artículo 2.- Soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.

Artículo 3.- Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana.

Artículo 4.- Gobierno de la Nación y separación de poderes. El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.

Artículo 5.- Fundamento de la Constitución. La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas.

Supremacía de la Constitución.

Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.

Modificación.

**DE LA ASAMBLEA NACIONAL REVISORA DE LA
CONSTITUCION**

Artículo 270.- Convocatoria Asamblea Nacional Revisora. La necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará.

Artículo 271.- Quórum de la Asamblea Nacional Revisora. Para resolver acerca de la reforma propuesta, la Asamblea Nacional Revisora se reunirá dentro de los quince días siguientes a la publicación de la ley que declara la necesidad de la reforma, con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras. Sus decisiones se tomarán por la mayoría de las dos terceras partes de los votos. No podrá iniciarse la reforma constitucional en caso de vigencia de alguno de los estados de excepción previstos en el artículo 262. Una vez votada y proclamada la reforma por la Asamblea Nacional Revisora, la Constitución será publicada íntegramente con los textos reformados.

Artículo 272.- Referendo aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora.

Párrafo I.- La Junta Central Electoral someterá a referendo las reformas dentro de los sesenta días siguientes a su recepción formal.

Párrafo II.- La aprobación de las reformas a la Constitución por vía de referendo requiere de más de la mitad de los votos de los sufragantes y que el número de éstos exceda del treinta por ciento (30%) del total de ciudadanos y ciudadanas que integren el Registro Electoral, sumados los votantes que se expresen por “SÍ” o por “NO”.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Párrafo III.- Si el resultado del referendo fuere afirmativo, la reforma será proclamada y publicada íntegramente con los textos reformados por la Asamblea Nacional Revisora.

Consultas a Impuestos Internos (DGII)

El Código Tributario, en su Título I, establece lo siguiente:

Artículo 38. Consultas.

La Administración Tributaria podrá ser consultada, por quien tuviese un interés personal y directo, sobre la aplicación de la ley a una situación concreta.

Artículo 39. El consultante deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta, pudiendo así mismo indicar y fundamentar su opinión al respecto.

Artículo 40. La presentación de una consulta no exime al consultante del cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias.

Artículo 41. No tendrá efecto la respuesta a una consulta evacuada sobre la base de datos inexactos proporcionados por el consultante.

Artículo 42. La respuesta a las consultas presentadas sólo surtirá efectos vinculantes para la Administración Tributaria respecto al consultante y no será susceptible de recurso alguno.

Artículo 43. La Administración Tributaria podrá cambiar de criterio respecto a una materia consultada. Este nuevo criterio deberá recogerse en una norma general publicada de acuerdo con el Artículo 37 y surtirá efecto respecto de todos los hechos generadores pendientes a la fecha de dicha publicación o posteriores a ella.

Consumidor

Los derechos del consumidor son el conjunto de leyes y normativas que protegen al individuo como comprador de bienes y servicios ante las prácticas de los proveedores, asegurando un equilibrio en la relación de consumo y defendiendo sus intereses frente a la información engañosa o productos de mala calidad. Estos derechos incluyen la protección de la vida, la salud y la seguridad, el derecho a una información veraz y oportuna, a elegir libremente, a la reparación de daños, y a la educación para un consumo responsable.

Principios fundamentales

- Protección:

Se protege al consumidor como la parte más débil de la relación de consumo.

- Equilibrio:

Se busca generar una posición de equidad en el mercado entre consumidores y proveedores.

- Información:

Los consumidores tienen derecho a recibir información completa, clara y veraz sobre los productos y servicios que adquieren.

- Seguridad:

Se protege la salud, la seguridad y la vida del consumidor ante posibles riesgos de los bienes y servicios.

Derechos básicos del consumidor

- Derecho a la salud, seguridad y vida: A no ser expuesto a riesgos al usar un producto o servicio.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Derecho a la información: A recibir información veraz, transparente, oportuna y comprensible sobre el producto o servicio, incluyendo riesgos y mecanismos de protección.
- Derecho a la elección: A elegir libremente entre distintas opciones en el mercado.
- Derecho a la no discriminación: A no ser arbitrariamente discriminado por parte de los proveedores.
- Derecho a la reparación e indemnización: A recibir una compensación o reparación oportuna si se sufre un daño por un producto o servicio de mala calidad.
- Derecho a la educación y formación: A recibir capacitación para realizar un consumo consciente y responsable.
- Derecho a la protección contractual: A que los contratos de adhesión no contengan cláusulas abusivas.

Marco legal

En muchos países existen leyes específicas que establecen estos derechos y los organismos encargados de velar por su cumplimiento. Por ejemplo, en República Dominicana, la Ley 358-05 creó el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) para defender y promover estos derechos.

A) Constitución dominicana..

Artículo 53.- Derechos del consumidor. Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley.

B) Ley 358-05 creó el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor)

Contabilidad

La principal ley que regula la contabilidad en República Dominicana es la Ley 633, que establece las normas y responsabilidades para el ejercicio de la profesión de Contador Público Autorizado (CPA). Esta ley asegura que la práctica contable se realice con altos estándares de calidad y ética, y define quiénes son los profesionales autorizados para realizar las investigaciones de las cuentas de las empresas.

¿Qué establece la Ley 633?

- Regulación de la profesión:

Define los requisitos para ser un Contador Público Autorizado y el marco de sus funciones.

- Estándares de calidad y ética:

Busca garantizar que los servicios contables se presten con la debida diligencia y profesionalismo.

- Estructura de la profesión:

Es la base legal que crea y regula el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.

Marco Legal Adicional

Si bien la Ley 633 es la base principal, existen otras normativas que complementan la regulación contable:

- Contabilidad Gubernamental:

La Ley 126-01 es clave, ya que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) y establece el marco para la contabilidad del Estado.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Controles Internos:**

La Ley 10-07 instituye el Sistema Nacional de Control Interno y establece las atribuciones de las entidades públicas para mantener un control interno efectivo.

- **Código de Comercio:**

Establece la obligación de los comerciantes de llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado.

Contaminación Sónica o Ruidos Excesivos

En República Dominicana, la contaminación sónica está regulada principalmente por la Ley No. 287-04 sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos que Producen Contaminación Sonora, la cual ha sido modificada por la Ley 90-19 para establecer límites de decibeles y prohibiciones sobre ruidos innecesarios y dañinos. El Ministerio de Medio Ambiente, la Policía Nacional y el INTRANT son los encargados de velar por el cumplimiento de esta ley.

Detalles clave de la ley:

- **Objetivo:**

La ley tiene como finalidad regular y prohibir la emisión de ruidos excesivos que afecten la salud de las personas.

- **Responsables:**

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) tienen la facultad de hacer cumplir la ley.

- **Límites de decibeles:**

La ley establece niveles máximos permitidos de ruido que varían según el tipo de zona (residencial, comercial, industrial, etc.) y la hora del día.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Acciones a tomar en caso de contaminación sónica:

- Reportar:

Si un establecimiento o un vecino excede los límites de ruido permitidos, puedes reportarlo a las autoridades correspondientes.

- Conocer la normativa:

Informarte sobre los niveles de decibeles permitidos para tu zona te ayuda a identificar y denunciar las violaciones a la ley.

A) Base Legal sobre Prohibición de Ruidos Excesivos de Vehículos

Sí, existen leyes que prohíben los ruidos excesivos de vehículos, aunque varían según el país y la región, como la Ley No. 287-04 en República Dominicana, que busca prevenir la contaminación sonora, y el Código de Policía en Colombia, que sanciona perturbar la tranquilidad comunitaria con ruido. Estas normativas suelen prohibir el uso de roncadores, muflas alteradas, y establecen límites de decibeles para el nivel de ruido permitido, permitiendo a las autoridades detener vehículos para verificar el cumplimiento y sancionar a los infractores.

Ejemplos por país:

- República Dominicana:

La Ley No. 287-04 sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos regula la contaminación sonora, prohibiendo ruidos que causen daños a la salud y la tranquilidad. El Ministerio de Medio Ambiente tiene facultades para regular estos ruidos.

Qué está prohibido:

- Roncadores: Dispositivos que aumentan el sonido del motor de un vehículo.
- Muflas alteradas o dañadas: Sistemas de escape modificados o en mal estado que generan mayor ruido.
- Exceder los límites de decibeles: Las leyes establecen un nivel máximo de ruido permitido, especialmente en el escape y las bocinas.

Qué puedes hacer:

- Verificar el sistema de escape: Asegúrate de que tu vehículo no tenga roncadores ni muflas alteradas.
- Acudir a la revisión técnica: Esta inspección puede ayudarte a conocer si tu vehículo cumple con los límites de ruido.
- Estar al tanto de la legislación local: Investiga las leyes y normativas específicas de tu municipio o región, ya que pueden haber ordenanzas locales que complementen las leyes nacionales.

B) Ruidos Excesivos en Residencias

En la República Dominicana existe la Ley 287-04 sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos, que prohíbe la producción de ruidos excesivos en áreas residenciales. La ley establece límites de decibeles permitidos y otorga a los ciudadanos la facultad de solicitar la suspensión de ruidos molestos ante la autoridad competente o el Poder Judicial.

Detalles de la ley:

- Prohibición de ruidos:

La Ley 287-04 prohíbe la producción de ruidos nocivos o molestos, sin importar su origen o lugar, si estos afectan la tranquilidad o el descanso de la población.

- Límites de decibeles:

La ley faculta al Poder Ejecutivo para reglamentar los decibeles permitidos, estableciendo límites específicos para zonas residenciales, comerciales e industriales, y para horarios diurnos y nocturnos. Por ejemplo, en zonas residenciales, el límite suele ser de 60 decibeles durante el día (7:00 a.m. a 9:00 p.m.) y 50 durante la noche (9:00 p.m. a 7:00 a.m.).

- Acciones por ruidos excesivos:

Cualquier persona que considere que un ruido es nocivo o molesto puede presentar una queja ante la autoridad competente para solicitar su suspensión

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

inmediata. También se puede acudir al Poder Judicial para obtener una orden que suprima o disminuya el ruido.

Cómo reportar un ruido excesivo:

- Llamada al 9-1-1:

Para ruidos que exceden los límites permitidos en la zona, se puede hacer una denuncia al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

- Acción legal:

Si el ruido persiste, se puede iniciar un proceso legal para solicitar la suspensión del mismo, a través de la intervención de un abogado.

Es importante tener en cuenta que, si bien hay leyes que regulan el ruido, los conflictos por ruidos excesivos en áreas residenciales pueden ser persistentes y requerir acciones coordinadas entre vecinos, administración del condominio (si aplica) y autoridades competentes.

Contrabando

En la República Dominicana, el contrabando es penalizado por leyes como la Ley 17-19 y la Ley 168-21 de Aduanas, que establecen penas de prisión y multas significativas por la introducción o extracción de mercancías eludiendo los controles aduaneros. La Ley 17-19 se enfoca en productos regulados (como medicamentos, hidrocarburos, alcohol y tabaco), mientras que la Ley 168-21 tipifica la «defraudación aduanera» y endurece las sanciones para la evasión fiscal y el fraude en general. Principales Leyes que castigan el contrabando:

- Ley 17-19:

Esta ley busca específicamente la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados.

- Sanciones: Se contemplan sanciones penales y administrativas. Por ejemplo, introducir o extraer mercancías de forma elusiva puede resultar en

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

prisión de 3 a 5 años y multas de cien a trescientas veces el valor aduanero de la mercancía, según lo establece el artículo 34 de la ley.

- Enfoque: Regula la comercialización ilícita de farmacéuticos, hidrocarburos, alcohol y tabaco.
- Ley 168-21 (Ley de Aduanas):

Esta ley reformó el régimen aduanero para fortalecer la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

- Delitos y Sanciones: Tipifica la defraudación aduanera y endurece las sanciones. Por ejemplo, las sanciones pueden incluir prisión de 3 a 5 años y multas equivalentes a cinco veces los impuestos evadidos, más intereses indemnizatorios.
- Agravantes: La ley también prevé penas más severas (3 a 10 años de prisión) si se configuran circunstancias agravantes.

¿Qué se considera contrabando?

Se castiga a quienes realicen acciones como:

- Introducir o extraer mercancías (especialmente productos regulados) sin pasar por los controles aduaneros.
- Adquirir, vender, ocultar o usar mercancías introducidas de manera ilícita.
- Desviar productos regulados de su destino final para introducirlos al mercado nacional sin autorización.

Contraescrito

En la República Dominicana, el contraescrito se regula principalmente por el Código Civil (artículo 1321), que legitima esta herramienta jurídica para modificar o anular los efectos de un acto aparente mediante un acto secreto entre las partes. Aunque el

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

contraescrito en sí mismo no es ilícito, es un acto secreto entre las partes, por lo que no se requiere publicidad, y su validez entre los contratantes se prueba a través de una acción de declaratoria de simulación, no de nulidad.

Regulación y características del contraescrito

- Marco Legal:

La base legal del contraescrito se encuentra en el artículo 1321 del Código Civil, que reconoce la posibilidad de que las partes utilicen esta figura para declarar la verdadera voluntad dentro de un contrato.

Código Civil.

Artículo 1321.- Los contraescritos no pueden surtir su efecto sino entre las partes contratantes; no tienen validez contra los terceros.

- Acto Secreto:

El contraescrito es, por naturaleza, un acto secreto, por lo que no está destinado a la publicidad, a diferencia del acto aparente que busca modificar.

- Modificación o Anulación:

Su objetivo es modificar un acto aparente o anular sus efectos, ya sea total o parcialmente, para reflejar la verdadera intención de los contratantes.

- Validez entre las partes:

El contraescrito tiene plena eficacia entre las partes que lo otorgan, en virtud de la autonomía de la voluntad que consagra el Código Civil.

- Prueba del Contraescrito:

Para que el contraescrito surta efectos frente a terceros o para probar la simulación, se debe interponer una acción de declaratoria de simulación que demuestre la verdadera voluntad de las partes.

Relación con la simulación

El contraescrito es la herramienta principal para ejecutar la simulación, una operación contractual que implica una mentira para disfrazar un acto real (como un préstamo bajo la apariencia de una venta). La simulación y el contraescrito son legítimos en el derecho dominicano, lo que significa que la ley permite esta práctica, siempre que no se busque defraudar a terceros o eludir una disposición legal.

Contraloría General de la República

A) Constitución

Artículo 247.- Control interno. La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley.

B) Ver Ley 10-07 de la Contraloría General de la República

C) Ver Reglamento 1523-04 de Contraloría

Contrato

En República Dominicana (RD), los contratos se rigen principalmente por el Código Civil (Artículo 1101) para la mayoría de los contratos, mientras que los contratos mercantiles son regulados por el Código de Comercio. Además, existen leyes especiales que regulan contratos específicos, como la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones para las contrataciones públicas, el Código de Trabajo (Ley 16-92) para las relaciones laborales, y la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario (Ley 358-05).

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Leyes principales que rigen los contratos en República Dominicana:

- Código Civil:

Establece las normas generales para la validez y ejecución de la mayoría de los contratos, definiendo los principios fundamentales como la autonomía de la voluntad.

- Código de Comercio:

Regula los contratos que se celebran en el ámbito empresarial o comercial, conocidos como contratos mercantiles.

- Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras:

Es la ley principal que regula los contratos que realiza el sector público, tanto para bienes, servicios u obras, siempre que no estén excluidos por la ley.

- Código de Trabajo (Ley 16-92):

Se enfoca en la regulación de las relaciones laborales, estableciendo los derechos y obligaciones tanto de los trabajadores como de los empleadores en este ámbito.

- Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario (Ley 358-05):

Protege los derechos de los consumidores en sus relaciones contractuales con proveedores de bienes y servicios, asegurando la equidad en las transacciones.

Ejemplos de leyes especiales:

- Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas:

Regula los contratos de seguros y fianzas, definiendo sus características específicas.

- Ley 483 de 1964 sobre Venta Condicional de Bienes Muebles:

Establece normas para el registro de los contratos de venta condicional de bienes muebles.

A) Contratos Mercantiles

Los contratos mercantiles son acuerdos entre dos o más partes que buscan producir o transferir derechos y obligaciones dentro de un marco de comercio, regulando actos de comercio y transacciones empresariales. Son acuerdos legalmente vinculantes que definen derechos y responsabilidades de cada parte, asegurando el cumplimiento de los compromisos en operaciones comerciales y protegiendo intereses.

Características principales:

- **Regulación de actos de comercio:**

Su principal función es regular las operaciones comerciales y las relaciones entre empresas o comerciantes.

- **Acuerdo de voluntades:**

Se basan en el consentimiento libre de vicios de las partes, quienes deben tener la capacidad legal necesaria para firmar.

- **Derechos y obligaciones:**

Establecen los derechos y obligaciones que deben cumplir las partes, como la prestación de servicios, la entrega de bienes o la realización de obras.

- **Formalización de acuerdos:**

Sirven para formalizar y asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones de una relación comercial.

- **Sujetos de los contratos:**

Pueden ser personas físicas o jurídicas (empresas), y a menudo involucran a profesionales o autónomos que colaboran de manera independiente con otras empresas.

Importancia de los contratos mercantiles:

- **Protección legal:**

Ofrecen seguridad jurídica a las partes, protegiendo sus intereses y garantizando el cumplimiento de los acuerdos.

- **Claridad en las operaciones:**

Definen con precisión los términos, plazos y condiciones de las transacciones, evitando malentendidos y conflictos.

- **Cumplimiento de compromisos:**

Aseguran que ambas partes cumplan los compromisos asumidos en el contrato.

- **Adaptación a necesidades mercantiles:**

Suelen ofrecer soluciones más ágiles y rápidas que los contratos civiles, adaptándose a la velocidad del tráfico mercantil.

Tipos comunes de contratos mercantiles: Contratos de compraventa, Contratos de distribución, Contratos de franquicia, Contratos de transporte, Contratos de prestación de servicios.

B) Contratos de Trabajo

El Código de Trabajo (Ley 16-92) es la legislación principal que rige las relaciones laborales en la República Dominicana, estableciendo los derechos y obligaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores. Esta ley regula la definición y los tipos de contrato de trabajo, promueve la protección contra la discriminación, garantiza derechos como la libertad sindical, el salario justo y la seguridad, y establece los mecanismos para la aplicación de la ley a través de autoridades administrativas y tribunales.

Principios y Derechos Fundamentales

- **Protección y Bienestar:**

El trabajo es considerado una función social que debe ser protegida y asistida por el Estado, que debe velar por el bienestar humano y la justicia social.

- **No Discriminación:**

Se prohíbe cualquier tipo de discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, edad, raza, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa.

- **Libertad Sindical:**

Se reconoce la libertad de los trabajadores para organizarse en sindicatos.

- **Salario Justo:**

Los trabajadores tienen derecho a recibir un salario justo por sus labores.

- **Aplicación de la Norma más Favorable:**

En caso de concurrencia de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador.

Aspectos Clave del Código

- **Contrato de Trabajo:**

Define qué es un contrato de trabajo, el cual implica una prestación personal de servicios a cambio de una retribución, bajo la dependencia del empleador.

- **Regulación de la Relación Laboral:**

Establece normas para la regulación privada y oficial de las condiciones de los diversos tipos de contrato de trabajo.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Terminación del Contrato:**

Detalla las causas y procedimientos para la terminación de un contrato de trabajo, como el desahucio (fin de un contrato indefinido sin causa) o el despido (por falta grave del trabajador).

- **Protección Social:**

Incluye disposiciones para la protección de la maternidad, el trabajo de menores, y la formación profesional.

- **Autoridades y Aplicación:**

Establece que la aplicación de la ley está a cargo de la Secretaría de Estado de Trabajo (actualmente Ministerio de Trabajo) y sus dependencias, así como de los tribunales.

Modificaciones Recientes

En el año 2024 y 2025, el Congreso Nacional ha estado analizando y avanzando en la aprobación de proyectos de ley para modificar el Código de Trabajo, buscando modernizar la legislación para mejorar las condiciones laborales, fortalecer los derechos fundamentales y optimizar aspectos como la conciliación de conflictos.

C) Principio lo Pactado es Ley entre las Partes

El principio de que "lo contratado es ley entre las partes" o pacta sunt servanda establece que los contratos válidamente celebrados son vinculantes para los contratantes, quienes deben cumplir lo pactado, y no pueden ser invalidados sino por consentimiento mutuo o por causas legales. Este principio asegura que las voluntades acordadas en un contrato tengan fuerza obligatoria y se extiendan a todas las consecuencias derivadas de la naturaleza de la obligación, la buena fe, la ley y la costumbre.

Significado del principio

- **Fuerza vinculante:**

Una vez que un contrato es legalmente celebrado, se crea un marco normativo que las partes están obligadas a seguir.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Obligatoriedad:**

Las partes deben cumplir con lo expresamente acordado en el contrato y, además, con las consecuencias que de él se derivan de forma natural.

- **Límites a la invalidación:**

El contrato solo puede ser modificado o anulado si ambas partes acuerdan hacerlo o si existen causas legales para ello.

Extensión de la obligación

La obligatoriedad de un contrato no se limita a las cláusulas escritas, sino que también abarca:

- **La buena fe:**

Las partes deben actuar con honestidad, lealtad y transparencia en el cumplimiento del contrato.

- **La ley:**

Se deben cumplir las leyes aplicables y los principios generales del derecho contractual.

- **La costumbre:**

Se deben considerar las prácticas o usos habituales que son conformes a la naturaleza del contrato.

Importancia del principio

Este principio es fundamental para el derecho contractual porque:

- **Garantiza seguridad jurídica:**

Proporciona certeza y confianza en las relaciones comerciales y legales, al asegurar el cumplimiento de los acuerdos.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Fortalece la voluntad de las partes:

Reconoce que la voluntad de los contratantes es la base de las obligaciones que asumen.

- Protege los derechos:

Permite que las partes puedan exigir el cumplimiento de lo acordado y protegerse ante posibles incumplimientos.

Contratación de Extranjeros

La contratación de extranjeros en República Dominicana se rige principalmente por la Ley General de Migración 285-04y su reglamento, que establecen la necesidad de obtener una visa o permiso de trabajo, y por el Código de Trabajo (Ley 16-92), que limita la contratación de extranjeros a un máximo del 20% del personal total de una empresa, reservando el 80% para mano de obra dominicana. Requisitos para la contratación de extranjeros:

- Documentación migratoria:

El extranjero debe poseer una visa de negocios con fines laborales o una residencia legal que lo autorice a trabajar en el país.

- Permiso de trabajo o cédula de identidad:

Para el registro en sistemas de seguridad social, se requiere un carnet de permiso de trabajo o una cédula de identidad dominicana para extranjeros, no solo el pasaporte.

Límites de contratación:

- Porcentaje de personal extranjero: El Código de Trabajo (Ley 16-92) establece en su artículo 135 que las empresas no pueden contratar más del 20% de personal extranjero, priorizando la mano de obra dominicana.

Marco legal aplicable:

- Ley General de Migración 285-04:

Esta ley, junto con su Reglamento de Aplicación (Reglamento 631-11), establece las normas generales sobre la entrada, permanencia y residencia de extranjeros en el país, incluyendo las condiciones para el trabajo.

- Código de Trabajo (Ley 16-92):

Regula las relaciones laborales y establece la cuota de personal extranjero en las empresas.

Consecuencias del incumplimiento:

- Las empresas que no cumplan con estas regulaciones pueden enfrentar sanciones.

Contrato Cuota Litis

Un contrato de cuota litis es un acuerdo de honorarios en el que el abogado cobra un porcentaje del resultado favorable del caso, en lugar de una tarifa fija o por hora. En la República Dominicana, este tipo de contrato se regula principalmente por la Ley 302 de 1964 sobre honorarios de los abogados. Dicha ley establece que la cuota litis no puede ser inferior al mínimo de honorarios que la ley fija ni superior al 30% del valor del bien o derecho en disputa.

¿Qué es el contrato de cuota litis?

- Es un acuerdo donde el cliente se compromete a pagar al abogado un porcentaje del beneficio económico que se obtenga al finalizar el proceso.
- Este porcentaje se aplica sobre el valor del dinero, el bien o cualquier otro beneficio que el cliente reciba al ganar el caso.

¿Qué dice la ley en República Dominicana?

- La Ley 302 de 1964 rige los honorarios de los abogados, incluyendo los contratos de cuota litis.
- Esta ley permite pactar cuotas litis, pero establece límites: la cuantía no puede ser menor que el mínimo legal ni puede exceder el 30% del valor de los bienes o derechos en disputa.
- Si el valor del litigio se basa en bienes o derechos, se debe utilizar el avalúo oficial del catastro o el pago de impuestos para determinar la base del porcentaje, a menos que se acuerde otro valor válido o se realice una tasación judicial.

Contrato de Adhesión

La Ley No. 358-05 es la Ley General de Protección del Consumidor o Usuario de la República Dominicana, que establece un régimen legal para garantizar la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones de consumo, protegiendo a consumidores y usuarios de bienes y servicios en el país. Fue creada para defender los derechos de estos grupos, garantizando principios como salud, información, equidad económica, transparencia y acceso a mecanismos de resolución de conflictos, y para ello se creó la entidad Pro Consumidor.

Objetivo principal

El objetivo principal de la ley es establecer un marco de defensa que garantice la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, promoviendo un ambiente de equidad y seguridad en todas las relaciones de consumo.

Derechos fundamentales del consumidor

La ley reconoce una serie de derechos fundamentales para los consumidores y usuarios, entre los que destacan:

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Salud y seguridad: Protección de la salud, seguridad y vida del consumidor.
- Información: Derecho a una información objetiva, veraz y oportuna sobre los productos y servicios.
- Equidad: Derecho a un trato justo y a la protección contra prácticas abusivas.
- Transparencia: Garantía de la transparencia en las condiciones contractuales.
- Educación: Derecho a la educación y orientación para un consumo responsable.
- Indemnización: Derecho a ser compensado o indemnizado por daños causados por productos o servicios de mala calidad.

Contrato Laboral

Según el Código de Trabajo de la República Dominicana (Ley 16-92), los principales tipos de contratos de trabajo son el Contrato por Tiempo Indefinido, el Contrato por Cierta Tiempo (o por un período determinado) y el Contrato para Obra o Servicio Determinado. Cada modalidad se adapta a diferentes necesidades laborales y debe formalizarse por escrito, aunque los contratos de obra o servicio determinado requieren de la notificación del fin de la labor para su extinción.

Aquí tienes una descripción de cada uno:

1) Contrato por Tiempo Indefinido

- Descripción: Es la forma más común y estándar de contrato, sin una fecha de finalización especificada.
- Características: Ofrece mayor estabilidad laboral para el empleado y es el tipo de contrato que se presume si no se especifica lo contrario en un acuerdo.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

2) Contrato por Cierta Tiempo

- Descripción: Se celebra para cubrir una necesidad temporal de la empresa, como un proyecto específico o una tarea temporal.
- Formalización: Requiere estar por escrito y su duración está limitada a una fecha de inicio y fin.

3) Contrato para Obra o Servicio Determinado

- Descripción: Se utiliza para una tarea o proyecto concreto, y la relación laboral concluye al finalizar dicha obra o servicio.
- Formalización: Debe formalizarse por escrito.

Otras modalidades importantes

Además de las tres categorías principales, existen otras formas específicas:

- Contrato de Trabajo por Temporada:

Se emplea para actividades laborales que se repiten de forma cíclica durante ciertos períodos del año.

- Contratos Especiales:

El Código de Trabajo establece regímenes especiales para ciertos trabajadores, como los del servicio doméstico, el campo, a domicilio, transportistas, vendedores y otros.

Contravención

Una contravención es una infracción menor a la ley, menos grave que un delito, que pone en riesgo un bien jurídico y se sanciona con penas más leves, como multas o la privación de derechos, y no con privación de libertad prolongada. Los tipos varían según la gravedad y el bien jurídico afectado; por ejemplo, en el ámbito penal se clasifican por el tipo de infracción y bien jurídico, mientras que en materia de tránsito se dividen en flagrantes (con arresto inmediato) y no flagrantes (con multa).

Concepto de Contravención

- **Infracción Leve:**

Es una conducta antijurídica (contraria a la ley) de menor gravedad que un delito.

- **Peligro para un Bien Jurídico:**

Aunque es menor, la conducta contravencional pone en peligro o afecta un bien jurídico tutelado (como el patrimonio o la seguridad social).

- **Sanción Menor:**

La consecuencia de una contravención es una pena más leve que las de un delito, como una multa pecuniaria, la privación de algún derecho o, en algunos casos específicos, una pena privativa de libertad de corta duración.

Tipos de Contravenciones

Los tipos de contravenciones pueden clasificarse según diferentes criterios:

- **Por gravedad o naturaleza de la sanción:**
 - **Contravenciones Penales:** Son las que el derecho penal considera de menor entidad, castigadas con multas o sanciones no privativas de libertad, según lo define la ley.
 - **Contravenciones Administrativas:** A menudo se refieren a la violación de normas locales o reglamentarias, como las de tránsito, que no constituyen delitos penales.

Por su manifestación o tipo de falta (Ejemplos):

- **Contravenciones contra la propiedad y patrimonio:** Daños leves a propiedades sin permiso, como pegar carteles o grafitis en paredes ajenas.
- **Contravenciones de orden público:** Conductas como alborotos, riñas menores o el uso de palabras obscenas en lugares públicos.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Contravenciones de tránsito: Infracciones a las normas de circulación vial. Se distinguen dos clases importantes:
 - Flagrantes: Se sancionan con pena de privación de libertad y implican la detención del infractor para ponerlo a disposición de la justicia.
 - No Flagrantes: Se castigan únicamente con sanciones pecuniarias (multas) o la reducción de puntos.

Contravención Penal

En la República Dominicana, una contravención penal se entiende como la infracción castigada por la ley con penas de policía. Estas son infracciones de menor gravedad, consideradas de menor daño social que un delito o crimen, y se sancionan con penas de policía, también llamadas penas menores o policivas.

Características de las contravenciones

- Infracciones de menor gravedad:

A diferencia de los delitos y crímenes, las contravenciones son conductas que lesionan de manera menos grave los intereses sociales.

- Penas de policía:

El rasgo distintivo es que las leyes las castigan con penas de policía, que son de menor entidad que las penas correccionales o aflictivas de los delitos.

- Legales y anteriores:

Al igual que los delitos y crímenes, las contravenciones solo pueden ser penadas si existe una disposición legal previa a su comisión.

En resumen

Una contravención penal en el contexto dominicano es una infracción menor que recibe una sanción menor, de ahí la clasificación de penas de policía, y su naturaleza es siempre la de un acto ilícito definido previamente por una ley.

Contribuyente de la Obligación Tributaria

De acuerdo con el párrafo II del Código Tributario, la capacidad tributaria de las personas naturales es independiente de su capacidad civil y de las limitaciones de ésta.

- a) Contribuyente; o,
- b) Responsable.

Contribuyente

Según el artículo 5 del Código Tributario Contribuyente es aquel respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Agrega que las obligaciones y derechos del contribuyente fallecido serán cumplidas o ejercidos, en su caso, por los herederos sucesores y legatarios, sin perjuicio del derecho a la aceptación de herencia a beneficio de inventario.

En síntesis, el contribuyente es la persona sobre la cual se produjo el hecho generador del tributo, o sea por una deuda propia.

Cumplimiento de Deberes

Asimismo, este Código señala que los contribuyentes están obligados al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de los deberes formales establecidos en este Código o en normas especiales. Agrega que la exención de la obligación tributaria, no libera al contribuyente del cumplimiento de los demás deberes formales que le corresponden y que las obligaciones tributarias podrán ser cumplidas por medio de representantes legales o mandatarios.

Control de Precios

En República Dominicana, el control de precios se rige principalmente por la Ley No.358-05 General de Protección del Consumidor o Usuario, que creó Pro Consumidor, y por la Ley 526 de 1969, que estableció el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) para regular productos agropecuarios y la canasta básica. No existe una ley única de control de precios, sino un marco legal que incluye la Ley 358-05 para la protección del consumidor y la labor del INESPRE en la estabilización de precios de productos fundamentales.

Marco legal y organismos:

- Ley No. 358-05 General de Protección del Consumidor o Usuario:

Esta ley establece los derechos de los consumidores y creó Pro Consumidor, que se encarga de la defensa de los derechos del consumidor y la supervisión de los mercados.

- Ley 526 de 1969:

Esta ley creó el INESPRE, cuyo objetivo es regular los precios de los productos agropecuarios y de la canasta básica fundamental.

Actividad de control de precios:

- INESPRE:

Se enfoca en la estabilización de precios de productos agropecuarios y de la canasta básica.

- Pro Consumidor:

Aunque no fija precios directamente, supervisa el mercado para proteger los derechos de los consumidores, incluyendo el derecho a información sobre los precios y la calidad de los productos y servicios.

Nota sobre el mercado:

- La venta de muchos productos, especialmente en el mercado y los supermercados, se rige por la oferta y la demanda, con poca intervención directa del Estado en los precios individuales de estos bienes, a pesar de la existencia de estos organismos.

Convenio Internacional

Constitución

El artículo 26 de la constitución establece lo siguiente:

Artículo 26.- Relaciones internacionales y derecho internacional. La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, en consecuencia:

- 1) Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado;
- 2) Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial;
- 3) Las relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional;
- 4) En igualdad de condiciones con otros Estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones;
- 5) La República Dominicana promoverá y favorecerá la integración con las naciones de América, a fin de fortalecer una comunidad de naciones que defienda los

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

intereses de la región. El Estado podrá suscribir tratados internacionales para promover el desarrollo común de las naciones, que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes, y para atribuir a organizaciones supranacionales las competencias requeridas para participar en procesos de integración;

6) Se pronuncia en favor de la solidaridad económica entre los países de América y apoya toda iniciativa en defensa de sus productos básicos, materias primas y biodiversidad.

Lo anterior significa que en la República Dominicana, los tratados internacionales ratificados y publicados oficialmente son parte del derecho interno según el Artículo 26 de la Constitución y se aplican por encima de las leyes nacionales. Si bien no existe una ley única que regule todos los tratados internacionales, su aplicación se rige por la Constitución, leyes específicas como la Ley 544-14 sobre Derecho Internacional Privado (que establece que sus disposiciones se aplicarán solo en la medida en que sean conformes a los tratados), y leyes de implementación para acuerdos específicos como el DR-CAFTA.

Fuentes que rigen los tratados internacionales:

- La Constitución de la República:

Establece que los tratados internacionales ratificados y publicados son vinculantes en el orden interno.

- La Ley 544-14 de Derecho Internacional Privado:

Regula el derecho aplicable en relaciones privadas internacionales, pero aclara que sus disposiciones se aplican solo si son compatibles con los tratados internacionales de los que la República Dominicana sea parte.

- Leyes de implementación de acuerdos específicos:

Para tratados como el DR-CAFTA, se han promulgado leyes específicas que establecen las normas necesarias para su aplicación en el país, modificando o creando legislación en áreas como propiedad industrial, aduanas y derecho procesal.

Proceso de aplicación:

1. Suscribir y Ratificar:

El Presidente de la República suscribe el tratado, y luego las cámaras legislativas lo ratifican.

2. Publicación Oficial:

El tratado debe ser publicado oficialmente para que entre en vigor y tenga efectos internos.

3. Supremacía:

Una vez publicados, los tratados internacionales tienen primacía sobre la ley interna dominicana.

Correo o Servicio Postal

La regulación del servicio postal en República Dominicana está regida por la Ley 307 de 1985 y el organismo encargado es el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), que regula su funcionamiento. Adicionalmente, la Ley 310-14 regula el envío de correos electrónicos comerciales no solicitados (spam), y la Ley 12602 sobre comercio electrónico aborda la validez legal de los documentos y mensajes digitales.

Para el servicio postal tradicional:

- Ley 307 de 1985:

Esta ley creó el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) como un organismo autónomo para gestionar y regular el servicio postal en el país.

- INPOSDOM:

Se encarga de la movilización de cartas, bultos postales y otros tipos de correspondencia, además de gestionar el servicio de apartados postales.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Para correos electrónicos:

- Ley 310-14:

Tiene como objetivo regular el envío de comunicaciones comerciales, publicitarias o promocionales no solicitadas (spam) a través de correos electrónicos.

- Ley 126-02:

Establece el marco para el uso de documentos digitales y mensajes de datos en el comercio, regulando la comunicación a través de medios electrónicos.

En resumen, para el servicio postal físico se usa la ley del INPOSDOM, mientras que para el correo electrónico comercial no deseado se utiliza la Ley 310-14 y la Ley 12602 para los aspectos más generales del comercio electrónico.

La Ley 307 de 1985 de la República Dominicana es la ley que creó el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), un organismo autónomo encargado de regular el servicio postal nacional. Esta ley fue fundamental para establecer un sistema que garantizara la transferencia eficiente y profesional de las comunicaciones postales, satisfaciendo las necesidades de la población con calidad y profesionalidad.

Detalles clave de la Ley 307 de 1985:

- **Objetivo:** Establecer y organizar el servicio postal en la República Dominicana.
- **Creación:** Fue emitida el 15 de noviembre de 1985.
- **Institución creada:** El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM).
- **Misión del INPOSDOM:** Asegurar la calidad del servicio postal, incluyendo la movilización de correspondencias, bultos y otros servicios relacionados, con una visión de satisfacción al cliente y profesionalidad.
- **Importancia:** Reconoció el servicio postal como un factor crucial para el desarrollo económico y cultural del país.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

En resumen, la Ley 307-85 es el marco legal que dio origen y define el funcionamiento del INPOSDOM, el ente regulador de los servicios postales en República Dominicana.

Cortesía

No hay una única ley que regule la "cortesía" en la República Dominicana de forma general, sino que el concepto está presente de forma transversal en leyes que protegen la dignidad humana y establecen principios para la conducta y las relaciones sociales. Por ejemplo, la Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona, la Ley 107-13 establece principios para las relaciones entre las personas y la administración pública, y el Código de Moral y Ética (o sus equivalentes en la función pública) establece normas de conducta.

Aspectos legales y constitucionales relacionados con la cortesía:

- Constitución de la República Dominicana:

El Artículo 38 establece que el Estado se organiza para la protección de la dignidad de la persona, considerándola sagrada, innata e inviolable. Esto implica una responsabilidad de los poderes públicos en el trato respetuoso.

- Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública:

Esta ley regula los derechos y deberes de las personas en sus interacciones con el Estado y establece los principios que deben regir dicha relación, incluyendo el respeto mutuo.

- Código de Ética y otros reglamentos internos:
 - Fuerzas Armadas: La cortesía y la disciplina son pilares de la conducta militar, plasmadas en normativas internas y códigos que exigen un trato respetuoso y una conducta ejemplar.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Servidores Públicos: La Ley No. 120-01 que instituye el Código de Ética del Servidor Público y la Ley No. 41-08 de Función Pública contienen principios y normativas que rigen la conducta y el trato de los servidores públicos.

Derechos Humanos y Dignidad:

La protección de la dignidad humana en la Constitución (Artículo 38) y en la Ley 107-13 (como principio de la actuación administrativa) son el fundamento de lo que consideramos cortesía en el ámbito público.

En resumen, la cortesía es un valor que se promueve a través de la protección de la dignidad, la buena conducta y el respeto mutuo, lo cual está contemplado en diversos marcos legales y normativos de la República Dominicana, sin existir una ley específica denominada "ley de cortesía".

Cosa Juzgada

Este principio de cosa Juzgada tiene su fuente en el principio de que Nadie Puede ser Juzgado Dos Veces por una misma causa o Hecho, conocido como Nom Bis In Idem.

El principio de Cosa Juzgada o de "no juzgar dos veces por el mismo delito", es una garantía jurídica que prohíbe que una persona sea procesada o sancionada en dos ocasiones por la misma infracción, ya sea con dos penas, una pena y una sanción, o dos sanciones. Este principio tiene sus raíces en el derecho romano y busca proteger al ciudadano de la persecución o sanción excesiva del Estado, asegurando que una vez concluido un proceso por un mismo hecho, no se vuelva a juzgar al mismo sujeto por la misma conducta.

Constitución de la República.

Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:

- 5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;

Características principales:

- Protección del ciudadano:

Es un derecho fundamental que salvaguarda a la persona de ser sometida a múltiples juicios o sanciones por una misma conducta.

- Triple identidad:

Para que se aplique, debe existir identidad en tres elementos: el sujeto (la misma persona), el hecho (la misma conducta) y el fundamento (el mismo bien jurídico o motivo de persecución).

- Origen histórico:

El principio tiene un origen muy antiguo en el derecho romano, como se evidencia en textos como el Digesto.

Propósito del principio:

- Garantizar la seguridad jurídica: Evita la incertidumbre y la arbitrariedad en la aplicación de la ley.
- Limitar el poder punitivo del Estado: Impide que las autoridades vuelvan a castigar o perseguir a una persona que ya ha sido juzgada y sancionada.
- Evitar la duplicidad de sanciones: Asegura que no se impongan múltiples penas o sanciones por un solo acto ilícito.

Condiciones.

Para determinar si existe cosa juzgada o prohibición de doble persecución (ne bis in idem), se exige la concurrencia simultánea de tres elementos:

- 1) Identidad de las partes (sujetos):
- 2) Identidad del petitorio (lo que se pide); y,
- 3) Identidad de la causa de pedir (el fundamento fáctico o jurídico de la pretensión).

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Si estos tres criterios coinciden, se considera que hay una repetición de procesos.

¿Qué son los tres elementos?

1) Identidad de partes (o sujetos):

Se refiere a que los mismos individuos (personas físicas o jurídicas) sean los que intervienen en ambos procesos.

2) Identidad del petitorio (o cosa pedida):

Implica que lo que se reclama o se busca obtener en el nuevo proceso debe ser exactamente lo mismo que ya se pidió en el proceso anterior.

3) Identidad de la causa de pedir (o fundamento):

Significa que el motivo o la razón fundamental por la que se inicia el proceso debe ser el mismo en ambos casos.

Además, para su aplicación debe tratarse de una Cosa Irrevocablemente juzgada.

¿Para qué se aplica?

- Cosa juzgada:

Para asegurar que un caso resuelto judicialmente no sea vuelto a discutir, se requiere una triple identidad.

- Ne bis in idem:

Este principio garantiza que nadie pueda ser procesado o sancionado dos veces por el mismo hecho, lo cual se verifica con la identidad de sujeto, objeto y causa.

Costas Judiciales

Las costas judiciales son todos los gastos económicos necesarios para llevar adelante un proceso legal, como honorarios de abogados y peritos, tasas, y copias, que generalmente se imponen a la parte perdedora para resarcir a la ganadora. En la República Dominicana, la ley principal que las regula es el Código de Procedimiento Civil, específicamente su artículo 131 y la Ley No. 296 de 1940 que lo modifica, autorizando al juez a compensar las costas en determinados casos.

¿Qué se entiende por costas judiciales?

Son los gastos que surgen durante un proceso judicial y que una parte, generalmente la vencida, debe asumir para cubrir los costos del proceso y la defensa de la parte ganadora.

Ejemplos de costas judiciales incluyen:

- Honorarios de abogados y procuradores.
- Gastos de peritajes y otros informes técnicos.
- Tasas judiciales y otros impuestos del procedimiento.
- Costos de publicaciones en boletines, copias, traducciones y notificaciones.

¿Qué ley las regula en República Dominicana?

La regulación principal se encuentra en el Código de Procedimiento Civil, específicamente el artículo 131, modificado por la Ley No. 296 de 1940. Esta ley otorga al juez la facultad de compensar las costas en ciertos supuestos, como cuando una parte presenta un caso sin mérito, lo que desincentiva las demandas infundadas.

¿Quién paga las costas?

Por regla general, la parte que pierde un proceso judicial (la parte vencida) es condenada al pago de las costas, buscando resarcir los gastos del litigio a la parte vencedora.

Couriers o Envíos Expresos

La normativa que regula los couriers en la República Dominicana se basa principalmente en el Decreto 402-05 sobre el despacho expreso de envíos, así como la Ley 168-21 de Aduanas y sus reglamentos. Es obligatorio el Registro RUA para todos los usuarios de servicios de courier, el cual protege la identidad del usuario y clasifica los envíos como personales o comerciales, lo que afecta los impuestos y regulaciones aplicables.

Marco Legal y Normativas Clave

- Decreto 402-05: Establece el reglamento para el despacho expreso de envíos (courier).
- Ley 168-21: La ley de Aduanas que regula el régimen aduanero en el país.
- Registro RUA: Un registro de usuarios para el servicio de despacho expreso. Debe ser completado por cualquier persona física o jurídica que utilice servicios de courier, según la Norma General 01-2018, para proteger la identidad y los beneficios de los usuarios.

Aspectos Relevantes para los Usuarios

- Impuestos para Compras Personales:

Los envíos Courier de fines personales que no excedan los 200 dólares están exentos de impuestos, de acuerdo con la ley.

- Clasificación de Envíos:

El Registro RUA clasifica al usuario como comprador personal o comercial, y esta clasificación es fundamental para la aplicación de los impuestos.

- Protección de la Identidad:

El registro protege a los usuarios contra el uso no autorizado de su información, como la cédula o el pasaporte, por parte de terceros.

Para Empresas Operadoras de Courier

- Las empresas que deseen operar como couriers en la República Dominicana deben obtener una licencia de la Dirección General de Aduanas (DGA).
- Deben cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente, incluyendo el establecimiento de una estructura física, sistemas de contabilidad y registros financieros adecuados.

El Reglamento sobre Importación y Exportación Vía Courier en la República Dominicana es el Decreto No. 107-98, emitido el 11 de marzo de 1998, que establece las normas y procedimientos para el tráfico de mercancías a través de servicios de correo rápido o courier, derogando reglamentos anteriores para este tipo de operaciones aduaneras.

Aspectos Clave del Decreto 107-98

- **Marco Legal:**

Es la legislación que regula específicamente las actividades de importación y exportación realizadas por empresas de correo rápido en el país.

- **Derogación de Normativa Anterior:**

Este decreto reemplazó al Reglamento No. 196-91, estableciendo un nuevo marco para la gestión del tráfico de courier.

- **Lucha contra el Fraude:**

La administración aduanera debe supervisar rigurosamente el cumplimiento de las leyes para prevenir el contrabando, el fraude y el tráfico de drogas en los envíos courier.

- **Revisión y Control:**

Las aduanas se reservan el derecho de realizar revisiones posteriores de los envíos y de la documentación presentada por las empresas de courier.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Contexto de Emisión:**

Fue promulgado en Santo Domingo de Guzmán, el 11 de marzo de 1998.

¿Cómo acceder al texto completo?

Para obtener el texto completo y oficial del Decreto 107-98, se recomienda consultar fuentes legales confiables como la Gaceta Oficial de la República Dominicana.

Crédito Fiscal

En la República Dominicana, un crédito fiscal es una cantidad de dinero que se le descuenta directamente al impuesto a pagar. Se puede entender de dos maneras principales: como un beneficio para el contribuyente que reduce el total a pagar, o como el monto del ITBIS pagado en compras de bienes o servicios que se utiliza como crédito en la declaración del mismo impuesto, lo que disminuye la carga tributaria final del comprador.

Crédito fiscal como beneficio de ley

- **Reducción directa:**

Es una cantidad que se resta directamente del monto total de impuestos que una persona o empresa debe pagar. Por ejemplo, si se debe RD\$10,000 y se tiene un crédito fiscal de RD\$2,000, solo se pagarán RD\$8,000.

- **Diferencia con deducciones:**

A diferencia de las deducciones que reducen la base imponible (el total de ingresos sobre el que se calcula el impuesto), el crédito fiscal reduce directamente la factura de impuestos.

Crédito fiscal del ITBIS

- Por compras:

Cuando un negocio compra bienes o servicios que están gravados con ITBIS, paga ese impuesto al proveedor.

- Factura de crédito fiscal:

La factura que emite el proveedor es el "comprobante fiscal" que acredita ese pago

- Liquidación de impuestos:

Al final del período impositivo, el comprador puede usar el ITBIS que pagó (el crédito fiscal) para restar del ITBIS que cobró a sus clientes. Esto se hace al momento de liquidar su declaración de impuestos, de modo que solo paga la diferencia.

Crimen

Un crimen es una acción u omisión que atenta contra bienes jurídicamente protegidos (vida, propiedad, libertad, etc.) y que está prohibida y castigada por la ley, violando normas morales y éticas de una sociedad. Se clasifican según la gravedad (menos gravosas) y el bien jurídico afectado (contra la persona, la propiedad, la salud pública, las finanzas, el Estado, etc.).

Concepto de Crimen

- **Acción u Omisión:** Un crimen puede ser una acción (por ejemplo, matar) o una omisión (por ejemplo, no prestar socorro en un caso de emergencia que se requiera por ley).
- **Violación Legal:** Implica la transgresión de una ley penal.
- **Bien Jurídico Protegido:** Afecta directamente un bien que la sociedad considera valioso y que la ley busca proteger, como la vida, la libertad, el patrimonio o la salud.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Sanción Legal: La ley establece una pena para quien comete un crimen.

Tipos de Crimen

Los crímenes se pueden clasificar de diversas formas. Las más comunes son:

1) Por su Gravedad

- Delitos Graves: Infracciones de mayor impacto, como el asesinato, el secuestro o el tráfico de drogas.
- Delitos Menos Graves: Delitos con consecuencias intermedias, como el vandalismo.
- Delitos Leves: Infracciones con una menor gravedad y una pena más leve, como algunas amenazas o hurtos.

2) Por el Bien Jurídico Afectado

- Delitos contra la Persona: Atentan contra la vida, la integridad física, la salud, la libertad o la dignidad de un individuo. Ejemplos: asesinato, violación, secuestro.
- Delitos contra la Propiedad: Implican acciones ilegales que afectan los bienes materiales de una persona o entidad. Ejemplos: robo, hurto, incendio provocado.
- Delitos Financieros: Involucran manipulación fraudulenta de dinero o recursos económicos.
- Delitos Cibernéticos (Ciberdelitos): Actividades ilegales que utilizan tecnologías de la información y comunicación, como fraudes en línea o robo de identidad.
- Delitos contra la Salud Pública: Acciones que afectan negativamente la salud y el bienestar de la población en general.
- Delitos contra el Estado o Políticos: Infracciones que afectan la seguridad o el funcionamiento del Estado.

Crimen Organizado

En República Dominicana no existe una única "Ley contra el Crimen Organizado", sino un marco legal que abarca la lucha contra diversas modalidades de delitos, siendo la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo una de las más relevantes. Esta ley, junto a otras como la Ley 137-03 sobre Trata de Personas y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, contribuyen a dismantelar y sancionar las estructuras criminales.

Legislación clave para combatir el crimen organizado:

- Ley 155-17 (Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo):

Esta ley, que derogó la Ley 72-02, es fundamental porque tipifica los actos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, estableciendo sanciones penales y alineando la normativa dominicana con estándares internacionales, como los del GAFI. Su objetivo es blindar el sistema financiero y combatir los delitos que lo amenazan.

- Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas:

Esta ley aborda y sanciona estos delitos que a menudo son cometidos por organizaciones criminales, e incluye modificaciones recientes para mejorar su efectividad.

- Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología:

Esta ley se enfoca en los delitos cometidos a través de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, un área donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia.

- Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas:

Es una de las normativas más antiguas y pilares en la lucha contra delitos relacionados con el narcotráfico, una actividad intrínsecamente ligada a organizaciones criminales.

Mecanismos de coordinación y persecución:

Para complementar estas leyes, se han establecido organismos y mecanismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que analiza los reportes de operaciones sospechosas, y la Comisión Interinstitucional contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (CICDAT), que coordina esfuerzos entre diferentes entidades para prevenir y combatir estos delitos.

Por lo tanto, en República Dominicana, el crimen organizado es penalizado principalmente a través de la Ley 74-25 (el nuevo Código Penal Dominicano), que entró en vigencia en agosto de 2026, endureciendo las penas por delitos graves como el sicariato, y estableciendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, otras leyes específicas como la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos abordan aspectos específicos del crimen organizado.

Ley 74-25 (Nuevo Código Penal Dominicano)

- Sanción de delitos graves:

La nueva ley incrementa las penas por delitos graves, permitiendo la acumulación de condenas hasta 60 años en casos de múltiples infracciones.

- Tipificación del sicariato:

Se tipifica el sicariato y el feminicidio, que incluye la planificación y ejecución de un asesinato, así como las acciones de ciberacoso y chantaje por medios electrónicos.

- Responsabilidad penal de personas jurídicas:

Se establece que las empresas y corporaciones pueden ser sancionadas por delitos cometidos en su nombre, lo que fortalece la lucha contra la delincuencia corporativa.

Otras leyes relevantes

- Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas:

Sanciona las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de personas, una faceta del crimen organizado.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Ley 155-17 sobre Lavado de Activos:

Deroga leyes anteriores para actualizar y fortalecer la lucha contra el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, incluyendo las del tráfico de drogas.

- Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas:

Esta ley antigua aborda el manejo de drogas ilícitas, que está fuertemente ligado al crimen organizado.

Contexto de la reforma

- La Ley 74-25 sustituye un Código Penal de 1884, considerado obsoleto frente a la criminalidad moderna.
- La implementación de esta ley busca modernizar la justicia penal, fortalecer la seguridad ciudadana y responder de manera más efectiva a los nuevos desafíos del crimen.

Crimen Penal

En República Dominicana un crimen penal es una infracción que las leyes castigan con una pena aflictiva o infamante, y no se debe confundir con un delito, que se castiga con penas correccionales, o una contravención, que se sanciona con penas de policía. El nuevo Código Penal de la República Dominicana, Ley 74-25, incluye las penas aflictivas y las infamantes, pero también la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que marca una diferencia con el Código anterior.

Definición de Crimen Penal

- Infracción con pena aflictiva o infamante: Un crimen se distingue de otras infracciones penales por la gravedad de la sanción que le impone la ley. Las penas aflictivas son aquellas que causan un daño corporal o una privación de libertad severa, mientras que las infamantes pueden incluir la degradación cívica.

Diferencias con otras Infracciones

- Delito: Se refiere a infracciones castigadas con penas correccionales, que son menos severas que las aflictivas o infamantes de los crímenes.
- Contravención: Es la infracción más leve, castigada con penas de policía.

Principios Fundamentales

- Principio de Legalidad:

No hay crimen, delito o contravención sin una ley que lo prevea y castigue de forma previa a su comisión.

- Responsabilidad Penal:

Las personas son penalmente responsables si cometen un hecho con intención o culpa. También se consideran responsables los autores, cómplices y quienes provocan o facilitan la comisión de la infracción.

- Responsabilidad de Personas Jurídicas:

El nuevo Código Penal Dominicano, Ley 74-25, reconoce la responsabilidad penal de las empresas y corporaciones, permitiendo que sean sancionadas por delitos cometidos en su nombre o beneficio.

Criptomoneda

La criptomoneda o criptodivisa es un tipo de moneda digital que utiliza la criptografía para proporcionar un sistema de pagos seguro. Estas técnicas de cifrado sirven para regular la generación de unidades monetarias y verificar la transferencia de fondos. No necesitan de un banco central u otra institución que las controle.

Las criptomonedas son un tipo de moneda digital, que son aquellas que no existen de forma física, pero que sirven como moneda de intercambio, permitiendo transacciones instantáneas a través de Internet y sin importar las fronteras. Otros tipos de moneda

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

digital son las monedas virtuales (normalmente controlada por los desarrolladores), dinero electrónico y cupones de Internet.

En el año 2009 apareció la primera criptomoneda completamente descentralizada, el Bitcoin, que fue creado por Satoshi Nakamoto junto con el software que lo sustenta (blockchain). A día de hoy no se sabe quién está detrás del nombre del creador. La aparición del bitcoin fue tan innovadora que los términos de criptomoneda y Bitcoin se funden en uno solo y es indistinto hablar de uno u otro.

En nuestros días, han aparecido más criptomonedas basadas en la pionera Bitcoin, que se conocen como altcoins.

Las criptomonedas son monedas digitales que utilizan la criptografía para asegurar las transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. Funcionan en una tecnología llamada blockchain, que es un libro de contabilidad distribuido y descentralizado.

- Precios y capitalización: Puedes consultar precios y gráficos en tiempo real en sitios como CoinMarketCap y Investing.com.
- Ventajas y riesgos: Las criptomonedas ofrecen ventajas como transacciones rápidas y bajas comisiones, pero también presentan riesgos, como la volatilidad del mercado y la falta de regulación.
- Internet del valor: Se les considera parte del "internet del valor", permitiendo el intercambio de valor de manera digital.

En la **República Dominicana**, la regulación de las criptomonedas es **cautelosa**. El **Banco Central de la República Dominicana (BCRD)** no reconoce las criptomonedas como moneda de curso legal y ha emitido advertencias sobre los riesgos asociados con su uso, como la volatilidad de los precios y el fraude. Aunque no hay una prohibición explícita, el BCRD advierte que las instituciones financieras no están autorizadas para operar con criptomonedas, lo que deja a los usuarios expuestos a riesgos significativos. Además, el BCRD ha señalado que no hay un marco legal claro que regule las criptomonedas, lo que ha generado incertidumbre legal.

Crueldad

La crueldad es un acto que inflige daño físico, psicológico o emocional, y está penalizada en la República Dominicana principalmente a través de la Ley 248-12 sobre Protección Animal para casos de maltrato animal, y en el caso de personas mediante el Código Penal y otras leyes para la protección de niños, niñas y adolescentes. Las sanciones varían según el tipo de crueldad y la víctima, pudiendo incluir multas y/o prisión.

Crueldad contra animales

- En qué consiste: Cualquier acto que cause sufrimiento o afecte el bienestar de un animal, como el maltrato, la tortura o la muerte intencional.
- Ley que la castiga: La Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable.
- Sanciones: Penas de prisión de entre seis (6) meses a un (1) año y multas de veinticinco (25) a cincuenta (50) salarios mínimos establecidos por la Tesorería de la Seguridad Social.

Crueldad contra personas (niños, niñas y adolescentes)

- En qué consiste:

El maltrato físico, psicológico, sexual, la negligencia o el abandono de un menor.

- Ley que la castiga:

El Código para la Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes (Ley 136-03).

- Sanciones:

La ley prohíbe el castigo físico, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y las sanciones que atenten contra la dignidad.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

La protección de niños, niñas y adolescentes en República Dominicana está principalmente regida por la Ley 136-03, que es el Código para el Sistema de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Este código establece una protección integral para garantizar sus derechos, desde el nacimiento hasta los 18 años, y define la responsabilidad del Estado, la sociedad y las familias. Además, el Código Penal, modificado por leyes como la 24-97 y la 106-13, tipifica y sanciona delitos específicos, como el abuso sexual, el incesto y el abandono, con penas que varían según la gravedad y la edad del menor.

Ley 136-03: Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

- Establece la protección integral de los derechos fundamentales de los menores de 18 años.
- Regula el papel y la relación del Estado, la sociedad y la familia con los niños, niñas y adolescentes.
- Prohíbe la divulgación de imágenes y datos que puedan afectar su desarrollo, honor y reputación.
- Tipifica el "abuso sexual" y establece la obligación de denunciar cualquier vulneración a los derechos de los menores.
- Garantiza el derecho a la vida, la salud, la nacionalidad y la integridad personal (física, psíquica, moral y sexual).

Código Penal y otras leyes

- **Ley 24-97:**

Modificó el Código Penal para incluir la protección de menores, aumentando las penas para delitos como el abandono, que si resultan en mutilación o muerte, se castigan como heridas o homicidio.

- **Ley 106-13:**

Modificó el Código del Menor (Ley 136-03) y establece las sanciones penales para los adolescentes, fijando penas de 1 a 5 años para los de 13 a 15 años, y de 1 a 8 años para los de 16 a 18 años, por privación de libertad definitiva.

- **Delitos específicos:**

El Código Penal tipifica delitos como el incesto y la agresión sexual, con sanciones que pueden incrementarse si la víctima es una persona especialmente vulnerable por su edad, enfermedad o discapacidad.

- **Protección contra la tortura:**

El Código Penal también penaliza la tortura o actos de barbarie, con penas más severas si son cometidas contra niños, niñas y adolescentes.

Crueldad contra personas (adultos)

- En qué consiste: Se considera un delito en el Código Penal cuando hay maltrato físico o psicológico, como los que pueden darse en casos de violencia de género o violencia doméstica.
- Ley que la castiga: El Código Penal y leyes complementarias.
- Sanciones: Se aplican las penas establecidas en el Código Penal, como la prisión.

Culto - Libertad de Culto

La libertad de culto es el derecho fundamental que tienen todas las personas a elegir libremente su religión o creencias, a no tener ninguna, y a practicar y manifestar su culto de forma individual o colectiva, tanto en privado como en público, sin sufrir discriminación o restricciones indebidas. Este derecho protege la libertad de conciencia y permite a las personas profesar, enseñar y difundir sus creencias, pero está sujeto a limitaciones necesarias para proteger la seguridad, el orden público, la salud, la moral o los derechos de otros.

Aspectos clave de la libertad de culto:

- Libertad de elección:

Se puede elegir o no tener ninguna religión o creencia.

- Libertad de profesar y manifestar:

Incluye la capacidad de expresar y divulgar las creencias, tanto individualmente como en comunidad.

- Dimensión colectiva:

Permite la participación en ceremonias, ritos y la organización de servicios religiosos.

- Protección de la conciencia:

Es un derecho humano que protege las convicciones más profundas de las personas.

Limitaciones y restricciones:

La libertad de culto no es absoluta y puede estar sujeta a limitaciones, las cuales deben ser:

- Establecidas por la ley.
- Necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas.
- Destinadas a proteger los derechos y libertades de otras personas.

Fundamentos legales:

Este derecho está reconocido en importantes instrumentos internacionales, como:

- La Declaración Universal de Derechos Humanos .
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .
- La Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones .

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

La ley de cultos en República Dominicana, aunque garantiza la libertad de conciencia y culto en el artículo 45 de la Constitución, presenta una situación compleja debido a un concordato de 1954 con la Santa Sede que establece al catolicismo como religión oficial y otorga privilegios especiales a la Iglesia Católica, generando desigualdades con otras confesiones.

Marco Legal:

- Constitución:

Reconoce la libertad de conciencia y de cultos, pero con sujeción al orden público y al respeto de las normas sociales.

Artículo 45.- Libertad de conciencia y de cultos. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres.

- Concordato:

Un acuerdo entre el Estado dominicano y la Santa Sede que establece al catolicismo como religión oficial y otorga a la Iglesia Católica ciertas prerrogativas y privilegios.

- Recurso de Inconstitucionalidad:

Se ha presentado un recurso contra el Concordato por considerar que genera desigualdad entre las religiones.

Desarrollo del Marco Legal:

- Igualdad ante la ley:

El artículo 39 de la Constitución establece la igualdad de todos los dominicanos ante la ley, sin discriminación por motivos de religión.

- Libertad de conciencia y culto:

Se garantiza la libertad de las personas de cambiar de religión o creencia, y de manifestar su religión o creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Educación religiosa:

Los padres y tutores tienen libertad para educar a sus hijos en la religión que deseen, y los niños no pueden ser obligados a recibir instrucción religiosa contraria a la voluntad de sus padres.

- Limitaciones:

Las limitaciones a la libertad religiosa deben estar establecidas por ley y tener como fin proteger el orden público, la seguridad, la salud, la moral y los derechos de los demás.

Desafíos y Tensiones:

- Desigualdad:

Algunos sectores consideran que el Concordato genera desigualdad entre la Iglesia Católica y otras religiones.

- Marco jurídico único:

Existe la necesidad de un marco jurídico único, plural y justo que garantice la libertad religiosa para todas las confesiones.

Fiscalización de organizaciones religiosas:

Se ha propuesto una ley para regular y fiscalizar las actividades de las organizaciones religiosas, lo que ha generado controversia.

- Objeción de conciencia:

La propuesta de ley omite el derecho a la objeción de conciencia, reconocido en pactos internacionales.

En resumen, la República Dominicana garantiza la libertad de culto, pero la relación con la Iglesia Católica, establecida en el Concordato, genera desigualdades que deben ser abordadas a través de un marco jurídico más equitativo para todas las religiones.

Cultura

A) Constitución

Artículo 64.- Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la Nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. En consecuencia:

- 1) Establecerá políticas que promuevan y estimulen, en los ámbitos nacionales e internacionales, las diversas manifestaciones y expresiones científicas, artísticas y populares de la cultura dominicana e incentivará y apoyará los esfuerzos de personas, instituciones y comunidades que desarrollen o financien planes y actividades culturales;
- 2) Garantizará la libertad de expresión y la creación cultural, así como el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades y promoverá la diversidad cultural, la cooperación y el intercambio entre naciones;
- 3) Reconocerá el valor de la identidad cultural, individual y colectiva, su importancia para el desarrollo integral y sostenible, el crecimiento económico, la innovación y el bienestar humano, mediante el apoyo y difusión de la investigación científica y la producción cultural. Protegerá la dignidad e integridad de los trabajadores de la cultura;
- 4) El patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado que garantizará su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor. Los bienes del patrimonio cultural de la Nación, cuya propiedad sea estatal o hayan sido adquiridos por el Estado, son inalienables e inembargables y dicha titularidad, imprescriptible. Los bienes patrimoniales en manos privadas y los bienes del patrimonio cultural subacuático serán igualmente protegidos ante la exportación ilícita y el expolio. La ley regulará la adquisición de los mismos.

Artículo 65.- Derecho al deporte. Toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y la recreación. Corresponde al Estado, en colaboración con los centros de

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

enseñanza y las organizaciones deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas actividades. Por tanto:

- 1) El Estado asume el deporte y la recreación como política pública de educación y salud y garantiza la educación física y el deporte escolar en todos los niveles del sistema educativo, conforme a la ley;
- 2) La ley dispondrá los recursos, estímulos e incentivos para la promoción del deporte para todos y todas, la atención integral de los deportistas, el apoyo al deporte de alta competición, a los programas y actividades deportivas en el país y en el exterior.

B) Ley 41-00 del Ministerio de Cultura

Dación en Pago

La dación en pago es un acuerdo entre deudor y acreedor para saldar una deuda mediante la entrega de un bien o prestación diferente a la originalmente pactada, extinguiendo así la obligación. Esta figura se regula principalmente en el Código Civil y es muy usada para evitar la ejecución forzosa.

¿En qué consiste?

- Es un contrato especial mediante el cual se extingue una obligación.
- El deudor entrega al acreedor un bien o servicio diferente al que se había acordado inicialmente.
- Es esencial que ambas partes lleguen a un acuerdo: el acreedor debe aceptar voluntariamente la nueva prestación como pago total de la deuda.
- A diferencia de otras formas de pago, la identidad de la prestación cambia con el consentimiento del acreedor, quien recibe el bien en lugar del dinero, por ejemplo.

Ley que la regula

- Código Civil: La dación en pago se fundamenta en el Código Civil. El artículo 1.175 del Código Civil establece la figura como una forma de pago.

Daños y Perjuicios

En República Dominicana, la ley sobre daños y perjuicios se rige principalmente por el Código Civil y el Código Penal, estableciendo el deber de reparar todo daño causado por un acto u omisión ilícita o culposa. Se requiere la existencia de un daño real y cierto, una relación causal entre el acto y el daño, y una acción u omisión ilícita o culposa. La Constitución Dominicana también establece la responsabilidad de las instituciones públicas y sus funcionarios por actuaciones administrativas antijurídicas.

Marco Legal Principal

- Código Civil:

Los artículos 1382 al 1386 del Código Civil son la base de la responsabilidad civil extracontractual, estableciendo la obligación de reparar el daño causado por un acto u omisión ilícita o culposa. Asimismo, los artículos 1146 y siguientes regulan el incumplimiento de obligaciones contractuales y la indemnización por los perjuicios resultantes. Veamos:

Art. 1382.- Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo.

Art. 1383.- Cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o su imprudencia.

Art. 1384.- No solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe responder, o de las cosas que están bajo su cuidado. El padre, y la madre después de la muerte del esposo, son responsables de los daños causados por sus hijos menores, que vivan con ellos. Los amos y comitentes, lo son del daño causado por sus criados y apoderados

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

en las funciones en que estén empleados. Los maestros y artesanos lo son, del causado por sus discípulos y aprendices, durante el tiempo que están bajo su vigilancia. La responsabilidad antedicha tiene lugar, a menos que el padre, la madre, los maestros y artesanos, prueben que les ha sido imposible evitar el hecho que da lugar a la responsabilidad.

Art. 1385.- El dueño de un animal, o el que se sirve de él por el tiempo de su uso, es responsable del daño que ha causado aquel, bien sea que estuviese bajo su custodia, o que se le hubiera extraviado o escapado.

Art. 1386.- El dueño de un edificio es responsable del daño que cause su ruina, cuando ha tenido lugar como consecuencia de culpa suya o por vicio en su construcción.

- Código Penal:

El artículo 51 del Código Penal establece que quien cause un daño está obligado a repararlo, y la indemnización puede ser determinada por el tribunal si la ley no lo ha especificado.

Elementos para Reclamar Daños y Perjuicios

Para que una persona pueda reclamar daños y perjuicios en República Dominicana, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- Existencia de un daño real y cierto:

El daño debe ser tangible y demostrable, no meramente hipotético.

- Relación causal:

Debe existir una conexión directa entre la conducta ilícita o el incumplimiento y el daño sufrido.

- Acción u omisión ilícita o culposa:

El daño debe derivar de un acto ilícito o una conducta negligente, o de un incumplimiento de obligaciones contractuales.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Capacidad para reclamar:

La persona directamente afectada, o sus herederos o representantes legales en caso de fallecimiento o incapacidad, pueden presentar la demanda.

Tipos de Daños

Los daños que pueden dar lugar a una indemnización incluyen:

- Daños materiales:

Pérdidas económicas directas, como daños a la propiedad, gastos médicos y pérdida de ingresos.

- Daños morales:

Perjuicios no económicos, como el sufrimiento emocional, el dolor y la pérdida de calidad de vida.

Responsabilidad de Personas Jurídicas

La Constitución de la República Dominicana establece que las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios son responsables de los daños y perjuicios ocasionados a terceros por actuaciones u omisiones administrativas antijurídicas.

Deberes de las Personas

Según el Artículo 75 de la Constitución Dominicana, los principales deberes de las personas incluyen: acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer a las autoridades, votar en las elecciones, prestar servicios civiles o militares para la defensa del país, y tributar de acuerdo a su capacidad para financiar el gasto público. Otros deberes fundamentales son abstenerse de actos perjudiciales a la soberanía nacional y participar en el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Constitución.

Además de otros deberes contemplados en las leyes, la Constitución consigna los deberes fundamentales de las personas al señalar lo siguiente:

Artículo 75.- Deberes fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes:

- 1) Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas;
- 2) Votar, siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo;
- 3) Prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y conservación, de conformidad con lo establecido por la ley;
- 4) Prestar servicios para el desarrollo, exigible a los dominicanos y dominicanas de edades comprendidas entre los dieciséis y veintiún años. Estos servicios podrán ser prestados voluntariamente por los mayores de veintiún años. La ley reglamentará estos servicios;
- 5) Abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la República Dominicana;
- 6) Tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente;
- 7) Dedicarse a un trabajo digno, de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad;
- 8) Asistir a los establecimientos educativos de la Nación para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria;
- 9) Cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social, de acuerdo con sus posibilidades;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 10) Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
- 11) Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano;
- 12) Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.

Deberes cívicos y políticos

- Cumplir y acatar las leyes:

Es obligatorio observar y obedecer la Constitución y las leyes del país, así como las disposiciones de las autoridades establecidas.

- Votar:

Los ciudadanos deben ejercer su derecho al voto en las elecciones para elegir a sus gobernantes.

- Defender la patria:

Se debe estar dispuesto a prestar los servicios civiles o militares que la patria requiera para su defensa y conservación.

- Participar en la vida democrática:

Esto incluye participar en el proceso democrático, estar informado de los asuntos que afectan a la comunidad y comprometerse con las soluciones a problemas sociales y políticos.

Deberes económicos

- Tributar:

Contribuir con el pago de impuestos de acuerdo con la ley y en proporción a la capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicas.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Trabajar:

Es un deber tener un trabajo digno y prepararse para asumir el destino del país.

Deberes sociales

- Asistir y amparar a la familia:

Es deber de las personas asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores, y los hijos deben asistir, alimentar y amparar a sus padres cuando éstos lo necesiten.

- Respetar los derechos de los demás:

Se debe respetar los derechos, creencias y opiniones de las demás personas, así como promover la igualdad.

- Proteger el medio ambiente:

Es un deber cuidar el medio ambiente, la flora y la fauna para el bienestar de la sociedad.

Deberes para con el Estado

- Servicios especiales:

Prestar servicios para el desarrollo nacional, como los exigibles a los jóvenes de entre dieciséis y veintiún años.

- Calidad de los servicios:

Se debe colaborar en el buen desarrollo de los procedimientos administrativos y ejercer los derechos con responsabilidad, evitando solicitudes improcedentes.

Deberes de los Contribuyentes

Impuestos Internos ha elaborado la Carta de Deberes de los Contribuyentes con el propósito de facilitar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias a través del conocimiento de los principales deberes que tiene ante la Administración.

Las funciones y atribuciones de Impuestos Internos tienen como base el Código Tributario de la República Dominicana y demás leyes tributarias, las cuales explican de manera detallada su ámbito de actuación como Administración Tributaria, así como las obligaciones y deberes que usted tiene que cumplir como contribuyente ante la Institución.

La idea es que se conozca los principales deberes que tiene ante la Administración, los cuales detallamos a continuación: I II III IV V VI VII VIII IX X

1) Deber de tributar en proporción a sus ingresos o bienes Las leyes tributarias establecen impuestos que deben ser pagados por los contribuyentes de acuerdo a las actividades económicas que realicen o los bienes que posean. El monto a pagar se determina de acuerdo a sus ingresos o bienes.

2) Deber de inscribirse en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) El RNC es el número o código que identifica a los contribuyentes y es asignado por Impuestos Internos. Debe utilizar el RNC en todos los documentos y transacciones que realice relacionados con sus obligaciones tributarias.

3) Deber de informar a Impuestos Internos cuando inicie sus actividades comerciales Las actividades que generan obligaciones tributarias deben ser de conocimiento de Impuestos Internos. También debe solicitar los permisos correspondientes antes de la instalación de nuevos locales.

4) Deber de emitir facturas con Números de Comprobante Fiscal (NCF) Debe solicitar a Impuestos Internos la autorización para emitir facturas con Números de Comprobante Fiscal para sustentar las transferencias de bienes o la prestación de servicios.

5) Deber de comunicar los cambios que modifiquen sus datos o su actividad Los cambios relacionados con el domicilio, el nombre comercial, teléfono, actividad económica o cualquier otro, deben ser comunicados dentro de los diez (10) días

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

posteriores a la fecha en que se realicen. Si decide poner fin a su negocio por causa justificada deberá informarlo a Impuestos Internos en un plazo de sesenta (60) días.

6) Deber de llevar los registros y los libros de contabilidad de las actividades y transacciones que realiza Las anotaciones en los registros y los libros de contabilidad deberán hacerse a medida que se desarrollen las operaciones y deben ser conservados por un período de diez (10) años; al igual que los recibos, comprobantes de pago o cualquier otro documento relacionado con dichas operaciones.

7) Deber de presentar las declaraciones que le corresponda para determinar el pago de los impuestos Las declaraciones de impuestos se presentan con los documentos e informaciones en las formas y plazos establecidos por las leyes y normas tributarias.

8) Deber de presentarse en las oficinas de Impuestos Internos cuando se le requiera La Administración Tributaria solicitará su presencia cuando lo considere necesario y es su deber como ciudadano responsable atender esta solicitud.

9) Deber de facilitar al personal de Impuestos Internos la revisión y verificación de sus actividades económicas La Administración Tributaria tiene la facultad para revisar y verificar las actividades económicas y es su deber como contribuyente facilitar estas labores.

10) Deber de informar a la Administración Tributaria las retenciones efectuadas Cuando efectúe las retenciones de impuestos debe informar y pagar a la Administración Tributaria en la forma y plazos establecidos en las leyes y normas tributarias. Cumpliendo con sus deberes tributarios, contribuye al bienestar común y el desarrollo del país.

Debido Proceso

En la República Dominicana, el debido proceso está principalmente regulado por el Artículo 69 de la Constitución, que establece las garantías mínimas, complementado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (Ley 137-11) y la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública. Además, en el ámbito

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

penal, el Código Procesal Penal y en procedimientos administrativos específicos se aplican normativas sectoriales que detallan las reglas del debido proceso.

Fundamentos Legales Clave

- **Constitución de la República Dominicana (Artículo 69):**

Establece la tutela judicial efectiva y el debido proceso, definiendo derechos como la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, a la defensa, a un juicio público y oral, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:

10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Esto significa que no solo a nivel judicial debe aplicarse el Debido Proceso, sino también en los juicios administrativos.

- **Ley 137-11 (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales):**

Regula los procedimientos para la protección de los derechos constitucionales, incluyendo los mecanismos de amparo que garantizan la aplicación del debido proceso.

- **Ley 107-13 (Ley sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública):**

Detalla los derechos de las personas frente a la administración pública, lo que incluye el derecho a un trato justo y el cumplimiento de procedimientos administrativos adecuados.

- **Código Procesal Penal (Ley 277-04 no aparece en los resultados, pero se infiere que hay un código penal específico para el debido proceso en materia penal):**

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Este código regula las reglas procesales en materia penal, garantizando el debido proceso para los imputados y las víctimas en los procedimientos judiciales.

Principios del Debido Proceso

El debido proceso se conforma por garantías mínimas, entre ellas:

- **Derecho a ser oído:** Ser escuchado dentro de un plazo razonable.
- **Derecho a la presunción de inocencia:** Ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario por sentencia irrevocable.
- **Derecho a la defensa:** Contar con una defensa técnica y material.
- **Derecho a un juicio justo:** Un proceso oral, público y contradictorio.
- **No ser juzgado dos veces por lo mismo:** El principio de non bis in idem.
- **Nulidad de pruebas obtenidas ilegalmente:** La inadmisibilidad de pruebas que violen la ley.

Aplicación a Diferentes Ámbitos

Las normas del debido proceso se aplican a todas las actuaciones, tanto judiciales como administrativas. Esto significa que la administración pública también debe respetar estas garantías al llevar a cabo procedimientos o al tomar decisiones que afecten a las personas.

La tutela judicial efectiva es el derecho fundamental de toda persona a acceder a la justicia para hacer valer sus derechos, obteniendo una resolución fundada y ejecutable tras un proceso que respete el debido proceso. El debido proceso, a su vez, es el conjunto de garantías mínimas (como el derecho a defensa, a un juez imparcial, a un plazo razonable y a una sentencia motivada) que aseguran que dicho proceso sea justo, equitativo y cumpla con los principios de legalidad y formalidades esenciales.

Tutela Judicial Efectiva

- **Acceso a la justicia:**

Es la posibilidad de acudir a los tribunales para defender intereses y derechos legítimos frente a cualquier acto que los lesione.

- **Resolución fundada y ejecutable:**

Implica no solo el acceso a la justicia, sino también el derecho a obtener una decisión judicial que resuelva el fondo del asunto de acuerdo a derecho y que pueda ser ejecutada.

- **Contenido complejo:**

Es un derecho de varias dimensiones, incluyendo el acceso, la ausencia de indefensión, la obtención de una decisión motivada y la ejecución de la misma.

Debido Proceso

- **Conjunto de garantías:**

Se refiere al conjunto de reglas y principios que deben observarse durante todo proceso judicial para asegurar la justicia y la equidad de las decisiones.

- **Plano formal y sustantivo:**

Contiene elementos formales (como el juez natural, el derecho de defensa, los plazos razonables y la motivación de las resoluciones) y elementos sustantivos que garantizan la justicia de la decisión.

- **Manifestaciones principales:**

Incluyen:

- Derecho a ser oído por un juez competente, imparcial e independiente.
- Derecho de defensa.
- Juicio público, oral y contradictorio.
- Plazo razonable y derecho a recurrir las sentencias.
- Presunción de inocencia.

Relación entre ambos conceptos

- **Género y especie:**

La tutela judicial efectiva es el género, mientras que el debido proceso es una de las especies o componentes fundamentales que la hacen posible. Es decir, una tutela judicial efectiva solo se satisface si se respeta el debido proceso durante todo el procedimiento.

- **Fundamento de la justicia:**

Ambos conceptos son pilares fundamentales para el ejercicio de la justicia, pues aseguran un resultado justo y equitativo para las personas inmersas en un proceso judicial.

Declaraciones de Bienes y Enriquecimiento Ilícito

En República Dominicana, el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos se regula principalmente a través de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y otras normativas anticorrupción, complementadas por el Código Penal y la Constitución. Esta ley establece la obligación de los servidores públicos de presentar declaraciones juradas de patrimonio para verificar el origen lícito de sus bienes y sanciona con prisión y multas a quienes no puedan justificar un incremento patrimonial notablemente superior a sus ingresos legales.

Marco Legal Principal:

- Ley 311-14:

Esta ley es el principal instrumento para prevenir y sancionar el enriquecimiento ilícito, ya que establece un sistema para las declaraciones juradas de patrimonio. Los funcionarios públicos deben presentar inventarios detallados de sus bienes al inicio y al final de sus funciones, y la Cámara de Cuentas es el órgano encargado de fiscalizar y aplicar esta ley.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Constitución Dominicana:

El Artículo 146 de la Constitución establece la prohibición de la corrupción y la obligación de los funcionarios públicos de presentar declaraciones juradas de bienes, así como de justificar el origen de su patrimonio.

- Código Penal:

El Código Penal también contempla el delito de enriquecimiento ilícito, definiendo sanciones para los funcionarios que incrementen su patrimonio sin justificación legal.

Concepto y Sanciones:

- ¿Qué es el enriquecimiento ilícito?

Se presume que existe enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital de un funcionario público durante su gestión es notablemente superior a los ingresos que legítimamente ha percibido legalmente, o cuando no puede justificar el origen de dicho incremento.

- Sanciones:

Los funcionarios responsables de enriquecimiento ilícito pueden ser sancionados con prisión, una multa equivalente al doble del monto del incremento patrimonial, y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Cómo se combate:

- Declaraciones Juradas:

La presentación obligatoria de declaraciones juradas de patrimonio es una herramienta clave para controlar y fiscalizar los bienes de los funcionarios públicos.

- Fiscalización:

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana es la entidad responsable de controlar y aplicar la Ley 311-14, asegurando la transparencia en las finanzas de los servidores públicos.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

- Modalidad de la declaración. La declaración jurada de patrimonio consiste en un inventario de bienes autenticados por notario público.

Decomiso de Bienes

El decomiso es una sanción de carácter administrativo o penal que implica la confiscación, por parte del Estado, de bienes que han sido utilizados directa o indirectamente en la comisión de un delito, o que son el resultado de actividades ilícitas. Esta medida busca no solo castigar al delincuente, sino también eliminar los recursos que puedan haber sido generados a través del delito, dificultando que se utilicen para futuras actividades criminales.

En otras palabras, el decomiso es una medida legal que permite al Estado confiscar bienes vinculados a delitos o actividades ilícitas. Regulado por leyes específicas, su objetivo es combatir el crimen organizado y retirar los bienes obtenidos de manera ilegal del control de los delincuentes.

En la República Dominicana, el decomiso se aplica principalmente en casos relacionados con el narcotráfico, lavado de activos, contrabando y otras actividades delictivas. Los bienes que pueden ser objeto de decomiso incluyen dinero, propiedades, vehículos, armas y otros activos vinculados con la actividad criminal. Este procedimiento está regulado por leyes específicas que detallan cuándo y cómo puede ordenarse el decomiso.

En el país el decomiso es regulado por varias leyes, destacando la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano, la Ley 50-88 de Drogas, y la Ley 340-22 de Extinción de Dominio. El decomiso implica la incautación de bienes, productos o instrumentos derivados de actividades ilícitas, buscando su traslado a la esfera del Estado.

Marco Legal del Decomiso en R.D.

- **Ley 155-17 y 72-02 (Lavado de Activos):**

Estas leyes, que evolucionaron desde la Ley 72-02, permiten el decomiso de bienes relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

- **Código Penal Dominicano:**

Establece el decomiso como una sanción penal para la confiscación de bienes que se utilizaron para cometer delitos o se obtuvieron a través de ellos.

- **Ley 50-88 sobre Drogas:**

La ley original sobre el narcotráfico contemplaba el decomiso de bienes relacionados con las drogas.

- **Ley 340-22 de Extinción de Dominio:**

Esta ley busca regular el proceso de extinción del dominio de bienes de origen ilícito, fortaleciendo los mecanismos para hacerlo efectivo.

- **Ley 60-23 de Administración de Bienes Incautados:**

Establece el régimen para la administración de bienes que han sido secuestrados, incautados o que se encuentren en estado de abandono dentro de procesos penales.

¿Qué se puede decomisar?

- **Bienes, productos e instrumentos del delito:**

Se decomisan los bienes que se obtuvieron directamente de la actividad ilícita o los que fueron utilizados para cometerla.

- **Bienes de valor equivalente:**

Si los bienes originales no se pueden decomisar, el tribunal puede ordenar el decomiso de otros bienes del condenado por un valor equivalente.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Ideas de Importancia relevante:

- El decomiso es la confiscación de bienes relacionados con actividades ilícitas, realizada por el Estado.
- Está regulado por leyes como la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y el Código Penal.
- Se aplica tanto a bienes utilizados en la comisión de un delito como a aquellos obtenidos mediante actividades ilegales.
- Los bienes decomisados pueden ser subastados o destinados a fines públicos, según la normativa vigente.
- El decomiso puede ordenarse tras una condena penal o, en algunos casos, mediante procedimientos administrativos.
- El decomiso tiene como objetivo reducir el beneficio económico de las actividades delictivas y dismantelar organizaciones criminales.

¿Dónde se regula el decomiso en la República Dominicana?

El decomiso en la República Dominicana está regulado por varias leyes, entre las cuales se destacan:

1) Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas: esta ley establece el decomiso de bienes relacionados con el tráfico de drogas y sustancias prohibidas. El artículo 91 de la Ley 50-88 contempla el decomiso de todos los bienes que sean producto de actividades de narcotráfico.

2) Código Penal dominicano: el Código Penal también contempla el decomiso como una sanción complementaria en ciertos delitos graves, permitiendo la confiscación de bienes utilizados en la comisión del delito o adquiridos a través de este.

3) Ley 72-02 sobre Lavado de Activos: esta ley se aplica en casos de lavado de dinero y otros delitos financieros, y permite el decomiso de bienes adquiridos con fondos ilícitos o que se utilizaron para facilitar la actividad delictiva.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

4) Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: esta ley amplía el marco legal del decomiso para incluir actividades relacionadas con el financiamiento del terrorismo y otras formas de crimen organizado.

Se entiende por decomiso o confiscación la privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal competente.

Artículo 4 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos de República Dominicana

Estas leyes proporcionan el marco legal para que el Estado pueda intervenir y decomisar bienes con el objetivo de dismantelar las estructuras financieras de las organizaciones criminales y evitar que los delincuentes sigan obteniendo beneficios de sus actividades ilícitas.

¿Qué tipos de decomiso existen?

Existen varios tipos de decomiso en la legislación dominicana, dependiendo del tipo de delito y del procedimiento judicial o administrativo aplicado. Los tipos más comunes son:

a) Decomiso penal

Este tipo de decomiso se ordena como parte de una sentencia penal condenatoria. Se realiza después de que un tribunal ha encontrado culpable al acusado y se determina que los bienes confiscados están relacionados con la comisión del delito. El decomiso penal se aplica principalmente en delitos como el narcotráfico, lavado de activos y corrupción.

Cuando una persona sea condenada por violación a la presente ley, el tribunal ordenará que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la infracción sean decomisados y destinados conforme a esta ley.

Párrafo I. La orden de decomiso especificará la propiedad y contendrá los datos correspondientes para identificar y localizar la misma.

Párrafo II. Cuando las propiedades obtenidas o derivadas, directa o indirectamente, de un delito han sido mezcladas con propiedades adquiridas de forma lícita, el decomiso de estas será ordenado solo por el valor de los bienes productos o instrumentos del delito.

Artículo 31 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos de República Dominicana

b) Decomiso administrativo

El decomiso administrativo puede realizarse sin necesidad de una condena penal, y se aplica en situaciones donde las autoridades encuentran bienes vinculados a actividades delictivas, incluso si no se ha identificado al responsable. Por ejemplo, en casos de contrabando, las mercancías pueden ser decomisadas de manera inmediata por las autoridades aduaneras.

c) Decomiso anticipado o cautelar

Este tipo de decomiso se realiza de manera preventiva antes de que se dicte una sentencia definitiva. Su objetivo es evitar que los bienes vinculados al delito sean vendidos, transferidos o ocultados mientras el proceso judicial está en curso. En este caso, los bienes quedan bajo custodia del Estado hasta que se dicte una sentencia final.

¿Cómo es el procedimiento de decomiso?

El decomiso puede seguir diferentes procedimientos, dependiendo de si es parte de un proceso penal o si se realiza de manera administrativa. A continuación, se describen los pasos generales de un decomiso penal:

1) Investigación y vinculación de bienes

El decomiso generalmente comienza con una investigación donde las autoridades identifican bienes que están relacionados con la actividad delictiva. Esto puede incluir propiedades, vehículos, dinero en cuentas bancarias, entre otros. Las autoridades deben demostrar la vinculación entre los bienes y el delito cometido.

2) Orden de decomiso

Una vez que los bienes han sido identificados, el fiscal o el juez puede emitir una orden de decomiso, la cual autoriza a las autoridades a confiscar los bienes. Esta orden puede incluir medidas cautelares como el embargo preventivo de cuentas bancarias o la incautación de propiedades.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

3) Confiscación de bienes

Los bienes son incautados por las autoridades y colocados bajo la custodia del Estado. Si se trata de dinero en efectivo o bienes muebles, estos son transferidos a las instituciones correspondientes para su gestión. Las propiedades inmobiliarias pueden ser intervenidas por el Consejo Nacional de Drogas o por otras instituciones estatales encargadas de gestionar los bienes decomisados.

4) Proceso judicial

El decomiso definitivo se ordena como parte de la sentencia penal condenatoria. En algunos casos, el tribunal puede permitir que los bienes sean subastados o destinados a programas públicos, siempre que se haya demostrado que están vinculados a actividades delictivas.

¿Cuáles son los bienes sujetos a decomiso?

Los bienes que pueden ser objeto de decomiso incluyen una amplia gama de activos, tales como:

- Dinero en efectivo: cantidades de dinero que provienen directamente de actividades ilícitas o que están vinculadas al delito.
- Propiedades inmobiliarias: casas, terrenos, edificios y otras propiedades adquiridas mediante fondos ilegales o utilizadas para cometer delitos
- Vehículos y embarcaciones: automóviles, camiones, aviones, yates u otras embarcaciones que han sido utilizados en actividades delictivas o que son propiedad de delincuentes.
- Bienes muebles: muebles, obras de arte, joyas, armas, y otros bienes que estén relacionados con el delito.
- Cuentas bancarias: depósitos, cuentas de ahorro y otros instrumentos financieros que estén vinculados a actividades delictivas.

¿Cuál es el destino de los bienes decomisados?

Una vez que los bienes han sido decomisados de manera definitiva, el Estado tiene varias opciones para su gestión:

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

1) Subasta pública: en muchos casos, los bienes decomisados son vendidos en subastas públicas y los fondos recaudados son destinados a programas estatales o instituciones que luchan contra el crimen organizado.

2) Asignación a programas sociales o de seguridad: algunos bienes decomisados, como vehículos o propiedades, pueden ser asignados a instituciones públicas para su uso en programas sociales, de seguridad o de desarrollo.

3) Destrucción de bienes ilícitos: en casos de decomiso de drogas, armas ilegales u otros bienes peligrosos, estos suelen ser destruidos bajo la supervisión de las autoridades correspondientes para garantizar que no vuelvan a circular.

Con los bienes, productos o instrumentos decomisados conforme las disposiciones de esta ley, que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la sociedad, se procederá de la manera siguiente:

a) Cuando se trate de bienes decomisados provenientes del tráfico ilícito de drogas, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos lo destinará de la manera siguiente:

1) 15% (quince por ciento) para las instituciones dedicadas a la regeneración de los adictos a drogas.

50% (cincuenta por ciento) para la Dirección Nacional de Control de Drogas, para ser utilizados conforme a sus necesidades.

35% (treinta y cinco por ciento) para el Consejo Nacional de Drogas, para prevenir y educar contra el uso de las drogas.

En los casos en que en el proceso de investigación de la infracción hayan participado autoridades de otros países u organismos internacionales, el Estado Dominicano podrá convenir con los demás Estados u organismos internacionales el destino del producto de los bienes decomisados. En el presente caso el producto correspondiente al Estado Dominicano se distribuirá conforme a los numerales 1, 2 y 3 del presente acápite.

2) En los casos de los bienes, productos o instrumentos decomisados que provengan de las demás infracciones graves previstas en la presente ley, serán destinados de la manera siguiente:

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

b) El 50% (cincuenta por ciento) para las instituciones mencionadas en los numerales 1, 2 y 3 del acápite a) del presente artículo, en la misma proporción; y

3) El 50% (cincuenta por ciento) restante se destinará al Fondo General de la Nación.

Artículo 33 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos de República Dominicana

¿Cuáles son los objetivos del decomiso?

El decomiso tiene varios objetivos clave en la lucha contra el crimen organizado y otros delitos graves. Algunos de los principales objetivos son:

1) Desmantelar las estructuras financieras de los delincuentes: al decomisar los bienes de los delincuentes, se les priva de los recursos económicos necesarios para continuar con sus actividades ilegales.

2) Prevenir el uso de bienes para actividades ilícitas: el decomiso permite retirar del mercado bienes que podrían ser reutilizados en la comisión de nuevos delitos, como vehículos o propiedades.

3) Reducir el incentivo económico del delito: al eliminar los beneficios financieros que generan los delitos, el decomiso actúa como un disuasivo para la comisión de actividades ilícitas.

Conclusión

El decomiso es una herramienta fundamental en el marco legal de la República Dominicana para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos graves. A través de este proceso, el Estado asegura que los bienes obtenidos de manera ilícita sean retirados de circulación y utilizados para beneficio público o destruidos, fortaleciendo la lucha contra el crimen y protegiendo a la sociedad.

Decreto Presidencial

Un decreto es una resolución escrita de carácter normativo o administrativo, expedida por el Presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales, que puede

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

tener rango reglamentario (desarrolla leyes) o ser una decisión interna de la administración pública, diferenciándose de la ley en que esta última emana del Poder Legislativo.

Tipos y características de los decretos:

- Decreto de carácter reglamentario:

Su función es detallar o desarrollar las disposiciones de una ley aprobada por el Poder Legislativo, estableciendo las normas específicas para su cumplimiento.

- Decreto autónomo:

Son decisiones internas del Poder Ejecutivo para organizar la administración pública, como la creación de estructuras o la supresión de puestos en ministerios.

- Emisión por el Poder Ejecutivo:

A diferencia de la ley, que es competencia del Congreso Nacional, el decreto es una facultad del Presidente de la República.

- Rango jerárquico inferior a la ley:

Generalmente, los decretos tienen un rango menor que las leyes, ya que su propósito es reglamentarlas o regular aspectos administrativos, y no crear normas de carácter legislativo primario.

En resumen, los decretos son herramientas normativas y administrativas del Poder Ejecutivo que detallan la aplicación de las leyes o que se refieren a asuntos internos de la gestión gubernamental.

En República Dominicana (RD), un decreto presidencial es una orden escrita emitida por el Presidente de la República dentro de su competencia, con la finalidad de ejecutar funciones administrativas o adoptar medidas excepcionales. Estos actos normativos tienen la firma del Presidente y, en algunos casos, de los ministros correspondientes, siendo una herramienta clave para la gestión del Estado.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

¿Qué es un decreto?

- Un decreto es una decisión formal tomada por una autoridad competente, en este caso, el Presidente.
- Es una orden escrita que se utiliza para ejecutar la ley o adoptar nuevas disposiciones.

¿Quién emite un decreto?

- Es emitido por el Presidente de la República.

¿Para qué se utiliza?

- Para ejercer funciones administrativas.
- Para adoptar medidas excepcionales o directivas presidenciales.
- Para la ejecución de leyes o la promulgación de regulaciones.

Características principales

- Lleva la firma del Presidente, y a menudo, del o los ministros involucrados en el asunto.
- Se sujeta a un proceso de tramitación particular.

Atribuciones.

Las facultades y poderes del presidente de la República Dominicana están contenidas en el Título IV, Capítulo I, Sección II de la Constitución de la República Dominicana otorgándole los siguientes Derechos y obligaciones:

En su condición de jefe de Estado le corresponde:

- Presidir los actos solemnes de la Nación.
- Promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución. Expedir decretos, reglamentos e instrucciones cuando fuere necesario.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Nombrar o destituir los integrantes de las jurisdicciones militar y policial.
- Celebrar y firmar tratados o convenciones internacionales y someterlos a la aprobación del Congreso Nacional, sin la cual no tendrán validez ni obligarán a la República.
- Disponer, con arreglo a la ley, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, mandarlas por sí mismo, o a través del ministerio correspondiente, conservando siempre su mando supremo. Fijar el contingente de las mismas y disponer de ellas para fines del servicio público.
- Tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legítima defensa de la Nación, en caso de ataque armado actual o inminente por parte de nación extranjera o poderes externos, debiendo informar al Congreso Nacional sobre las disposiciones adoptadas y solicitar la declaratoria de Estado de Defensa si fuere procedente.
- Declarar, si no se encontrare reunido el Congreso Nacional, los estados de excepción de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 262 al 266 de esta Constitución.
- Adoptar las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias en caso de violación de las disposiciones del artículo 62, numeral 6 de la Constitución, que perturben o amenacen el orden público, la seguridad del Estado, el funcionamiento regular de los servicios públicos o de utilidad pública, o impidan el desenvolvimiento de las actividades económicas y que no constituyan los hechos previstos en los artículos 262 al 266 de la Constitución.
- Disponer, con arreglo a la ley, todo lo relativo a las zonas aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, militares, y policiales en materia de seguridad nacional, con los estudios previos realizados por los ministerios y sus dependencias administrativas.
- Conceder indultos los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, de conformidad con la ley y las convenciones internacionales.
- Hacer arrestar o expulsar, conforme a la ley, a los extranjeros cuyas actividades fueren o pudieren ser perjudiciales al orden público o la seguridad nacional.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Prohibir, cuando resulte conveniente al interés público, la entrada de extranjeros al territorio nacional.

En su condición de jefe de Gobierno tiene la facultad de:

- Nombrar los ministros y viceministros y demás funcionarios públicos que ocupen cargos de libre nombramiento o cuya designación no se atribuya a ningún otro organismo del Estado reconocido por esta Constitución o por las leyes, así como aceptarles sus renunciaciones y removerlos.
- Designar los y las titulares de los órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como aceptarles sus renunciaciones y removerlos, de conformidad con la ley; c) Cambiar el lugar de su residencia oficial cuando lo juzgue necesario.
- Celebrar contratos, sometiendo a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado, al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general, de acuerdo con la Constitución. El monto máximo para que dichos contratos y exenciones puedan ser suscritos por el presidente de la República sin aprobación congresual, será de doscientos salarios mínimos del sector público.
- Velar por la buena recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales.
- Depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año, las memorias de los ministerios y rendir cuenta de su administración del año anterior.
- Someter al Congreso Nacional, a más tardar el primero de octubre de cada año, el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año siguiente.
- Como jefe de Estado y de Gobierno le corresponde.
- Designar, con la aprobación del Senado de la República, los embajadores acreditados en el exterior y los jefes de misiones permanentes ante organismos internacionales, así como nombrar los demás miembros del cuerpo diplomático, de conformidad con la Ley de Servicio Exterior, aceptarles sus renunciaciones y removerlos.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Dirigir las negociaciones diplomáticas y recibir a los jefes de Estado extranjeros y a sus representantes.
- Conceder o no autorización a los ciudadanos dominicanos para que puedan ejercer cargos o funciones públicas de un gobierno u organizaciones internacionales en territorio dominicano, y para que puedan aceptar y usar condecoraciones y títulos otorgados por gobiernos extranjeros.
- Autorizar o no a los ayuntamientos a enajenar inmuebles y aprobar o no los contratos que hagan, cuando constituyan en garantía inmuebles o rentas municipales.
- Las demás atribuciones previstas en la Constitución y las leyes.

Requisitos para ser presidente de la República Dominicana

Según la Constitución de la República Dominicana de 1966, en su modificación del año 2015 por el Congreso, el presidente:

- Debe ser dominicano de nacimiento u origen.
- Tener la edad de 30 años o más.
- Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
- No estar activo en el servicio militar y de policía, por lo menos tres años antes de la elección.

La Constitución.

Para ser más exactos, se transcribe a continuación los artículos de la Constitución dedicados al Poder ejecutivo y al Presidente de la República:

Artículo 122.- Presidente de la República. El Poder Ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo por la Presidenta o el Presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y de gobierno de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución y las leyes.

Artículo 123.- Requisitos para ser Presidente de la República. Para ser Presidente de la República se requiere:

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 1) Ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen;
- 2) Haber cumplido treinta años de edad;
- 3) Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;
- 5) No estar en el servicio militar o policial activo por lo menos durante los tres años previos a las elecciones presidenciales.

Artículo 124.- Elección presidencial. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente o la Presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo. El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República.

Artículo 125.- Vicepresidente de la República. Habrá un o una Vicepresidente de la República, elegido conjuntamente con el Presidente, en la misma forma y por igual período. Para ser Vicepresidente de la República se requieren las mismas condiciones que para ser Presidente.

Artículo 126.- Juramentación del Presidente y del Vicepresidente de la República. El Presidente y el Vicepresidente de la República elegidos en los comicios generales, prestarán juramento a sus cargos el día 16 de agosto siguiente a su elección, fecha en que termina el período de las autoridades salientes. En consecuencia:

1) Cuando el Presidente de la República no pueda juramentarse, por encontrarse fuera del país, por enfermedad o por cualquier otra causa de fuerza mayor, será juramentado el Vicepresidente de la República, quien ejercerá de forma interina las funciones de Presidente de la República, y a falta de éste, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Una vez cese la causa que haya impedido al Presidente o al Vicepresidente electos asumir sus cargos, éstos serán juramentados y entrarán en funciones de inmediato;

2) Si el Presidente de la República electo faltare de forma definitiva sin prestar juramento a su cargo, y esa falta fuese así reconocida por la Asamblea Nacional, lo sustituirá el Vicepresidente de la República electo y a falta de éste, se procederá en la forma indicada precedentemente.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 127.- Juramento. El o la Presidente y el o la Vicepresidente de la República electos, antes de entrar en funciones, prestarán ante la Asamblea Nacional, el siguiente juramento: “Juro ante Dios y ante el pueblo, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo”.

Artículo 128.- Atribuciones del Presidente de la República. La o el Presidente de la República dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado.

1) En su condición de Jefe de Estado le corresponde:

- a) Presidir los actos solemnes de la Nación;
- b) Promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución. Expedir decretos, reglamentos e instrucciones cuando fuere necesario;
- c) Nombrar o destituir los integrantes de las jurisdicciones militar y policial;
- d) Celebrar y firmar tratados o convenciones internacionales y someterlos a la aprobación del Congreso Nacional, sin la cual no tendrán validez ni obligarán a la República;
- e) Disponer, con arreglo a la ley, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, mandarlas por sí mismo, o a través del ministerio correspondiente, conservando siempre su mando supremo. Fijar el contingente de las mismas y disponer de ellas para fines del servicio público;
- f) Tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legítima defensa de la Nación, en caso de ataque armado actual o inminente por parte de nación extranjera o poderes externos, debiendo informar al Congreso Nacional sobre las disposiciones adoptadas y solicitar la declaratoria de Estado de Defensa si fuere procedente;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

g) Declarar, si no se encontrare reunido el Congreso Nacional, los estados de excepción de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 262 al 266 de esta Constitución;

h) Adoptar las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias en caso de violación de las disposiciones del artículo 62, numeral 6 de esta Constitución que perturben o amenacen el orden público, la seguridad del Estado, el funcionamiento regular de los servicios públicos o de utilidad pública, o impidan el desenvolvimiento de las actividades económicas y que no constituyan los hechos previstos en los artículos 262 al 266 de esta Constitución;

i) Disponer, con arreglo a la ley, todo lo relativo a las zonas aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, militares, y policiales en materia de seguridad nacional, con los estudios previos realizados por los ministerios y sus dependencias administrativas;

j) Conceder indultos los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, de conformidad con la ley y las convenciones internacionales;

k) Hacer arrestar o expulsar, conforme a la ley, a los extranjeros cuyas actividades fueren o pudieren ser perjudiciales al orden público o la seguridad nacional;

l) Prohibir, cuando resulte conveniente al interés público, la entrada de extranjeros al territorio nacional.

2) En su condición de Jefe de Gobierno tiene la facultad de:

a) Nombrar los ministros y viceministros y demás funcionarios públicos que ocupen cargos de libre nombramiento o cuya designación no se atribuya a ningún otro organismo del Estado reconocido por esta Constitución o por las leyes, así como aceptarles su renuncia y removerlos;

b) Designar los y las titulares de los órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como aceptarles su renuncia y removerlos, de conformidad con la ley;

c) Cambiar el lugar de su residencia oficial cuando lo juzgue necesario;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

d) Celebrar contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado, al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general, de acuerdo con la Constitución. El monto máximo para que dichos contratos y exenciones puedan ser suscritos por el Presidente de la República sin aprobación congresual, será de doscientos salarios mínimos del sector público;

e) Velar por la buena recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales;

f) Depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año, las memorias de los ministerios y rendir cuenta de su administración del año anterior;

g) Someter al Congreso Nacional, a más tardar el primero de octubre de cada año, el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año siguiente.

3) Como Jefe de Estado y de Gobierno le corresponde:

a) Designar, con la aprobación del Senado de la República, los embajadores acreditados en el exterior y los jefes de misiones permanentes ante organismos internacionales, así como nombrar los demás miembros del cuerpo diplomático, de conformidad con la Ley de Servicio Exterior, aceptarles su renuncia y removerlos;

b) Dirigir las negociaciones diplomáticas y recibir a los Jefes de Estado extranjeros y a sus representantes;

c) Conceder o no autorización a los ciudadanos dominicanos para que puedan ejercer cargos o funciones públicas de un gobierno u organizaciones internacionales en territorio dominicano, y para que puedan aceptar y usar condecoraciones y títulos otorgados por gobiernos extranjeros;

d) Autorizar o no a los ayuntamientos a enajenar inmuebles y aprobar o no los contratos que hagan, cuando constituyan en garantía inmuebles o rentas municipales;

e) Las demás atribuciones previstas en la Constitución y las leyes.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 129.- Sucesión presidencial. La sucesión presidencial se regirá por las siguientes normas:

1) En caso de falta temporal del Presidente de la República asumirá el Poder Ejecutivo el Vicepresidente de la República;

2) En caso de falta definitiva del Presidente de la República, el Vicepresidente asumirá la Presidencia de la República por el tiempo que falte para la terminación del período presidencial;

3) A falta definitiva de ambos, asumirá el Poder Ejecutivo interinamente el Presidente de la Suprema Corte de Justicia quien, dentro de los quince días que sigan a la fecha de haber asumido estas funciones, convocará a la Asamblea Nacional para que se reúna dentro de los quince días siguientes y elija a los nuevos Presidente y Vicepresidente de la República, en una sesión que no podrá clausurarse ni declararse en receso hasta haber realizado la elección;

4) En el caso de que, por cualquier circunstancia, no pudiese hacerse tal convocatoria, la Asamblea Nacional se reunirá de pleno derecho, inmediatamente, para llevar a cabo la elección en la forma indicada precedentemente;

5) La elección se hará mediante el voto favorable de más de la mitad de los asambleístas presentes;

6) Los sustitutos del Presidente y Vicepresidente de la República serán escogidos de las ternas que presente a la Asamblea Nacional el organismo superior del partido político que lo postuló, de conformidad con sus estatutos, en el plazo previsto en el numeral 3) de este artículo. Vencido el plazo sin que el partido haya presentado las ternas, la Asamblea Nacional realizará la elección.

Artículo 130.- Sucesión vicepresidencial. En caso de falta definitiva del Vicepresidente de la República, antes o después de su juramentación, el Presidente de la República, en un plazo de treinta días, presentará una terna a la Asamblea Nacional para su elección. Vencido el plazo sin que el Presidente haya presentado la terna, la Asamblea Nacional realizará la elección.

Artículo 131.- Autorización para viajar al extranjero. El o la Presidente de la República no puede viajar al extranjero por más de quince días sin autorización del Congreso Nacional.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 132.- Renuncia. El o la Presidente y el Vicepresidente de la República sólo pueden renunciar ante la Asamblea Nacional.

Artículo 133.- Inmunidad a la privación de libertad. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 80, numeral 1) de esta Constitución, el o la Presidente y el Vicepresidente de la República, electos o en funciones, no pueden ser privados de su libertad.

Artículo 134.- Ministerios de Estado. Para el despacho de los asuntos de gobierno habrá los ministerios que sean creados por ley. Cada ministerio estará a cargo de un ministro y contará con los viceministros que se consideren necesarios para el despacho de sus asuntos.

Artículo 135.- Requisitos para ser ministro o viceministro. Para ser ministro o viceministro se requiere ser dominicana o dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y haber cumplido la edad de veinticinco años. Las personas naturalizadas sólo pueden ser ministros o viceministros diez años después de haber adquirido la nacionalidad dominicana. Los ministros y viceministros no pueden ejercer ninguna actividad profesional o mercantil que pudiere generar conflictos de intereses.

Artículo 136.- Atribuciones. La ley determinará las atribuciones de los ministros y viceministros.

Artículo 137.- Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es el órgano de coordinación de los asuntos generales de gobierno y tiene como finalidad organizar y agilizar el despacho de los aspectos de la Administración Pública en beneficio de los intereses generales de la Nación y al servicio de la ciudadanía. Estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá; el Vicepresidente de la República y los ministros.

Artículo 138.- Principios de la Administración Pública. La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. La ley regulará:

1) El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública con arreglo al mérito y capacidad de los candidatos, la formación y capacitación especializada, el régimen de incompatibilidades de los funcionarios que aseguren su imparcialidad en el ejercicio de las funciones legalmente conferidas;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

2) El procedimiento a través del cual deben producirse las resoluciones y actos administrativos, garantizando la audiencia de las personas interesadas, con las excepciones que establezca la ley.

Artículo 139.- Control de legalidad de la Administración Pública. Los tribunales controlarán la legalidad de la actuación de la Administración Pública. La ciudadanía puede requerir ese control a través de los procedimientos establecidos por la ley.

Artículo 140.- Regulación incremento remuneraciones. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley.

Artículo 141.- Organismos autónomos y descentralizados. La ley creará organismos autónomos y descentralizados en el Estado, provistos de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica. Estos organismos estarán adscritos al sector de la administración compatible con su actividad, bajo la vigilancia de la ministra o ministro titular del sector. La ley y el Poder Ejecutivo regularán las políticas de desconcentración de los servicios de la administración pública.

Artículo 142.- Función Pública. El Estatuto de la Función Pública es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Dicho estatuto determinará la forma de ingreso, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación del servidor público de sus funciones.

Artículo 143.- Régimen estatutario. La ley determinará el régimen estatutario requerido para la profesionalización de las diferentes instituciones de la Administración Pública.

Artículo 144.- Régimen de compensación. Ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de un cargo remunerado, salvo la docencia. La ley establecerá las modalidades de compensación de las y los funcionarios y empleados del Estado, de acuerdo con los criterios de mérito y características de la prestación del servicio.

Artículo 145.- Protección de la Función Pública. La separación de servidores públicos que pertenezcan a la Carrera Administrativa en violación al régimen de la Función Pública, será considerada como un acto contrario a la Constitución y a la ley.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 146.- Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia:

1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico;

2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;

3) Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente;

4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita;

5) La ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivo.

Artículo 147.- Finalidad de los servicios públicos. Los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Serán declarados por ley.

En consecuencia:

1) El Estado garantiza el acceso a servicios públicos de calidad, directamente o por delegación, mediante concesión, autorización, asociación en participación, transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de conformidad con esta Constitución y la ley;

2) Los servicios públicos prestados por el Estado o por los particulares, en las modalidades legales o contractuales, deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

3) La regulación de los servicios públicos es facultad exclusiva del Estado. La ley podrá establecer que la regulación de estos servicios y de otras actividades económicas se encuentre a cargo de organismos creados para tales fines.

Artículo 148.- Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica.

Defensa

En República Dominicana, el derecho de defensa está regulado principalmente por la Constitución Política, que establece la existencia de un Servicio Nacional de Defensa Pública, y por la Ley No. 277-04 que crea dicho servicio para garantizar la tutela efectiva del derecho a la defensa de las personas imputadas que no cuenten con abogado. Adicionalmente, el derecho a la legítima defensa está contemplado en el Código Penal y en el Código Procesal Penal.

Fundamento Constitucional

- La Constitución de la República Dominicana reconoce y garantiza el derecho a la defensa en diversos artículos, siendo fundamental la existencia del Servicio Nacional de Defensa Pública.

Ley Principal de Regulación

- La Ley No. 277-04 crea el Servicio Nacional de Defensa Pública, una institución que se encarga de garantizar el derecho a la defensa, especialmente para quienes no pueden costear un abogado.

Regulación en el Ámbito Penal

- El Código Procesal Penal (Ley No. 76-02) también establece garantías fundamentales para el derecho a la defensa de las personas en un proceso penal.

Derecho a la Legítima Defensa

- En el ámbito civil, el Código Penal de la República Dominicana (Artículo 328) define los requisitos y límites de la legítima defensa como una acción para repeler una agresión. El Código Penal también incluye el artículo 19 que también describe la legítima defensa.

Defensa de la Patria

La obligación principal de un Estado es la de defender su territorio, integridad y soberanía frente a amenazas externas, como las fuerzas extranjeras, lo que se conoce como la función de defensa nacional. Esta obligación se ejerce a través de la legítima defensa, un derecho reconocido por el derecho internacional para repeler un ataque armado.

Derecho a la legítima defensa

- Excepción al uso de la fuerza:

La legítima defensa es una excepción permitida por la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 51) al principio de no intervención.

- Condiciones para su ejercicio:

Un Estado solo puede invocar este derecho cuando un ataque extranjero en curso amenaza su integridad territorial o independencia política.

- Marco de acción:

Se permite el uso de la fuerza como medida excepcional para repeler un ataque ilegítimo.

Funciones de las fuerzas armadas

- Detección de amenazas:

Las fuerzas armadas son la herramienta principal para disuadir y afrontar amenazas externas.

- Garantía de la integridad territorial:

Una función militar clave es mantener la capacidad de disuasión y, desde una perspectiva política, garantizar la integridad del territorio nacional y la independencia del país.

Responsabilidad colectiva

- Rol de la comunidad internacional:

En el caso de amenazas que atenten contra la paz y la seguridad internacionales, la comunidad internacional, a través de organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU, tiene un papel en la prevención y respuesta a dichas amenazas.

- Ayuda mutua:

La Carta de la ONU establece la obligación de los Estados Miembros de prestar ayuda y asistencia a otro Estado miembro que sea objeto de una agresión armada.

La función de defensa nacional es la tarea de un Estado de proteger su soberanía, independencia e integridad territorial frente a amenazas externas e internas, lo que incluye mantener la seguridad interior, asistir a la población en desastres y contribuir al desarrollo del país, a través de la organización de sus fuerzas armadas y otras políticas de seguridad.

Objetivos Principales

- Defender la soberanía y la independencia:

Proteger el derecho de la nación a gobernarse a sí misma y a mantener su propia identidad sin interferencias externas.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Garantizar la integridad territorial:

Asegurar que el territorio del país permanezca intacto y protegido de cualquier agresión o intento de ocupación.

- Mantener la seguridad interior:

Proteger a la población y el orden público dentro del país, previniendo el surgimiento de conflictos o amenazas que pongan en riesgo la estabilidad.

Actividades y Funciones

- Organizar y preparar las fuerzas armadas:

Las fuerzas armadas (ejército, fuerza aérea, etc.) son el instrumento principal para cumplir con los objetivos de defensa nacional.

- Asistir a la población:

Coadyuvar con la población civil en situaciones de calamidad pública, desastres naturales o emergencias.

- Promover el desarrollo:

Realizar acciones cívicas y obras sociales que contribuyan al progreso y bienestar de la nación.

- Formular políticas de defensa:

Establecer las políticas y estrategias necesarias para asegurar la defensa del país.

Organismos Responsables

El organismo estatal encargado de la defensa nacional es típicamente el Ministerio o Secretaría de Defensa Nacional, que coordina los recursos y acciones necesarias para proteger al país.

Ejemplos de Aplicación

- Protección contra agresiones externas: Defender al país de invasiones o ataques de otras naciones.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Respuesta a desastres: Brindar ayuda y apoyo a la población afectada por terremotos, huracanes u otros desastres.
- Coordinación con otras fuerzas: En algunos países, la defensa nacional también implica coordinar con otras agencias de seguridad, como la policía o la guardia nacional, para asegurar el orden.

Defensa Física

A) Concepto General

El derecho a la defensa física consiste en la legítima defensa, que permite a una persona utilizar los medios necesarios para repeler una agresión ilegítima e inminente, siempre que su reacción sea proporcional al peligro. Este principio jurídico, regulado en el Código Penal y el Código Procesal Penal, es una eximente de responsabilidad penal y busca proteger la integridad personal y los bienes. Las condiciones clave para su aplicación son: la necesidad de actuar, la actualidad o inminencia del peligro, la proporcionalidad de la defensa, la no provocación de la agresión y que no exista una alternativa menos violenta.

¿Qué es y cómo funciona la legítima defensa?

- Autorización legal:

Es una autorización para usar la fuerza de manera legal ante una agresión.

- No ser un delito:

Actuar en legítima defensa no es un delito, ya que se considera que la acción es justificada para evitar un daño mayor.

- Condiciones:

Se aplican requisitos estrictos para que una acción sea considerada legítima defensa:

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Agresión actual o inminente: Debe haber un peligro real y en curso, no pasado ni futuro.
- Proporcionalidad: La defensa debe ser equitativa al daño que se busca evitar.
- Ausencia de alternativa violenta: Se debe actuar solo si no hay otra manera menos agresiva de neutralizar el peligro.
- No provocación: La persona no debe haber provocado deliberadamente la agresión o participar en actividades ilícitas que la justifiquen.

¿Qué regula la legítima defensa?

- Protección de la integridad personal: Es el principio fundamental detrás de la legítima defensa.
- Exclusión de la responsabilidad penal: Si se cumplen los requisitos, la acción defensiva no acarrea castigo.
- Marco legal: La legítima defensa está definida en el Código Penal Dominicano y es tratada en el Código Procesal Penal, el cual establece el derecho a defenderse personalmente.

De esta maneaa, si una persona es atacada en su casa, tiene derecho a defenderse usando la fuerza necesaria para repeler la agresión, siempre y cuando su reacción sea proporcional y no exista una forma menos violenta de escapar del peligro.

B) La Legítima Defensa en República Dominicana

La legítima defensa en la República Dominicana está regulada por el Código Penal, en particular por el Artículo 328 del Código Penal anterior (ahora el nuevo código tiene el artículo 20, según algunas fuentes), que establece que no hay delito cuando las agresiones se producen por la necesidad actual de defenderse a sí mismo o a otra persona, siempre que se cumplan los requisitos de necesidad, proporcionalidad e inmediatez.

Es decir, que no hay crimen ni delito cuando un homicidio, heridas o golpes se infieren por la necesidad actual de defenderse a sí mismo o a otro de una agresión

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

ilegítima. Para que se aplique esta eximente, la defensa debe ser simultánea, necesaria y proporcional a la agresión, la cual debe ser actual, inminente e injustificada.

Marco legal

- Código Penal: La legítima defensa está contemplada como una causa de justificación en el Código Penal dominicano, lo que significa que una conducta típica (que de otra forma sería un delito) se vuelve lícita si se cumplen los requisitos establecidos.

Elementos de la legítima defensa

Para que se pueda alegar legítima defensa, deben cumplirse los siguientes requisitos de manera simultánea:

1) Agresión Actual, Inminente e Injustificada: Debe existir una agresión que esté ocurriendo en el momento, sea inminente (que va a ocurrir) y no esté justificada por la ley.

2) Necesidad de la Defensa: La acción de defenderse debe ser necesaria, es decir, no hay otra forma de evitar el mal mayor que se está sufriendo o se va a sufrir.

3) Proporcionalidad: La reacción defensiva debe ser proporcional a la agresión sufrida.

Condiciones para la legítima defensa (Art. 328):

- Agresión ilegítima: Debe existir una agresión real, actual o inminente que sea injustificada.
- Necesidad de la defensa: La acción defensiva debe ser la única forma de repeler la agresión.
- Racionalidad del medio: Los medios empleados para repeler la agresión deben ser proporcionales a la amenaza.
- Simultaneidad: La defensa debe producirse al mismo tiempo que la agresión, es decir, no debe haber una diferencia de tiempo entre el acto agresivo y el acto defensivo.

Casos específicos considerados legítima defensa:

- Rechazar entrada ilegal a una casa habitada:

Actuar contra una persona que entra a una casa habitada por la fuerza, violencia o engaño es legítima defensa.

- Enfrentar a ladrones con violencia:

Se considera legítima defensa repeler a autores de robo con violencia, siempre que la acción no exceda el límite de la necesidad.

Limitaciones:

- Provocación:

Si la agresión que se rechaza tuvo como origen la provocación de quien se defiende, no habrá legítima defensa.

- Cesación de la agresión:

El derecho a defenderse termina cuando la agresión ha cesado, ya que la defensa ya no sería necesaria.

Defensor del Pueblo y Derecho a la Justicia

La obligación del Estado de ofrecer justicia al pueblo se fundamenta en los Derechos Humanos consagrados internacionalmente y en las constituciones nacionales, como la de la República Dominicana. Esta obligación incluye respetar, proteger y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficaz y equitativo, que permita a las personas defender sus derechos y obtener reparación ante violaciones, a través de procedimientos justos y en un plazo razonable.

Fundamentos de la obligación

Derecho Internacional:

La Declaración Universal de Derechos Humanos y pactos como el PIDCP establecen la obligación de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los individuos bajo su jurisdicción.

Los derechos humanos son los derechos y libertades fundamentales inherentes a todos los seres humanos, que garantizan la dignidad, la libertad y la justicia en la sociedad. Son universales, no discriminatorios y se aplican a todas las personas sin importar su origen, raza, género, religión o condición social. Estos derechos, que incluyen el derecho a la vida, a la educación, al trabajo y a la libertad de expresión, son la base de las leyes internacionales y son el compromiso de los gobiernos de protegerlos y hacerlos cumplir.

Principios clave de los derechos humanos

- Universalidad: Pertenecen a todas las personas por el simple hecho de existir.
- Indivisibilidad e interdependencia: Todos los derechos están relacionados entre sí y son igual de importantes.
- Dignidad humana: Reconocen y protegen la dignidad inherente a todos los seres humanos.
- Protección estatal: Los gobiernos tienen la obligación de garantizar estos derechos, tanto al no hacer ciertas cosas como al asegurar que se cumplan.

Ejemplos de derechos humanos

- Derecho a la vida: La libertad y la seguridad de la persona.
- Derechos civiles y políticos: Libertad de opinión y expresión, libertad de reunión y asociación, derecho a participar en los asuntos públicos.
- Derechos económicos, sociales y culturales: Derecho a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la salud y a la vivienda.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Protección contra la discriminación: Todos tienen derecho a la igualdad y a no ser discriminados por ninguna condición.
- Libertad: No estar sometido a esclavitud ni a torturas.

Documento fundamental

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, es el primer documento legal que estableció la protección universal de los derechos humanos fundamentales y es la base de toda la legislación internacional sobre derechos humanos.

- Constituciones Nacionales:

La Constitución de la República Dominicana, por ejemplo, establece como función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona y la obtención de medios para que se perfeccionen de forma equitativa y progresiva.

Elementos de la obligación de garantizar la justicia

- Acceso a la justicia:

El derecho a recurrir a jueces y tribunales competentes para la defensa de los derechos.

- Debido proceso:

Garantizar un procedimiento justo, que incluya el aviso de inicio, la oportunidad de presentar pruebas y alegar, y una resolución impugnabile.

- Protección y reparación:

Adoptar medidas para proteger a las personas de amenazas a sus derechos y reparar el daño causado por violaciones, incluyendo indemnizaciones y sanciones a los responsables.

- Prohibición de demoras excesivas:

Evitar procedimientos que sean innecesariamente largos, repetitivos, costosos o formalistas, ya que estas demoras injustificadas pueden constituir una violación.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Transparencia y adecuación legislativa:

Mantener la transparencia en las actuaciones estatales y adecuar el marco jurídico a las exigencias de este derecho humano.

En resumen, el Estado no solo debe abstenerse de violar los derechos de las personas, sino que también debe actuar de manera activa para asegurar que todos puedan gozar y ejercerlos, lo que implica un sistema de justicia que sea accesible, eficaz y que proteja a los ciudadanos frente a la inacción o los abusos.

Base Legal del Debido Proceso

En la República Dominicana, el debido proceso está principalmente regulado por el Artículo 69 de la Constitución, que establece las garantías mínimas, complementado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (Ley 137-11) y la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública. Además, en el ámbito penal, el Código Procesal Penal y en procedimientos administrativos específicos se aplican normativas sectoriales que detallan las reglas del debido proceso.

Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:

- 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;
- 2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley;
- 3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;
- 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa;
- 5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;
- 6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;
- 8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;
- 9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia;
- 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Fundamentos Legales Claves.

- Constitución de la República Dominicana (Artículo 69):

Establece la tutela judicial efectiva y el debido proceso, definiendo derechos como la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, a la defensa, a un juicio público y oral, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

- Ley 137-11 (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales):

Regula los procedimientos para la protección de los derechos constitucionales, incluyendo los mecanismos de amparo que garantizan la aplicación del debido proceso.

- Ley 107-13 (Ley sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública):

Detalla los derechos de las personas frente a la administración pública, lo que incluye el derecho a un trato justo y el cumplimiento de procedimientos administrativos adecuados.

- Código Procesal Penal (Ley 277-04 no aparece en los resultados, pero se infiere que hay un código penal específico para el debido proceso en materia penal):

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Este código regula las reglas procesales en materia penal, garantizando el debido proceso para los imputados y las víctimas en los procedimientos judiciales.

Principios del Debido Proceso

El debido proceso se conforma por garantías mínimas, entre ellas:

- Derecho a ser oído: Ser escuchado dentro de un plazo razonable.
- Derecho a la presunción de inocencia: Ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario por sentencia irrevocable.
- Derecho a la defensa: Contar con una defensa técnica y material.
- Derecho a un juicio justo: Un proceso oral, público y contradictorio.
- No ser juzgado dos veces por lo mismo: El principio de non bis in idem.
- Nulidad de pruebas obtenidas ilegalmente: La inadmisibilidad de pruebas que violen la ley.

Aplicación a Diferentes Ámbitos

Las normas del debido proceso se aplican a todas las actuaciones, tanto judiciales como administrativas. Esto significa que la administración pública también debe respetar estas garantías al llevar a cabo procedimientos o al tomar decisiones que afecten a las personas.

Defensor del Pueblo

Constitución.

Artículo 116.- Rendición de informe Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo rendirá al Congreso Nacional el informe anual de su gestión, a más tardar treinta días antes del cierre de la primera legislatura ordinaria.

Artículo 190.- Autonomía del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria. Se debe de manera exclusiva al mandato de esta Constitución y las leyes.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 191.- Funciones esenciales. La función esencial del Defensor del Pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos. La ley regulará lo relativo a su organización y funcionamiento.

Artículo 192.- Elección. El Defensor del Pueblo y sus adjuntos serán nombrados por el Senado por un período de seis años, de ternas propuestas por la Cámara de Diputados y permanecerán en el cargo hasta que sean sustituidos. La Cámara de Diputados deberá escoger las ternas en la legislatura ordinaria previa al cumplimiento del término del mandato de los designados y las someterá ante el Senado en un plazo que no excederá los quince días siguientes a su aprobación. El Senado de la República efectuará la elección antes de los treinta días siguientes.

Párrafo.- Vencidos los plazos sin que la Cámara de Diputados hubiere escogido y presentado las ternas, las mismas serán escogidas y presentadas al Senado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Si es el Senado el que no efectúe la elección en el plazo previsto, la Suprema Corte de Justicia elegirá de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados.

Delito

Un delito es una acción u omisión voluntaria y culposa que, sancionada por la ley penal, constituye una vulneración de los valores sociales y el bienestar colectivo, afectando bienes jurídicos como la vida, la propiedad o la fe pública. Los delitos se clasifican según el bien jurídico afectado (contra la persona, la propiedad, la salud pública), su naturaleza de la acción (dolosos o culposos), la extensión del daño (uniofensivos o pluriofensivos), o por su gravedad (graves o menores).

Definición de Delito

- Un delito es una conducta (acción u omisión) que la ley penal castiga, representando un apartamiento de la conducta esperada para la convivencia social.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- La definición precisa y los elementos que constituyen un delito se establecen en los códigos penales de cada país.

Tipos de Delitos

Los delitos pueden clasificarse de diversas maneras:

- Según el bien jurídico afectado:
 - Delitos contra la persona: Lesionan la integridad física, psíquica o moral de una persona, como el asesinato o las lesiones.
 - Delitos contra la propiedad: Afectan los bienes materiales de alguien, como el robo o el hurto.
 - Delitos contra la salud pública: Ponen en riesgo la salud de la colectividad, como el tráfico de drogas.
 - Delitos contra la fe pública: Afectan la confianza en la veracidad de documentos o signos oficiales, como la falsificación de moneda.
 - Delitos sexuales: Incluyen conductas de naturaleza sexual sin consentimiento.

Según la culpabilidad (forma de comisión):

- Delitos dolosos: La persona actúa con voluntad y consciencia de producir el resultado ilícito.
- Delitos culposos (o imprudentes): Se causa un daño por falta de la diligencia debida, sin intención, como por impericia o negligencia.

Según la lesión de bienes jurídicos:

- Delitos uniofensivos: Lesionan un solo bien jurídico tutelado, como la calumnia que afecta el honor.
- Delitos pluriofensivos: Lesionan más de un bien jurídico, como el secuestro, que puede afectar la libertad y la integridad física.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Según la gravedad:

- Delitos graves (o crímenes): Ofensas de mayor magnitud con penas severas, como el asesinato o el secuestro.
- Delitos menores (o faltas): Infracciones de menor trascendencia con sanciones más leves, como multas.

Según la afectación social:

- Delitos públicos: Afectan a la sociedad en su conjunto.
- Delitos semipúblicos: Afectan bienes privados y públicos.
- Delitos privados: Solo se pueden perseguir a instancia de la víctima, mediante una querella.

Delito Financiero

En la República Dominicana, un delito financiero es una acción no violenta que causa una pérdida económica, abarcando desde el fraude y la estafa hasta el blanqueo de capitales y la intermediación financiera no regulada, castigándose según la gravedad del hecho, con penas de prisión, multas e inhabilitación, según se establece en el Código Penal y leyes como la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley Monetaria y Financiera.

¿Qué es un delito financiero en la RD?

Se refiere a cualquier conducta ilícita que daña la confianza en el sistema económico, causando un perjuicio al patrimonio de personas, empresas o el Estado. Incluye:

- Fraude: Uso de engaño para obtener fondos, como mediante cheques falsos o suplantación de identidad.
- Blanqueo de capitales: Ocultar el origen ilícito de fondos.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Fraude informático: Uso de tecnología para cometer actos fraudulentos, como el phishing o hackeos de cuentas.
- Intermediación financiera no regulada (usura): Realizar actividades financieras sin la debida autorización.
- Fraude corporativo: Desvío de recursos o manipulación del valor de una empresa por parte de directivos o empleados.

¿Cómo se castiga un delito financiero en la RD?

Las sanciones varían según la ley específica y la gravedad del delito, e incluyen:

- Penas de prisión:

Las sanciones pueden variar desde años de reclusión hasta penas agravadas.

- Multas:

Se pueden imponer multas equivalentes a un cierto número de salarios mínimos o incluso al monto defraudado.

- Decomiso de bienes:

Se pueden confiscar los bienes, valores e instrumentos obtenidos ilícitamente.

- Inhabilitación:

Se puede inhabilitar a personas físicas para ejercer actividades comerciales o financieras por un período de tiempo determinado.

Ejemplos de sanciones en la ley dominicana:

- Fraude informático:

Pena de uno a cinco años de prisión y multa de dos a doscientas veces el salario mínimo, según la Ley No. 53-07.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Lavado de activos:

Las penas de prisión pueden ir de cuatro a diez años de prisión mayor, además de multas y decomiso de bienes, de acuerdo con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Delito Penal

En la República Dominicana, un delito es un acto u omisión que viola la ley y es castigado con una pena penal. Según el Código Penal, los delitos se clasifican en crímenes, que son los más graves y se castigan con penas aflictivas o infamantes (como la prisión), y delitos menores, menos graves que conllevan penas menores como multas o prisión de corta duración. La ley establece que solo se podrá castigar un hecho si una disposición legal anterior existía al momento de su comisión.

Clasificación de los delitos según su gravedad

El Código Penal dominicano clasifica las infracciones en tres categorías principales:

- Crímenes:

Son las infracciones más graves, como el homicidio o el secuestro, y se castigan con penas aflictivas e infamantes, que pueden incluir prisión.

- Delitos menores (Delitos):

Son infracciones menos graves que los crímenes. Se castigan con penas correccionales, que son más leves que las penas aflictivas.

- Contravenciones:

Son infracciones de menor gravedad que no son consideradas delitos. Se castigan con multas, arresto menor o medidas administrativas.

Principios fundamentales

- Principio de legalidad:

Los delitos y sus penas deben estar establecidos en una ley promulgada antes de la comisión del hecho que se busca sancionar.

- Principio de tipicidad:

Para que un acto u omisión sea considerado un delito, debe estar expresamente tipificado, es decir, descrito como una infracción por la ley penal.

- Principio de culpabilidad:

Para ser culpable de un hecho u omisión punible, la persona debe haberlo cometido con dolo (intención) o imprudencia.

Demanda Judicial

Una demanda judicial es una acción formal que busca reclamar ante un juez el cumplimiento de un derecho o la reparación de un daño, presentando los hechos, argumentos y peticiones al tribunal. En República Dominicana, la regulación de las demandas depende del tipo de proceso: el Código de Procedimiento Civil regula las demandas civiles (como las demandas de pago o por incumplimiento de contrato) y el Código Procesal Penal (Ley No. 76-02) regula las demandas de naturaleza penal, que buscan sancionar un delito o falta.

En derecho, una demanda judicial se hace mediante un escrito formal presentado ante un órgano de justicia que inicia un proceso legal, exponiendo hechos y fundamentos de derecho para solicitar una solución a una controversia jurídica. Actúa como la petición del demandante para que un juez intervenga, resuelva un conflicto, y se establezca una relación jurídico-procesal con el demandado, quien será notificado para defenderse.

¿En qué consiste una demanda judicial?

- **Acción legal:**

Es una solicitud formal que una persona o entidad presenta a un tribunal para resolver una disputa legal.

- **Objeto:**

Su propósito es obtener una solución del tribunal, ya sea para hacer cumplir una obligación, reparar un daño causado o solicitar una sanción.

- **Presentación:**

La persona que inicia la demanda (demandante) expone los hechos que fundamentan su reclamo y presenta los argumentos jurídicos para apoyar su petición.

Propósito de la demanda:

- **Iniciar el proceso judicial:**

Es el acto que pone en marcha formalmente el procedimiento legal ante el tribunal.

- **Exponer pretensiones:**

Permite al demandante expresar lo que busca obtener del proceso, ya sea una suma de dinero, una acción específica, o el reconocimiento de un derecho.

- **Establecer la relación procesal:**

Conecta al demandante y al demandado dentro de un marco legal para que el juez pueda resolver la controversia.

Componentes clave de una demanda:

- **Petición o petitorio:** La solicitud clara y concreta que el demandante hace al tribunal.
- **Hechos:** La exposición detallada de los eventos relevantes que fundamentan la reclamación.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Fundamentos de derecho: Las disposiciones legales en las que se basa la petición del demandante.
- Identificación de las partes: Nombre y datos del demandante (actor) y el demandado.
- Medios probatorios: El ofrecimiento de pruebas para acreditar los hechos alegados.

Consecuencias de una demanda:

- Una vez presentada y admitida a trámite, la demanda se notifica al demandado, quien tiene la oportunidad de defender sus derechos.
- La demanda no garantiza el resultado, sino que activa el proceso judicial, donde ambas partes podrán presentar argumentos y pruebas ante el juez.

¿Qué leyes la regulan en República Dominicana?

- Código de Procedimiento Civil:

Rige las demandas de carácter civil, como las que buscan el cumplimiento de un contrato o el pago de una deuda. Este código establece las reglas para iniciar el proceso judicial en materia civil.

- Código Procesal Penal (**Ley No. 76-02**):

Regula las demandas en casos penales, que son las presentadas por la comisión de un hecho punible. Este código establece los procedimientos para investigar y juzgar delitos.

Denuncia Penal

En República Dominicana, la denuncia penal está regulada principalmente por el Código Procesal Penal (Ley 76-02), que establece el procedimiento para que cualquier persona informe sobre un hecho delictivo a las autoridades competentes,

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

como el Ministerio Público o la Policía Nacional. Además del Código Procesal Penal, el nuevo Código Penal (promulgado en agosto de 2025) también establece las penas y disposiciones generales para la persecución de delitos, y existen otras leyes penales especiales que regulan aspectos específicos como la violencia intrafamiliar o la alta tecnología.

Marco Legal Principal

- Código Procesal Penal (Ley 76-02):

Es el cuerpo legal que establece el procedimiento de la denuncia. Define la denuncia como el acto por el cual se informa a las autoridades sobre un hecho delictivo.

- Código Penal (Ley 550-14 y el nuevo Código promulgado en agosto de 2025):

Define los delitos y las sanciones asociadas a ellos, complementando así al Código Procesal Penal.

- Leyes Penales Especiales:

Existen otras leyes que abordan delitos particulares, como:

- Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar: Regula los delitos de violencia en el ámbito familiar.
- Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología: Sanciona delitos cometidos a través de medios informáticos y de telecomunicaciones.

Elementos Clave de la Denuncia

Acto Informativo:

La denuncia es un acto formal para informar a las autoridades sobre la existencia de un delito.

Quién puede denunciar:

Cualquier persona puede presentar una denuncia, ya sea la víctima o alguien que tenga conocimiento del hecho delictivo.

Autoridades Competentes:

La denuncia se dirige al Ministerio Público o a la Policía Nacional.

Finalidad:

La denuncia busca que las autoridades investiguen el hecho denunciado para poder sancionar al responsable.

Denuncia Obligatoria

Las personas físicas en la República Dominicana deben denunciar si son víctimas o presencian un hecho delictivo, ya que la ley así lo establece, y pueden hacerlo a través del portal de la Policía Nacional o marcando el 311 para casos que no requieren una declaración formal. Sin embargo, no existe una lista exhaustiva de denuncias obligatorias para todos los ciudadanos, siendo más comunes las obligaciones para grupos profesionales específicos, como el personal médico o docente, que deben reportar casos de abuso o maltrato infantil y a personas vulnerables.

¿Cuándo es obligatorio denunciar?

- Por ley:

Existen leyes en otros países que establecen la obligación de denunciar ciertos delitos, especialmente en casos de abuso o negligencia a niños y adultos vulnerables, imponiendo sanciones civiles o penales a quienes no lo hagan.

- Profesionales específicos:

Las profesiones que implican la interacción con niños, ancianos o personas con discapacidad, como maestros, médicos y agentes de policía, a menudo están sujetas a leyes de "denunciante obligatorio".

¿Qué hacer si se es víctima o testigo?

- Presentar una denuncia oficial:

Si se ha sufrido un delito o se presencié uno, es necesario presentar una denuncia formal.

- Reunir evidencia:

Es importante recopilar y conservar cualquier documento o información relevante que pueda servir como prueba de los hechos.

- Buscar asesoramiento legal:

Consultar con un abogado puede ayudar a comprender los derechos y protecciones legales como denunciante.

Canales de denuncia en la República Dominicana

- Portal de la Policía Nacional:

Se puede realizar una denuncia oficial con fines legales o para investigación a través del portal denuncias.policia.gob.do/.

- Sistema 311:

Para registrar quejas, reclamaciones y denuncias, se puede marcar la línea 311 o acceder al portal www.311.gob.do/.

Denunciar un fraude por internet

Para denunciar un fraude por internet en República Dominicana, contacta el Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional llamando al 809-688-6623 o a través de la aplicación Denuncias Virtuales disponible en tiendas de aplicaciones. También puedes acudir a la Fiscalía de tu departamento judicial o presentar la denuncia a través del servicio 311 en el portal www.311.gob.do. Es crucial no borrar evidencia y contactar tu institución financiera si tus cuentas se vieron afectadas.

Pasos para realizar una denuncia:

1. No borres evidencia:

Evita eliminar o modificar cualquier información relacionada con el incidente, como capturas de pantalla de mensajes o correos electrónicos.

2. Contacta a tu banco:

Si el fraude involucra tus cuentas bancarias, informa inmediatamente a tu institución financiera para que bloqueen los datos y sigan sus procedimientos de seguridad.

3. Prepara tus pruebas:

Reúne todas las evidencias del delito, como capturas de pantalla, correos electrónicos fraudulentos o extractos bancarios.

4. Formula la denuncia:

- **A través de la Policía Nacional:** Contacta el DICAT al 809-688-6623, visita su cuenta de Instagram @dicatpn, o utiliza la aplicación "Denuncias Virtuales" para presentar la denuncia.
- **A través de la Fiscalía:** Presenta tu caso con todas las pruebas ante la Fiscalía de tu departamento judicial.
- **Utiliza el servicio 311:** Puedes registrar tu denuncia a través del portal www.311.gob.do o llamando al número 311.

Información útil:

- El DICAT es el encargado de investigar los crímenes y delitos de alta tecnología según la Ley No. 53-07, y también busca preservar las pruebas.
- La aplicación Denuncias Virtuales está disponible tanto en iOS como en Android.
- Al presentar la denuncia, no compartas información confidencial del delito por mensajes o redes sociales.

Deportación de Extranjero

La deportación de extranjeros en República Dominicana se rige principalmente por la Ley General de Migración 285-04 y su reglamento de aplicación, el Decreto 63111. La ley establece las condiciones para la entrada, permanencia y salida de extranjeros, y la deportación es una de las sanciones contempladas para quienes violen la ley.

Motivos de deportación según la Ley 285-04:

- Ingreso o permanencia ilegal:

Cuando un extranjero ingresa al país de forma clandestina o permanece en él más allá del plazo autorizado.

- Documentación falsa o fraudulenta:

Si se comprueba que un extranjero obtuvo su entrada o permanencia mediante documentos falsos o fraudulentos.

- Incumplimiento de condiciones de permanencia:

Si se cancela la permanencia de un extranjero y este no abandona el país en el plazo establecido.

- Impedimentos para ingresar o permanecer:

Si se comprueba que un extranjero tiene alguno de los impedimentos para ingresar o permanecer en el país establecidos en el Artículo 15 de la ley.

Procedimiento de deportación:

- La Dirección General de Migración es la autoridad competente para ordenar la deportación.
- El extranjero tiene derecho a un procedimiento justo y a la defensa de sus derechos humanos durante el proceso de deportación.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- El extranjero puede tener la oportunidad de salir voluntariamente del país antes de ser deportado.

Otras leyes y regulaciones relevantes:

- Ley 95 de 1939: Ley de inmigración que establece algunas disposiciones sobre la inmigración en la República Dominicana.
- Ley 344-98: Sanciona a quienes participan en la organización de viajes ilegales.
- Ley 137-03: Combate el tráfico ilícito de personas.
- Decreto 1569 de 1983: Crea la Comisión Nacional para los Refugiados.

Es importante destacar que:

- La Dirección General de Migración es la entidad encargada de aplicar la ley y garantizar el cumplimiento de las normas migratorias.
- Los extranjeros que cumplen con las condiciones establecidas por la ley para su admisión y permanencia tienen derechos laborales y sociales.

Deporte

La Constitución de la República consagra lo siguiente:

Sección III
Derechos Culturales y Deportivos

Artículo 64.- Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la Nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. En consecuencia:

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 1) Establecerá políticas que promuevan y estimulen, en los ámbitos nacionales e internacionales, las diversas manifestaciones y expresiones científicas, artísticas y populares de la cultura dominicana e incentivará y apoyará los esfuerzos de personas, instituciones y comunidades que desarrollen o financien planes y actividades culturales;
- 2) Garantizará la libertad de expresión y la creación cultural, así como el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades y promoverá la diversidad cultural, la cooperación y el intercambio entre naciones;
- 3) Reconocerá el valor de la identidad cultural, individual y colectiva, su importancia para el desarrollo integral y sostenible, el crecimiento económico, la innovación y el bienestar humano, mediante el apoyo y difusión de la investigación científica y la producción cultural. Protegerá la dignidad e integridad de los trabajadores de la cultura;
- 4) El patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado que garantizará su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor. Los bienes del patrimonio cultural de la Nación, cuya propiedad sea estatal o hayan sido adquiridos por el Estado, son inalienables e inembargables y dicha titularidad, imprescriptible. Los bienes patrimoniales en manos privadas y los bienes del patrimonio cultural subacuático serán igualmente protegidos ante la exportación ilícita y el expolio. La ley regulará la adquisición de los mismos.

Artículo 65.- Derecho al deporte. Toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y la recreación. Corresponde al Estado, en colaboración con los centros de enseñanza y las organizaciones deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas actividades. Por tanto:

- 1) El Estado asume el deporte y la recreación como política pública de educación y salud y garantiza la educación física y el deporte escolar en todos los niveles del sistema educativo, conforme a la ley;
- 2) La ley dispondrá los recursos, estímulos e incentivos para la promoción del deporte para todos y todas, la atención integral de los deportistas, el apoyo al deporte de alta competición, a los programas y actividades deportivas en el país y en el exterior.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Ley 356-05.

La ley que regula los eventos deportivos en República Dominicana es la Ley General de Deportes (Ley 356-05). Esta ley establece los principios rectores del deporte y su fomento en el país, así como el Sistema Nacional del Deporte. Además, existen otras normativas que complementan esta ley, como la Ley 87-13 de Seguridad Social, que incluye cobertura para atletas, y la Ley Nacional de Educación Física, que promueve la actividad física y su enseñanza en el ámbito educativo.

Ley General de Deportes (Ley 356-05):

- Objeto:

Establecer los principios rectores del deporte y su fomento en República Dominicana.

- Principios:

Orienta la práctica deportiva a la formación integral de los ciudadanos, promoviendo su bienestar social.

- Sistema Nacional del Deporte:

La ley crea y regula este sistema, que organiza y gestiona las actividades deportivas a nivel nacional.

- Derechos de los atletas:

Reconoce los derechos de los atletas y establece mecanismos para su protección y apoyo.

- Fomento del deporte:

La ley establece medidas para fomentar la práctica deportiva en todas sus formas, incluyendo la recreación y la educación física.

- Infraestructura deportiva:

Promueve la adecuación de instalaciones deportivas para garantizar el acceso a personas con discapacidad y adultos mayores.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Personal calificado:

Exige que los programas deportivos sean elaborados y aplicados por personal calificado y certificado por las instituciones deportivas competentes.

Otras leyes relacionadas:

- Ley 87-13 de Seguridad Social:

Incluye la cobertura para atletas a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

- Ley Nacional de Educación Física:

Promueve la actividad física y regula su enseñanza en el sistema educativo.

- Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios:

Establece las competencias de los ayuntamientos en materia deportiva y recreativa.

A) Medidas Antideportivas

En República Dominicana, no existe una "ley sanciona medidas antideportivas" específica; sin embargo, las conductas antideportivas en el deporte son sancionadas por el Código Disciplinario de las federaciones deportivas y pueden estar relacionadas con el dopaje a través de la Ley 44-23 de Política Nacional Antidopaje. La Ley General de Deportes (356-05) también regula aspectos generales del deporte, y el Código Penal y otras legislaciones pueden aplicarse a actos antideportivos graves si constituyen faltas o delitos.

Marco Legal y Normativo

- Ley General de Deportes (356-05):

Esta ley establece el marco general para el desarrollo del deporte en República Dominicana y aborda temas como la organización deportiva, la promoción del deporte y los derechos de los deportistas.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Ley de Política Nacional Antidopaje (44-23):

Esta ley específica sanciona el dopaje en el deporte, una forma de conducta antideportiva que va en contra de la integridad deportiva.

- Códigos Disciplinarios de Federaciones:

Cada federación deportiva nacional tiene un código disciplinario que establece las faltas, infracciones y sanciones aplicables a sus miembros, incluyendo las conductas antideportivas.

- Código Penal y otras Leyes:

Conductas antideportivas graves que también constituyan delitos comunes pueden ser sancionadas bajo el Código Penal u otras leyes, dependiendo de la naturaleza del acto (por ejemplo, agresiones físicas graves).

Ejemplos de Conductas Antideportivas y sus Sanciones

- Dopaje:

Sancionado por la Ley 44-23 y por los códigos disciplinarios de las federaciones.

- Conductas antideportivas graves en el campo de juego:

Como la agresión a un rival, puede llevar a la expulsión de un jugador, simbolizada por una tarjeta roja en el fútbol, o sanciones más severas según el código de la federación.

- Discriminación:

La Ley General de Deportes y otras normativas prohíben la discriminación en el deporte, y cualquier acto en contra de este principio puede ser sancionado.

B) Deportes para Discapacitados

Sí, existen leyes que obligan y promueven la participación de personas con discapacidad en actividades deportivas, garantizando su derecho a practicar deporte en igualdad de condiciones. En la República Dominicana, la Ley 5-13 sobre

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Discapacidad establece la obligación del Estado de garantizar dicha participación, ofreciendo los medios técnicos y educativos necesarios para su desarrollo deportivo.

Marco Legal y Obligaciones

- Derecho a la Participación:

La ley 5-13, en su Artículo 18, obliga al Estado a asegurar que las personas con discapacidad participen en actividades deportivas, junto con las culturales, recreativas y religiosas, en condiciones de igualdad.

- Medios y Recursos:

El Estado debe proveer los medios técnicos y educativos necesarios para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus capacidades y talentos deportivos.

- No Discriminación:

Se garantiza que todas las personas tienen derecho a la educación física y a practicar deporte, sin menoscabo de sus aptitudes, sin discriminación alguna.

Implementación y Fomento

- Integración Social y Profesional:

La participación deportiva contribuye a la integración social y profesional de las personas con discapacidad, como lo establece la Ley 356-05 General de Deportes.

- Creación de Programas:

Las instituciones encargadas, como la Secretaría de Deportes y Recreación (SEDEREC) en República Dominicana, deben crear programas y departamentos para dar seguimiento y apoyo a atletas con discapacidad.

- Colaboración Institucional:

Las instituciones docentes deben colaborar para facilitar la participación de los atletas con discapacidad en eventos deportivos, permitiendo su integración social y académica.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

En resumen, las leyes no solo obligan, sino que también sientan las bases para la creación de un sistema deportivo inclusivo y de apoyo para las personas con discapacidad, buscando el desarrollo integral de sus capacidades y su plena integración en la sociedad.

C) Base Legal del Beisbol

La Ley 2-25 es la que regula la contratación de prospectos de béisbol en la República Dominicana, específicamente en lo relacionado con su firma por equipos de las Grandes Ligas en la Liga de Verano (DSL). Esta ley busca proteger a los jugadores jóvenes, asegurando su formación integral y condiciones laborales adecuadas, incluyendo el requisito de consentimiento paterno para menores de 16 años.

Aspectos clave de la Ley 2-25:

- Protección de menores:

La ley exige el consentimiento de los padres o tutores para firmar contratos con prospectos menores de 16 años.

- Formación integral:

Las organizaciones de la MLB deben proveer a los jugadores capacitación, educación, asistencia médica, alimentación adecuada e instalaciones limpias.

- Condiciones de los jugadores:

Se establecen obligaciones para los prospectos, como mantener una buena condición física y deportiva, y participar activamente en los programas de formación.

- Regulación de los contratos:

Se define que las particularidades de estos contratos se encuentran fuera del marco laboral dominicano tradicional, estableciendo características específicas como el pago de bonos y la renegociación anual de los mismos.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Obligación de capacitación:**

Los equipos estarán obligados a capacitar a los prospectos y a mantener un personal técnico especializado.

En este sentido, la Ley 2-25 de República Dominicana regula la contratación de prospectos de béisbol que son asignados a la Liga Dominicana de Verano (DSL) dentro del sistema de las Ligas Mayores de Béisbol (MLB). Esta ley busca establecer un marco legal claro para la industria del béisbol profesional en el país, especialmente en lo que respecta a los contratos de jugadores y la protección de sus derechos.

Propósito y Alcance de la Ley 2-25

- **Regulación de contratos:**

La ley establece las normas y procedimientos para la firma de contratos entre las academias de la MLB y los prospectos dominicanos.

- **Protección de menores:**

Se estableció que los contratos con jugadores menores de edad deben contar con el consentimiento de sus padres o tutores, y que el jugador debe tener una edad mínima de 16 años.

- **Unificación legal:**

Busca unificar y dar seguridad jurídica a la industria del béisbol, evitando disputas y litigios.

- **Beneficio económico:**

Se espera que la ley fomente un ambiente más equilibrado y sostenible para la industria del béisbol en la República Dominicana.

Proceso de Aprobación

- El proyecto de ley fue aprobado con unanimidad en dos lecturas consecutivas por el Senado de la República.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Luego pasó a la Cámara de Diputados, que realizó algunas modificaciones.
- Finalmente, regresó al Poder Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.

D) Direcciones Generales del Ministerio de Deportes

El Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) de la República Dominicana cuenta con diversas direcciones generales, incluyendo las de Deporte Escolar y Universitario, Deporte Federado y Alto Rendimiento, Técnico Deportivo, Instalaciones Deportivas y Recreación Tiempo Libre, entre otras, todas bajo diferentes Viceministerios. También existen direcciones específicas como la Dirección de Capacitación y Escuela de Entrenadores, la Dirección de Programa de Atletas de Alto Rendimiento Nuevos Valores e Inmortales (PARNI), la Dirección de Deportes para Todos, y la Dirección de Ligas y Clubes.

Viceministerios y Direcciones Generales

Las direcciones dependen de varios viceministerios:

- Viceministerio Deporte Escolar y Universitario:
 - Dirección Deporte Escolar
 - Dirección Deportes Universitarios
- Viceministerio Deporte Federado y Alto Rendimiento:
 - Dirección Técnica
 - Dirección de Ligas y Clubes
 - Dirección de Programas de Atletas de Alto Rendimiento (PARNI)
 - Dirección de Directores Provinciales
- Viceministerio Técnico Deportivo:
 - Dirección de Ciencias Aplicadas al Deporte (Medicina Deportiva)
- Viceministerio de Instalaciones Deportivas: No se detallan direcciones en el material de referencia.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Viceministerio de Recreación y Deporte Tiempo Libre: No se detallan direcciones en el material de referencia.
- Viceministerio Administrativo: No se detallan direcciones en el material de referencia.

Otras Direcciones Relevantes

- Dirección de Deportes para Todos: Busca promover la práctica deportiva en la población general.
- Dirección Financiera: Se encarga de la gestión de los recursos económicos del ministerio.
- Dirección Gabinete Ministerial: Apoya la gestión del Ministro.

Depósito de Combustibles

En República Dominicana, varias leyes y reglamentos rigen el depósito de combustibles, incluyendo la Ley No.112-00 que establece un impuesto al consumo y la facultad de importar, así como la necesidad de un Reglamento para su aplicación. Adicionalmente, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM) supervisan las condiciones de seguridad y operativas de los depósitos mediante resoluciones específicas, como la Resolución No. 297-19 para plantas envasadoras de GLP.

Marco Legal y Entidades Reguladoras

- Ley No. 112-00 de Hidrocarburos:

Esta ley es la base que establece el impuesto al consumo de los combustibles fósiles y derivados del petróleo, así como la libertad de importación.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM):

A través de su Dirección de Hidrocarburos, el MICM se encarga de la inspección, control y expedición de permisos para las instalaciones de depósitos de combustibles, según la Resolución No.2013-025.

- Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM):

Esta entidad tiene la función de controlar y vigilar las actividades relacionadas con los combustibles, estableciendo un registro de empresas autorizadas.

Normativas Específicas

- Resolución No.297-19:

Esta resolución del MICM establece normas de seguridad, requisitos de funcionalidad y el régimen de distancias aplicables a las plantas envasadoras de GLP y estaciones que expenden GNV.

- Decreto No. 307-01:

Este decreto regula la clasificación de las instalaciones de almacenamiento de derivados de petróleo en Categorías A y B según su capacidad, e incluye la recepción de solicitudes de licencias.

Aspectos Clave para el Depósito de Combustibles

- Inspección y Permisos:

Las instalaciones de depósitos de combustibles deben someterse a inspecciones anuales para evaluar sus condiciones técnicas y de seguridad, y para renovar sus permisos de operación.

- Agentes de Retención:

Las empresas que almacenen combustibles con la intención de distribuirlos son agentes de retención del impuesto al consumo establecido en la Ley No. 112-00.

- Seguridad y Calidad:

El MICM inspecciona las facilidades para garantizar que cumplen con los estándares de calidad y seguridad necesarios en la recepción y almacenamiento de combustibles.

Derecho

Un derecho es una facultad o permiso para hacer o poseer algo, otorgado por normas o por el simple hecho de existir como ser humano. Existen diferentes tipos de derechos, que se pueden clasificar de diversas maneras, como derechos humanos (inherentes a todos los seres humanos), derechos civiles y políticos (otorgados por el Estado, como el voto o la libertad de expresión), y también según la relación que regulan, dividiéndose en derecho público (Estado y ciudadanos) y derecho privado (entre particulares).

Concepto de derecho

El derecho es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre las personas y entre estas y el Estado, con el objetivo de mantener el orden y la justicia en la sociedad. Desde un punto de vista subjetivo, un derecho es la facultad o permiso que tiene una persona para hacer o exigir algo.

Tipos de derechos

Se pueden clasificar los derechos de varias formas:

- Por su naturaleza:
 - Derechos Humanos: Son derechos inherentes a todos los seres humanos por el simple hecho de existir, universales, inalienables e inviolables. Incluyen el derecho a la vida, la libertad, la educación, el trabajo, la salud, etc.
 - Derechos Civiles y Políticos: Son derechos otorgados por el Estado, reconocidos en la Constitución, y se centran en la libertad y la participación ciudadana, como el derecho al voto o a la libre asociación.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Por su origen y propósito:

- Derechos Positivos: Permiten hacer algo o dan derecho a un servicio o trato específico.
- Derechos Negativos: Permiten o exigen la inacción, o sea, no hacer nada; por ejemplo, el derecho a no ser molestado o agredido.

Por la relación que regulan:

- Derecho Público: Regula las relaciones entre el Estado (o la Administración Pública) y los ciudadanos.
- Derecho Privado: Regula las relaciones entre particulares, en igualdad de condiciones, como las relaciones civiles, mercantiles o familiares.

Por generaciones (en el contexto de derechos humanos):

- Primera Generación: Ideales de libertad e igualdad, principalmente derechos civiles y políticos.
- Segunda Generación: Ideales de igualdad y justicia social, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales como la salud y la educación.
- Tercera Generación: Ideales de solidaridad, como el derecho a la paz y a un medio ambiente limpio.

Derecho Adquirido

En República Dominicana, el concepto de derechos adquiridos es un principio jurídico que se encuentra consagrado en la Constitución Dominicana y en diversas leyes, como el Código Civil, protegiendo situaciones jurídicas establecidas y consolidadas. Si bien no existe una ley única que regule todos los derechos adquiridos, este principio se aplica en ámbitos como el derecho laboral (con la Ley 16-92), el derecho de autor (Ley 65-00), y el derecho de la seguridad social (Ley 87-01).

Principio General

- Constitucionalidad:

El principio de respeto a los derechos adquiridos está implícito en la Constitución dominicana, que garantiza la seguridad jurídica, la no retroactividad de la ley y la estabilidad.

La Constitución de la República Dominicana señala:

- Garantiza la efectividad de los derechos fundamentales a través de mecanismos de tutela y protección, asegurando que las personas puedan hacer valer sus derechos frente a los sujetos obligados, según el Artículo 68.
- Establece la tutela judicial efectiva y el debido proceso en el Artículo 69, que incluye el derecho a una justicia accesible, oportuna e imparcial, y la garantía de que nadie será juzgado sino conforme a leyes preexistentes y ante un juez competente.

Veamos.

Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley.

Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:

- 11) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;
- 12) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 13) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;
- 14) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa;
- 15) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;
- 16) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;
- 17) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;
- 18) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;
- 19) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia;
- 20) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Por otra parte, la Constitución también establece la No Retroactividad de la ley en ningún caso, incluyendo la tributaria.

Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:

13) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa;

Artículo 110.- Irretroactividad de la ley. La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

En materia de Impuestos, la Constitución también establece en su artículo 244 la No revocación de las exoneraciones concedidas, durante el tiempo que dure su concesión o contrato, al expresar lo siguiente:

Artículo 244.- Exenciones de impuestos y transferencias de derechos. Los particulares sólo pueden adquirir, mediante concesiones que autorice la ley o contratos que apruebe el Congreso Nacional, el derecho de beneficiarse, por todo el tiempo que estipule la concesión o el contrato y cumpliendo con las obligaciones que la una y el otro les impongan, de exenciones, exoneraciones, reducciones o limitaciones de impuestos, contribuciones o derechos fiscales o municipales que inciden en determinadas obras o empresas hacia las que convenga atraer la inversión de nuevos capitales para el fomento de la economía nacional o para cualquier otro objeto de interés social. La transferencia de los derechos otorgados mediante contratos estará sujeta a la ratificación por parte del Congreso Nacional.

La Ley 107-13

- Esta ley regula los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, estableciendo los principios que sustentan estas relaciones y las normas de procedimiento administrativo.
- Su objetivo es garantizar que las actuaciones de la administración respeten la legalidad y protejan los derechos de los ciudadanos, contribuyendo a la seguridad jurídica en las interacciones con el Estado.

Otros Elementos Relevantes

- El Código Procesal Penal (Ley 76-02):

Establece las normas para la investigación, enjuiciamiento y sanción de los delitos, garantizando los derechos de los procesados y la aplicación de la ley penal, lo cual es fundamental para la seguridad jurídica en el ámbito penal.

- El Tribunal Constitucional:

A través de su función y sus sentencias, el TC vela por la supremacía de la Constitución y el respeto a los principios constitucionales, incluyendo el derecho a la seguridad jurídica.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Estabilidad de las situaciones:

Se refiere a aquellas situaciones jurídicas que se han consolidado bajo la vigencia de una ley, y que deben ser respetadas aun cuando dicha ley sea derogada o modificada posteriormente.

Aplicación por Leyes Específicas

- Código de Trabajo (Ley 16-92):

Protege los derechos de los trabajadores consolidados bajo una legislación o acuerdo laboral previo. Por ejemplo, establece que, ante una concurrencia de normas, prevalecerá la más favorable al trabajador, protegiendo los derechos ya adquiridos por este.

- Ley 65-00 sobre Derecho de Autor:

Reconoce derechos adquiridos para los autores y coautores en la creación de obras.

- Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social:

Regula los derechos y deberes de los ciudadanos en materia de seguridad social, protegiendo los beneficios y derechos adquiridos en el sistema.

- Ley 41-08 de Función Pública:

Establece los derechos y deberes de los servidores públicos, reconociendo los derechos que han adquirido a lo largo de su servicio.

En resumen, aunque no hay una única ley que regule "todos" los derechos adquiridos, el concepto es un principio general del derecho dominicano que se aplica y se refuerza a través de leyes y regulaciones específicas en diferentes áreas.

Derecho a Agua

El derecho al agua es el derecho fundamental de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el consumo personal y

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

doméstico. Fue reconocido internacionalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 y es un requisito previo para vivir dignamente y para el disfrute de otros derechos humanos, como la salud y la alimentación.

Características del derecho al agua:

- Suficiente: La cantidad de agua debe ser la necesaria para cubrir las necesidades básicas de consumo, cocina e higiene.
- Salubre: El agua debe estar libre de microorganismos, sustancias químicas y otros peligros que puedan amenazar la salud.
- Aceptable: Debe tener un color, olor y sabor aceptables para las personas.
- Accesible: Las instalaciones de agua deben estar físicamente accesibles para todos, sin discriminación, y el tiempo de recolección no debe ser excesivo.
- Asequible: El acceso al agua no debe ser negado por motivos económicos.

Importancia del derecho al agua:

- Salud:

Es vital para prevenir la deshidratación y enfermedades relacionadas con el agua.

- Dignidad:

Permite a las personas vivir con la dignidad que merecen y a las comunidades prosperar.

- Otros derechos humanos:

Su cumplimiento es indispensable para el ejercicio de otros derechos, como la salud, la alimentación y la educación.

Reconocimiento y responsabilidad:

- Nivel internacional:

El derecho humano al agua fue reconocido oficialmente por la Asamblea General de la ONU el 28 de julio de 2010.

Derecho a Alimentación

El derecho a comer, o derecho a la alimentación, es un derecho humano universal que garantiza el acceso a alimentos nutritivos, suficientes, seguros y culturalmente adecuados para todas las personas, protegiendo así la salud, la dignidad y el bienestar. Este derecho está reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y se traduce en la obligación de los Estados de garantizar que las personas no sufran hambre y puedan alimentarse adecuadamente.

Componentes del derecho a la alimentación

El derecho a la alimentación no se refiere solo a la disponibilidad de comida, sino a la posibilidad de que las personas puedan acceder a ella:

- Disponibilidad:

Que haya suficiente alimento (a través de la producción local, la distribución y el comercio).

- Acceso:

Que tanto el acceso físico como el económico a los alimentos sea posible para todas las personas.

- Consumo:

Que los alimentos se preparen y consuman de manera adecuada, considerando las necesidades particulares de cada miembro de la familia.

- Aprovechamiento biológico:

Que los alimentos proporcionen los nutrientes necesarios para un desarrollo físico y cognitivo saludable.

Importancia y consecuencias de su no cumplimiento

- Salud física y mental:

La falta de una alimentación adecuada puede causar desnutrición, debilitamiento del sistema inmunológico y problemas de salud a largo plazo. Además, la preocupación constante por conseguir la próxima comida genera estrés, ansiedad y puede contribuir a la depresión.

- Dignidad humana:

El derecho a la alimentación es esencial para la dignidad y el bienestar emocional de las personas.

- Derechos de los niños:

Los niños, en particular, tienen derecho a una alimentación básica y a fuentes de comida sostenibles y nutritivas para crecer sanos.

Ejemplos de su aplicación

- En México, la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
- A nivel laboral, existen leyes que garantizan tiempos para poder comer durante la jornada de trabajo.
- La Norma Oficial Mexicana (NOM-051-SCFI/SSA1-2010) regula el etiquetado de alimentos, proporcionando a los consumidores información para tomar decisiones más saludables.

La Constitución dominicana asegura este derecho, como la Seguridad Alimentaria.

Derecho al Divorcio

El derecho al divorcio en la República Dominicana, regido por la Ley 1306-Bis, permite la disolución del matrimonio mediante dos vías: mutuo consentimiento o

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

por causa determinada. Este derecho incluye la posibilidad de que los tribunales establezcan el régimen de la guarda y visita de los hijos, la manutención, y la distribución de los bienes comunes mediante un proceso judicial y finalizado con una sentencia que, tras ser publicada en un periódico y pronunciada por el oficial del Estado Civil, hace a los cónyuges nuevamente solteros.

Tipos de divorcio

- Por mutuo consentimiento:

Los cónyuges solicitan el divorcio de manera conjunta y acuerdan los términos sobre la división de bienes, la guarda y manutención de los hijos en un acto auténtico ante un notario. Se requiere que hayan transcurrido al menos dos años del matrimonio y no más de 30 años de vida en común.

- Por causa determinada:

Se solicita la disolución del matrimonio por motivos específicos, como el maltrato, el abandono o la incompatibilidad de caracteres, los cuales deben ser probados en el proceso judicial.

Proceso legal

- 1) Presentación de la solicitud:

Se presenta ante el Tribunal de Primera Instancia del último domicilio conyugal.

- 2) Sentencia judicial:

Un juez emite la sentencia que declara el divorcio y establece las condiciones sobre los hijos y los bienes.

- 3) Pronunciamiento del divorcio:

La sentencia debe ser archivada y publicada en un periódico de circulación general para su validez.

- 4) Efecto de soltería:

Una vez publicado, los ex cónyuges son considerados legalmente solteros.

Efectos del divorcio

- Bienes:

Se produce una división de los bienes comunes, que puede ser equitativa, según las circunstancias y el acuerdo entre las partes.

- Hijos:

Se determina la guarda, el régimen de visita y la pensión alimenticia para los hijos.

- Alimentos (Pensión Compensatoria):

En algunos casos de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer puede tener derecho a recibir alimentos durante un tiempo si no tiene ingresos suficientes y mientras no se vuelva a casar o no se una en concubinato.

Derecho a visitar los hijos.

Derecho a Electricidad

El acceso a la energía eléctrica se reconoce como un derecho humano fundamental, esencial para la dignidad y el desarrollo de una vida adecuada, la salud, la educación y la vivienda. El Estado tiene la obligación de garantizar este servicio, asegurando que sea suficiente, de calidad, seguro y accesible, especialmente para los sectores más vulnerables.

¿Por qué es un derecho humano?

- Base para otros derechos:

La electricidad es indispensable para satisfacer otros derechos básicos, como el acceso a información, salud, alimentos, educación y una vivienda digna.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Desarrollo social y económico:

Sin electricidad, es imposible participar plenamente en la sociedad moderna, lo que limita el desarrollo económico y social de las personas y comunidades.

¿Qué implica este derecho?

- Garantía del Estado:

Los gobiernos son responsables de asegurar que todas las personas tengan acceso al suministro de energía.

- Calidad y suficiencia:

El servicio debe ser de buena calidad y en cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas.

- Accesibilidad y seguridad:

Debe ser accesible para todos, considerando la situación económica de las personas, y las redes deben ser seguras.

- Protección del medio ambiente:

La garantía del acceso a la energía eléctrica también debe considerar la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.

¿Qué puede hacer el ciudadano?

- Exigir su cumplimiento:

Los ciudadanos pueden exigir que este derecho se cumpla y que no haya interrupciones injustificadas del servicio.

- Buscar asesoría legal:

Ante un corte de suministro o un cobro excesivo, se puede buscar información en organismos de protección al consumidor o solicitar asesoría legal.

- Conocer sus derechos:

Es importante estar informado sobre las regulaciones y los derechos que protegen el acceso a la energía eléctrica en su país o región.

Derecho Civil

En República Dominicana, los derechos civiles, que protegen las libertades individuales frente al Estado y otros individuos, se encuentran consagrados principalmente en los artículos 37 al 47 y 51 del Título II, Capítulo I, Sección I de su Constitución. Estos derechos incluyen, entre otros, la vida, la dignidad humana, la igualdad, la libertad y seguridad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad, la libertad de tránsito y la libertad de asociación.

Veamos:

Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia:

1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

2) Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias;

3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;

4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género;

5) El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.

Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:

- 1) Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito;
- 2) Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse;
- 3) Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos;
- 4) Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención;
- 5) Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 6) Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona;
- 7) Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente;
- 8) Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho;
- 9) Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar;
- 10) No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales;
- 11) Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligada a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente;
- 12) Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente;
- 13) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa;
- 14) Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro;
- 15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica;
- 16) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados;
- 17) En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 41.- Prohibición de la esclavitud. Se prohíben en todas sus formas, la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas.

Artículo 42.- Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia:

- 1) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica;

Artículo 41.- Prohibición de la esclavitud. Se prohíben en todas sus formas, la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas.

Artículo 42.- Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia:

- 2) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica;
- 3) Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;
- 4) Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida.

Artículo 43.- Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás.

Artículo 44.- Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto:

- 1) El hogar, el domicilio y todo recinto privado de la persona son inviolables, salvo en los casos que sean ordenados, de conformidad con la ley, por autoridad judicial competente o en caso de flagrante delito;
- 2) Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos;
- 3) Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formatos físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Sólo podrán ser ocupados, interceptados o registrados, por orden de una autoridad judicial competente, mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación con el correspondiente proceso. Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la ley;
- 4) El manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, sólo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos, a partir de que haya intervenido una apertura a juicio, de conformidad con la ley.

Artículo 45.- Libertad de conciencia y de cultos. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres.

Artículo 46.- Libertad de tránsito. Toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 1) Ningún dominicano o dominicana puede ser privado del derecho a ingresar al territorio nacional. Tampoco puede ser expulsado o extrañado del mismo, salvo caso de extradición pronunciado por autoridad judicial competente, conforme la ley y los acuerdos internacionales vigentes sobre la materia;
- 2) Toda persona tiene derecho a solicitar asilo en el territorio nacional, en caso de persecución por razones políticas. Quienes se encuentren en condiciones de asilo gozarán de la protección que garantice el pleno ejercicio de sus derechos, de conformidad con los acuerdos, normas e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana. No se consideran delitos políticos, el terrorismo, los crímenes contra la humanidad, la corrupción administrativa y los delitos transnacionales.

Artículo 47.- Libertad de asociación. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley.

Artículo 51.- Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

- 2) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa;
- 3) El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada;
- 4) Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Es un objetivo principal de la política social del Estado, promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica;
- 5) No habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 6) Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales;
- 7) La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico.

Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus

¿Cómo se pierden los derechos civiles en RD?

La pérdida de derechos civiles no es un concepto directo; más bien, estos derechos pueden ser limitados o restringidos por el Estado, pero nunca eliminados. Las restricciones se producen:

1) Por orden judicial o legal:

La ley puede establecer condiciones que limiten ciertos derechos civiles. Por ejemplo, se puede restringir la libertad de tránsito si una persona se encuentra cumpliendo una pena de prisión.

2) Para proteger el interés público y los derechos de otros:

Los derechos civiles están sujetos a las limitaciones necesarias para garantizar el orden público y proteger los derechos y libertades de otras personas.

3) Mediante el ejercicio de acciones judiciales:

Si una persona viola la ley, puede enfrentar restricciones en el ejercicio de sus derechos civiles como resultado de un proceso judicial.

Ejemplos de derechos civiles y sus limitaciones

- Libertad de asociación:

Si bien es un derecho civil, este puede ser restringido por la ley si la asociación busca fines ilícitos o contrarios al orden público.

- Derecho a la vida:

Es inviolable, pero puede haber excepciones en situaciones extremas que no impliquen la pena de muerte, que está prohibida en República Dominicana.

- Derecho a la intimidad y el honor:

Estos derechos pueden ser restringidos en casos específicos, como investigaciones legales o acciones judiciales, para proteger el interés público o los derechos de terceros.

Derecho de Autor

El derecho de autor protege las obras originales de autoría. Su uso indebido o falsificación es la infracción que consiste en usar, reproducir o distribuir una obra sin el consentimiento del titular, lo que se sanciona tanto civil como penalmente, y puede acarrear penas de prisión, multas o inhabilitación. Las sanciones específicas dependen de las leyes de cada país.

¿Qué es el derecho de autor?

- Es un conjunto de normas que protegen la propiedad intelectual de los autores sobre sus creaciones originales (literarias, artísticas, científicas, etc.).
- Otorga al autor derechos exclusivos para controlar el uso y beneficiarse económicamente de su obra.

¿Qué constituye una infracción y una falsificación?

- Infracción: Usar, reproducir, distribuir, adaptar, exhibir o interpretar una obra protegida sin el permiso del titular del derecho.
- Falsificación:
 - Alterar o modificar maliciosamente una obra.
 - Falsificar una obra protegida.
 - Atribuirse la autoría de una obra ajena (plagio).
 - Utilizar el nombre de un autor sin su consentimiento.

¿Cómo se sanciona el uso indebido y la falsificación?

Las sanciones varían según la legislación de cada país, pero generalmente incluyen:

- Sanciones Civiles:
 - Responsabilidad por los daños y perjuicios causados al titular de los derechos.
- Sanciones Penales:
 - Prisión: Puede variar de seis meses a varios años, dependiendo del delito y la legislación.
 - Multas: Se pueden imponer multas económicas significativas.
 - Inhabilitación: Privación del derecho a ejercer una profesión, oficio o cargo relacionado con la infracción.

Es importante denunciar estos delitos para proteger la propiedad intelectual de los creadores.

Derechos de los Contribuyentes

Según Impuestos Internos (DGII) en una página publica en su Web, los sus relaciones con la Administración Tributaria, la ciudadanía cuenta con un conjunto amplio de derechos reconocidos expresamente en la normativa vigente. Estos derechos son tomados muy en serio por Impuestos Internos. Para garantizar que los contribuyentes comprendan lo que pueden esperar en su relación con nuestra institución, se ha creado la presente Carta de Derechos que detalla la manera en que le corresponde a Impuestos Internos tratar a la ciudadanía.

La Carta de Derechos de los Contribuyentes se basa en los valores de profesionalidad, integridad y cooperación. Impuestos Internos tiene el compromiso de servirles con altos estándares de calidad, respeto, cortesía y equidad, garantizando los derechos detallados a continuación: I II III IV V VI VII VIII IX X Usted tiene el derecho a recibir un trato cortés y diligente por parte del personal al servicio de la DGII El personal de Impuestos Internos le facilitará en todo momento el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones brindándole un trato profesional, cortés y de calidad. En caso de no estar satisfecho con el trato recibido, la DGII pone a su disposición diferentes vías para realizar una reclamación y la misma será atendida con diligencia y confidencialidad.

Estos derechos son los siguientes:

1) Derecho a recibir información completa, precisa, clara y oportuna sobre cómo cumplir con sus obligaciones de acuerdo a su situación tributaria Como contribuyente recibirá información completa, precisa y oportuna en un lenguaje sencillo que explique las leyes y normativas relativas a su situación tributaria específica, para facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones. Además, Impuestos Internos pone a su disposición la posibilidad de consultar el estado de sus solicitudes y procedimientos.

2) Derecho a recibir información oportuna sobre actuaciones que realice Impuestos Internos de las que usted sea parte Impuestos Internos le notificará oportunamente al inicio de las actuaciones de comprobación o revisión y le explicará su naturaleza y alcance, así como los derechos y obligaciones que tiene en el curso de tales actuaciones, respetando siempre los plazos establecidos en la legislación tributaria.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

3) Derecho a recibir información sobre cambios en la legislación de manera oportuna Impuestos Internos se compromete a proporcionarle información sobre las novedades y/o modificaciones que se produzcan en las leyes, normas, resoluciones, decretos y otras normativas que incidan sobre el sistema tributario dominicano.

4) Derecho a hacer consultas a Impuestos Internos sobre casos particulares relacionados con la aplicación de las leyes y normativas tributarias Puede consultar a Impuestos Internos sobre sus dudas e inquietudes en lo relativo a la interpretación y aplicación de las leyes y normativas de carácter tributario en situaciones concretas. Para ello, la institución responderá oportunamente a través de las vías disponibles. Usted tiene el derecho a la privacidad y confidencialidad de su información Impuestos Internos no divulgará la información que nos suministren los contribuyentes.

5) Derecho a saber por qué le pedimos esta información y cómo y para qué la usaremos.

6) Derecho a una reconsideración Si considera injusta o incorrecta la determinación de su obligación tributaria efectuada por la Administración, tiene derecho a interponer un Recurso de Reconsideración mediante el cual manifieste su inconformidad y aporte los elementos probatorios que fundamentan su desacuerdo, con el objetivo de que la decisión inicial sea evaluada en una instancia administrativa distinta.

7) Derecho a denunciar el incumplimiento o fraude por parte de otro contribuyente En caso de que tenga conocimiento de acciones irregulares o actividades fraudulentas por parte de otro contribuyente tiene el derecho a denunciarle a través de los canales que Impuestos Internos ha dispuesto para tal fin.

8) Derecho a ser representado por una persona de su elección Los contribuyentes tienen derecho de representarse a sí mismos o a que otra persona les represente, con la debida autorización escrita. Su representante debe ser una persona facultada ante Impuestos Internos para estos fines, tal como un abogado o contador público autorizado o agente registrado.

8) Derecho a conocer las informaciones sobre nuestro desempeño organizacional y ejecución presupuestaria Impuestos Internos tiene a su disposición información actualizada sobre su desempeño organizacional y ejecución presupuestaria que puede ser consultada a través del Departamento de Libre Acceso a la Información Pública y en el portal de transparencia de nuestra página web: www.dgii.gov.do

Derechos del Empleado Doméstico

En la República Dominicana, los empleados domésticos tienen derecho a salario mínimo, registro en la Seguridad Social (incluyendo seguro familiar y de riesgos laborales), vacaciones remuneradas, un período de descanso semanal y diario, pago del Salario de Navidad, y en ciertos casos, pago por desahucio y preaviso. Además, con la entrada en vigencia de las resoluciones del trabajo doméstico, gozan de una cobertura de salud mejorada a través del Régimen Subsidiado y otras prestaciones.

Beneficios de la Seguridad Social:

- Registro:

La obligación del empleador de registrar al trabajador doméstico en la Tesorería de la Seguridad Social. Sin embargo, en la actualidad este registro de personas físicas aún no funciona en la TSS.

- Plan Básico de Salud:

Acceso a la cobertura del seguro familiar de salud (Senasa) en el Régimen Subsidiado, incluyendo medicamentos, odontología, emergencias y subsidios por maternidad, lactancia y enfermedad.

- Seguro de Riesgos Laborales:

Cobertura en caso de accidentes laborales.

- Pensión Solidaria:

Derecho a una pensión por vejez a partir de los 60 años, y a pensiones por sobrevivencia para dependientes.

Descanso y Vacaciones:

- Descanso Diario: Un descanso ininterrumpido de al menos 9 horas entre jornadas.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Descanso Semanal: 36 horas continuas de descanso cada semana para los empleados a tiempo completo.
- Vacaciones: 2 semanas de descanso remunerado cada año de servicio.

Salario:

- Salario Mínimo:

Los empleados domésticos deben recibir un salario mínimo establecido por ley.

- Salario de Navidad:

Tienen derecho a la doceava (1/12) parte del salario mensual, es decir, el pago del doble sueldo de Navidad.

No Bonificación.

No reciben bonificaciones sobre los beneficios de la empresa, pues trabajan como empleados domésticos y no en una empresa.

No Prestaciones Laborales.

- Desahucio y Preaviso:

En ningún caso procede el pago de preaviso y cesantía.

- Implementos de Bioseguridad:

El empleador debe suministrar los implementos necesarios para proteger la salud personal del trabajador doméstico.

Derechos Fundamentales

A) Según la OEA

La Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoce derechos fundamentales plasmados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Entre ellos se encuentran: el derecho a la vida, la libertad personal, la no discriminación, la igualdad, la libertad de expresión, de conciencia, de asociación, a la seguridad, a un juicio justo, al trabajo, a la educación y a una vida digna.

Derechos principales de la OEA:

- Derecho a la vida: Protección de la vida en todas sus formas.
- Derecho a la libertad: Libertad personal, de pensamiento, de conciencia, de religión y de expresión.
- Derecho a la igualdad y no discriminación: Igualdad ante la ley y protección contra cualquier tipo de discriminación.
- Derecho a la integridad personal: Ser libre de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Derecho a la seguridad: Protección contra detenciones arbitrarias y derecho a la libertad y seguridad de la persona.
- Derecho al trabajo: Libre elección del trabajo y condiciones equitativas y satisfactorias.
- Derecho a la educación: Acceso a una educación que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad humana.
- Derecho a un juicio justo: Derecho a ser oído y a un recurso efectivo ante los tribunales competentes.
- Derecho de asociación y reunión: Libertad de formar sindicatos y asociarse libremente.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Derecho a la propiedad: Derecho a la propiedad en sus diferentes formas.
- Derecho a la protección de la salud: Acceso a servicios de salud.

Documentos clave:

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

Establece los derechos y las responsabilidades de las personas en la comunidad.

- Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Es un tratado internacional que establece los derechos y libertades fundamentales de las personas en América y las obligaciones de los Estados.

Estos instrumentos buscan garantizar la dignidad, la libertad y el bienestar de todos los ciudadanos del continente americano.

B) Según la ONU

La ONU proclama 30 derechos humanos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que incluyen el derecho a la vida, a no ser discriminado, a la libertad de expresión y asociación, a un juicio justo, a un nivel de vida adecuado, a la educación y a la cultura, así como a la protección social y condiciones laborales justas.

Aquí hay un resumen de los 30 derechos humanos, que forman la base del sistema de derechos humanos de la ONU:

Derechos Civiles y Políticos

- Derecho a la vida, la libertad y la seguridad:

Nadie puede ser privado arbitrariamente de la vida, la libertad o la seguridad.

- No a la esclavitud ni a la tortura:

Se prohíben la esclavitud y la tortura en todas sus formas.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Igualdad ante la ley y reconocimiento como persona:

Toda persona es igual ante la ley y tiene derecho a ser reconocida legalmente.

- Derecho a un juicio justo:

Se garantiza el derecho a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal imparcial.

- Libertad de movimiento y pensamiento:

Incluye el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión, expresión, reunión y asociación.

- Derecho a la privacidad y a la nacionalidad:

Toda persona tiene derecho a la privacidad, la libertad de movimiento y a tener una nacionalidad.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

- Derecho a un nivel de vida adecuado:

Incluye alimentación, vestido, vivienda, atención médica y servicios sociales necesarios.

- Derecho al trabajo:

Se garantiza el derecho al trabajo, la libre elección de empleo, condiciones laborales justas y protección contra el desempleo.

- Derecho a la seguridad social:

Las personas tienen derecho a la seguridad social.

- Derecho a la educación:

La educación es un derecho fundamental, y la instrucción elemental debe ser gratuita.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Derecho a la cultura y el progreso científico:

Todas las personas tienen derecho a participar en la vida cultural y beneficiarse del progreso científico.

Protección y Deberes

- Igualdad de derechos y no discriminación:

Se garantiza el derecho a la igualdad sin discriminación alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición.

- Derechos de las madres y protección de la infancia:

Se establece la protección especial para las madres y la protección contra la explotación social y económica de los niños.

- Deberes hacia la comunidad:

Las personas tienen deberes hacia su comunidad, ya que solo así pueden desarrollar plenamente su personalidad.

C) Según la Constitución Dominicana

En República Dominicana, los derechos fundamentales están principalmente regulados por la Constitución de la República Dominicana, que es la norma jurídica suprema que establece y garantiza estos derechos, así como también define los mecanismos para su protección. La Constitución establece, por ejemplo, la tutela judicial efectiva, el hábeas corpus, el hábeas data y la acción de amparo como herramientas legales para salvaguardar estos derechos.

La Constitución como ley principal

- Fundamento:

La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, que no pueden ser limitados excepto por ley y siempre respetando su contenido esencial.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Jerarquía constitucional:

Los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por el Estado dominicano tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales.

- Mecanismos de protección:

La Constitución garantiza la protección de los derechos fundamentales a través de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que incluye el derecho a ser oído, a una justicia accesible y a recursos legales.

Otras leyes y regulaciones

- Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-2003):

Esta ley regula específicamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, creando un sistema nacional para su protección y ejecución de políticas públicas.

- Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública:

Esta ley regula los derechos y deberes de las personas en sus interacciones con la Administración Pública, estableciendo principios y normas de procedimiento administrativo.

- Normas específicas:

Existen otras leyes que desarrollan y protegen derechos particulares, como los derechos de las personas con discapacidad.

Los derechos fundamentales en la República Dominicana, establecidos principalmente en los artículos 37 al 68 de su Constitución, incluyen el derecho a la vida, la dignidad, la igualdad, la libertad y seguridad personal, a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. Estos derechos se basan en el respeto a la dignidad humana y buscan limitar el poder del Estado y de particulares para evitar abusos, estableciendo mecanismos de tutela y protección para su efectividad.

Derechos Fundamentales Principales

- **Derechos Civiles y Políticos:**

- **Derecho a la vida y a la dignidad humana:** Nadie debe ser sometido a penas o torturas que afecten su salud.
- **Derecho a la igualdad:** Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a no ser discriminadas.
- **Libertad personal y seguridad:** Las personas tienen derecho a la libertad y seguridad, y a no ser detenidas arbitrariamente.
- **Derecho a la intimidad y al honor:** Se protege la vida privada, el honor y la propia imagen.
- **Libertad de conciencia, religión y expresión:** Se garantiza la libertad de conciencia, de cultos, de expresión e información.
- **Derecho a la propiedad:** Incluye la propiedad intelectual y la propiedad en general.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

- **Derecho a la salud:** Garantiza el acceso a servicios de salud y a protección contra riesgos para la salud.
- **Derecho a la educación:** El Estado debe garantizar el acceso a la educación.
- **Derecho al trabajo:** Toda persona tiene derecho a un trabajo digno y a la libertad de elegirlo.
- **Derecho a la vivienda:** Se reconoce el derecho a una vivienda digna.
- **Derecho a la seguridad social:** El Estado debe garantizar la seguridad social.
- **Derechos del consumidor:** Se establecen derechos para los consumidores.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Derechos de la familia:** Se protege el núcleo familiar y a sus miembros.

Garantía y Aplicación

- **Protección constitucional:**

Estos derechos están consagrados en el título de la Constitución y se consideran fundamentales.

- **Mecanismos de tutela:**

El Estado garantiza la efectividad de estos derechos mediante mecanismos de tutela y protección.

- **Vínculo con el Estado:**

Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, que están obligados a garantizar su efectividad.

- **Protección reforzada:**

Los derechos sociales tienen una protección reforzada en el ordenamiento jurídico dominicano, y cualquier restricción debe estar justificada y no afectar el contenido esencial del derecho.

Acción de Amparo.

El Artículo 72 de la Constitución Dominicana de 2015 establece el derecho a la acción de amparo, que puede ser ejercido por cualquier persona para que se protejan sus derechos fundamentales cuando son vulnerados, permitiendo obtener la protección directa y efectiva ante la violación de estos derechos.

- Es el derecho que tiene toda persona para reclamar la protección de sus derechos fundamentales.
- Permite interponer la acción de amparo para que un juez o tribunal resuelva sobre la vulneración de estos derechos fundamentales.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

¿Cuándo se puede interponer una acción de amparo?

- Se pueden ejercer cuando un acto u omisión de un poder público, o incluso de un particular, vulnera un derecho fundamental.
- En particular, los actos adoptados durante los estados de excepción que vulneren derechos protegidos, o afecten irrazonablemente los derechos suspendidos, están sujetos a la acción de amparo.

¿Cuál es el objetivo de la acción de amparo?

- Garantizar que el Estado cumpla con su deber de proteger los derechos fundamentales.
- Ofrecer una vía rápida y efectiva para proteger derechos, especialmente cuando los derechos fundamentales están siendo amenazados o violados.

En este sentido, la constitución dominicana establece lo siguiente:

Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia:

1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

2) Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias;

3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;

4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género;

5) El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.

Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:

- 18) Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito;
- 19) Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse;
- 20) Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos;
- 21) Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención;
- 22) Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 23) Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona;
- 24) Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente;
- 25) Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho;
- 26) Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar;
- 27) No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales;
- 28) Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligada a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente;
- 29) Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente;
- 30) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa;
- 31) Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro;
- 32) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica;
- 33) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados;
- 34) En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 41.- Prohibición de la esclavitud. Se prohíben en todas sus formas, la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas.

Artículo 42.- Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia:

- 1) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica;
- 2) Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;
- 3) Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida.

Artículo 43.- Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás.

Artículo 44.- Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto:

- 5) El hogar, el domicilio y todo recinto privado de la persona son inviolables, salvo en los casos que sean ordenados, de conformidad con la ley, por autoridad judicial competente o en caso de flagrante delito;
- 6) Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad,

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos;

- 7) Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formatos físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Sólo podrán ser ocupados, interceptados o registrados, por orden de una autoridad judicial competente, mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación con el correspondiente proceso. Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la ley;
- 8) El manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, sólo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos, a partir de que haya intervenido una apertura a juicio, de conformidad con la ley.

Artículo 45.- Libertad de conciencia y de cultos. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres.

Artículo 46.- Libertad de tránsito. Toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales.

- 3) Ningún dominicano o dominicana puede ser privado del derecho a ingresar al territorio nacional. Tampoco puede ser expulsado o extrañado del mismo, salvo caso de extradición pronunciado por autoridad judicial competente, conforme la ley y los acuerdos internacionales vigentes sobre la materia;
- 4) Toda persona tiene derecho a solicitar asilo en el territorio nacional, en caso de persecución por razones políticas. Quienes se encuentren en condiciones de asilo gozarán de la protección que garantice el pleno ejercicio de sus derechos, de conformidad con los acuerdos, normas e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana. No se consideran delitos políticos, el terrorismo, los crímenes contra la humanidad, la corrupción administrativa y los delitos transnacionales.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 47.- Libertad de asociación. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley.

Artículo 48.- Libertad de reunión. Toda persona tiene el derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley.

Artículo 49.- Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.

- 1) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley;
- 2) Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley;
- 3) El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley;
- 4) Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley;
- 5) La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado.

Párrafo.- El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público.

Sección II
De los Derechos Económicos y Sociales

Artículo 50.- Libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 1) No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional;
- 2) El Estado podrá dictar medidas para regular la economía y promover planes nacionales de competitividad e impulsar el desarrollo integral del país;
- 3) El Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la forma que determine la ley, cuando se trate de explotación de recursos naturales o de la prestación de servicios públicos, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibrio medioambiental.

Artículo 51.- Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

- 8) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa;
- 9) El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada;
- 10) Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Es un objetivo principal de la política social del Estado, promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica;
- 11) No habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas;
- 12) Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras,

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales;

- 13) La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 52.- Derecho a la propiedad intelectual. Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley.

Artículo 53.- Derechos del consumidor. Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley.

Artículo 54.- Seguridad alimentaria. El Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuarios, con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria.

Artículo 55.- Derechos de la familia. La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

- 1) Toda persona tiene derecho a constituir una familia, en cuya formación y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes y se deben comprensión mutua y respeto recíproco;
- 2) El Estado garantizará la protección de la familia. El bien de familia es inalienable e inembargable, de conformidad con la ley;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 3) El Estado promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. La ley establecerá los requisitos para contraerlo, las formalidades para su celebración, sus efectos personales y patrimoniales, las causas de separación o de disolución, el régimen de bienes y los derechos y deberes entre los cónyuges;
- 4) Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales;
- 5) La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con ley;
- 6) La maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo;
- 7) Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos;
- 8) Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley;
- 9) Todos los hijos son iguales ante la ley, tienen iguales derechos y deberes y disfrutarán de las mismas oportunidades de desarrollo social, espiritual y físico. Se prohíbe toda mención sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en todo documento de identidad;
- 10) El Estado promueve la paternidad y maternidad responsables. El padre y la madre, aun después de la separación y el divorcio, tienen el deber compartido e irrenunciable de alimentar, criar, formar, educar, mantener, dar seguridad y asistir a sus hijos e hijas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de estas obligaciones;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 11) El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales;
- 12) El Estado garantizará, mediante ley, políticas seguras y efectivas para la adopción;
- 13) Se reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la Nación. El Estado garantiza y promueve el ejercicio efectivo de sus derechos, a través de políticas y programas que aseguren de modo permanente su participación en todos los ámbitos de la vida nacional y, en particular, su capacitación y su acceso al primer empleo.

Artículo 56.- Protección de las personas menores de edad. La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes. En consecuencia:

- 1) Se declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, psicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos;
- 2) Se promoverá la participación activa y progresiva de los niños, niñas y adolescentes en la vida familiar, comunitaria y social;
- 3) Los adolescentes son sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta.

Artículo 57.- Protección de las personas de la tercera edad. La familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 58.- Protección de las personas con discapacidad. El Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política.

Artículo 59.- Derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda.

Artículo 60.- Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.

Artículo 61.- Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia:

- 1) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran;
- 2) El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables; combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales.

Artículo 62.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado. En consecuencia:

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 1) El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo;
- 2) Nadie puede impedir el trabajo de los demás ni obligarles a trabajar contra su voluntad;
- 3) Son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, entre otros: la libertad sindical, la seguridad social, la negociación colectiva, la capacitación profesional, el respeto a su capacidad física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal;
- 4) La organización sindical es libre y democrática, debe ajustarse a sus estatutos y ser compatible con los principios consagrados en esta Constitución y las leyes;
- 5) Se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora;
- 6) Para resolver conflictos laborales y pacíficos se reconoce el derecho de trabajadores a la huelga y de empleadores al paro de las empresas privadas, siempre que se ejerzan con arreglo a la ley, la cual dispondrá las medidas para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos o los de utilidad pública;
- 7) La ley dispondrá, según lo requiera el interés general, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los salarios mínimos y sus formas de pago, la participación de los nacionales en todo trabajo, la participación de las y los trabajadores en los beneficios de la empresa y, en general, todas las medidas mínimas que se consideren necesarias a favor de los trabajadores, incluyendo regulaciones especiales para el trabajo informal, a domicilio y cualquier otra modalidad del trabajo humano. El Estado facilitará los medios a su alcance para que las y los trabajadores puedan adquirir los útiles e instrumentos indispensables a su labor;
- 8) Es obligación de todo empleador garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas para promover la creación de instancias integradas por empleadores y trabajadores para la consecución de estos fines;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 9) Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario por trabajo de igual valor, sin discriminación de género o de otra índole y en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia y antigüedad;
- 10) Es de alto interés la aplicación de las normas laborales relativas a la nacionalización del trabajo. La ley determinará el porcentaje de extranjeros que pueden prestar sus servicios a una empresa como trabajadores asalariados.

Artículo 63.- Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia:

- 1) La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura;
- 2) La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores;
- 3) El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será definida en la ley. La educación superior en el sistema público será financiada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones, de conformidad con lo que establezca la ley;
- 4) El Estado velará por la gratuidad y la calidad de la educación general, el cumplimiento de sus fines y la formación moral, intelectual y física del educando. Tiene la obligación de ofertar el número de horas lectivas que aseguren el logro de los objetivos educacionales;
- 5) El Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la educación y de la Nación dominicana y, por consiguiente, es su obligación propender a la profesionalización, a la estabilidad y dignificación de los y las docentes;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 6) Son obligaciones del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con necesidades especiales y con capacidades excepcionales;
- 7) El Estado debe velar por la calidad de la educación superior y financiará los centros y universidades públicas, de conformidad con lo que establezca la ley. Garantizará la autonomía universitaria y la libertad de cátedra;
- 8) Las universidades escogerán sus directivas y se regirán por sus propios estatutos, de conformidad con la ley;
- 9) El Estado definirá políticas para promover e incentivar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación que favorezcan el desarrollo sostenible, el bienestar humano, la competitividad, el fortalecimiento institucional y la preservación del medio ambiente. Se apoyará a las empresas e instituciones privadas que inviertan a esos fines;
- 10) La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas;
- 11) Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantiza servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos incorporarán el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías y de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley;
- 12) El Estado garantiza la libertad de enseñanza, reconoce la iniciativa privada en la creación de instituciones y servicios de educación y estimula el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de acuerdo con la ley;
- 13) Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica.

Derechos Fundamentales - Aplicación e Interpretación

Constitución

Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes:

1) No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza;

2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad;

3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado;

4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.

Derechos Políticos

República Dominicana, los derechos políticos principales son el derecho al voto y a ser electo, la libertad de asociación política y la libertad de expresión política. Estos derechos se pierden (o suspenden) principalmente por una condena irrevocable por traición, espionaje o conspiración contra la República, y al tomar las armas o participar en atentados contra sus intereses. También se suspenden los derechos de ciudadanía por la interdicción judicial o la aceptación de cargos de un gobierno extranjero sin autorización.

Derechos políticos en la República Dominicana

Los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos dominicanos son:

- Derecho al voto: Participar en las elecciones para elegir representantes.
- Derecho a ser elegido: Postularse y ejercer cargos públicos.
- Libertad de asociación política: Formar y unirse a partidos y otras organizaciones políticas.
- Libertad de expresión política: Expresar libremente opiniones sobre asuntos públicos.

Cómo se pierden o suspenden los derechos de ciudadanía

Según la Constitución de la República Dominicana, la pérdida o suspensión de los derechos de ciudadanía puede ocurrir por:

- Condenación irrevocable por crímenes contra el Estado:

Se pierden al ser condenado de forma irreversible por traición, espionaje, conspiración, o por tomar las armas y participar en atentados contra los intereses de la República.

- Suspensión por condena criminal:

La pérdida de derechos se suspende por una condena criminal irrevocable hasta que se cumpla la pena, según el Código Penal.

- Interdicción judicial:

Se suspenden los derechos si hay una interdicción judicial (incapacidad legal).

- Aceptación de cargos extranjeros:

La ciudadanía se suspende al aceptar cargos públicos de un gobierno o Estado extranjero sin autorización del Poder Ejecutivo.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Violación de condiciones de naturalización:

Si la naturalización de un ciudadano se otorgó bajo ciertas condiciones, se pueden

Texto Constitución.

Artículo 21.- Adquisición de la ciudadanía. Todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad y quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido esa edad, gozan de ciudadanía.

Artículo 22.- Derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanas y ciudadanos:

- 1) Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución;
- 2) Decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo;
- 3) Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes;
- 4) Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto;
- 5) Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo.

Artículo 23.- Pérdida de los derechos de ciudadanía. Los derechos de ciudadanía se pierden por condenación irrevocable en los casos de traición, espionaje, conspiración; así como por tomar las armas y por prestar ayuda o participar en atentados o daños deliberados contra los intereses de la República.

Artículo 24.- Suspensión de los derechos de ciudadanía. Los derechos de ciudadanía se suspenden en los casos de:

- 1) Condenación irrevocable a pena criminal, hasta el término de la misma;
- 2) Interdicción judicial legalmente pronunciada, mientras ésta dure;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

3) Aceptación en territorio dominicano de cargos o funciones públicas de un gobierno o Estado extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo;

4) Violación a las condiciones en que la naturalización fue otorgada.

Derechos Sociales

La Constitución de la República Dominicana es el marco legal principal que regula los derechos sociales, estableciendo la dignidad humana, la igualdad y el trabajo como fundamentos del Estado. Además, existen leyes específicas que desarrollan derechos sociales, como el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

La Constitución:

- Marco Fundamental:

La Constitución Dominicana, en su Artículo 4, establece que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, fundamentado en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales. En este sentido, el Estado dominicano es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.

Su Constitución establece lo siguiente:

SECCIÓN II **DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES**

Artículo 50.- Libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 4) No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional;
- 5) El Estado podrá dictar medidas para regular la economía y promover planes nacionales de competitividad e impulsar el desarrollo integral del país;
- 6) El Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la forma que determine la ley, cuando se trate de explotación de recursos naturales o de la prestación de servicios públicos, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibrio medioambiental.

Artículo 51.- Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

- 14) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa;
- 15) El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada;
- 16) Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Es un objetivo principal de la política social del Estado, promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica;
- 17) No habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas;
- 18) Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras,

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales;

- 19) La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 52.- Derecho a la propiedad intelectual. Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley.

Artículo 53.- Derechos del consumidor. Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley.

Artículo 54.- Seguridad alimentaria. El Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuarios, con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria.

Artículo 55.- Derechos de la familia. La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

- 1) Toda persona tiene derecho a constituir una familia, en cuya formación y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes y se deben comprensión mutua y respeto recíproco;
- 2) El Estado garantizará la protección de la familia. El bien de familia es inalienable e inembargable, de conformidad con la ley;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 3) El Estado promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. La ley establecerá los requisitos para contraerlo, las formalidades para su celebración, sus efectos personales y patrimoniales, las causas de separación o de disolución, el régimen de bienes y los derechos y deberes entre los cónyuges;
- 4) Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales;
- 5) La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con ley;
- 6) La maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo;
- 7) Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos;
- 8) Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley;
- 9) Todos los hijos son iguales ante la ley, tienen iguales derechos y deberes y disfrutarán de las mismas oportunidades de desarrollo social, espiritual y físico. Se prohíbe toda mención sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en todo documento de identidad;
- 10) El Estado promueve la paternidad y maternidad responsables. El padre y la madre, aun después de la separación y el divorcio, tienen el deber compartido e irrenunciable de alimentar, criar, formar, educar, mantener, dar seguridad y asistir a sus hijos e hijas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de estas obligaciones;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 11) El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales;
- 12) El Estado garantizará, mediante ley, políticas seguras y efectivas para la adopción;
- 13) Se reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la Nación. El Estado garantiza y promueve el ejercicio efectivo de sus derechos, a través de políticas y programas que aseguren de modo permanente su participación en todos los ámbitos de la vida nacional y, en particular, su capacitación y su acceso al primer empleo.

Artículo 56.- Protección de las personas menores de edad. La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes. En consecuencia:

- 4) Se declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, psicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos;
- 5) Se promoverá la participación activa y progresiva de los niños, niñas y adolescentes en la vida familiar, comunitaria y social;
- 6) Los adolescentes son sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta.

Artículo 57.- Protección de las personas de la tercera edad. La familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Artículo 58.- Protección de las personas con discapacidad. El Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política.

Artículo 59.- Derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda.

Artículo 60.- Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.

Artículo 61.- Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia:

- 3) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran;
- 4) El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables; combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales.

Artículo 62.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado. En consecuencia:

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 1) El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo;
- 2) Nadie puede impedir el trabajo de los demás ni obligarles a trabajar contra su voluntad;
- 3) Son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, entre otros: la libertad sindical, la seguridad social, la negociación colectiva, la capacitación profesional, el respeto a su capacidad física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal;
- 4) La organización sindical es libre y democrática, debe ajustarse a sus estatutos y ser compatible con los principios consagrados en esta Constitución y las leyes;
- 5) Se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora;
- 6) Para resolver conflictos laborales y pacíficos se reconoce el derecho de trabajadores a la huelga y de empleadores al paro de las empresas privadas, siempre que se ejerzan con arreglo a la ley, la cual dispondrá las medidas para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos o los de utilidad pública;
- 7) La ley dispondrá, según lo requiera el interés general, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los salarios mínimos y sus formas de pago, la participación de los nacionales en todo trabajo, la participación de las y los trabajadores en los beneficios de la empresa y, en general, todas las medidas mínimas que se consideren necesarias a favor de los trabajadores, incluyendo regulaciones especiales para el trabajo informal, a domicilio y cualquier otra modalidad del trabajo humano. El Estado facilitará los medios a su alcance para que las y los trabajadores puedan adquirir los útiles e instrumentos indispensables a su labor;
- 8) Es obligación de todo empleador garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas para promover la creación de instancias integradas por empleadores y trabajadores para la consecución de estos fines;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 9) Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario por trabajo de igual valor, sin discriminación de género o de otra índole y en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia y antigüedad;
- 10) Es de alto interés la aplicación de las normas laborales relativas a la nacionalización del trabajo. La ley determinará el porcentaje de extranjeros que pueden prestar sus servicios a una empresa como trabajadores asalariados.

Artículo 63.- Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia:

- 14) La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura;
- 15) La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores;
- 16) El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será definida en la ley. La educación superior en el sistema público será financiada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones, de conformidad con lo que establezca la ley;
- 17) El Estado velará por la gratuidad y la calidad de la educación general, el cumplimiento de sus fines y la formación moral, intelectual y física del educando. Tiene la obligación de ofertar el número de horas lectivas que aseguren el logro de los objetivos educacionales;
- 18) El Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la educación y de la Nación dominicana y, por consiguiente, es su obligación propender a la profesionalización, a la estabilidad y dignificación de los y las docentes;

Legislación Dominicana Abreviada, Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- 19) Son obligaciones del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con necesidades especiales y con capacidades excepcionales;
- 20) El Estado debe velar por la calidad de la educación superior y financiará los centros y universidades públicas, de conformidad con lo que establezca la ley. Garantizará la autonomía universitaria y la libertad de cátedra;
- 21) Las universidades escogerán sus directivas y se regirán por sus propios estatutos, de conformidad con la ley;
- 22) El Estado definirá políticas para promover e incentivar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación que favorezcan el desarrollo sostenible, el bienestar humano, la competitividad, el fortalecimiento institucional y la preservación del medio ambiente. Se apoyará a las empresas e instituciones privadas que inviertan a esos fines;
- 23) La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas;
- 24) Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantiza servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos incorporarán el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías y de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley;
- 25) El Estado garantiza la libertad de enseñanza, reconoce la iniciativa privada en la creación de instituciones y servicios de educación y estimula el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de acuerdo con la ley;
- 26) Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Dignidad Humana:**

El Artículo 6 asegura que el Estado se organiza para la protección efectiva de los derechos fundamentales inherentes a la persona, siendo el respeto a la dignidad humana una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

- **Derechos Fundamentales:**

La Constitución protege y garantiza la efectividad de los derechos fundamentales a través de diversos mecanismos.

Leyes Específicas:

- **Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03):** Esta ley regula aspectos sociales específicos, incluyendo el derecho a la salud, la información en materia de salud y la protección de la maternidad, para niños, niñas y adolescentes.

Mecanismos de Protección:

- **Tutela y Protección:** La Constitución (Artículo 68) garantiza los mecanismos de tutela y protección para asegurar la satisfacción de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados.

Derechos y Deberes del Paciente

Los derechos del paciente incluyen recibir información completa sobre su estado de salud y tratamientos, ser tratado con dignidad y respeto sin discriminación, tomar decisiones informadas sobre su atención médica (lo que implica el derecho a aceptar o rechazar un tratamiento), la confidencialidad de su información médica y el derecho a que se respete su privacidad. También se tiene derecho a recibir atención médica de calidad, contar con un expediente clínico, pedir una segunda opinión y presentar quejas o inconformidades sobre la atención recibida.

Información y Comunicación

- Información clara y oportuna:

Tienes derecho a recibir información detallada, veraz y comprensible sobre tu estado de salud, diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.

- Derecho a preguntar:

Puedes hacer todas las preguntas que necesites al personal médico antes de tomar una decisión.

- Acceso a tu expediente:

Puedes solicitar acceso y copias de tu expediente clínico y recibir una factura desglosada si se te solicita.

Trato Digno y Respetuoso

- Atención sin discriminación:

Debes ser atendido con respeto, sin importar tu raza, edad, sexo, condición socioeconómica, creencias o cualquier otra característica.

- Identificación del personal:

Tienes derecho a que el personal de salud porte una identificación visible que muestre sus funciones.

Decisión sobre tu Salud

- Consentimiento informado:

Puedes aceptar o rechazar un tratamiento, una prueba diagnóstica o un procedimiento, siempre y cuando estés informado de los riesgos y beneficios.

- Segunda opinión:

Puedes buscar la opinión de otros especialistas para considerar opciones alternativas de tratamiento.

Privacidad y Confidencialidad

- Secreto médico: Tu información médica debe ser tratada con confidencialidad y no debe ser compartida con personas no autorizadas.
- Respeto a la intimidad: Tu privacidad y pudor deben ser respetados durante la atención médica.

Calidad y Seguridad de la Atención

- Atención de calidad: Tienes derecho a recibir atención médica segura y de calidad, basada en protocolos establecidos.
- Atención de urgencia: Debes ser atendido en casos de urgencia, sin importar tu condición.

Presentación de Inconformidades

- Reclamos y quejas: Puedes hacer reclamos o quejas sobre la atención médica sin temor a represalias y tienes derecho a que tu hospital o centro de salud te responda.

A) Consentimiento Informado

El consentimiento informado es un proceso legal y ético que garantiza la autonomía del paciente o de la persona que participa en un estudio o intervención médica. Se basa en proporcionar información clara y comprensible sobre los procedimientos, sus riesgos, beneficios y alternativas, permitiendo a la persona tomar una decisión libre, voluntaria e informada sobre su atención médica o participación en investigación clínica. Este proceso es fundamental en la relación médico-paciente y se documenta, por lo general, con la firma de un documento escrito.

Elementos clave del consentimiento informado

- Información:

El paciente debe recibir información completa, clara y comprensible sobre el tratamiento o procedimiento propuesto, incluyendo sus riesgos, beneficios, alternativas disponibles y consecuencias de no aceptar el tratamiento.

- Voluntariedad:

La decisión debe ser libre, es decir, sin coacción, persuasión o manipulación externa.

- Competencia/Capacidad:

La persona debe tener la capacidad mental para comprender la información y las consecuencias de su decisión, no debiendo estar bajo la influencia de delirios, alucinaciones o alteraciones de conciencia.

- Proceso:

Es un diálogo entre el profesional de la salud y el paciente, donde se resuelven dudas y se utilizan herramientas como ayudas para la toma de decisiones para facilitar la comprensión.

- Documentación:

Generalmente, se formaliza mediante la firma de un documento escrito que resume la información proporcionada y la decisión del paciente, aunque la validez del consentimiento reside en el entendimiento y la voluntariedad, más que en la firma.

Propósito y relevancia

- Respeto a la autonomía:

Es una expresión del respeto a la autonomía individual, reconociendo a la persona como dueña de sus decisiones sobre su cuerpo y salud.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Garantía de derecho a la salud:

Es una garantía del derecho fundamental a la salud, pues permite al paciente aceptar o rechazar servicios de salud.

- Ética en investigación:

Es un principio ético crucial en la investigación clínica, asegurando que los participantes en un ensayo comprenden y aceptan voluntariamente su participación.

B) Segunda Opinión

Una segunda opinión es el juicio o valoración de un segundo profesional cualificado, especialmente un médico, sobre un diagnóstico o un plan de tratamiento ya establecido por otro profesional. Su propósito es obtener más información, confirmar la evaluación inicial, explorar otras opciones de tratamiento o simplemente sentirse más seguro al tomar decisiones importantes sobre la salud.

¿Cuándo es útil buscar una segunda opinión?

- Diagnóstico incierto o complejo:

Si un diagnóstico es poco claro o si se trata de una enfermedad rara, puede haber varias interpretaciones.

- Tratamientos agresivos:

Para tratamientos importantes o con alto riesgo, una segunda opinión puede asegurar la mejor opción.

- Falta de confianza o dudas:

Si no se siente cómodo con su médico o si tiene dudas sobre el diagnóstico o el tratamiento.

- Existen múltiples opciones de tratamiento:

Cuando hay varias alternativas terapéuticas y necesita una perspectiva adicional.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Sugerencia del primer médico:

Algunos profesionales de la salud son receptivos y pueden recomendar a sus pacientes buscar una segunda opinión, especialmente en casos complejos.

¿Cómo obtener una segunda opinión?

1. Reúna su historial médico:

Antes de la cita, solicite todos sus informes, resultados de pruebas y estudios de imágenes.

2. Prepare sus preguntas:

Escriba sus inquietudes y preguntas para asegurarse de que el segundo médico las aborde.

3. Contacte a otro profesional:

Busque un médico especializado en su condición, preferiblemente de otra institución.

4. Compare y decida:

Evalúe las opiniones de ambos médicos y tome una decisión informada sobre el mejor camino a seguir.

Es un derecho del paciente y una práctica clínica estándar que puede brindarle mayor seguridad y confirmar que está recibiendo la atención adecuada.

C) Derechos y Deberes de los Ciudadanos en Relación con los Servicios.

Hospital Dr. Neit Arias Lora

Derechos

- A que se le respete su personalidad, dignidad humana e intimidad.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- A recibir informaciones del personal capacitado, antes y después de la realización de exámenes y procedimientos.
- A no ser discriminado por raza, edad, creencia religiosa, condición social, política, sexo, estado legal, situación económica, limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales u otras condiciones.
- A ser atendido de emergencia.
- A recibir educación en salud y en prevención de enfermedades.
- A la información sobre los bienes y servicios que promueven y protejan la salud y prevengan las enfermedades.
- A la confidencialidad de toda información relacionada con su expediente y su atención en cualquier institución de salud pública o privada. Esta confidencialidad sólo podrá ser obviada en los casos siguientes:
 - Cuando sea autorizado por el usuario.
 - Cuando el interés colectivo lo reclame, siempre que se garantice la dignidad y demás derechos del usuario.
 - Por orden judicial o por una disposición de una ley especial.
- A ser informado sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.
- A decidir si acepta o rechaza el tratamiento recomendado, previa información y comprensión del mismo, (excepto, los casos que representen riesgos para la salud pública; en casos de menores discapacitados mentales y usuarios en estado crítico sin conciencia para decidir, la decisión recaerá sobre familiares directos, tutores o en su ausencia sobre el médico principal responsable de su atención).
- Al registro o constancia escrita de todo su proceso salud-enfermedad (expediente clínico único).

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- A no ser sometido a tratamiento médico o quirúrgico que implique grave riesgo para su integridad física, su salud o su vida, sin su consentimiento escrito o el de la persona responsable, (en caso de un paciente incapaz o inconsciente y que no exista persona responsable, el médico responsable y en su ausencia el equipo de salud, asumirá la responsabilidad del paciente).
- A obtener segundas opiniones sobre su padecimiento, diagnóstico o tratamiento.
- A mantener en su poder los resultados diagnósticos de su padecimiento.

Deberes

- Respetar la salud de otras personas, evitando realizar actos, efectuar o intervenir en actividades perjudiciales para la salud de los terceros, ya sea por la naturaleza de dichas acciones o por la forma en que se ejecutan.
- Velar, mejorar y conservar su salud personal, familiar y de sus dependientes, especialmente si éstos son menores, ancianos o discapacitados, así como por la salud comunitaria.
- Velar por las condiciones de salubridad del medio en que viven y desarrollan sus actividades.
- Cumplir con las prescripciones generales de carácter sanitario comunes a toda la población, como también con las prescripciones específicas señaladas por las autoridades sanitarias.
- Colaborar con las autoridades de salud, auxiliando su acción, cumpliendo sus instrucciones y evitando acciones u omisiones que interfieran con las acciones de salud o retarden su cumplimiento.
- Proporcionar, de manera oportuna y fidedigna, la información que la SESPAS o la autoridad sanitaria correspondiente requiera para el cumplimiento de sus funciones como autoridad máxima de aplicación de la ley 42-01 y sus reglamentos.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Participar activamente en el proceso de construcción de mejores condiciones de vida y salud, desde la concepción misma de las acciones hasta la prestación de los servicios.

D) La Ley

La Ley General de Salud No. 42-01 del 2001 es la normativa principal que regula los derechos de los pacientes en la República Dominicana. Esta ley establece que todos los ciudadanos y residentes extranjeros tienen el derecho a la promoción de la salud, prevención de enfermedades, y a la protección, recuperación y rehabilitación de su salud, sin discriminación.

Principales aspectos de la Ley 42-01 sobre los derechos del paciente:

- **Derecho a la salud:**

Garantiza a todos los dominicanos y extranjeros residentes el derecho a la promoción, prevención y recuperación de su salud.

- **Sin discriminación:**

Este derecho se ejerce sin ningún tipo de discriminación.

- **Regulación del sistema de salud:**

La ley establece el marco para el Sistema Nacional de Salud, que incluye a la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) como órgano rector.

- **Reglamentos y disposiciones:**

La aplicación de esta ley y la definición de términos técnicos se detallan en sus reglamentos y otras disposiciones legales posteriores.

Otros marcos legales relevantes:

- **Ley 87-01 (Sistema Dominicano de Seguridad Social):**

Aunque no se enfoca directamente en los derechos del paciente, esta ley establece el marco para el acceso a los servicios de salud.

- **Ley 12-06 (Ley sobre Salud Mental):**

Regula aspectos específicos de la salud mental, como el consentimiento informado para tratamientos en casos de trastornos mentales.

En resumen, la Ley 42-01 es la legislación fundamental que establece y protege los derechos de los pacientes en la República Dominicana, siendo complementada por otras normativas específicas para áreas como la salud mental.

Desacato

La ley que regula el desacato varía según la jurisdicción, pero generalmente se refiere al desacato a la autoridad o al tribunal. En muchos países, las leyes de desacato, especialmente las relacionadas con la libertad de expresión y críticas a funcionarios públicos, han sido criticadas y derogadas por considerarse incompatibles con los derechos humanos y el funcionamiento democrático. En cuanto al desacato al tribunal, es la violación de una orden judicial y se sanciona mediante multas o prisión.

¿Qué es el desacato?

- Desacato al tribunal:

Ocurre cuando una persona viola una orden judicial, lo que puede resultar en sanciones como multas o incluso penas de prisión.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Desacato a la autoridad (o desacato criminal):

Se refiere a la ofensa o falta de respeto hacia un funcionario público o una institución.

La regulación del desacato en el ámbito internacional:

- Derechos humanos:

La Organización de los Estados Americanos (OEA) considera que las leyes de desacato son incompatibles con la libertad de expresión, ya que pueden ser utilizadas para silenciar opiniones impopulares y perjudicar el debate democrático.

- Relatoría para la Libertad de Expresión:

Esta entidad ha recomendado la derogación de las leyes de desacato por considerarlas contrarias a la libertad de expresión.

El desacato en la práctica (ejemplos):

- Desacato al tribunal:

Una parte puede presentar una petición de desacato si otra parte no cumple una orden judicial. Si se determina el desacato, el tribunal puede imponer una sanción.

- Desacato a la autoridad:

En algunos códigos penales, como el español, se contempla el delito de desacato como una falta de respeto a la autoridad.

Leyes específicas:

- República Dominicana:

El Código Procesal Penal y otras leyes regulan derechos relacionados con la dignidad y la igualdad, pero el desacato a la autoridad como delito fue derogado al considerar que restringía la libertad de expresión y de prensa.

Desahucio y Despido Laboral

A) Desahucio Laboral

El desahucio en la República Dominicana es el acto por el cual una de las partes en un contrato de trabajo o de alquiler (el propietario o el arrendador) pone fin al acuerdo, sin necesidad de justificar una causa, pero requiriendo el cumplimiento de un preaviso o el pago de una indemnización sustitutiva, según lo establecido en el Código de Trabajo (para el ámbito laboral).

Desahucio Laboral

- En qué consiste:

Es la facultad que tiene tanto el empleador como el trabajador de terminar un contrato por tiempo indefinido sin tener que explicar el motivo de la decisión, siempre y cuando se cumplan con los plazos de preaviso y el pago de las prestaciones laborales correspondientes.

- Regulación legal:

El artículo 75 del Código de Trabajo Dominicano es el que regula el desahucio en el ámbito laboral.

- Requisitos:
 - Aviso previo: Se debe dar una notificación a la otra parte de la intención de terminar el contrato.
 - Preaviso o indemnización: Se debe otorgar un plazo de preaviso o pagar una indemnización sustitutiva que varía según el tiempo de servicio del trabajador.
 - Notificación al Ministerio: En el caso del empleador, también debe comunicar la decisión al Ministerio de Trabajo.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- En qué consiste:

Es el procedimiento por el cual una parte, usualmente el propietario, puede recuperar la posesión de un inmueble alquilado al finalizar el contrato, o antes si el arrendatario incumple sus obligaciones, sin necesidad de invocar una causa específica más allá de la terminación del contrato.

- Regulación legal:

Este tipo de desahucio está principalmente regulado por el Decreto 4807 de 1959, sobre Control de Alquileres de Casas y Desahucios.

- Aspectos clave:
 - El contrato termina cuando se cumple el plazo acordado, o mediante la notificación de una de las partes.
 - Existen otras causas de terminación, como la pérdida del inmueble por caso fortuito o fuerza mayor.

B) Despido Laboral. Diferencias

La diferencia clave es que el desahucio es la terminación del contrato de trabajo sin necesidad de expresar una causa, mientras que el despido implica la terminación del contrato por una falta grave cometida por el trabajador, y el empleador debe probar dicha causa para justificar el despido. El desahucio puede ser ejercido tanto por el empleador como por el trabajador, pero el despido es una facultad exclusiva del empleador.

Desahucio:

- Sin causa justificativa:

No se requiere alegar un motivo específico para terminar la relación laboral.

- Partes:

Puede ser ejercido por el trabajador (renuncia o dimisión) o por el empleador (cancelación).

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Preaviso:

Requiere un preaviso escrito por parte de la persona que lo ejerce, y en caso de no darlo, puede haber una indemnización.

- Indemnización:

Si el desahucio lo ejerce el empleador, éste debe pagar el auxilio de cesantía y los derechos adquiridos del trabajador, además del preaviso. Si lo ejerce el trabajador, este pierde el derecho a la cesantía.

Despido:

- Con causa justificativa:

El empleador debe probar una falta grave o una de las causas estipuladas en el Código de Trabajo para terminar el contrato.

- Facultad del empleador:

Solo el empleador puede ejercer un despido.

- Plazo para ejercerlo:

El despido debe ser comunicado dentro de un plazo específico desde que se cometió la falta (generalmente 15 días).

- Indemnización:

Si el despido está justificado, el empleador no tiene la obligación de pagar prestaciones laborales como el auxilio de cesantía, aunque debe cumplir con los plazos de notificación. Si el despido se considera injustificado (no se prueba la causa o no se cumplen los plazos), el trabajador tiene derecho a demandar y recibir la indemnización correspondiente.

Desarrollo Personal

El derecho al desarrollo personal, o «derecho al libre desarrollo de la personalidad», es un derecho humano fundamental que permite a las personas tomar control sobre sus vidas y desarrollar un proyecto vital propio sin interferencias indebidas, siempre que no se vulneren los derechos de terceros o el orden constitucional. Este derecho abarca decisiones personales sobre la identidad, la orientación sexual, la apariencia y la libertad de elegir un futuro deseado, y es esencial para la dignidad humana.

¿Qué implica el derecho al libre desarrollo de la personalidad?

- Autonomía y control:

Las personas tienen la capacidad de decidir sobre aspectos fundamentales de su vida, como con quién casarse, si desean una reasignación de género, o cómo usan su tiempo libre.

- Proyecto de vida:

Permite a cada individuo imaginar y llevar a cabo un futuro que desee, sin estar obligado a seguir un camino predeterminado.

- Dignidad humana:

La dignidad es el núcleo de este derecho, y su protección se enfoca en garantizar que cada persona pueda vivir una vida con autonomía y respeto.

- Libertad genérica:

Es un derecho que engloba diversas libertades específicas, como la de expresión y la de elegir un proyecto de vida, enfocándose en la capacidad fundamental de control sobre la propia vida.

¿Qué no permite este derecho?

- No es un derecho absoluto; su ejercicio está limitado cuando se afectan los derechos de otras personas o el orden constitucional y la ley moral.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Para limitar este derecho, las restricciones deben tener una justificación robusta y un fin constitucional válido, ser idóneas, necesarias y proporcionales, como la salud pública.

¿Quién garantiza este derecho?

- El Estado tiene la tarea de garantizar, proteger y promover este derecho, eliminando las brechas que impiden su ejercicio.
- La sociedad en su conjunto también tiene la responsabilidad de promover y defender este derecho, erradicando la violencia y la discriminación que pueden obstaculizarlo.

Ejemplos de aplicaciones del derecho

- La decisión de divorciarse.
- La elección de la orientación sexual y de pareja.
- La libertad de tatuarse o de modificar el cuerpo.
- El derecho a una identidad de género y a manifestar cómo se identifica la persona.

Descanso

El derecho al descanso está regulado a nivel internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 24) y el Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 7.d), mientras que a nivel nacional y local, la regulación se encuentra en el Código de Trabajo y otras leyes específicas.

De esta manera, se establece el derecho a descansar de los trabajadores, siendo su principal respaldo el Código del Trabajo que establece el descanso semanal, para el descanso, mientras que en la República Dominicana, el Código de Trabajo (Ley 16-92) establece el derecho al descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas.

Descuento por Pronto Pago

Concepto

Como una forma de evitar litigios innecesarios y cobrar lo antes posible la deuda tributaria, el Código Tributario contempló la posibilidad de que el deudor reciba un descuento de los recargos por mora, si éste paga su deuda tributaria de manera voluntaria.

Base Legal

Artículo 252. Sanción por Mora. (Modificado por la Ley No.147-00, del 27 de diciembre del 2000). La mora será sancionada con recargos del 10% el primer mes o fracción de mes y un 4% adicional por cada mes o fracción de mes subsiguientes.

Párrafo I. Agentes de Retención y Percepción. Esta misma sanción será también aplicable a los agentes de retención o percepción, con respecto a la mora en el pago de los impuestos sujetos a retención o percepción.

Párrafo II. Suspensión de Recargos por Fiscalización. Se suspenderá la aplicación de recargos por mora, desde la notificación del inicio de fiscalización hasta la fecha límite de pago indicada en la notificación de los resultados definitivos de la misma.

Párrafo III. Descuentos por Pronto Pago. Cuando un contribuyente pague de forma inmediata y definitiva los impuestos que le fueren notificados por la Administración Tributaria, o realice una rectificación voluntaria de su declaración jurada de impuestos, podrá cumplir con dicha obligación acogiéndose a las facilidades que se describen a continuación:

1) Pagar el 60% del recargo determinado si se presenta voluntariamente a realizar su rectificación sin previo requerimiento de la Administración, y sin haberse iniciado una auditoria por el impuesto o período de que se trate.

2) Pagar el 70% del recargo notificado, si luego de realizada una auditoria, la diferencia entre el impuesto determinado y el pagado oportunamente, es inferior al 30% de este último.

Deserción o Abandono Militar

La deserción militar en la República Dominicana está principalmente regulada por el [Código de Justicia Militar](#) (Ley No.3483), en tanto que la [Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas \(Ley No. 873-78\)](#) y otras normativas establecen los deberes y la estructura institucional de las fuerzas armadas, que sirven de marco a la conducta de los militares.

Normativa aplicable:

- Código de Justicia Militar (Ley No. 3483, de 1953):

Es la ley que penaliza la deserción, al ser la ausencia injustificada y continua del militar de su unidad por un período determinado, castigada con prisión de tres meses y un día a dos años, o penas más severas en tiempo de guerra.

- Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Ley No. 873-78):

Esta ley orgánica establece la estructura, organización y principios fundamentales de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, y es el marco legal que rige el accionar de sus miembros y las bases de la carrera militar.

Concepto y consecuencias:

- La deserción se define como el acto de abandonar el servicio militar, ya sea por ausencia o falta de presentación a la unidad, que, sin un motivo justificado, se extiende por más de tres días consecutivos.
- Las consecuencias incluyen penas de prisión, que aumentan a de tres a seis años en caso de guerra, y la posibilidad de sufrir una baja deshonrosa.

Desfalco

En la República Dominicana, el desfalco es el delito de apropiación indebida de fondos o bienes públicos o privados por una persona en el ejercicio de su cargo o empleo. Su sanción depende de la gravedad y del marco legal, pudiendo incluir penas

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

de prisión y multas, además de la posible inhabilitación para ocupar cargos públicos. La sanción se puede encontrar en el Código Penal Dominicano o en leyes específicas, como la de Función Pública, que describe las faltas de los empleados públicos.

Definición del desfalco

- Apropiación indebida:

Es el acto de un empleado o cargo público de tomar para sí, o para terceros, dinero, bienes o recursos que le han sido confiados en virtud de su cargo.

- Ejercicio del cargo:

El delito de desfalco solo puede ser cometido por personas que están en una posición de autoridad o en un empleo público, aprovechándose de sus funciones.

Sanciones en la República Dominicana

1) Penas de prisión:

Pueden ser impuestas penas de prisión que varían según la gravedad del desfalco y el cargo del perpetrador.

2) Multas:

El infractor puede ser sancionado con una multa, a menudo equivalente al doble del monto desviado, como se establece en el caso del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.

3) Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas:

Además de la prisión y la multa, se puede imponer la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un período de tiempo determinado.

4) Responsabilidad administrativa:

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

En el caso de empleados públicos, el desfalco también puede considerarse una falta grave en el marco de la Ley de Función Pública, lo que puede derivar en sanciones administrativas además de las penales.

Marco legal

- Código Penal Dominicano:

Se refiere al desfalco como una forma de malversación, un delito que se castiga penalmente.

- Ley 41-08 de Función Pública:

Esta ley clasifica el desfalco, como el uso no autorizado de fondos o bienes del Estado para fines propios, como una falta grave.

- Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio:

Esta ley contempla el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, que a menudo está relacionado con el desfalco, estableciendo penas severas y multas.

Desheredar un Hijo

Para desheredar a un hijo en República Dominicana, se debe otorgar un testamento y expresar la causa legal, la cual debe ser una de las especificadas en la ley, como maltrato grave, injurias, abandono, o negación de alimentos. La desheredación debe ser formalizada judicialmente mediante una demanda ante un tribunal, donde se prueben los hechos en un proceso con derecho a defensa.

Pasos y requisitos

- Otorgar un testamento:

Debe realizarse un testamento en el que se manifieste la voluntad de desheredar al hijo y se especifique la causal legal que lo motiva.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Cumplir con causales legales:

La ley establece causas específicas para la desheredación que deben probarse.

- Probar las causales:

Es necesario que los hechos constitutivos de la desheredación sean probados legalmente ante un tribunal. Las causales incluyen:

- Maltrato o injurias graves: Incluye el maltrato físico o psicológico grave.
- Negación de alimentos: Si el hijo se niega a dar asistencia a sus padres cuando estos lo necesitan.
- Atentado contra la vida: Haber intentado o cometido un delito grave contra la vida de sus padres.
- Actuaciones perjudiciales: Realizar acciones que afecten gravemente la reputación o dignidad de sus padres.
- Privación de la patria potestad: Cuando la patria potestad sobre un hijo o nieto ha sido suspendida o privada por causa imputable al heredero.

Presentar una demanda judicial:

La desheredación debe ser declarada por un juzgado de primera instancia a través de una demanda interpuesta por los padres.

Proceso judicial:

- La demanda debe presentar los hechos y circunstancias en que se funda la acción.
- Las partes pueden presentar todos los medios de prueba legalmente establecidos.
- El tribunal evaluará la gravedad de los hechos para admitir o no la desheredación.

Desistimiento

El desistimiento es la renuncia voluntaria de una de las partes a continuar un proceso judicial o a un acto dentro de él. En la República Dominicana, está regulado en el Código Procesal Penal (para casos penales y de querella) y el Código Procesal Civil (para casos civiles). En general, es un acto unilateral e irrevocable que pone fin al proceso (desistimiento de la acción) o solo al litigio en curso (desistimiento de la instancia).

Es decir, se trata de una acción judicial es el acto procesal mediante el cual la parte demandante manifiesta su voluntad de abandonar el proceso judicial iniciado. En la República Dominicana, esta figura está regulada principalmente por el Código de Procedimiento Civil.

¿En qué consiste el desistimiento?

- Abandono de la pretensión: Es el acto por el cual el demandante o querellante abandona su pretensión o sus acciones legales en un proceso.
- Puede ser expreso o tácito: Se manifiesta explícitamente o por actos que evidencian la intención de abandonar, como no comparecer a una audiencia o no presentar conclusiones sin justa causa.
- Puede ser de la instancia o de la acción:
 - Desistimiento de la instancia: Termina el proceso actual, pero el derecho de volver a iniciar una nueva demanda no se pierde.
 - Desistimiento de la acción: Implica el abandono del derecho mismo de accionar, lo que impide futuras demandas sobre el mismo asunto.

Características.

El desistimiento es una forma de terminación anticipada del proceso, que ocurre por decisión unilateral de la parte actora (demandante). Sus características clave son:

- Voluntario: Es una manifestación libre de la parte que inició la acción.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Unilateral: Generalmente no requiere el consentimiento de la contraparte si se realiza antes de que esta sea emplazada (notificada formalmente de la demanda). Si el demandado ya ha sido emplazado, se considera un desistimiento de la instancia.

Efectos:

Desistimiento de la instancia: Pone fin al proceso actual, pero no extingue el derecho o la acción subyacente. La parte puede, en el futuro, presentar la misma demanda si no ha prescrito su derecho.

Desistimiento de la acción: Implica la renuncia al derecho mismo que se reclamaba, lo que produce el efecto de cosa juzgada y impide al actor ejercer la misma acción en una demanda posterior.

Ley que lo regula en la República Dominicana

- Código Procesal Civil: Regula el desistimiento en los procesos civiles. Si bien no se incluye el texto explícito del código, la doctrina y la práctica procesal lo describen y las referencias a su aplicación se basan en esta ley.
- Artículo 402: Establece que el desistimiento puede hacerse y aceptarse mediante simples actos bajo firma de las partes o de sus representantes, notificados de abogado a abogado.
- Artículo 403: Regula el procedimiento cuando el desistimiento ha sido notificado, permitiendo que la parte notificada, si considera que se le ha causado perjuicio, pueda solicitar al tribunal que decida sobre dicho perjuicio.
- Código Procesal Penal: Establece las normas para el desistimiento en los procesos penales. Por ejemplo, el Artículo 271 del Código Procesal Penal (mencionado en el documento del Tribunal Constitucional) regula el desistimiento del querellante, ya que es quien inicia una acción penal.
- Ley de Organización Judicial: La Ley 821-27 puede tener disposiciones relevantes sobre la competencia de los tribunales para conocer de estos casos.

En resumen, el desistimiento es una herramienta procesal que permite al demandante poner fin al litigio, ya sea temporalmente (desistimiento de instancia) o

definitivamente (desistimiento de acción), y su marco legal se encuentra en el Código de Procedimiento Civil dominicano.

Deslinde Inmobiliario

El deslinde inmobiliario es un **procedimiento técnico y legal** que define y establece los límites precisos de una propiedad, ya sea un terreno completo o una porción de una parcela mayor. Su objetivo es individualizar la propiedad, obtener seguridad jurídica y evitar conflictos con propiedades vecinas. Este proceso es fundamental para regularizar la situación del inmueble y es a menudo un requisito para obtener un certificado de título.

¿En qué consiste el proceso?

1. **Etapla técnica:** Un agrimensor autorizado realiza un levantamiento topográfico del predio y publica avisos para citar a los colindantes y otros interesados.
2. **Etapla judicial:** Se lleva el expediente a un tribunal, donde se establece la legalidad de la documentación. Se fija una audiencia y se publican avisos para citar a las personas interesadas, y un juez puede aprobar el deslinde.
3. **Etapla registral:** Una vez aprobada la sentencia, se cancela el título anterior y el registrador de títulos emite un nuevo certificado de título que individualiza la propiedad.

¿Por qué es importante?

- **Seguridad jurídica:** Garantiza que los límites del terreno estén claramente establecidos y evita disputas con propiedades colindantes.
- **Regularización:** Permite obtener un certificado de título, el documento oficial que acredita la propiedad legal del inmueble.
- **Transacciones:** Facilita la venta, transferencia o partición de la propiedad, ya que un plano de deslinde es a menudo un requisito legal.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Acceso a crédito:** Permite utilizar el inmueble para acceder a préstamos con garantía hipotecaria.

En la República Dominicana, el deslinde está regulado principalmente por la Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario y su reglamentación complementaria, estableciendo un proceso legal y técnico para determinar y demarcar los límites de una propiedad y obtener un Certificado de Título.

Desobediencia a la Autoridad

La desobediencia a la autoridad es el acto de resistirse o no cumplir de forma grave una orden legal impartida por una autoridad competente en el ejercicio de sus funciones. La pena varía según la gravedad del acto, pudiendo ser una multa para las faltas de respeto leves o una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses para la desobediencia grave o la resistencia directa y persistente.

¿Qué es la desobediencia a la autoridad?

Es una conducta que va en contra de las órdenes legales de una autoridad, como la policía o un funcionario público. Se diferencia de otras conductas por no implicar el uso de violencia o intimidación, sino una negativa o resistencia a una orden concreta.

Tipos de desobediencia y sus sanciones

- **Desobediencia grave:**

Implica una negativa clara y persistente a una orden. El artículo 556 del Código Penal establece una pena de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a dieciocho meses.

- **Faltas de respeto:**

Actos de menosprecio o insultos hacia la autoridad, que no implican una desobediencia directa a una orden. Estas se castigan con una pena de multa de uno a tres meses.

Ejemplos comunes

- Desobediencia grave:

Negarse a mostrar la documentación durante un control policial, o resistirse a cumplir una orden directa de un agente.

- Faltas de respeto:

Insultar a un agente de policía o manifestar un desprecio hacia él durante el ejercicio de sus funciones.

¿Qué se considera una orden legal?

Para que una desobediencia sea sancionable, la orden debe ser legal y emanar de una autoridad competente en el ejercicio de sus funciones.

- Delito de resistencia y desobediencia grave a la autoridad

Sanción.

El delito de resistencia y desobediencia está regulado en el art. 556.1 del Código Penal.

Desobediencia Civil

No existe una "ley de desobediencia civil" que la castigue directamente, sino que se sanciona por las infracciones específicas cometidas al desobedecer una ley. Quienes participan en actos de desobediencia civil deben aceptar las sanciones legales por no seguir la ley, pero estas sanciones deben ser proporcionadas al acto y no desproporcionadas para no generar miedo a ejercer derechos fundamentales.

¿Por qué la desobediencia civil no tiene una ley propia?

- No es un delito en sí mismo:

La desobediencia civil es la negativa a cumplir una ley por principios, pero no es un delito en el sentido de un acto contra la ley.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Se castiga la infracción específica:

Si una persona desobedece, lo que se castiga es la violación de la ley concreta que se infringe, como bloquear una calle, invadir una propiedad o no dispersarse cuando se ordena.

¿Cómo se aplican las leyes en estos casos?

- Aceptación de consecuencias:

Los desobedientes civiles están dispuestos a enfrentar las consecuencias legales, que pueden incluir arresto, juicio y castigo.

- Proporcionalidad del castigo:

Las leyes o la interpretación de la ley deben considerar que el castigo sea comedido y limitado, especialmente si el acto de desobediencia está relacionado con el ejercicio de un derecho fundamental. El objetivo es evitar un "efecto desaliento" que haga a los ciudadanos temer el uso de sus derechos.

Ejemplos

- Una persona que se niega a dispersarse cuando se le ordena hacerlo durante una protesta pacífica y está dispuesta a ser arrestada, está realizando un acto de desobediencia civil.
- En la Marcha de la Sal de Gandhi, se arrestó a los desobedientes civiles por violar la ley que prohibía a los indios lucrarse con la sal, no por un delito de "desobediencia civil".

Desperdicios de los Animales

Sí, hay leyes que obligan a los propietarios de animales a recoger sus desechos en espacios públicos. Por ejemplo, en la República Dominicana, la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable establece como una obligación de los propietarios o encargados de animales el recoger los excrementos en la vía

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

pública. En caso de no hacerlo, el propietario puede recibir una sanción, como una multa, según lo que establezca la normativa local o los ayuntamientos.

¿Qué dice la ley?

- La Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable de la República Dominicana, según la Procuraduría General de la República, incluye la responsabilidad de los propietarios de animales de mantenerlos en condiciones de higiene adecuadas y evitar que causen daños a la salud pública.
- Para el caso específico de los desechos, la ley señala que es una obligación del propietario o responsable del animal recoger la materia fecal cuando este se encuentre en el espacio público.

¿Qué pasa si no se cumple?

- El no recoger los excrementos de un animal en un lugar público constituye una falta de tenencia responsable y una amenaza a la salud pública.
- El incumplimiento puede llevar a una sanción de carácter económico, como una multa, según lo dicten los reglamentos aplicados en cada municipio o alcaldía.

¿Cómo se puede evitar la sanción?

- Llevar siempre bolsas o recipientes adecuados para recoger las heces del animal.
- Depositar los desechos en un lugar apropiado, como un contenedor de basura.

Al colaborar y cumplir con esta obligación, se ayuda a mantener un entorno limpio y saludable para todos los ciudadanos.

La Ley No. 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable de la República Dominicana establece el marco legal para la protección de los animales, prohibiendo el maltrato y garantizando su bienestar. La ley establece obligaciones tanto para el Estado como para los ciudadanos, promoviendo la tenencia responsable de mascotas, la creación de refugios, y la participación de la policía en el rescate y cuidado de animales.

Objetivos de la Ley

- Proteger a los animales:

Garantizar que todos los animales tengan derecho a una vida digna, libre de maltrato, crueldad y sufrimiento.

- Fomentar la tenencia responsable:

Inculcar a los dueños de animales la responsabilidad de proporcionarles alimento, agua, albergue y atención veterinaria adecuada.

- Prevenir el maltrato:

Establecer sanciones para quienes causen daño, lesiones o muerte a los animales.

- Promover la educación:

Desarrollar planes y programas para concienciar a la población sobre el respeto y la responsabilidad hacia los animales.

Responsabilidades del Estado

- Crear planes de educación sobre el respeto a los animales.
- Establecer albergues y programas de vacunación.
- Crear unidades de policía animal.
- Garantizar la salud y el bienestar de los animales en general.

Responsabilidades de los Ciudadanos

- Denunciar cualquier caso de maltrato animal a las autoridades competentes.
- Brindar atención y cuidados adecuados a sus mascotas.
- Promover el rescate y la adopción responsable de animales.

Puntos Clave

- Denuncia de maltrato:

La ley faculta a las autoridades a intervenir y sancionar actos de crueldad contra los animales.

- Tenencia de animales:

La ley exige que se les proporcionen a los animales las condiciones dignas, el albergue, la alimentación y la atención veterinaria necesarias para su bienestar.

- Falta de aplicación:

A pesar de la promulgación de la ley, existen denuncias sobre la falta de aplicación y voluntad política para que se cumpla plenamente su rol.

Destitución de Funcionario Público

La Ley de Función Pública (Ley 41-08) regula la destitución de cargos públicos en la República Dominicana. Esta ley establece un régimen legal para los servidores públicos, y dicta que las violaciones a sus normas éticas y disciplinarias dan lugar a sanciones, incluida la destitución. La destitución es una decisión administrativa que pone fin a la relación laboral de un servidor público.

Principales aspectos sobre la destitución

- Fundamento en la Ley 41-08:

La Ley 41-08 sobre Función Pública es el marco legal que rige las relaciones de trabajo del personal que labora en la Administración Pública dominicana.

- Sanción por faltas:

La destitución es una de las sanciones administrativas que se puede aplicar a un servidor público por violación de los principios éticos y disciplinarios consagrados en la propia ley.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Proceso administrativo:

La destitución debe seguir un procedimiento administrativo establecido en la ley para garantizar los derechos del servidor público.

- Destitución de funcionarios de carrera:

Los funcionarios de carrera solo pueden perder su condición de tales en los casos expresamente señalados por la ley, y previo cumplimiento del procedimiento correspondiente.

- Derechos de los servidores públicos:

La ley consagra un estatuto único que establece los derechos y deberes de los servidores públicos, incluyendo los procedimientos para su ingreso, permanencia, evaluación y separación del servicio.

En resumen, la destitución de un cargo público es una medida administrativa que se aplica en el marco de la Ley 41-08, cuando un servidor público incumple las normativas establecidas y se siguen los procedimientos administrativos correspondientes.

Detención Ilegal de Personas

La ley principal que sanciona la detención o retención ilegal de personas en República Dominicana es la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que establece penalidades para actividades relacionadas con la explotación humana y la salida o entrada ilegal de migrantes. Además, el Código Procesal Penal también sanciona la retención de personas para obtener colaboración o la entrega de un imputado, como se menciona en su Artículo 7.

Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas

- Esta ley se enfoca en sancionar el tráfico de personas y la trata de seres humanos, incluyendo la retención ilegal como parte de estas actividades delictivas.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Define y castiga actos como el engaño, la venta, coacción y sometimiento de personas a condiciones de esclavitud, explotación sexual o trabajos forzados.
- Su objetivo es combatir el negocio ilícito que genera enormes beneficios para los traficantes y los sindicatos del crimen organizado, según se describe en sus considerandos.

Código Procesal Penal (Ley 76-02)

- El Artículo 7 del Código Procesal Penal Dominicano establece que nadie puede ser perseguido, investigado o sometido a medidas de coerción sino por un hecho personal.
- Sanciona la retención de personas ajenas a un hecho punible, específicamente cuando esta retención se realiza con el propósito de obtener colaboración o la entrega de un imputado, conforme a las disposiciones de la ley penal, es decir, de esta ley.

Otros Marcos Legales Relevantes

- Constitución de la República Dominicana:

Protege el derecho a la libertad personal y prohíbe la detención arbitraria a través del recurso del habeas corpus.

- Código Penal:

Puede incluir otras disposiciones aplicables a la detención ilegal, dependiendo de las circunstancias en que ocurra el hecho, aunque la ley 137-03 y el Código Procesal Penal son las más directamente relacionadas.

Determinación Tributaria

A) Código Tributario.

Artículo 66. Determinación de Oficio por la Administración Tributaria. Dentro del plazo de prescripción, la Administración Tributaria deberá proceder a la determinación de oficio de la obligación tributaria, en los siguientes casos:

1) Cuando el contribuyente hubiere omitido presentar la declaración a que estaba obligado o no hubiere cumplido debidamente la obligación tributaria.

2) Cuando la declaración presentada no mereciere fe, por ofrecer dudas a la Administración Tributaria su veracidad o exactitud o en ella no se cumpliera con todas las normas que le son aplicables.

3) Cuando el contribuyente, estando obligado a llevar libros, no los llevare o los llevara incorrectamente o no exhibiere o carezca de los libros y comprobantes exigibles.

Artículo 67. Determinación de Oficio de Impuestos Retenidos o Traslados. En los casos de impuestos retenidos o trasladados, que no hayan sido declarados oportunamente, la Administración Tributaria podrá determinar y requerir de inmediato y sin otro trámite previo el pago de los impuestos correspondientes.

B) Norma General No.07-2014.

Establece las disposiciones y procedimientos aplicables a la Facultad de Determinación de la Obligación Tributaria por parte de la DGII.

Deuda Pública Externa

La deuda pública externa es el conjunto de créditos y obligaciones financieras que un Estado o sus entidades han contraído con agentes económicos (gobiernos, instituciones financieras internacionales o inversores privados) ubicados fuera del

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

país. Estas deudas se pagan en moneda extranjera y se usan para financiar proyectos, cubrir déficits fiscales o enfrentar crisis económicas.

Aspectos clave de la deuda pública externa:

- Acreedores internacionales:

Los prestamistas son entidades o individuos extranjeros, como otros gobiernos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o inversores privados.

- Moneda extranjera:

El pago de estas deudas se realiza en una moneda distinta a la nacional, como dólares o euros.

- Finalidad:

Los fondos se utilizan para financiar infraestructura (carreteras, aeropuertos), impulsar el desarrollo económico, o cubrir gastos en momentos de crisis económica.

- Manejo y riesgos:

La depreciación de la moneda nacional puede encarecer el pago de la deuda, representando un riesgo para la estabilidad económica del país.

¿Por qué un país contrae deuda externa?

Los países pueden recurrir a la deuda externa para:

- Financiar desarrollo: Inversión en grandes proyectos de infraestructura y sectores económicos.
- Cubrir desequilibrios: Compensar déficits en las cuentas públicas donde los gastos superan los ingresos.
- Superar crisis: Enfrentar situaciones de emergencia, como catástrofes naturales o recesiones económicas.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Base Legal.

Artículo 93.- Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo, le corresponden en consecuencia:

Numeral 1), Letra j):

j) Legislar cuanto concierne a la deuda pública y aprobar o desaprobado los créditos y préstamos firmados por el Poder Ejecutivo, de conformidad con esta Constitución y las leyes;

Manejo y Control.

Una vez aprobadas por ley mediante préstamos o bonos, las deudas públicas son manejadas a través de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Economía.

Deuda Pública Interna

La deuda pública interna es el dinero que un gobierno o el sector público solicita y recibe de prestamistas (empresas, ciudadanos, instituciones financieras) que están dentro de su propio país, a cambio de la emisión de títulos de deuda como bonos, y con la obligación de pagar intereses y el capital original en el futuro. Se compone principalmente de títulos de deuda emitidos para el mercado local, como letras del tesoro, bonos y obligaciones del estado, que son adquiridos por inversores nacionales.

La deuda pública interna es la obligación de un Estado con acreedores (personas o empresas) dentro del mismo país, que se financia a través de la emisión de títulos como bonos y se paga en la moneda local. Se compone de la deuda con el sector privado nacional (bonos) y la deuda con otras entidades públicas dentro del propio país, como el Banco Central, a través de diferentes instrumentos como los bonos del Estado.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

¿Qué es?

- Es una obligación financiera que tiene el Estado con agentes económicos radicados en el propio país.
- Se contrae mediante la colocación de valores gubernamentales (bonos, letras) o créditos directos.
- Los prestamistas internos reciben el derecho a cobrar intereses y el monto principal del préstamo en una fecha futura acordada.

¿Qué la compone?

La deuda pública interna está compuesta por instrumentos que el gobierno utiliza para financiarse dentro de su territorio:

- Bonos y Títulos de Deuda:

El Estado emite y vende bonos del Tesoro y otros títulos de deuda a inversionistas nacionales (personas y empresas). Estos títulos son compromisos de pago de interés y capital en un plazo determinado, y son la forma más común de financiar la deuda interna.

- Créditos Directos:

Aunque en menor medida, también puede incluir préstamos directos de instituciones financieras o de otras entidades dentro del país.

- Deuda Intragubernamental:

Es la deuda contraída entre diferentes instituciones del propio gobierno o del sector público (por ejemplo, del Gobierno Central con el Banco Central).

- Letras del Tesoro:

Títulos de deuda pública a corto plazo (generalmente hasta 12 o 18 meses) con interés fijo y un riesgo financiero bajo.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Obligaciones del Estado:**

Similar a los bonos, pero con plazos de vencimiento más largos, usualmente entre 10 y 30 años.

¿Quiénes son los acreedores?

Los acreedores de la deuda interna son agentes económicos ubicados dentro del mismo país. Esto incluye a:

- Personas y empresas nacionales: que compran los bonos y títulos de deuda.
- Instituciones financieras: como bancos y fondos de pensiones.
- Otras entidades públicas, como el propio Banco Central, en casos de deuda intragubernamental.

Base Legal.

Artículo 93.- Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo, le corresponden en consecuencia:

Numeral 1), Letra j):

j) Legislar cuanto concierne a la deuda pública y aprobar o desaprobado los créditos y préstamos firmados por el Poder Ejecutivo, de conformidad con esta Constitución y las leyes;

Manejo y Control.

Una vez aprobadas por ley mediante préstamos o bonos, las deudas públicas son manejadas a través de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Economía.

En resumen

La deuda pública interna representa un financiamiento del gobierno con recursos y agentes económicos dentro de sus fronteras, y se manifiesta a través de instrumentos

de deuda como los bonos, que son adquiridos por el público y otras instituciones del país.

Días de Fiesta Nacional

En República Dominicana, los días 27 de febrero (Independencia) y 16 de agosto (Restauración) son declarados Días de Fiesta Nacional por la Constitución de la República. La Ley N° 288 declara el 26 de enero, el natalicio de Juan Pablo Duarte, también como Día de Fiesta Nacional.

Días de Fiesta Nacional en RD:

- 27 de febrero: Día de la Independencia Nacional, declarado por la Constitución.
- 16 de agosto: Día de la Restauración de la República, declarado por la Constitución.
- 26 de enero: Día de Fiesta Nacional, declarado por la Ley N° 288, por el aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte.

Legislación relevante:

- Constitución de la República Dominicana:

Establece los días 27 de febrero y 16 de agosto como Días de Fiesta Nacional.

- Ley N° 288:

Declara el 26 de enero como Día de Fiesta Nacional, en conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte.

- Ley N° 139-97:

Reorganiza la celebración de días festivos en RD, trasladándolos para mejorar el turismo y la productividad laboral, según el Ministerio de Cultura Dominicana.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Notas importantes:

- La ley establece qué días se celebran como Fiestas Nacionales.
- Hay leyes específicas que declaran otros días, como el Día Nacional de la Juventud el 31 de enero.
- La Ley N° 139-97 es clave para entender cómo se trasladan los feriados que coinciden con martes, miércoles, jueves o viernes.

Movimiento de los Días Feriados

La Ley 139-97 de la República Dominicana establece que los días feriados que caen entre martes y viernes deben ser trasladados al lunes más cercano para crear fines de semana largos, pero existen excepciones, ya que el día de Viernes Santo, así como algunos días patrios y religiosos como el 1 de enero, 6 de enero y 21 de enero, no se trasladan según la ley.

¿Qué establece la Ley 139-97?

- **Traslado de feriados:**

Los feriados que caen de martes a viernes se mueven al lunes más próximo.

- **Fines de semana largos:**

El objetivo de esta ley es promover los fines de semana largos para el disfrute de los trabajadores.

Excepciones y feriados inamovibles:

- **Viernes Santo:**

Este día es no laborable y no se mueve de fecha, independientemente de su día de la semana.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Días que no se trasladan:**

El 1 de enero (Año Nuevo), el 6 de enero (Día de los Santos Reyes) y el 21 de enero (Día de Nuestra Señora de la Altagracia) no se trasladan de fecha.

- **Días Patrios y Religiosos:**

El 27 de febrero (Independencia Nacional) y el 25 de diciembre (Navidad) son fechas no trasladables.

Impacto de las modificaciones recientes:

- **Modificaciones a la Ley 139-97:**

En un proyecto reciente aprobado en primera lectura en el Congreso, se propone modificar esta ley para que días como el de Duarte (26 de enero), los Santos Reyes (6 de enero) y la Constitución (6 de noviembre) no se trasladen de fecha.

- **Justificación:**

La inamovilidad de estas fechas patrióticas busca honrar la memoria de los fundadores y las gestas patrióticas.

Dirección Central de Investigaciones Criminales
(Dicrim)

El DICRIM es la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional de República Dominicana, responsable de investigar delitos para la seguridad ciudadana. Su funcionamiento se rige principalmente por la Ley Orgánica de la Policía Nacional, No. 590-16, que establece su estructura y operatividad, y trabaja en coordinación con el Ministerio Público.

¿Qué es el DICRIM?

- Es un organismo operativo de la Policía Nacional encargado de investigar y resolver crímenes.
- Su objetivo es utilizar métodos científicos y operativos para identificar y presentar pruebas contra los responsables de actos ilícitos.
- Opera de forma coordinada con el Ministerio Público para asegurar que los expedientes judiciales estén bien fundamentados.

¿Qué ley lo regula?

- La ley principal que regula el DICRIM es la Ley Orgánica de la Policía Nacional, No. 590-16.
- Esta ley define la organización, el funcionamiento y los principios de actuación de la Policía Nacional en su conjunto, incluyendo al DICRIM.
- También establece el marco para la carrera, los deberes y los derechos de sus miembros.

Ley Orgánica de la Policía Nacional.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional, No. 590-16, promulgada en la República Dominicana el 15 de julio de 2016, es la normativa que establece la organización, el funcionamiento y los principios de la Policía Nacional. Su objetivo principal es regular la institución, incluyendo los derechos y deberes de sus miembros, el régimen disciplinario y la seguridad social. La ley también define funciones como proteger la seguridad ciudadana, prevenir delitos y mantener el orden público.

Características y objetivos principales

- **Organización y funcionamiento:**

La ley define la estructura y el modo de operación de la Policía Nacional.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Principios de actuación:**

Establece principios fundamentales como el respeto a la Constitución y a los derechos humanos, y rige el uso de la fuerza por parte de los agentes.

- **Derechos y deberes:**

Regula los derechos, deberes y el estatuto de carrera de los miembros de la institución.

- **Seguridad ciudadana:**

Sus funciones incluyen proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, garantizar el ejercicio de los derechos civiles y mantener el orden público.

- **Régimen disciplinario:**

Establece un marco para el régimen disciplinario, incluyendo las faltas graves y muy graves, como el abuso de atribuciones.

Modificaciones y reglamentos

- **Modificaciones:**

La ley ha sido objeto de modificaciones, como la aprobación del uso de dispositivos de videocámaras en uniformes y patrullas para mayor transparencia.

- **Reglamento de aplicación:**

Para su correcta aplicación, se ha elaborado un reglamento que detalla procedimientos y aspectos como el régimen de carrera policial.

Dignidad Humana

La dignidad humana es el valor inherente e inalienable que todo ser humano posee simplemente por el hecho de ser persona, sin importar su raza, género, edad o condición social. Este valor significa que cada persona debe ser tratada con respeto,

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

igualdad y justicia, ya que no es un objeto que pueda ser valorado por un precio, sino un fin en sí mismo. La dignidad humana es la base de los derechos humanos, como el derecho a la vida, la libertad y la educación.

Características clave de la dignidad humana

- **Intrínseca:**

Se posee desde el nacimiento, no depende de otros ni se obtiene con el tiempo.

- **Inviolable e intangible:**

No puede ser quitada o lesionada por nadie.

- **Universal:**

Es un valor compartido por todas las personas, sin distinción de culturas o características individuales.

- **Fundamento de los derechos humanos:**

Es la razón por la cual existen los derechos humanos y deben ser respetados por todos.

Implicaciones de la dignidad humana

- **Respeto y reconocimiento:**

Implica tratar a los demás como seres valiosos y considerar sus diferencias como parte de su propia dignidad.

- **Autonomía y libertad:**

Reconoce el derecho de cada persona a tomar decisiones libres sobre su propia vida y participar en su comunidad.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Justicia e igualdad:**

Fomenta la idea de que todos merecen las mismas condiciones para desarrollarse plenamente.

- **No ser tratado como medio:**

Es un principio ético que impide usar a una persona para un fin particular, sino que debe ser tratada como un fin en sí misma.

En resumen, la dignidad humana es un reconocimiento fundamental de que cada persona es valiosa por sí misma, un principio que guía el respeto mutuo y la protección de los derechos humanos en todo el mundo.

En la República Dominicana, la dignidad humana se regula principalmente a través de la Constitución de la República Dominicana, específicamente en su Artículo 38, que establece que la dignidad es sagrada, innata, inviolable y una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Esta protección se extiende a través de diversas leyes y reglamentos que garantizan y protegen los derechos inherentes a la persona.

La Constitución de la República Dominicana:

- **Artículo 38:**

Establece la dignidad humana como fundamento del Estado y responsabilidad de los poderes públicos, ordenando la protección de los derechos fundamentales de la persona.

- **Artículo 7:**

Define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana.

- **Artículo 39:**

Consagra el derecho a la igualdad y prohíbe actos que menoscaben o anulen el reconocimiento y goce de los derechos fundamentales en condiciones de igualdad.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Artículo 40:

Protege el derecho a la libertad y seguridad personal, y a un trato digno, sin ser sometido a tortura o tratos inhumanos.

Leyes y otras normativas:

- Leyes de Protección a los Derechos Fundamentales:

Se desarrollan otras leyes para proteger la dignidad, como las relacionadas con la protección del honor, la intimidad, la imagen, y los derechos de grupos vulnerables.

- Acción de Amparo (Ley Núm. 137-11):

Permite a las personas afectadas por actos discriminatorios solicitar la intervención de la justicia para restablecer sus derechos y garantizar la no repetición de tales actos.

En resumen:

La dignidad humana es un principio fundamental que se encuentra plasmado en la máxima ley de la República Dominicana y que se busca proteger mediante un conjunto de leyes y normativas que garantizan el respeto y la protección de los derechos de las personas.

Constitución:

Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

Dirección General de Tránsito Terrestre (DIGESETT)

La Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, promulgada el 24 de febrero de 2017, regula la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) en la República Dominicana. Esta ley establece las atribuciones y competencias de la DIGESETT, que asumió las funciones de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y la Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago (AMETRASAN). La DIGESETT es responsable de la viabilidad del tránsito, la fiscalización y la ejecución de controles efectivos relacionados con la movilidad, tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial en el país.

La DIGESETT tiene la responsabilidad de ejercer la viabilidad del tránsito, fiscalizar y ejecutar controles efectivos relacionados con la movilidad, tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial. Además, se encarga de la retención de vehículos en casos específicos, como la falta de placa de identificación o uso de una placa alterada, ilegible o fraudulenta.

La DIGESETT también se ha involucrado en operativos de inspección de autobuses del servicio de transporte interurbano para garantizar la seguridad de los usuarios, revisando que los conductores cuenten con licencias vigentes, que los vehículos tengan seguros al día y que sus neumáticos y condiciones físicas estén en óptimo estado.

La DIGESETT ha sido reconocida por su papel en el mejoramiento de la viabilidad del tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana, con un aumento en la cantidad de agentes y un compromiso continuo con el mejoramiento de la movilidad vial.

Direcciones Generales del Gobierno

En República Dominicana existen diversas Direcciones Generales, incluyendo la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el sector hacienda, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) en trabajo, la Dirección

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

General de Contrataciones Públicas (DGCP) en el Ministerio de Hacienda, y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) en el ámbito de la seguridad. También hay Direcciones Generales como la de Presupuesto (DIGEPRES) y la de Aduanas.

Ejemplos de Direcciones Generales por Sector

- Hacienda y Finanzas:
 - Dirección General de Impuestos Internos (DGII): Responsable de la administración tributaria.
 - Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES): Encargada de la planificación y ejecución del presupuesto del Estado.
 - Dirección General de Aduanas: Administra el régimen aduanero del país.
 - Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP): Regula y supervisa las compras y contrataciones del sector público.
 - Dirección General de Catastro Nacional: Se encarga de los registros catastrales de la propiedad.

Seguridad y Transporte:

- Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT): Regula el tránsito y el transporte en el territorio.
- Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD): Se dedica a la lucha contra el narcotráfico.

Trabajo y Seguridad Social:

- Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA): Protege y defiende los derechos de los afiliados al sistema de seguridad social.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Economía y Desarrollo:

- Dirección General de Inversión Pública: Encargada de la planificación y gestión de las inversiones públicas.
- Dirección General de Desarrollo Fronterizo: Promueve el desarrollo en la zona fronteriza.
- Dirección General de Desarrollo de la Comunidad: Fomenta el desarrollo local y comunitario.
- Dirección General de Comunidad Digna: Trabaja en pro de la dignidad comunitaria.

Otros ámbitos:

- Dirección General de Ingeniería: Parte del sector defensa.
- Dirección General de Bienes Nacionales: Gestiona los bienes propiedad del Estado.
- Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado: Administra el sistema de pensiones estatales.

Discapacidad

I.- Aspectos Generales.

A) ¿Qué es Accesibilidad Universal y Diseño para Todos?

Al proyectar y construir un espacio, este debe acomodarse a las diferentes necesidades de las personas para que puedan hacer uso de él y de todos los servicios que ofrezca, de forma cómoda, independiente y segura.

Accesibilidad es la condición que los procesos, productos, entornos, servicios, objetos y herramientas cumplen cuando son utilizables, comprensibles y practicables por

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

todas las personas de forma autónoma y natural, respetando al mismo tiempo las condiciones de seguridad.

El Diseño para todos es la estrategia por la que se conciben o proyectan, desde el origen, los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, con la finalidad de que puedan ser utilizados por todas las personas, es decir, que sean accesibles.

Barrera es cualquier impedimento u obstáculo que límite o impida el acceso, la libertad de movimientos, la estancia y la circulación con seguridad de las personas. Se pueden distinguir 4 tipos de barreras diferentes:

- Barreras urbanísticas
- Barreras en la edificación
- Barreras en los transportes
- Barreras en la comunicación

La Accesibilidad Universal se dirige a todas aquellas personas que de manera temporal o permanente, requieren medidas adicionales que faciliten su desenvolvimiento. Por ejemplo, madres o padres con coches de bebé, ancianos con bastón, personas con muletas, entre otros. La interacción entre la limitación o deficiencia que pueda tener una persona con una barrera es la que produce la discapacidad.

La accesibilidad no está sólo relacionada con la movilidad y los desplazamientos sino con las posibilidades de uso del espacio, la comunicación, la orientación y la manipulación de objeto.

B) ¿Qué hace el Conadis?

A través de las coordinaciones hechas por el CONADIS como órgano rector de políticas públicas en materia de discapacidad, se están desarrollando las estrategias necesarias para garantizar la aplicación de la política de accesibilidad en todas las construcciones realizadas por organismos gubernamentales, se destacan: centros educativos, estancias infantiles, centros de atención primaria, hospitales, entre otros.

Una parte importante de las políticas públicas que coordina CONADIS es el desarrollo e implementación de un Plan Nacional de Accesibilidad que procura la

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

integración de la accesibilidad en las normativas de construcción, turismo, transporte y telecomunicaciones a nivel nacional, mediante diferentes mesas de trabajo con los representantes de las asociaciones de Personas con Discapacidad y representantes de las diferentes instancias del gobierno.

La aplicación del Plan Nacional de Accesibilidad estará basada sobre el Sistema Nacional de Evaluación de la Accesibilidad (SINAC), que permitirá establecer normas, criterios y estándares que garanticen la accesibilidad universal en los entornos de uso público. Como parte del programa Saliendo del Escondite se están realizando visitas, supervisiones y se están impartiendo talleres en todo el territorio nacional que tienen la finalidad de diseminar el conocimiento sobre accesibilidad, para que la comunidad se haga veedora de la correcta aplicación de los criterios en las obras que en estas se construyan.

C) ¿Qué Puedes Hacer Tí?

Exige la implementación del reglamento R-007 para la construcción sin barreras arquitectónicas, en todas las construcciones y remodelaciones de tu municipio, paraje o localidad.

Reporta a las autoridades locales y al departamento de Accesibilidad Universal del CONADIS los casos de violación de la Reglamentación en materia de accesibilidad.

Defiende el derecho de todos y todas a moverse en su comunidad.

accesibilidad.universal@conadis.gob.do

Marco legal

A) Constitución

Artículo 58.- Protección de las personas con discapacidad. El Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política.

En la República Dominicana, la rehabilitación física está enmarcada principalmente en la Ley General de Salud (Ley 42-01) y, de forma más específica, en la Ley 5-13 sobre Discapacidad, la cual garantiza a las personas con discapacidad el derecho a

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

servicios de rehabilitación integral que fomenten su bienestar físico, mental y social. La Ley 5-13 establece al Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) como la entidad rectora para coordinar y supervisar las políticas de discapacidad, incluyendo el acceso a servicios de rehabilitación y apoyos técnicos.

Leyes y marcos regulatorios relevantes:

B) Ley General de Salud (Ley 42-01):

Esta ley establece el marco para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la protección, recuperación y rehabilitación de la salud para todos los ciudadanos, incluyendo la rehabilitación física.

C) Ley 5-13 sobre Discapacidad:

Es la ley más específica en este tema.

- Establece que el Estado debe verificar que los servicios de rehabilitación sean óptimos para el bienestar físico y mental de las personas con discapacidad.
- Garantiza el derecho a servicios de rehabilitación funcional que incluyan aditamentos y ayudas técnicas.
- Crea al CONADIS como la institución autónoma encargada de establecer y coordinar las políticas en materia de discapacidad, asegurando el cumplimiento de los derechos.

Aspectos clave:

- **Rehabilitación Integral:**

La Ley 5-13 promueve el concepto de rehabilitación integral para la plena inclusión social y participación de las personas con discapacidad.

- **Acceso y calidad de los servicios:**

El Estado, a través del CONADIS, está obligado a asegurar el acceso y la calidad de los servicios de rehabilitación.

- **Derechos de las personas con discapacidad:**

Se busca garantizar la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades para personas con discapacidad en el ámbito de la rehabilitación.

En resumen, aunque la Ley 42-01 sienta las bases generales de la salud y rehabilitación, es la Ley 5-13 la que aborda de manera específica y más detallada los derechos y el acceso a la rehabilitación física para las personas con discapacidad en la República Dominicana.

II.- Base Legal sobre la Discapacidad Física

La Ley General sobre la Discapacidad en la República Dominicana establece un marco legal que busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas con discapacidad. Esta ley se basa en principios como el respeto a la dignidad humana, la no discriminación, la igualdad de derechos, la equidad, la solidaridad, la justicia social, la integración e inclusión, la participación y la accesibilidad. Además, define términos específicos relacionados con la discapacidad y establece la obligación de las familias de proporcionar servicios de evaluación, diagnóstico y tratamiento a sus miembros con discapacidad. La ley también busca erradicar la discriminación y promover la inclusión social de las personas con discapacidad en la sociedad dominicana.

III.- Base Legal sobre Sordomudos

La Ley 43-23 reconoce la lengua de señas como lengua natural en la República Dominicana y ordena a las instituciones públicas y medios de comunicación utilizar intérpretes para que las personas sordas puedan comprender los mensajes. La ley establece que se debe procurar la participación de intérpretes y guías intérpretes de la lengua de señas en actos oficiales y eventos públicos. Además, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la intervención de intérpretes en la televisión abierta y en las redes sociales, así como en eventos públicos donde un grupo de cinco o más personas sordas lo soliciten. La ley también establece la responsabilidad del Estado de fomentar y apoyar actividades de enseñanza y difusión de la lengua de señas y la integración de intérpretes para el acceso a los servicios públicos y económicos de interés general.

IV.- Base Legal sobre el Autismo

La **Ley 34-23** de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la República Dominicana tiene como objetivo regular la atención, protección e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con TEA. Esta ley busca garantizar los derechos y la inclusión de las personas con TEA, asegurando que reciban el trato y las oportunidades que fomenten su desarrollo integral, social, económico y cultural. La ley también establece la creación del Servicio Nacional de Salud (SNS) y la creación del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) para coordinar programas de capacitación y formación del personal médico, psicólogos y familiares de personas con TEA.

V.- Base Legal sobre Salud Mental

La Ley de Salud Mental en la República Dominicana es la Ley No.12-06, promulgada el 3 de febrero de 2006. Esta ley tiene como objetivo principal regular el derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental para toda la población.

La Ley 12-06 establece varios aspectos importantes:

- **Derecho a la atención integral:**

La ley garantiza que todas las personas, independientemente de su condición, tengan derecho a recibir atención integral en salud mental, de forma gratuita y equitativa.

- **Protección de los derechos humanos:**

Reconoce y protege los derechos de las personas con trastornos mentales, incluyendo el derecho a ser escuchados y a participar en las decisiones sobre su tratamiento.

- **Internamiento voluntario o involuntario:**

Permite el internamiento voluntario o involuntario cuando sea necesario para el tratamiento, pero enfatiza la necesidad de que sea lo más breve posible y que el tratamiento continúe en la comunidad.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Atención comunitaria:**

Promueve la atención en centros cercanos al domicilio, con apoyos comunitarios, para facilitar la rehabilitación y reinserción social.

- **Organismo rector:**

La Subsecretaría de Estado de Salud Mental es la encargada de formular y ejecutar las políticas de salud mental, asegurando el acceso a servicios de calidad y el respeto de los derechos de los pacientes.

La Ley 12-06 es un paso importante para garantizar la protección de las personas con trastornos mentales en la República Dominicana y para promover una atención de salud mental más inclusiva y accesible para todos.

VI.- Clave Básica

La clave de la accesibilidad para personas con movilidad reducida es la eliminación de barreras físicas, arquitectónicas, comunicacionales y de información para permitirles una participación plena e independiente en la sociedad. Esto se logra mediante el diseño universal de entornos, productos y servicios, la incorporación de tecnologías asistivas como rampas y plataformas salvaescaleras, la adaptación de espacios como baños y pasillos, y la formación y sensibilización ciudadana, según el Boletín Oficial del Estado y Centers for Disease Control and Prevention | CDC (.gov).

Principios Clave

- **Diseño Universal:**

Crear entornos y productos que puedan ser utilizados por todas las personas, independientemente de sus capacidades.

- **Eliminación de Barreras:**

Identificar y remover los obstáculos físicos, como escalones, puertas estrechas, o la falta de rampas y ascensores, que limitan el movimiento.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Autonomía y Participación:**

Garantizar que las personas con movilidad reducida puedan desplazarse de forma segura y autónoma, participando plenamente en todos los aspectos de la vida social.

- **Inclusión Social:**

Promover la integración de la diversidad, amenizar las dificultades y asegurar la libertad de locomoción para todas las personas sin prejuicios.

Ejemplos de Accesibilidad en la Práctica

- **Arquitectura y Espacios Públicos:**

- **Rampas y ascensores:** Instalar rampas con pendientes adecuadas y ascensores accesibles para conectar diferentes niveles.
- **Pasillos y puertas:** Ampliar pasillos y usar puertas automáticas o de fácil apertura para facilitar el paso de sillas de ruedas y personas con movilidad reducida.
- **Estacionamientos:** Reservar espacios de estacionamiento cercanos a las entradas para personas con discapacidad.

Tecnología Asistiva:

- **Salvaescaleras:** Implementar sillas o plataformas salvaescaleras para superar desniveles en edificios.
- **Grifería y sanitarios:** Adaptar lavamanos con grifos de palanca o sensor y equipar baños con barras de apoyo laterales.

Comunicación e Información:

- **Señalización:** Utilizar señalización con braille, texturas firmes y colores resaltados para ayudar a personas con discapacidad sensorial a orientarse.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Personal Capacitado:** Contar con personal que pueda usar lenguaje de señas o tenga acceso a intérpretes para atender a personas con discapacidad auditiva.

Transporte:

- **Rutas Accesibles:** Diseñar rutas de transporte público que conecten estaciones y puntos de interés con accesibilidad.
- **Cruces Peatonales:** Reducir la velocidad y detenerse en los pasos de peatones, especialmente al ver a personas con movilidad reducida, para evitarles sustos y accidentes, según tuteorica.

Disciplina

En República Dominicana, no existe una ley general sobre la disciplina, sino que existen leyes que regulan la disciplina en ámbitos específicos, como la Ley General de Educación (66-97) y sus normas para centros educativos, la Ley 136-03 (Código del Menor) para la protección de niños, niñas y adolescentes, y la Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16) para sus miembros, cada una estableciendo sus propios marcos disciplinarios y de conductas permitidas o prohibidas.

Ejemplos de leyes que regulan la disciplina en áreas específicas:

- Educación:

La Ley 66-97 establece el marco general de la educación, y las Normas del Sistema Educativo Dominicano detallan la regulación de la convivencia y las pautas disciplinarias en los centros educativos.

- Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:

El Código 136-03 protege los derechos de los menores, incluyendo su integridad personal (física, síquica, moral) y establece medidas para garantizar su bienestar.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Fuerzas Armadas y Policía:

La Ley 590-16 de la Policía Nacional define los derechos, deberes, la carrera y el régimen disciplinario de sus miembros.

- Profesionales:

La Ley 140-15 sobre Notariado regula el régimen disciplinario de los notarios, incluyendo procedimientos, faltas y sanciones.

- Deportes:

La Ley 356-05 General de Deportes supervisa las actividades y el cumplimiento de condiciones por parte de las entidades deportivas.

Discrecionalidad

La discrecionalidad es la facultad que el ordenamiento jurídico otorga a un juez o a un funcionario para que decida según los principios o estándares que considere justificadamente de aplicación ante la indeterminación o el carácter abierto de la norma jurídica a aplicar.

En derecho administrativo la discrecionalidad administrativa es estudiada como la potestad que habilita a las instituciones y a las autoridades públicas para actuar con relativa libertad, y tomar decisiones que no les están pautadas de forma expresa en la norma, o decidir escogiendo de forma libre entre dos o más opciones.

El principio de discrecionalidad otorga a la autoridad pública la potestad de tomar decisiones, dentro de un marco legal, cuando la norma no es exhaustiva y permite elegir entre diferentes opciones válidas para el fin perseguido. Esta facultad no es un poder arbitrario, sino un margen de apreciación que debe ejercerse con cuidado, diligencia y siempre orientado al interés general y al debido cumplimiento de las leyes, estando sujeto a control judicial y administrativo.

Si hay discrecionalidad significa que al juez las soluciones de los asuntos que decide no le vienen dadas y predeterminadas enteramente, al cien por cien, por el sistema

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

jurídico, sino que éste, en medida mayor o menor, le deja espacios para escoja entre alternativas diversas, pero compatibles.

La discrecionalidad es así concebida como el poder o la facultad de elegir entre dos o más cursos de acción, cada uno de los cuales es concebido como permisible por el sistema de referencia del que se trate; en nuestro caso, el Derecho,

En materia Administrativa es la manifestación de la discrecionalidad en la que se incrementa la libertad de apreciación que tiene el órgano administrativo competente para adoptar una determinada resolución por basarse esta en criterios o fundamentos de carácter técnico.

Características clave:

- Margen de libertad:

La ley no predetermina al cien por cien la decisión, sino que deja un espacio para que la autoridad elija entre alternativas válidas.

- Objeto:

Su fin es permitir a la administración pública la adaptación de sus actos a las necesidades concretas y diversas que surgen en la gestión pública.

- Limitaciones:

No es un poder ilimitado; debe basarse en criterios jurídicamente justificados y nunca puede ser un acto de arbitrariedad o discrecionalidad.

- Control:

Los actos discrecionales son susceptibles de control por parte de la administración y los tribunales para asegurar su legalidad, razonabilidad y coherencia con el ordenamiento jurídico y el interés público.

Ejemplos:

- Administración pública:

Al tomar una decisión sobre un asunto que puede tener diferentes soluciones igualmente válidas, la administración usa su discrecionalidad para elegir la que considera más adecuada al bien común.

- Transporte:

Un servicio de transporte discrecional se adapta a la demanda del usuario, en lugar de seguir un itinerario y horarios fijos, a diferencia de un servicio regular.

En resumen, el principio de discrecionalidad reconoce la necesidad de cierta flexibilidad en la acción de las autoridades, siempre bajo el respeto de los límites legales y el objetivo fundamental de servir al interés general.

Discriminación

En República Dominicana, la Constitución y algunas leyes específicas regulan la discriminación. La Constitución, en su artículo 39, consagra el derecho a la igualdad y no discriminación. Además, existen leyes y proyectos de ley que buscan prevenir y eliminar la discriminación en varios ámbitos, como el laboral y contra las mujeres.

Marco Legal e Instituciones:

- Constitución:

Establece el principio de igualdad y no discriminación como un derecho fundamental.

- Ley 1-21:

Prohíbe el matrimonio entre menores de 18 años, eliminando la discriminación por sexo en este ámbito.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Proyecto de Ley Integral de Violencia contra las Mujeres:

Busca reconocer, tipificar y sancionar diferentes tipos de violencia contra las mujeres, incluyendo mecanismos de reparación para víctimas y sobrevivientes.

- Ley contra Actos de Discriminación:

Prohíbe y elimina la discriminación por parte de cualquier persona, institución pública o privada en ámbitos como empleo, educación y suministro de bienes y servicios.

- Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA):

Ha elaborado un anteproyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación.

- Ministerio de la Mujer:

Promueve mecanismos y políticas para garantizar la igualdad de las mujeres y trabaja en la prevención de la violencia de género.

- Comisiones Permanentes de Género:

En los ayuntamientos, tienen el rol de transversalizar la perspectiva de género.

Puntos Clave:

- La discriminación por orientación sexual fue eliminada del Código Penal.
- Se busca eliminar la discriminación laboral a personas mayores de 40 años.
- Se sanciona la discriminación múltiple con penas de prisión y multas.
- El establecimiento que promueva o tolere actos discriminatorios puede ser sancionado con el cierre temporal o definitivo.

Es importante destacar:

- La lucha contra la discriminación es un proceso continuo y requiere la participación de diversos actores sociales e institucionales.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Existen leyes y proyectos que buscan garantizar la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que históricamente han sido vulnerables a la discriminación.

El Código Penal actual, que fue modificado por una ley que entrará en vigencia e el año 2026, establece lo siguiente:

Art. 336.- (Modificado por la Ley No. 24-97 de fecha 28 de enero de 1997 G.O. 9945). Constituye una discriminación toda distinción realizada entre personas físicas en razón de su origen, edad, de su sexo, de su situación de familia, de su estado de salud, de sus discapacidades, de sus costumbres, de sus opiniones políticas, de sus actividades sindicales, su ocupación, de su pertenencia o de su no pertenencia, verdadera o supuesta, a una etnia, una nación, una raza o una religión determinada. Constituye igualmente una discriminación toda distinción realizada entre las personas morales en razón del origen, de su edad, del sexo, la situación de familia, el estado de salud, discapacidades, las costumbres, las opiniones políticas, las actividades sindicales, la pertenencia o no pertenencia verdadera o supuesta a una etnia, una nación, una raza, o una religión determinada de los miembros o de alguno de los miembros de la persona moral.

Art. 336-1.- (Agregado por la Ley 24-97 de fecha 28 de enero de 1997 G.O. 9945). La discriminación definida en el artículo precedente cometida respecto de una persona física o moral se castiga con prisión de dos años y cincuenta mil pesos de multa, cuando ella consiste en:

- 1ro. Rehusar el suministro o de un bien o un servicio;
- 2do. Trabar el ejercicio normal de una actividad económica cualquiera;
- 3ro. Rehusar contratar, sancionar o despedir una persona;
- 4to. Subordinar el suministro de un bien o servicio a una condición fundada sobre uno de los elementos previstos en el artículo precedente;
- 5to. Subordinar una oferta de empleo a una condición fundada en uno de los elementos previstos en el artículo anterior.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Por su parte, el nuevo Código Penal Dominicano, aprobado por la Cámara de Diputados en 2025, sanciona los actos de discriminación en diversas manifestaciones como la negación de un bien o servicio, obstáculos a una actividad económica o rechazo a la contratación, basándose en motivos como origen, edad, sexo, raza, o condición económica o religión. Sin embargo, se excluyó la orientación sexual como motivo de discriminación del Código Penal Dominicano, lo que fue criticado por organizaciones de derechos humanos.

Motivos de discriminación contemplados en la ley: Origen, Edad, Sexo, Raza, Condición económica, Religión.

Actos que constituyen discriminación según la ley:

- Negarse a suministrar a una persona un bien o un servicio.
- Obstaculizar el ejercicio de una actividad económica.
- Negarse a contratar a una persona.

Exclusión de la orientación sexual

- Las discusiones previas del Código Penal incluían la orientación sexual y el género como motivos de discriminación.
- Sin embargo, en la modificación aprobada por los diputados en junio de 2021, estos motivos fueron excluidos, lo que generó un rechazo enérgico por parte de organizaciones de la sociedad civil y fue descrito como una autorización para discriminar a la comunidad LGBTI, según informa SWIswissinfo.ch.

Otras normativas sobre discriminación

- La Constitución Dominicana garantiza la no discriminación y los derechos fundamentales de las personas en todos los ámbitos.
- La Ley Orgánica contra la Discriminación Racial busca prevenir, erradicar y sancionar la discriminación racial y garantiza el ejercicio de los derechos humanos.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

El Artículo 186 del Código Penal Dominicano sanciona el delito de discriminación, tipificando actos de negarse a suministrar bienes o servicios, obstaculizar actividades económicas, o no contratar a alguien debido a su origen, edad, sexo, raza, religión, condición económica u otros motivos. Es importante destacar que en el proyecto de ley del Código Penal de 2021, se eliminaron la orientación sexual y el género de la lista de motivos de discriminación, una modificación que generó controversia. Detalles del delito de discriminación:

- Actos prohibidos:

Se refiere a cualquier acto desigual o vejatorio que atente contra una persona física.

- Motivos de discriminación:

La ley castiga la discriminación por razones de origen o nacionalidad, edad, sexo, color, vínculo familiar, aspecto físico, condición socioeconómica, estado de salud, discapacidad, opinión pública, actividad sindical, oficio, o pertenencia a una etnia, raza o religión.

- Modificaciones legislativas:

La exclusión de la orientación sexual y el género de la lista de motivos de discriminación fue una modificación significativa realizada en la Cámara de Diputados.

Contexto y debate:

- Exclusión de la comunidad LGBTIQ+:

La exclusión de la orientación sexual y el género de los motivos de discriminación fue ampliamente criticada, ya que, según organizaciones de derechos humanos, autoriza la discriminación contra la comunidad LGBTI en la República Dominicana.

- Exclusión de los crímenes de odio:

Además, en discusiones previas del Código Penal, también se habían eliminado los crímenes de odio que estaban originalmente contemplados en el proyecto, según lo reportado por dirigentes de la organización TRANSSA.

No Discriminación Laboral

La discriminación laboral en la República Dominicana se refiere a cualquier trato desigual o preferencial en el ámbito laboral basado en características como edad, sexo, raza, religión, origen étnico, entre otros, que afecta el goce de derechos laborales. Esto puede manifestarse en la negación de oportunidades de empleo, salarios desiguales, acoso laboral, o condiciones de trabajo desfavorables.

Tipos de discriminación laboral:

- Por edad:

La discriminación por edad, especialmente contra personas mayores de 40 años, es un problema común en la República Dominicana, donde empresas solicitan personal más joven, ignorando la experiencia y capacidad de los candidatos mayores.

- Por género:

Las mujeres a menudo enfrentan una brecha salarial y dificultades para acceder a puestos de liderazgo, además de ser más vulnerables al acoso sexual en el trabajo.

- Por origen étnico o color de piel:

Existe evidencia de discriminación laboral basada en el color de piel, con personas de piel oscura enfrentando mayores obstáculos en la búsqueda de empleo y promoción.

- Por orientación sexual e identidad de género:

Las personas LGBTQI+ pueden enfrentar discriminación en el acceso al empleo y en el trato en el lugar de trabajo.

- Por discapacidad:

Personas con discapacidad a menudo encuentran barreras para acceder a empleos y recibir un trato justo en el entorno laboral.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Por VIH/SIDA:

Personas con VIH o SIDA pueden ser discriminadas en el ámbito laboral, a pesar de las leyes que prohíben esta práctica.

Marco legal:

- La Constitución de la República Dominicana establece el derecho a la igualdad y la no discriminación.
- El Código de Trabajo, aunque incluye mecanismos para abordar el acoso laboral, a menudo se considera insuficiente en su aplicación.
- La Ley 16-92 establece mecanismos para abordar el acoso laboral.
- Existe legislación específica que prohíbe la discriminación laboral contra personas mayores de 40 años, aunque su cumplimiento puede ser deficiente.

Desafíos:

- La aplicación efectiva de las leyes antidiscriminatorias sigue siendo un desafío en la República Dominicana.
- Las normas sociales y los sesgos cognitivos pueden contribuir a la discriminación laboral, incluso cuando existen leyes para proteger a los trabajadores.
- La falta de datos y estudios detallados sobre discriminación laboral dificulta la implementación de políticas públicas efectivas para combatirla.
- Es necesario fortalecer los mecanismos de denuncia y protección para las víctimas de discriminación laboral.

El artículo 240 del Código de Trabajo de la República Dominicana establece que las trabajadoras tienen derecho a tres descansos remunerados de veinte minutos cada uno, durante la jornada laboral, para amamantar a sus hijos en el lugar de trabajo, durante el período de lactancia.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Elaboración:

Este artículo, específicamente, se enfoca en la protección de la maternidad y la lactancia materna. Las trabajadoras tienen el derecho de ausentarse del trabajo por un tiempo determinado para amamantar a sus bebés, sin que esto afecte su salario.

Aspectos importantes del artículo 240:

- Descansos remunerados: Los descansos son pagados, es decir, la trabajadora recibe su salario completo durante esos períodos de ausencia para amamantar.
- Duración de los descansos: Cada descanso debe ser de al menos veinte minutos.
- Lugar de trabajo: Los descansos deben tomarse en el lugar de trabajo, o en un área designada por el empleador para la lactancia materna.
- Periodo de lactancia: Este derecho aplica durante todo el periodo de lactancia de la madre, sin especificar un límite de tiempo, lo que significa que la trabajadora puede hacer uso de estos descansos mientras amamante a su hijo.
- Obligación del empleador: El empleador está obligado a otorgar estos descansos a la trabajadora.

La ley también establece la promoción y fomento de la lactancia materna como prioridad nacional, con el objetivo de difundir su práctica y regular la comercialización de fórmulas infantiles, según la firma de abogados rvhb.com.

En resumen, el artículo 240 del Código de Trabajo de la República Dominicana garantiza un espacio seguro y protegido para que las madres trabajadoras puedan continuar amamantando a sus hijos durante su jornada laboral, lo que contribuye a la salud y bienestar tanto de la madre como del bebé.

Distintos Derechos

Las principales materias o ramas del derecho incluyen el Derecho Público (que rige la relación entre el Estado y los ciudadanos, con sub-ramas como Constitucional, Administrativo y Penal) y el Derecho Privado (que regula las interacciones entre particulares, como el Civil y el Mercantil). Otras áreas importantes son el Derecho Laboral, el Derecho Fiscal, el Derecho Ambiental y el Derecho Internacional, entre muchas otras especializaciones.

Ramas Principales

- **Derecho Público:**

Se enfoca en la relación entre el Estado y los individuos, así como en las diversas estructuras de la administración pública.

- **Derecho Constitucional:** Establece los principios fundamentales de un país y la estructura del Estado.
- **Derecho Administrativo:** Regula la organización y el funcionamiento de la administración pública.
- **Derecho Penal:** Define los delitos y las sanciones que se aplican a quienes los cometen.
- **Derecho Tributario/Fiscal:** Se encarga de los impuestos y otras cargas fiscales.
- **Derecho Internacional Público:** Regula las relaciones entre Estados.

Derecho Privado:

Regula las interacciones entre personas físicas o jurídicas que actúan en condiciones de igualdad.

- **Derecho Civil:** Abarca las relaciones personales y patrimoniales de los individuos, como contratos, herencias y propiedad.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Derecho Mercantil/Comercial: Regula las actividades comerciales y las sociedades mercantiles.
- Derecho Laboral: Rige las relaciones entre empleadores y trabajadores.
- Derecho de Familia: Se ocupa de las relaciones familiares, el matrimonio, la filiación, etc.

Otras Áreas y Especializaciones

Además de las ramas principales, existen otras áreas especializadas de gran relevancia:

- Derecho Ambiental: Se enfoca en la protección del medio ambiente.
- Derecho Corporativo: Relacionado con las empresas y su estructura.
- Derecho del Consumidor: Protege los derechos de los consumidores en el mercado.
- Derecho Inmobiliario: Regula todo lo referente a bienes inmuebles.
- Derecho de la Seguridad Social: Se refiere a los derechos relacionados con la seguridad social.
- Derecho de la Propiedad Intelectual: Protege creaciones artísticas e industriales.

Distribución de Mercancías

En República Dominicana, la distribución de mercancías está regulada por un conjunto de leyes y normas, destacando la Ley 30-24 que establece el marco para un Hub Logístico regional, y la Ley 173 de 1966 que protege a los agentes y distribuidores de mercancías extranjeras. Otras normativas importantes incluyen la Ley 63-17 para el transporte terrestre y la Ley de Aduanas para el comercio exterior, gestionada por la DGA, que se encarga del control y la fiscalización del movimiento de mercancías.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Marco Jurídico Principal

- Ley 30-24 sobre el Hub Logístico:

Esta ley es crucial para la logística, ya que busca posicionar a la República Dominicana como un centro logístico clave en la región. Establece el marco para la creación y operación de centros logísticos y empresas operadoras, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el transporte y la distribución de mercancías.

- Ley 173-66 de Protección a Agentes Importadores:

Esta ley tiene como propósito proteger a los distribuidores de bienes y servicios de empresas extranjeras, ya sean estos importados o de producción local, que se dediquen a su distribución dentro del territorio dominicano.

Otras Leyes y Normas Relevantes

- Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial:

Esta ley regula el sistema de transporte terrestre, garantizando la movilidad de personas y el flujo adecuado de bienes.

- Ley de Aduanas:

La Dirección General de Aduanas (DGA) aplica esta ley para regular el comercio exterior. Se encarga de controlar y fiscalizar el ingreso y salida de mercancías del territorio nacional, así como de recaudar los impuestos correspondientes.

- Código de Comercio:

Este código aborda aspectos como el contrato de transporte y la carta de porte, regulando la relación entre el expedidor, el comisionista y el porteador.

Instituciones Clave

- Dirección General de Aduanas (DGA): Supervisa el cumplimiento de las normas aduaneras y de comercio exterior.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT): Es el organismo responsable de regular el transporte terrestre en el país.

Distrito Nacional

La principal ley que regula el Distrito Nacional, la capital de la República Dominicana, es la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Esta ley, promulgada en 2007, establece el marco legal para el funcionamiento y la autonomía de los ayuntamientos, incluyendo el del Distrito Nacional, normando sus competencias, funciones, recursos y la participación ciudadana en los asuntos locales.

Marco legal principal:

- Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios: Esta ley organiza el funcionamiento de los gobiernos locales en la República Dominicana, otorgándoles autonomía y definiendo sus atribuciones, competencias y recursos.

Contexto histórico y territorial:

- La ciudad de Santo Domingo de Guzmán es el Distrito Nacional y la capital de la República.
- La demarcación del Distrito Nacional ha sufrido cambios territoriales, siendo el más reciente la creación de la Provincia Santo Domingo en 2001, lo que modificó su jurisdicción y la separó de la capital.

Derechos y funciones:

- La ley busca promover el desarrollo local, el mejoramiento sociocultural de los habitantes y la participación comunitaria.
- También tiene como objetivo la preservación del medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, y la protección de los espacios públicos dentro del Distrito Nacional.

Disturbio

A) Generalidades

Un disturbio es una alteración del orden público en la que tres o más personas se comportan de forma violenta y descontrolada. Un disturbio suele presentar las siguientes características: realizado en cumplimiento de un propósito común expreso; mediante el uso o la amenaza de violencia, desorden o terror al público.

En otras palabras, un disturbio es una alteración del orden público, habitualmente en la vía pública y en el transcurso de una manifestación, en la que se producen actos espontáneos de violencia física contra personas, la propiedad privada (por ejemplo, vehículos o establecimientos) o el mobiliario urbano. El origen de la violencia es por lo general difuso y polémico, ya que puede originarse de parte de la sociedad civil o de parte de las llamadas fuerzas de seguridad (policía, fuerzas armadas, etc.).

La diferencia con otras expresiones violentas del movimiento social puede ser mayor o menor. Si los disturbios tienen mayor grado de repercusión o éxito, se puede hablar alternativamente de revuelta, motín, rebelión o revolución.

La respuesta ante un disturbio suele ser tarea de la policía, comúnmente de los agentes antidisturbios, aunque también puede requerir apoyo militar. Para controlar las masas enfurecidas suelen emplearse armas no letales, como cañones de agua, balas de goma, pulverizadores de pimienta, porras y gas lacrimógeno.

Algunos países emplean ataques que pueden producir muertes para detener los disturbios, sobre todo si se producen bajo la ley marcial, en casos de guerra. Esto lo permite el derecho militar, siempre y cuando no se considere a los civiles como objetivos de forma intencionada. Como consecuencia, suelen producirse «daños colaterales» (eufemismo para referirse a «víctimas civiles»).

Los disturbios suelen producirse como reacción a un agravio o por disidencia. Históricamente, los disturbios se han producido debido a la pobreza, el desempleo, las condiciones de vida deficientes, la opresión gubernamental, los impuestos o el servicio militar obligatorio, los conflictos entre grupos étnicos (disturbios raciales) o religiones (por ejemplo, violencia sectaria, pogrom), el resultado de un acontecimiento deportivo (por ejemplo, disturbios deportivos, gamberrismo

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

futbolístico) o la frustración con los canales legales a través de los cuales airear las quejas.

Aunque los individuos pueden intentar liderar o controlar un disturbio, los disturbios suelen consistir en grupos desorganizados que con frecuencia son «caóticos y muestran comportamiento de rebaño» Cada vez hay más pruebas que sugieren que los disturbios no son un comportamiento irracional, de rebaño (a veces llamado mentalidad de turba), sino que en realidad siguen normas sociales invertidas.

Hacer frente a los disturbios suele ser una tarea difícil para las fuerzas policiales. Pueden utilizar gas lacrimógeno o gas CS para controlar a los alborotadores. La policía antidisturbios puede utilizar métodos de control no letales, como escopetas que disparan bolas flexibles para herir o incapacitar a los alborotadores y facilitar su detención.

B) En República Dominicana

En República Dominicana, los disturbios se sancionan principalmente a través del nuevo Código Penal, la Ley 74-25, que actualiza las figuras delictivas y establece sanciones más severas, incluyendo delitos contra la seguridad ciudadana y la alteración de la paz pública, que pueden abarcar desde la comisión de actos de violencia hasta la organización de manifestaciones que degeneran en desórdenes. Además, el Código Procesal Penal (Ley 76-02) establece el marco para la persecución de estos delitos.

Marco Legal Principal

- Ley 74-25 (Nuevo Código Penal): Esta ley es la reforma del Código Penal dominicano y actualiza la legislación para enfrentar delitos modernos.
 - Inclusión de nuevos ilícitos: La ley establece y aumenta penas para diversos delitos, incluyendo aquellos que atentan contra la seguridad y el orden público, así como contra la integridad y los derechos de los ciudadanos.
 - Enfoque en la seguridad ciudadana: Busca fortalecer la seguridad y la confianza ciudadana a través de sanciones proporcionales y la persecución de actos que perturban la paz social.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Marco Procesal

- Código Procesal Penal (Ley 76-02): Esta ley establece los procedimientos para la investigación y persecución de los delitos.
 - Persecución de oficio: Modifica el régimen de acción penal para que el Ministerio Público pueda perseguir de oficio conductas perturbadoras de la paz social, como los robos en espacios públicos.

Ejemplos de Sanciones y Conductas

- La Ley 74-25 incluye sanciones por actos de violencia, desórdenes públicos y otras conductas que perturben el orden y la seguridad.
- La persecución puede involucrar la denuncia por parte de los afectados, así como la actuación de oficio por parte del Ministerio Público, según la naturaleza del disturbio y la ley vigente.

Divisas

La ley principal que regula las divisas y el sistema monetario-financiero en la República Dominicana es la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera, la cual establece el marco regulatorio y confiere la responsabilidad de su regulación a la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Esta ley busca mantener la estabilidad de precios y el normal funcionamiento del sistema financiero, permitiendo el acceso al mercado de divisas a través de entidades autorizadas.

Marco Legal Principal

- Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera:

Esta ley es la normativa fundamental que define el régimen del sistema monetario y financiero en la República Dominicana.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Reguladores:

La ley establece que la Junta Monetaria es el órgano superior, el Banco Central es el único emisor de la moneda nacional y la Superintendencia de Bancos vela por la liquidez, solvencia y gestión de las entidades financieras.

Funciones y Regulación de Divisas

- Estabilidad de Precios:

Uno de los objetivos primordiales de la ley es mantener la estabilidad de precios como base para el desarrollo económico del país.

- Acceso al Mercado de Divisas:

La ley y las normativas asociadas permiten que personas y empresas accedan al mercado de divisas, ya sea comprando o vendiendo, a través de entidades autorizadas.

- Agentes de Cambio:

La normativa regula a los agentes de cambio autorizados para la compra y venta de divisas, quienes deben operar bajo la supervisión de las autoridades monetarias y financieras.

Aspectos Importantes

- Emisión de Moneda:

El Banco Central es el único emisor de los billetes y monedas de circulación nacional.

- Control y Reportes:

Los intermediarios cambiarios autorizados deben reportar anualmente sus operaciones de compra y venta de divisas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), proporcionando detalles sobre las transacciones realizadas.

División entre Vecinos

En República Dominicana, la normativa que regula las paredes divisorias entre vecinos se encuentra principalmente en el Código Civil, específicamente en los artículos relacionados con la medianería, y está complementada por la Ley No. 675 de 1944 sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones, así como por ordenanzas municipales y la jurisprudencia de los tribunales.

Aspectos clave de la regulación

- Propiedad y derechos sobre la pared medianera:

El Código Civil establece que si una pared es medianera, pertenece en copropiedad a los vecinos. Cada propietario tiene derecho a usarla en proporción a su participación y debe notificar al otro antes de realizar cualquier obra.

- Responsabilidad compartida:

Los propietarios de muros medianeros tienen la obligación de contribuir a los gastos de su construcción, reparación y mantenimiento, según su cuota de propiedad.

- Uso y mantenimiento:

Se permite el uso de la pared medianera para los fines para los que está destinada, pero sin causar deterioros ni comprometer su solidez, ni estorbar los derechos del vecino.

- Construcciones nuevas:

La Ley 675 de 1944 establece, en términos generales, las reglas sobre linderos y distancias de las construcciones con respecto a los linderos del solar, buscando asegurar iluminación, ventilación y seguridad.

- Normativa municipal y permisos:

Las ordenanzas municipales son fundamentales, ya que regulan los detalles específicos de las construcciones, incluyendo las distancias y requisitos para las paredes divisorias, y otorgan las licencias necesarias para las obras.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Resolución de conflictos:

Si la pared no es medianera y pertenece exclusivamente a un propietario, el vecino no puede utilizarla sin autorización. Los conflictos que surjan a menudo se resuelven en las instancias municipales o a través de los tribunales.

Recomendación

Ante cualquier duda o proyecto que involucre una pared divisoria, es recomendable consultar el Código Civil, la Ley 675 de 1944, revisar las ordenanzas de su municipio y, en caso de ser necesario, buscar la asesoría de un profesional experto en derecho inmobiliario.

División Político Administrativa del Estado

La división político-administrativa de República Dominicana consiste en un Distrito Nacional y 31 provincias, que a su vez se subdividen en municipios y distritos municipales. Cada provincia está administrada por un gobernador civil, representante del Presidente, y el país se organiza en regiones y macroregiones para facilitar su gestión.

Elementos de la división político-administrativa:

- Distrito Nacional: El Distrito Nacional es donde se encuentra la capital, Santo Domingo de Guzmán, y es el asiento del gobierno nacional.
- Provincias: Existen 31 provincias en total, cada una con su propio gobernador civil.
- Municipios: Las provincias se subdividen en municipios. A finales de 2024, el país contaba con 158 municipios.
- Distritos Municipales: Cada municipio puede estar, a su vez, dividido en distritos municipales.

Organización territorial:

- Regiones:

Las provincias y municipios están agrupados en regiones, que se conforman para organizar el territorio con características socioeconómicas y culturales similares.

- Macroregiones:

A nivel superior, también existen macroregiones, que agrupan a su vez a las regiones administrativas.

Base legal:

- La Constitución Política del país establece en su Artículo 12 la división del territorio en un Distrito Nacional y las regiones, provincias y municipios que las leyes determinen.

Artículo 12.- División político administrativa. Para el gobierno y la administración del Estado, el territorio de la República se divide políticamente en un Distrito Nacional y en las regiones, provincias y municipios que las leyes determinen. Las regiones estarán conformadas por las provincias y municipios que establezca la ley.

Artículo 13.- Distrito Nacional. La ciudad de Santo Domingo de Guzmán es el Distrito Nacional, capital de la República y asiento del gobierno nacional.

Divulgación del Secreto Profesional

La ley que regula la violación del secreto profesional varía según el país y la profesión. Generalmente, se sanciona por el Código Penal y códigos de ética específicos de cada profesión, con penas de prisión, inhabilitación o multas. Por ejemplo, en algunos lugares la ley exige la confidencialidad en el ámbito médico, mientras que en otros se protege la identidad de las fuentes de información periodística.

Código Penal

- Penas:

Las sanciones incluyen penas de prisión, multas, y la inhabilitación profesional, según la gravedad del caso y el país, como se ve en el caso de los abogados en España.

Legislación por Profesión.

- Periodismo:

La ley puede otorgar el derecho al secreto profesional a periodistas y colaboradores, protegiendo la identidad de sus fuentes, aunque el texto de la ley puede variar significativamente entre países y jurisdicciones.

Códigos de Ética

- Deber y derecho:

Los códigos de ética profesional también regulan el secreto profesional, considerándolo un deber para los profesionales y un derecho para los clientes o pacientes.

- Obligación continuada:

En muchos casos, este deber de secreto es absoluto y perdura incluso después de que el profesional haya dejado de prestar sus servicios.

Importancia del Secreto Profesional

- Confianza:

El secreto profesional es fundamental para la confianza entre el profesional y el paciente o cliente, lo que permite una comunicación abierta y honesta para recibir la mejor atención o asesoramiento posible.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Protección de la intimidad:

La confidencialidad protege la intimidad del paciente o cliente, permitiéndole compartir información privada sin temor a ser divulgada sin su consentimiento.

Excepciones.

Sin embargo, algunas leyes presentan excepciones, como la Ley de Lavado de Activos, el Código Tributario y el Código del Menor.

Doble Contabilidad

En República Dominicana, la doble contabilidad se puede castigar a través del Código Tributario (Ley 11-92), específicamente en sus disposiciones relacionadas con la omisión de ingresos, la falsificación de libros contables y la presentación de información tributaria falsa, así como mediante la aplicación de sanciones penales y administrativas. Aunque no existe un artículo específico que diga "doble contabilidad", esta práctica se considera un fraude fiscal que puede llevar a multas y otras sanciones.

Disposiciones relevantes del Código Tributario (Ley 11-92)

- Omisión de ingresos:

La Ley 11-92 considera fraude ocultar ingresos para evadir el pago de impuestos, lo cual se logra mediante la doble contabilidad.

- Falsificación de libros contables:

Si se presentan libros contables alterados o falsos, se puede considerar un delito de falsedad, lo que acarrea sanciones penales.

- Fraude tributario:

La doble contabilidad entra en la categoría de fraude fiscal y puede tener consecuencias legales y económicas para el infractor.

Sanciones aplicables

- Sanciones administrativas:

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) puede imponer multas significativas por la omisión de ingresos y la falsificación de información tributaria.

- Sanciones penales:

En casos graves de fraude tributario, los infractores pueden enfrentar penas de prisión.

¿Qué se debe hacer si se detecta doble contabilidad?

- Consultar a un abogado tributarista o a un contador profesional para entender las implicaciones legales y tomar las medidas necesarias.
- Presentar la información fiscal completa y precisa a la DGII para evitar sanciones.

Donación

La donación es un contrato por el que una persona (donante) transfiere gratuitamente la propiedad de un bien a otra (donatario). En la República Dominicana, la ley principal que regula las donaciones (entre vivos y mortis causa) es el Código Civil, específicamente los artículos que se refieren a las donaciones y sucesiones. Además, existen leyes específicas para la donación de órganos y tejidos, como la Ley 329-98, y otras leyes para donaciones con fines sociales.

Regulación en la República Dominicana

- Código Civil (principalmente, para bienes muebles e inmuebles):
 - Definición: El donante se desprende actual e irrevocablemente de la cosa donada a favor del donatario.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- **Forma:** Es un acto solemne que debe hacerse mediante un acto notarial, bajo pena de nulidad. Para la donación de bienes muebles, el acto debe ir acompañado de un estado descriptivo y tasación de los bienes.
- **Aceptación:** El donatario puede aceptar la donación estando representado por otra persona si tiene un poder especial para ello.

Ley 329-98:

- Esta ley regula la donación, el legado, la extracción y el trasplante de órganos y tejidos humanos.
- Establece que una persona capaz puede autorizar la donación de órganos y tejidos para después de su muerte para ser implantados en humanos vivos o para investigación.
- Se basa en la certificación de la muerte encefálica para poder extraer los órganos.

Otras regulaciones:

- La donación de sangre está regulada por la ley sobre el sistema nacional de hemodonación y donación de sangre, que establece que todas las personas pueden donar.
- Existen otras leyes y normativas para fomentar la donación de órganos y tejidos con fines terapéuticos o donaciones sociales, como la que promueve la donación voluntaria y altruista de órganos.
- Ley No. 329-98 del 11/08/1998 que regula la donación a fines benéficos.

Impuestos

En República Dominicana las donaciones de bienes están sujetas al pago de un impuesto de un 27% sobre el monto donado.

Donación de Organos

La ley que regula la donación de órganos en República Dominicana es la Ley No.329-98. Esta ley, promulgada el 11 de agosto de 1998, establece las normas para la donación, legado, extracción, conservación e intercambio de órganos y tejidos humanos con fines de trasplante. Además, el Decreto No.436-14 establece el reglamento de donantes vivos relacionados y de cadáveres para trasplantes, complementando la Ley 329-98.

En resumen:

- Ley principal: Ley No. 329-98
- Reglamento: Decreto No. 436-14
- Temas que regula: Donación, legado, extracción, conservación e intercambio de órganos y tejidos humanos para trasplante.

La ley establece que toda persona capaz mayor de 18 años se considera donante de órganos y tejidos después de su fallecimiento, a menos que haya manifestado su oposición. Además, se establecen regulaciones para los donantes vivos y los procedimientos para la extracción y trasplante.

Dormir y Ocio

El derecho a dormir está implícito en el derecho universal al descanso, la recuperación y el esparcimiento, reconocidos en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si bien no existe un "derecho a dormir" explícito, se considera una necesidad fundamental para la salud física y mental, y la privación del sueño puede ser reconocida como una forma de tortura en algunos contextos médicos y éticos.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

Fundamentos del derecho al descanso:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos:

El Artículo 24 establece que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a vacaciones periódicas pagadas.

- Pactos y Convenciones:

El derecho al descanso y al ocio, que incluye el sueño y las pausas, está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

- Derecho del Niño:

La Convención sobre los Derechos del Niño también incluye este derecho, además del juego y el esparcimiento, como esenciales para el desarrollo.

Importancia del sueño para la salud:

- Función restauradora:

Dormir permite que la mente y el cuerpo se recarguen y recuperen energía, siendo esencial para la salud y el crecimiento.

- Función cerebral:

El sueño facilita la limpieza de toxinas acumuladas en el cerebro, promoviendo la agilidad mental.

- Salud mental:

Permite procesar emociones de forma efectiva y reduce la tensión acumulada, llevando a un estado de mayor relajación.

Reconocimiento del derecho a la salud y la privación del sueño:

- Derecho fundamental:

El sueño es considerado un derecho fundamental para el buen funcionamiento del organismo y para el desarrollo.

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

- Contexto médico:

La privación del sueño se ha llegado a considerar una forma de tortura, destacando su importancia para la integridad física y psicológica de las personas.

- El sueño es un derecho humano y su privación es una tortura.

Drones

La ley que regula el uso de drones en la República Dominicana está establecida por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) a través de la resolución 008-2015.

Esta resolución establece las siguientes regulaciones:

- Registro y Licencias: Para operar drones que pesen más de 4.4 libras (2.0 kg), se requiere un permiso que debe ser solicitado por el usuario.
- Zonas Restringidas: Se prohíbe volar drones en áreas como aeropuertos, aeródromos y ciertas instituciones civiles y militares.

Responsabilidad del operador: Es responsable de cualquier accidente o incidente que ocurra con el drone.

Condiciones de Operación: Se deben seguir restricciones de altitud y horarios de vuelo, así como limitaciones de tiempo de vuelo y uso de contacto visual directo.

Resolución 008-2015

En la **República Dominicana**, el uso de drones está regulado por la **resolución 008-2015** del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que establece restricciones para proteger la seguridad de las personas y la privacidad. Las regulaciones incluyen la **acreditación de operadores**, limitaciones de **altitud y horarios de vuelo**, y requisitos específicos para drones que pesan entre 2 y 25 kilos. Además, se están considerando modificaciones a la legislación de aviación civil para introducir regulaciones más estrictas sobre el uso de drones.

Duda Razonable

El principio de duda razonable es un estándar probatorio en los sistemas penales que exige que la fiscalía demuestre la culpabilidad del acusado "más allá de toda duda razonable" para obtener un veredicto de culpabilidad. Si tras la evaluación de todas las pruebas existe una duda lógica, justificada y basada en la razón sobre la culpabilidad del acusado, se debe absolver al acusado, ya que se presume inocente. Este principio protege contra condenas injustas, asegurando que la libertad de una persona no se vea restringida sin pruebas contundentes.

Elementos clave del principio de duda razonable

- Estándar de prueba elevado:

No se trata de una certeza absoluta, sino de un nivel de convicción que elimina cualquier duda lógica o razonable sobre la culpabilidad.

- Búsqueda de certeza positiva:

El juzgador debe estar plenamente convencido de la culpabilidad del acusado.

- Duda racional:

La duda no debe ser producto de la compasión, el prejuicio o la especulación, sino que debe estar lógicamente conectada con la evidencia o la ausencia de ella.

- Presunción de inocencia:

El principio de duda razonable es una manifestación del principio de presunción de inocencia, que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario con pruebas contundentes.

Su importancia y función

- Salvaguardia contra condenas injustas:

Sirve para evitar que personas inocentes sean privadas de su libertad debido a pruebas insuficientes o poco fiables.

- Reflejo de la cautela legal:

Se considera mejor absolver a una persona potencialmente inocente que condenarla injustamente.

- Fundamento para la absolución:

Si la duda razonable persiste tras el análisis de las pruebas, el resultado lógico es la absolución del acusado.

En resumen, la duda razonable es una barrera fundamental en el sistema penal que obliga a los jueces y jurados a tener una convicción fuerte y razonada de la culpabilidad antes de condenar a un imputado.

Duelo Laboral

En República Dominicana, el duelo laboral no tiene una regulación específica sobre el tiempo de recuperación; sin embargo, la ley establece una licencia de tres días corridos por el fallecimiento de padres, hijos, cónyuge o compañera. Tras esto, se recomienda que los empleadores ofrezcan apoyo emocional, flexibilidad, y consideren la posibilidad de una remisión a apoyo psicológico o a profesionales para ayudar al empleado a manejar sus emociones.

Base Legal (Código de Trabajo)

- Licencia por Fallecimiento:

El Código de Trabajo de la República Dominicana concede tres días de licencia al trabajador por el fallecimiento de cualquiera de sus abuelos, padres, hijos, o de su cónyuge o compañera registrada en la empresa.

- Ajustes por Días No Laborables:

Si el fallecimiento ocurre en un día no laborable (domingo, feriado), la licencia deberá iniciar en el día hábil más cercano, según algunas interpretaciones y prácticas legales.

Consideraciones y Buenas Prácticas Empresariales

- Apoyo Emocional y Solidaridad:

Es fundamental que la empresa muestre solidaridad y apoyo emocional al empleado que atraviesa el duelo.

- Flexibilidad:

Considerar la posibilidad de otorgar tiempo adicional o flexibilidad en los horarios de trabajo puede ser de gran ayuda.

- Apoyo Psicológico:

Ofrecer el acceso a un profesional de la psicología o expertos en manejo de duelos puede ayudar al empleado a expresar y manejar sus emociones de manera saludable.

- Acciones Simbólicas:

Detalles como el envío de una ofrenda floral, una carta de pésame a la familia, o un acompañamiento en el proceso del sepelio son gestos importantes de apoyo.

- Protección de Derechos:

El Código de Trabajo prohíbe cualquier tipo de discriminación o restricción de derechos que no esté prevista por la ley, por lo que los acuerdos de empresa no pueden limitar los derechos del trabajador.

Dumping

El dumping es la práctica de exportar productos a un precio inferior al que se venden en su país de origen, lo que puede considerarse competencia desleal. En la República Dominicana, esta práctica se regula principalmente a través de la Ley 1-02 sobre Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardas. Esta ley permite que las

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D

Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

autoridades investiguen y apliquen derechos antidumping a los productos que causan daño a la producción nacional.

Por tanto, el dumping se regula en República Dominicana a través de la Ley 1-02 sobre Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardas y su reglamento de aplicación. Esta ley establece el marco para la investigación y aplicación de medidas antidumping para proteger a la industria nacional de prácticas de comercio desleal, con la participación de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales (CDC).

Existe dumping es cuando un producto se vende a un precio inferior a su "valor normal" o coste de producción, lo que puede causar un daño a la industria nacional del país importador.

¿Qué es el dumping?

- Es cuando una empresa vende un producto en el mercado exterior a un precio menor que en su mercado local.
- Se considera una forma de competencia desleal porque los productos extranjeros más baratos pueden amenazar la producción nacional.
- Aunque no es ilegal en sí mismo, los países pueden tomar medidas para proteger sus industrias internas, como los derechos antidumping.

¿Qué ley lo regula en la República Dominicana?

- La Ley 1-02 sobre Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardas es la principal legislación que aborda este tema en el país.
- Esta ley establece los procedimientos para investigar y combatir prácticas de comercio desleal, incluyendo el dumping.
- Las investigaciones son llevadas a cabo por la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre Medidas de Salvaguardas, y la Dirección General de Aduanas puede aplicar los derechos antidumping correspondientes.

¿Quién regula el dumping?

- Comisión Reguladora de Prácticas Desleales (CDC): Esta comisión es la encargada de realizar las investigaciones para determinar si existe dumping y de aplicar las medidas necesarias.

¿Cómo se regula?

1. Denuncia o investigación de oficio:

La investigación puede ser iniciada por una solicitud de la industria nacional afectada o por la propia CDC.

2. Determinación de daño:

Se debe demostrar objetivamente que el dumping está causando o amenazando causar un daño grave a la rama de la producción nacional.

3. Aplicación de medidas:

Si se comprueba el dumping y el daño, se pueden imponer derechos antidumping para equilibrar los precios y proteger la industria local.

Marco legal clave:

- Ley 1-02 sobre Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardas: Es la ley principal que establece las bases para combatir el dumping.
- Reglamento de Aplicación de la Ley No. 1-02: Este documento detalla los procedimientos y criterios para llevar a cabo las investigaciones y aplicar las medidas. Este reglamento establece normas para prevenir prácticas desleales en el comercio y proteger la producción nacional en la República Dominicana.

Contexto de la Ley 1-02

La Ley No. 1-02, promulgada el 18 de enero de 2002, se centra en las prácticas desleales de comercio y las medidas de salvaguardias. Su objetivo es establecer un

Legislación Dominicana Abreviada - Tomo II, Letras C y D
Edgar Barnichta Geara – Noviembre 2025

marco normativo que proteja a la producción nacional de prácticas que puedan causar daño, como el "dumping" y las subvenciones en productos importados.

El Reglamento de Aplicación de la Ley 1-02 fue aprobado por la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio (CDC) el 22 de octubre de 2015, sustituyendo al reglamento anterior de 2008. Este reglamento se adapta a la realidad práctica y a la normativa legal vigente, y busca fortalecer la defensa del aparato productivo nacional.